



MIRADAS
HISPANOPORTUGUESAS
SOBRE LA VÍA CHILENA
AL SOCIALISMO (1970-1973)

Lisboa 2024

Este libro se enmarca dentro de la ejecución
del proyecto CA4/RSUE/2022-00156
financiado por el Ministerio de Universidades de España,
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
y la Universidad Autónoma de Madrid.



Francisco Javier Morales Aguilera



MIRADAS

HISPANOPORTUGUESAS
SOBRE LA VÍA CHILENA
AL SOCIALISMO (1970-1973)



Obra premiada con el Prémio Científico
Mário Quartin Graça / Casa da América Latina



La publicación de este libro sigue a la concesión del 2023, el Premio Científico Mário Quartin Graça a Francisco Javier Morales Aguilera por su tesis doctoral “Miradas interiores y exteriores sobre la violencia política durante la Unidad Popular. Análisis de la documentación oficial y la prensa en Chile, España y Portugal, 1970-1973”.

ÍNDICE

Listado de siglas	6
Introducción	9
PRIMERA PARTE	
ESCENARIOS Y ACTORES	25
Contexto ibérico y europeo	27
Miradas ibéricas sobre el Cono Sur	48
SEGUNDA PARTE	
MIRADAS HISPANOPORTUGUESAS SOBRE LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO	57
Coyuntura electoral de 1970 y primeras inquietudes	59
Del optimismo oficialista a la reorganización opositora	86
Dinámicas, conflictos y asedios a la vía chilena al socialismo	117
Transitando hacia el fin de la experiencia socialista chilena	145
Conclusiones	239
Bibliografía	246
Nota Biografica	255

Listado de Siglas

ADMNE	Arquivo Diplomático Ministerio Negócios Estrangeiros (Portugal)
ADN	Arquivo da Defesa Nacional (Portugal)
AGA	Archivo General de la Administración (España)
AHPCE	Archivo Histórico Partido Comunista de España
AHS	Arquivo da Historia Social (Portugal)
AMINREL	Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores (Chile)
CEE	Comunidad Económica Europea
CETCGD	Comissão Executiva dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos
CIA	Central Intelligence Agency
CODE	Confederación Democrática
ENU	Escuela Nacional Unificada
ETA	Euskadi Ta Askatasuna
FACH	Fuerza Área de Chile
FFAA	Fuerzas Armadas
FDIM	Federación Democrática Internacional de Mujeres
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNPL	Frente Nacionalista Patria y Libertad

GAP	Grupo de Amigos Personales
JAP	Juntas de Abastecimiento y Precios
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitario
MCR	Movimiento Campesino Revolucionario
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de Naciones Unidas
PC	Partido Comunista de Chile
PCP	Partido Comunista de Portugal
PIDE	Polícia Internacional e de Defesa do Estado
PN	Partido Nacional
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PRP-BR	Partido Revolucionario de Portugal
PS	Partido Socialista
PR	Partido Radical
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UP	Unidad Popular
VOP	Vanguardia Organizada del Pueblo

Introducción

El 11 de septiembre de 1973 un golpe militar coordinado por la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas chilenas puso fin al gobierno presidido por Salvador Allende. El hecho marcó a casi toda una generación por su brutalidad y extremismo, constituyendo una dolorosa espina para quienes habían apoyado, aun a la distancia, ese proyecto de socialismo democrático. Casi siete meses después, el 25 de abril de 1974, un grupo de militares del denominado Movimiento de las Fuerzas Armadas derrocó la dictadura salazarista que gobernaba Portugal desde la década del treinta. En poco tiempo, los sinsabores de la derrota sufrida por la experiencia chilena lograban sosegar en parte gracias a las perspectivas de cambio y transformación que abría la denominada Revolución de los Claveles.

Ambos episodios, que en apariencia no tenían mayores conexiones dada su distancia geográfica, y aun cultural, formaban parte en realidad de un mismo contexto social y político. No fueron pocas las referencias que en el fragor de la revolución portuguesa se hicieron respecto al caso de Chile y su fallida experiencia socialista. Como no podía ser otra forma, lo ocurrido en el país latinoamericano abrió una discusión en buena parte del mundo occidental respecto a las posibilidades de avanzar hacia el socialismo bajo determinadas condiciones y estructuras institucionales. Se comenzó a hablar entonces de las lecciones del caso chileno, que las izquierdas europeas tomaron como ejemplo para su propia reflexión estratégica.¹ Sin ir más lejos, en Portugal y España –país, este último, que atravesaba por eventos sociales y políticos igualmente trascendentes– también se abriría ese debate.²

¿Por qué la experiencia de la Unidad Popular tuvo esa repercusión tan relevante a pesar de su corta existencia y posterior derrocamiento? Su propia trayectoria política, unida a su protagonismo en la escena global de finales

de los años sesenta e inicios de los setenta, aportan algunos elementos que conviene revisar.

En primer término, la vía chilena al socialismo dinamizó en pocos años nuevas relaciones sociales, políticas y culturales que impactaron a diversos actores, tanto locales como extranjeros. Además, la posibilidad de transitar hacia un modelo socialista dentro de un marco democrático-liberal puso sobre la mesa numerosos desafíos para quienes vivieron esos años. Con todo, esta misma densidad de acontecimientos, que en un corto tiempo mostró días de gloria y fulgor que luego terminaron bajo las llamas del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, no da cuenta totalmente de la dimensión estructural de esta experiencia.

La Unidad Popular fue, ante todo, el gran proyecto histórico de la izquierda chilena durante el siglo XX. Un modelo que recogió lo mejor de la tradición partidista, cultural e intelectual de sus actores y que fue dialogando, no sin problemas, con la propia historia del país.³ Sus orígenes se pueden conectar a esa etapa que transita entre finales del siglo XIX y principios del XX donde el movimiento obrero y social estaba en plena ebullición. La denominada “cuestión social”, que erosionaba la estabilidad política producto de la marginalidad y pobreza, agitaba las masas en distintos puntos del territorio.⁴ Era evidente que el proyecto modernizador de la oligarquía nacional no respondía, en ese contexto, a las necesidades de toda la sociedad. Con la crisis del capitalismo de 1929, las definiciones económico-sociales variaron de forma significativa, teniendo el Estado, a partir de entonces, un rol cada vez más protagónico.⁵ Se comenzaba a perfilar, ya de modo nítido en los años treinta, un esquema que recibió distintas denominaciones (Estado de compromiso, modelo desarrollista, Estado benefactor), el cual perviviría hasta pocos años después del golpe militar de 1973. Dentro de estas coordenadas, la Unidad Popular alcanzó el gobierno en los últimos años de este ciclo institucional, buscando la modificación del sistema bajo una matriz socialista, objetivo que al final quedó inconcluso. Visto en perspectiva, la derrota del gobierno de Salvador Allende coincidió con el término del Estado desarrollista producto de las transformaciones que aplicó prontamente el Régimen Militar.

Bajo el marco descrito, la izquierda chilena fue construyendo, con avances y retrocesos, su proyecto social y político. Sus dos partidos eje, Comu-

nista y Socialista, no solo cumplieron un rol de movilización y organización de los segmentos obreros y populares, sino también tendieron al control, mediación o derechamente la cooptación de ese mismo movimiento social. Existe un rasgo característico de esta izquierda que guarda relación, a diferencia de otras experiencias regionales, con su actuación predominante dentro del sistema institucional, lo cual fue un sello identitario que se replicaría a lo largo de los años. Es decir, la izquierda encauzó su lucha social y política dentro de los márgenes del sistema buscando –no sin una coexistencia conflictiva entre “prácticas e imaginarios”⁶– su transformación estructural.

Ciertamente hubo momentos de mayor tensión y enfrentamiento en el largo camino que recorre la izquierda durante el siglo XX. Ello fue visible de forma más nítida a partir de los años sesenta, en el marco de una ruptura epocal que afectaba a América Latina y al mundo en su conjunto. La emergencia de la denominada Nueva Izquierda, que en esta región adquiere un peso particularmente fuerte producto del impacto de la revolución cubana de 1959, será sin duda un factor determinante en el incremento de las tensiones políticas al interior del bloque. Aunque en el caso chileno esta nueva tendencia – personificada sobre todo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)– tuvo un impacto en diversos actores y dinámicas⁷, su actuación no medró de modo sustantivo ni el poder ni la capacidad de convocatoria de la izquierda más tradicional. Tampoco fue significativo su impacto a nivel armado, pues a pesar de que el MIR y otros grupos declarasen su opción por esta vía, ella no se concretó en acciones que pusieran en jaque la hegemonía institucional del Estado o que implicaran un despliegue extenso de las acciones de violencia. Fue en el plano de las elaboraciones discursivas donde la aparición de la Nueva Izquierda tuvo mayor significación. Su crítica frontal a la democracia chilena y a los partidos tradicionales produjo variadas discusiones y recriminaciones mutuas, algunas de las cuales se arrastraron hasta los años de la UP.

Dentro de estas directrices y tensiones la izquierda chilena se asomaba a la coyuntura electoral de 1970. Su bloque mayoritario y orgánicamente más relevante estuvo articulado en torno a la Unidad Popular que llevó como candidato presidencial al senador socialista Salvador Allende Gossens. El programa de gobierno de esta coalición era sin duda audaz. Planteaba la

nacionalización de las riquezas minerales básicas, una intensificación del proceso de reforma agraria –iniciada en la administración anterior– junto con una serie de modificaciones económicas e institucionales que perfilarían un Estado socialista a largo plazo. Como se señaló al inicio, la particularidad de este experimento radicaba en que su puesta en práctica se haría a través de la institucionalidad, respetando las reglas de la democracia liberal que existía en el país. Este punto es relevante de destacar porque da cuenta de que la dimensión institucional/legal sí estaba presente en las estrategias principales de la izquierda chilena. Podría decirse, inclusive, que estaba incorporado, a pesar de sus críticas y anhelos transformadores, a su propia cultura política.

Aún más, la izquierda chilena había sido testigo de cómo dentro de la propia institucionalidad, regida por la Constitución de 1925, se habían alcanzado no pocas modificaciones en el orden social y económico. El rol planificador del Estado, los cambios al derecho de propiedad y la inclusión de sectores sociales antes marginados de toda participación asomaban como hitos relevantes de lo que el sistema político había sido capaz de materializar.⁸ Dentro de este marco deben entenderse, entonces, las propuestas de la izquierda chilena, o de una gran mayoría de ella, tendientes a construir el socialismo. Es decir, junto con la constatación de que existían vacíos, negligencias y reformas incompletas en el país, el camino para transitar hacia ese horizonte transformador era a través del sistema institucional, un espacio que la izquierda habitó con naturalidad durante el siglo XX.

Como toda experiencia revolucionaria, y más aún como un acontecimiento de época que llamó la atención de diversos actores en el mundo, los años de socialismo en Chile han sido cubiertos por una inmensa cantidad de trabajos historiográficos y de otras disciplinas. Los estudios sobre sus propios protagonistas, encabezados por supuesto por Salvador Allende, así como respecto a sus acontecimientos, dinámicas y coyunturas más relevantes forman parte de lo que algún autor denominó, dada su envergadura, como un verdadero “océano bibliográfico”.⁹ En Chile, los años de la UP siguen siendo un tema de actualidad que, a partir de nuevos trabajos y enfoques disciplinarios, muestran interesantes perspectivas de investigación.¹⁰ El ángulo local de la experiencia chilena, predominante en los primeros años

post 1973, fue dando paso a otras reflexiones y miradas que plantearon, por ejemplo, un enfoque más abierto a los actores internacionales de este proceso.¹¹ Lo que se buscaba analizar era la relación y puntos de contacto, e incluso las contradicciones y rupturas, que había tenido la vía chilena al socialismo con otros actores del concierto mundial. En las últimas décadas, inclusive, el análisis se ha abierto hacia países latinoamericanos que no habían sido considerados con la suficiente atención.¹² Como nunca antes, la Unidad Popular comienza a ser vista cada vez más desde una perspectiva transnacional.

Este libro analiza las miradas que España y Portugal construyeron, desde la esfera diplomática y la prensa, sobre el gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1973. El contexto actual, como se indicó al inicio, resulta propicio para indagar en este tipo de historias pues, en lo inmediato, está conectado a la conmemoración de los cincuenta años del golpe militar de 1973 y prontamente lo hará respecto al cincuentenario de la Revolución de los Claveles. El caso español también es relevante de incluir aquí porque permite hacer una lectura de conjunto sobre la península ibérica, constatando diferencias y similitudes entre sus actores. De hecho, España miraría en detalle y con no poco pragmatismo, en virtud de sus lazos culturales e históricos con esta región, lo que sucedía en el país sudamericano. Visto en su conjunto, el análisis comparado entre los diagnósticos e imágenes que construyeron españoles y portugueses puede arrojar importantes pistas sobre el posicionamiento de estos actores en una coyuntura de particular relevancia para el mundo occidental.

Además de lo anterior, cabría señalar que se trata de dos países que han recibido una atención desigual en cuanto a sus relaciones con Chile. España ha sido, sin duda, un caso importante para muchos investigadores que a través de diversos enfoques han analizado los intercambios diplomáticos, culturales y económicos entre ambas naciones.¹³ Relevantes han sido, en este sentido, las temáticas centradas en torno a los procesos de transición política que ambos países vivieron en la segunda mitad del siglo XX cuando dejaron atrás el pasado dictatorial.¹⁴ En relación a Portugal, y salvo casos puntuales y acotados a materias muy específicas,¹⁵ existe un enorme vacío sobre los vínculos entre ambos países. Ello es bastante paradójal pues en ambos

territorios ocurrieron cambios trascendentales entre 1973 y 1974, siendo uno de ellos –el golpe militar de Chile– ampliamente cubierto por la prensa lusa y algunos actores políticos. Más aún, y como se indicó con anterioridad, después de que triunfara la Revolución de los Claveles las lecciones del caso chileno circularon con bastante profusión dentro de la esfera pública portuguesa, sobre todo dentro de los sectores y movimientos de izquierda.¹⁶

Se debe precisar, por cierto, que la situación política de las naciones ibéricas al momento en que Salvador Allende llegara al poder en 1970, no significó *a priori* un diagnóstico homogéneo y del todo crítico respecto a Chile. Es decir, aunque existía una distancia ideológica evidente entre estos países, también hubo matices en las miradas que se hicieron, sobre todo en el caso de España, que mostró altas cuotas de pragmatismo, y aún de cooperación, para con el gobierno chileno. A través de sus documentos diplomáticos y de la prensa escrita, ambos países arrojan, en definitiva, un caudal relevante de información sobre el periodo de la Unidad Popular.

El enfoque desarrollado en este libro es en alguna medida tributario de lo que Rubén Herrero ha denominado como la importancia de las imágenes en las relaciones internacionales. Sobre este punto, el autor ha señalado que “las relaciones entre los Estados no son entre tales, sino entre imágenes de Estados”,¹⁷ afirmación que parece materializarse con notable precisión respecto al contexto y temáticas que este libro aborda. En efecto, además de los intercambios materiales que caracterizaron las relaciones diplomáticas entre los sesenta y setenta existió un conjunto de elementos que contribuyeron a configurar una imagen o simbolismo concreto de un país o región en particular. Esto explica, por ejemplo, la importancia que tuvieron en este periodo conceptos como tercermundismo, solidaridad o internacionalismo.¹⁸ Bajo estas coordenadas, los representantes de España y Portugal construyeron una imagen particular –y con mayor o menor dosis de complejidad– sobre el gobierno de Allende y el proceso sociopolítico que se desarrollaba en Chile.

La pregunta preliminar de este trabajo es si esas percepciones, diagnósticas e imágenes guardaban correspondencia con los términos y discursos que emergían en el propio Chile, o bien, se desplegaba una lectura bajo otro tipo de conceptos y marcos interpretativos. A primera vista se puede decir que, en el análisis realizado sobre esta cuestión, se observa una mixtura de mira-

das y nociones que dependían tanto de las relaciones internas existentes en cada país como de las dinámicas continentales y mundiales existentes en ese periodo. En este sentido, no pocas imágenes y diagnósticos hechos por los países ibéricos respecto al caso chileno estaban refiriendo también, implícita o explícitamente, a problemas de alcance mundial.

Frente a la pregunta sobre el contexto de elaboración y contenidos que desarrollaron dichas miradas, así como sus similitudes y diferencias, este trabajo plantea dos cuestiones centrales. La primera de ellas se refiere a que estos diagnósticos no fueron homogéneos ni desarrollaron el mismo nivel de críticas en relación a los sucesos que ocurrían en Chile. Aunque ambos regímenes compartían ciertas similitudes y orientaciones ideológicas –más en el pasado que al despuntar los años setenta– sus perspectivas de análisis, a objeto de entender y relacionarse entre sí, tenían diferencias sustantivas. Indudablemente ello se explicaba por las transiciones internas que vivían estas naciones, donde España venía experimentando desde la década del sesenta diversas transformaciones que buscaban modernizar al país e insertarlo dentro de un esquema internacional cada vez más complejo.

Según María José Henríquez, la orientación que asumió la política exterior española en la segunda mitad de los sesenta se caracterizó por desarrollar una mirada más pragmática y abierta a los matices, lo que marcaba un punto de inflexión respecto a las rígidas categorías del enfrentamiento entre Washington y Moscú.¹⁹ En este marco, apunta la autora, el factor económico cobraría especial importancia toda vez que España podía exhibir, hacia fines de los años sesenta, una buena política fiscal y una estructura productiva y financiera que la hacían en buena medida un país moderno.²⁰ Esta carta de presentación, que podía traducirse en una estrategia de cooperación iberoamericana distinta a la ensayada por Estados Unidos, sería uno de los principales activos de la política española hacia la región. En el caso particular de Chile, la llegada de Salvador Allende al poder añadía un elemento adicional, a saber, que ante el retiro de una parte significativa de los capitales norteamericanos –y la honda enemistad que este país manifestó desde un comienzo al gobierno socialista– quedaría un espacio virtualmente vacío que podía ser llenado por España. Esto último supondría para el ministro de asuntos exteriores, Gregorio López Bravo, la puesta en marcha de una

estrategia política específica hacia el Chile de Allende. En sus puntos sustanciales, dicha estrategia significaba optar por la neutralidad y el énfasis en la cooperación técnica, económica y financiera para de este modo contribuir en la moderación del proceso chileno, alejándolo así de la órbita cubana o soviética. De tener éxito, señala Henríquez, esta estrategia podría resituar al país ibérico en una inmejorable posición internacional dentro del campo de los países no alineados.²¹

A diferencia de los enfoques aperturistas y pragmáticos que primaban en España, Portugal atravesaba momentos de creciente tensión al iniciarse los años setenta. Desde hacía casi una década la nación atlántica se encontraba inmersa en una guerra colonial con sus posesiones africanas que buscaban alcanzar la independencia de la metrópoli. Se trataba de un conflicto cruento, con acusaciones cruzadas de extremismo y violencia, y donde Portugal no estaba dispuesto a ceder en sus reivindicaciones territoriales. Adicionalmente, y al situarse esta guerra en un marco caracterizado por la ruptura social y los cambios utópicos, su legitimidad estaba bastante cuestionada a nivel internacional. Ni siquiera el cambio realizado en la cúspide del régimen, tras la enfermedad y posterior fallecimiento de Antonio Oliveira Salazar, significó una modificación sustantiva en materia internacional.

En este contexto y a diferencia de lo sucedido con España, Portugal desarrolló una mirada fuertemente crítica y cerrada a la hora de analizar la experiencia socialista chilena. El embajador luso en Santiago, Armando de Castro e Abreu, miró desde un principio con desconfianza –y no menos temor– las distintas alternativas y coyunturas que se vivían durante la UP. El gobierno de Allende fue visto, en este marco, como un caso genuino de expansión del comunismo soviético por la región latinoamericana. Pero, además, de Castro e Abreu advirtió un punto especialmente conflictivo dentro del proyecto socialista en su vinculación al ámbito internacional. Este consistía en el respaldo explicitado por la izquierda chilena a la lucha anticolonial de los pueblos del Tercer Mundo, postura que chocaba de frente con la política exterior del país atlántico, que sustentaba en ese momento una guerra con sus territorios coloniales africanos. De todos estos elementos y problemáticas darán cuenta los informes y documentos diplomáticos emanados desde la Embajada de Portugal en Santiago de Chile a lo largo del periodo 1970-1973.

A nivel de prensa, ambos países también ofrecían un cuadro heterogéneo. En España, la apertura periodística iniciada a mediados de los años sesenta había permitido el surgimiento de diversos medios, sobre todo en la prensa escrita, que se distanciaban con claridad de los énfasis oficialistas. Esto había generado la inclusión de otros enfoques periodísticos, el abordaje de nuevos temas y, en definitiva, la posibilidad de plantear algunos tópicos y opiniones que antes habría sido imposible de llevar a cabo. De hecho, una parte no menor de estos medios recogería con particular interés la experiencia chilena de la Unidad Popular, abordando sus avances, retrocesos y los puntos más críticos que se vivían en la nación sudamericana. En algunos casos, inclusive, la preocupación por el caso chileno constituyó en realidad una excusa para hablar sobre los temas internos españoles. Anne Sanz-Gavillon recuerda que el gobierno de Allende permitió a algunas publicaciones, como el semanario *Triunfo*, abordar dichos problemas a través de un pacto tácito entre los redactores y el público lector.²² En Portugal el panorama era más sombrío, pues no existía la apertura de medios que sí había en su vecino peninsular, lo que redundaba en publicaciones ligadas al oficialismo y a las directrices gubernamentales. Aquellas publicaciones que ponían un acento más crítico sobre la realidad nacional e internacional de Portugal se encontraban restringidas en su circulación por lo que llegaban a un público muy reducido.

En vista de estos antecedentes, las imágenes y diagnósticos que construyeron las naciones ibéricas diferían en cuestiones sustanciales. La apertura en materia internacional de España y sus modificaciones a nivel de medios de comunicación contribuyeron a crear una esfera de discusión más amplia y rica en término de matices para abordar las problemáticas del mundo contemporáneo. Esta realidad se distanciaba notablemente de lo observado en Portugal en ese mismo periodo, donde el espacio informativo era más estrecho y condicionado en muchos casos a la política oficial. Esta última se encontraba, además, cercada por el problema de la guerra colonial que no ofrecía un panorama auspicioso a corto ni a mediano plazo.

El segundo punto que plantea este trabajo se refiere a los análisis específicos que hicieron España y Portugal sobre los años de la Unidad popular. De forma muy nítida, el tópico más abordado por estos testigos refería a

las situaciones de conflictividad y violencia política que se escenificaron en medio de vía chilena al socialismo. Ciertamente, las reflexiones en torno al origen de estos incidentes difirieron entre uno y otro país, asignándole una responsabilidad casi exclusiva a la izquierda en el caso de Portugal y un enfoque más matizado en el caso español.

¿Por qué se enfatizó en este tipo de hechos? ¿Por qué se destacó una dinámica del conflicto que aparentemente fue marginal dentro del proceso de transición al socialismo? A decir verdad, las situaciones de violencia política, y con ellas los discursos, debates y rupturas que produjeron, estuvieron más presente de lo que se cree dentro de la experiencia de la Unidad Popular. Su ocurrencia y periodicidad no fue en ningún caso un fenómeno marginal, ni tampoco materializado solo por los militantes de un bloque o agrupación. Se trató de un problema de primer orden que estuvo en el centro de muchas coyunturas y polémicas, que en ocasiones marcó un punto de inflexión en materia política y que, al final, se mostraría como una dinámica que contribuyó a la polarización general del periodo.²³ Resultaría indudable que, bajo este marco, las observaciones y análisis de los representantes ibéricos, y de la prensa escrita en general, refirieran las principales características de este fenómeno.

De igual forma, este trabajo plantea que las referencias que se hicieron sobre el tema de la violencia política en Chile estaban describiendo también una problemática de alcance global. Es decir, este fenómeno no era en modo alguno un tópico que se remitiera exclusivamente al país sudamericano, sino que resultaba transversal a distintas sociedades y escenarios. Había, en primer término, una conexión entre los sucesos ocurridos en Chile y el marco regional, observándose que la violencia política se encontraba enquistada en el seno de estas sociedades. Para el embajador portugués, y también para buena parte de la prensa lusa, la causa fundamental del problema radicaba en los intentos de transformación que la izquierda latinoamericana quería materializar en diversos países. Así, las acciones de los grupos guerrilleros de la cuenca rioplatense o las estrategias de los partidos comunista y socialista en Chile, por ejemplo, no diferían en lo fundamental, pues ellas estaban ancladas a un mismo propósito que no era otro, según se decía, que el de establecer regímenes marxistas en todo el continente. Desde un ángulo más global, este tipo de

análisis era subsidiario de un tipo de discursos y categorías sociopolíticas que recalaban en la idea de un enfrentamiento mundial entre dos fuerzas antagónicas, una de las cuales –el comunismo– tenía a la violencia como principal instrumento de acción.

Aunque la visión de los actores españoles fue más matizada, también aparecieron énfasis regionales y globales para analizar el conflictivo escenario que se había abierto en Chile al cabo de unos meses. Inclusive hubo varias referencias y paralelismos entre la situación del país sudamericano y lo acontecido en España a partir de 1936. No pocos actores, incluyendo a algunos chilenos según confidenciaría el embajador Enrique Pérez Hernández, veían que el enfrentamiento político había llegado a tal nivel de extremismo que la guerra civil asomaba con cierta claridad en el horizonte.

Como se puede observar, los actores ibéricos observaron una parte no menor de las vicisitudes por las que atravesó la vía chilena al socialismo bajo marcos interpretativos que iban más allá de lo estrictamente local. Aunque el gobierno encabezado por Salvador Allende suscitaba amplias expectativas en virtud de su particularidad y la forma en cómo se intentaba construir el socialismo, en el corto plazo se hizo evidente que la mirada exterior se haría con un cristal que enfatizaría en nociones y análisis más globales. Con todo, y según se indicara más arriba, estas perspectivas no fueron en ningún modo homogéneas ni iguales en el caso de España y Portugal. Las comunicaciones diplomáticas y los énfasis de la prensa escrita estuvieron llenos de matices y particularidades. Lo anterior sería indicativo, pues, de que los gobiernos autoritarios no constituyen modelos estancos que miran la realidad siempre de la misma forma y bajo idénticos principios. Y ello se logra percibir, incluso, en el caso de una experiencia que, como la chilena, se encontraba en las antípodas ideológicas de España y Portugal.

Respecto las fuentes utilizadas, este libro recopiló una amplia cantidad de material en distintos archivos y bibliotecas. En el caso de España se revisó documentación diplomática emanada desde la embajada de este país en Santiago de Chile y cuya existencia se encuentra clasificada, en su mayoría, en el Archivo General de la Administración (AGA) ubicado en Alcalá de Henares. De este banco documental se examinaron despachos, telegramas e informes de coyuntura elaborados tanto por los embajadores hispanos como

por otros funcionarios diplomáticos. Cabe reseñar, que los documentos emanados desde esta representación muestran distintos énfasis sobre el proyecto socialista chileno dentro de un marco donde se hace evidente la distancia ideológica entre ambos países. Sin embargo, y como ya se ha dicho, el proceso de redefinición de la política exterior española durante los años sesenta muestra también una mirada pragmática sobre el gobierno de Allende, desechando por momentos una condena taxativa y *a priori* de esta experiencia.

En cuanto a la prensa escrita, se indagó en diversos medios de comunicación cuyas orientaciones y líneas editoriales diferían entre sí. En este sentido, se trabajó con medios de orientación monarquista y conservadora como *ABC*, cuyo corresponsal en Chile –que firmaba bajo el seudónimo de «Veritas»– era el político conservador chileno Jorge Iván Hübner. Aunque en un primer momento *ABC* no se mostraría particularmente crítico con la presidencia de Allende, a partir de mediados de 1971 su óptica cambiaría hacia un rechazo cada vez más explícito. También se utilizó el periódico *La Vanguardia* que reflejaba una mirada de centro liberal a través de sus páginas. Como complemento de estas miradas también se incluyó la visión de *El Alcázar*, que transitó desde una perspectiva independiente y en general aperturista hacia una posición más ligada al régimen y la derecha española. La visión de *Arriba*, por su parte, entregaría la mirada de la Falange Española que en algunos puntos conectaba con los énfasis de otras publicaciones de derecha editadas en esos años. El vespertino *Pueblo*, perteneciente a los sindicatos verticales del régimen, mostraría una visión heterogénea –ni crítica ni condescendiente– respecto a la UP. Las revistas españolas que se emplearon cubren un amplio espectro político y van desde las posiciones de extrema derecha vinculadas a lo que se denominó como el búnker franquista (*Fuerza Nueva*), hasta una mirada democristiana instalada en la oposición al régimen (*Cuadernos para el Diálogo*). *Cambio 16*, en tanto, reflejaba una perspectiva democrática de centro, mientras que *Triunfo* representaba a diversas corrientes de izquierda. También se ha utilizado el tradicional periódico del Partido Comunista de España (PCE) *Mundo Obrero*. Dentro de los archivos de esta última colectividad se pudo consultar algunos documentos que describen importantes pasajes sobre los años de la UP y que fueron realizados por militantes españoles que se encontraban de visita en Chile. Tanto *ABC* como *La Vanguardia* además de *Fuerza Nueva*, *Cuadernos para el Diálogo*, *Cambio*

16, *El Alcázar*, *Arriba* y *Pueblo*, fueron consultadas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, mientras que los documentos y fuentes periódicas del PCE se revisaron en el archivo institucional que dicha colectividad posee en el centro de Madrid. Un último centro documental donde se encontró algunos registros fue la Biblioteca de la Escuela Diplomática dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En particular, allí se consultaron documentos referidos al periodo en que Gregorio López Bravo ocupó dicha cartera.

En el caso de Portugal, el nivel de fuentes consultadas fue similar al de España. Las bases documentales más importantes para los objetivos de este trabajo eran los archivos de la embajada de este país en Santiago de Chile. Estos se encuentran disponibles en el Archivo Diplomático del Ministerio de Negócios Estrangeiros ubicado en la ciudad de Lisboa cuyo acceso está abierto al público general e investigadores especializados. En el Archivo da Defesa Nacional, en tanto, se encontraron importantes registros sobre los análisis de prensa escrita y radial que hacía la oficialidad respecto a diversas coyunturas y escenarios mundiales. Aunque el énfasis está puesto sobre todo en el conflicto que mantiene Portugal con sus colonias africanas, existen algunos documentos referidos a países sudamericanos. También se consultaron los registros pertenecientes al Archivo de História Social perteneciente a la Universidad de Lisboa, donde se encontraron documentos y boletines referidos a diversos aspectos de la experiencia chilena.

La prensa portuguesa fue consultada íntegramente en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Portugal. La mayor parte del material se encuentra en formato microfilm y su acceso, al igual que en el caso del archivo diplomático, es abierto y expedito. La prensa periódica consultada en este caso también cubría diversos matices ideológicos dentro de lo que permitía el régimen portugués. Se indagó así en medios de tendencia republicana independiente como *Diário de Lisboa* y *O Século*, en otros de orientación regionalista como *Diário de Notícias* o *Jornal de Notícias*, en medios de información general, pero muy cercanos al Estado Novo Salazarista como *Diário Popular* o defensores de la guerra colonial que se libraba entonces como fue *Época*.²⁴ El semanario *Expresso* y la revista *Seara Nova* mostraron una actitud bastante favorable hacia la UP, al tiempo que analizaban desde un ángulo crítico el accionar de los sectores opositores a la vía chilena al socialismo. En la

Biblioteca Nacional también se consultó la colección completa del periódico del Partido Comunista de Portugal, *Avante!*

Este libro está dividido en dos partes. En la primera de ellas se examinan algunas coordenadas de contexto y actores del mundo peninsular en su tránsito hacia los años setenta. El énfasis está puesto en el marco institucional, el carácter que habían adoptado ambos regímenes y las condiciones en que se encontraban luego de más de 30 años de ejercicio ininterrumpido del poder. Enseguida se muestran diversas percepciones que, sobre el espacio sudamericano, hicieron España y Portugal en este mismo periodo. Esta mirada es útil para entender la forma en como dichas naciones miraron a un país en particular y a un espacio regional más amplio. La segunda parte del libro aborda las miradas, diagnósticos y percepciones hispano-portuguesas sobre la vía chilena al socialismo. Los capítulos de esta sección están divididos según un criterio cronológico que orienta y permite reconstruir las principales coyunturas de cada año. El primero de ellos examina el momento clave de septiembre de 1970, así como los inicios del gobierno de la Unidad Popular. El segundo capítulo reconstruye los principales hitos del año 1971, los cuales parecen advertir, en un primer momento, un futuro auspicioso para el proyecto encabezado por Salvador Allende, situación que, en realidad, solo se mantendrá durante unos meses. El tercer capítulo, dedicado al año 1972, enfatiza en los desafíos y asedios que debe enfrentar la vía chilena al socialismo ante una oposición cada vez más decidida a derribar al gobierno. Por último, el cuarto capítulo analiza los puntos más relevantes del proceso social y político de 1973, cuyas directrices parecen conducir inexorablemente, según apuntan varios actores ibéricos, hacia una crisis terminal del proyecto popular.

Notas

1 Alessandro Santoni, "Comunistas y socialistas italianos frente a la causa chilena: solidaridad y renovación (1973-1989)", *Izquierdas*, n°19, agosto 2014, pp. 112-130; Mariana Perry, "El poder de la solidaridad con Chile. La izquierda británica frente al golpe de Estado, 1973-1979", *Secuencia*, n°108, septiembre-diciembre 2020, pp. 1-26.

2 Pedro Marchant V., "La Unidad Popular chilena y el comunismo español: análisis, solidaridad y lecciones políticas (1970-1973)", *Historia Crítica*, n°90, 2023, pp. 51-73. La mirada favorable al golpe de Estado chileno de parte de algunas agrupaciones de la extrema derecha italiana y española ha sido estudiada por Camillo Robertini y Gilberto Aranda B., "La lección chi-

lena: El golpe de Pinochet como tipo ideal para las ultraderechas italianas y españolas", *Segle XX*, n°15, 2022, pp. 170-195.

3 Jorge Arrate y Eduardo Rojas, *Memoria de la izquierda chilena*, Santiago, Javier Vergara Editor, 2003.

4 Sergio Grez Toso, *La "cuestión social en Chile". Ideas y de-*

bates precursores (1804-1902), Santiago, Centro de investigaciones Barros Arana, 1995. Mario Garcés, *Crisis social y motines populares en el 1900*, Santiago, Lom, 2003.

5 Sofía Correa, et al., *Historia del siglo XX chileno. Balance paradójico*, Santiago, Sudamericana, 2001, en especial capítulo VI: El Estado, eje del proyecto nacional.

6 Alfredo Riquelme, "Política de reformas e imaginación revolucionaria en el Chile constitucional (1933-1973)", en Marianne González y Eugenia Palieraki (comps.), *Revoluciones imaginadas. Itinerarios de la idea revolucionaria en América Latina contemporánea*, Santiago, Ril editores, 2012, p. 154 y ss.

7 Eugenia Palieraki, "¿Bajo el signo de Fidel? La revolución cubana y la nueva izquierda revolucionaria chilena en los años 1960", en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (eds.), *Chile y la Guerra Fría Global*, Santiago, Ril Editores, 2014.

8 Alfredo Riquelme, "Política de reformas e imaginación revolucionaria... *op. cit.*", p. 156.

9 Franck Gaudichaud, "A 40 años del golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re) pensar la Unidad Popular," *Tiempo Histórico*, n°6, 2013, pp. 63-79.

10 Por citar unas breves referencias cabría señalar: Jorge Magasich, *Historia de la Unidad Popular*, Santiago, Lom, 2020 (hasta la fecha se han publicado IV volúmenes que abarcan desde los orígenes hasta 1972); Patricio Aylwin Azócar, *La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973*, Santiago, Debate, 2023. Una perspectiva que enlaza la historia de la UP con el golpe de Estado y sus consecuencias en Gilberto Aranda y

Misael Arturo López Z. (eds.), *Resonancias de un golpe: Chile 50 años*, Madrid, Catarata, 2023.

11 Por su temprana reflexión en torno a esta temática destaca la obra de Joaquín Fernandois, *Chile y el mundo, 1970-1973: La política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1985.

12 Véase, por ejemplo, Tanya Harmer, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana*, Santiago, Universidad Diego Portales, 2013.

13 Véase, por ejemplo, José Manuel Azcona (dir.), *Emigración y relaciones bilaterales España-Chile (1810-2015)*, Madrid, Dykinson, 2016.

14 Álvaro Soto Carmona, "Violencia política y transiciones a la democracia. Chile y España", en Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (dir.), *Violencias y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del sur - América Latina*. Madrid: Casa de Velásquez, 2009; Pedro Fera Vázquez, "Relaciones hispano-chilenas durante la Transición española (1975-1982): sociedad civil y mecanismos de solidaridad", *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, n° 126, 2, pp. 271-299.

15 Juan Maestre, "Chile y Portugal: Divagaciones comparativas", *Revista Litoral*, n° 53-58, 1975, pp. 247-254; Sónia Ferreira, *Mulheres de Desaparecidos*, Lisboa, Ela por Ela, 2003. En este texto, la antropóloga indaga en la vida de cuatro mujeres chilenas que a inicios del siglo XXI continúan sin conocer el paradero de sus maridos que fueron detenidos y desaparecidos por la Dictadura Militar de Augusto Pinochet hace más de treinta años atrás.

16 *Cuadernos Martín Soares*, n° 1, 1974, Dossier: Os acon-

tecimentos trágicos do Chile: Lição para os Revolucionários de todo o Mundo Chile y *Os mil días da Revolução chilena*. Lisboa: Avante!, 1979.

17 Rubén Herrero, *La realidad inventada. Percepciones y proceso de toma de decisiones en Política Exterior*, Madrid, Plaza y Valdés, 2006, p. 150.

18 Lucas Duarte, "Expresiones del internacionalismo tercermundista en el contexto de los 60 globales: una mirada desde el Cono Sur", *Esboços*, v. 28, n° 48, mayo/agosto de 2021, pp. 427-446.

19 María José Henríquez, "Los mil días hispano-chilenos, 1970-1973", Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, julio 2008 (Tesis Doctoral).

20 *Ibidem*, p. 6

21 *Ibidem*, p. 8.

22 Anne Sanz-Gavillon, "Chile como referente político y cultural de la España antifranquista: procesos de identificación, ecos y paralelismos en la Revista Triunfo (1964-1980)", *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, n°1, 2018, p. 50.

23 Para un análisis en profundidad de este tema véase, Francisco Javier Morales Aguilera, *Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973)*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2023.

24 Mario Matos e Lemos, *Jornais Diários Portugueses do Século XX. Um dicionário*, Coimbra, Ariadne Editora, 2006.

PRIMERA PARTE
ESCENARIOS Y ACTORES

Contexto ibérico y europeo

Dentro del marco europeo occidental de los años sesenta y setenta, España y Portugal representaban ciertamente casos atípicos. Ambas naciones constituían dos dictaduras que aún sobrevivían en medio de transformaciones que apuntaban, en esos años, a la integración continental a través de nuevas dinámicas de interacción social y política. Además, los cambios socioculturales que operaban a nivel mundial conformaban un cuadro en esencia rupturista, lleno de utopías socializantes y con un cuestionamiento generalizado hacia los valores y esquemas de vida tradicionales. En ese contexto, los países ibéricos parecían sacados de otro tiempo histórico, remando a contracorriente de las tendencias en boga.

Empero, quizás había un punto en común, una realidad más bien, que tanto el espacio ibérico como el europeo compartían por ese entonces: el problema de la violencia política. La agitación social en las calles, los enfrentamientos con la policía y el accionar de diversos grupos armados –con distintos énfasis y cursos operativos– emergían como realidades transversales a varios países de la región. Por supuesto que fuera de las fronteras europeas, la violencia también aparecía como un problema central para las sociedades contemporáneas, inmersas algunas de ellas en sendos conflictos bélicos, externos o internos, en distintas partes del mundo. Este capítulo traza, pues, las principales coordenadas de este fenómeno a nivel del viejo continente, iniciándose con una contextualización de los principales lineamientos institucionales y políticos de los regímenes español y portugués. El objetivo es construir un esquema general de las principales problemáticas de estas naciones a efecto de comprender, más adelante, su posicionamiento respecto a la experiencia socialista de la Unidad Popular.

España y Portugal entre los años sesenta y setenta

La victoria de Franco y el bando nacional en la guerra civil (1936-1939) otorgó a éste una posición de autoridad casi natural dentro del alto mando español. A partir de entonces, y gracias a un ejercicio efectivo y muy cerrado del control estatal, se abrió una oportunidad extraordinaria para forjar lo que Stanley Payne denominó como un “consenso político absoluto”, el cual se basaba casi exclusivamente en el criterio unipersonal del caudillo.²⁵

El contexto de comienzos de los años cuarenta a nivel europeo se prestaba en buena medida para consolidar este tipo de objetivos. Con las potencias del EJE en plena ofensiva militar, los dirigentes españoles intuían que el orden político evolucionaría hacia regímenes de raíz autoritaria de fuerte impronta militar. En el curso mismo de la guerra civil, la ayuda de los regímenes fascistas de Italia y Alemania fue vital, como indica Julián Casanova, para el bando nacionalista al permitirle, entre otras cosas, trasladar al Ejército desde África hacia la península y recibir un importante apoyo financiero.²⁶ Independiente del resultado que tuvo la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas españolas tendrían una posición predominante dentro del aparato administrativo; la “espina dorsal” del régimen, aunque no bajo un carácter monopólico, según ha sostenido Borja de Riquer.²⁷ En este contexto, Franco visualizaba su papel como Jefe de Estado bajo la concepción de estar dirigiendo un cuartel militar. Tales premisas calzarían con los lineamientos económicos del país peninsular por aquellos años, los cuales han sido definidos por varios autores como propios de un sistema autárquico, el cual, según recalca el ya citado Riquer, estuvo en la base del agravamiento económico sufrido por el país en la posguerra.²⁸

A pesar de las limitaciones y costes sociales que imponía un modelo político y económico de estas características, el régimen español logró consolidarse en el poder a lo largo de la década del cuarenta. Esto le permitió afrontar con cierta firmeza la oposición y aislamiento que sufriría en el concierto internacional tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Además de la derrota de los referentes ideológicos del franquismo a manos de las potencias aliadas, la propia imagen y simbolismo del régimen trasuntaba una inequívoca cultura política ligada a ese pasado fascista. Si bien esto

no constituía en sí mismo un peligro para la mantención del orden europeo posterior a la guerra, ideológicamente significó el desarrollo de una fuerte pugna entre algunos países occidentales y España. Una de las consecuencias materiales de esta confrontación fue que el país ibérico quedaría situado por algunos años en un espacio muy próximo al ostracismo dentro de la comunidad internacional.

En ese marco, resultaba necesario introducir algunas modificaciones que revistieran de una capa jurídica más sólida al régimen franquista, institucionalizando el ejercicio de la autoridad y abonando cierto número de garantías civiles. Javier Tusell señala que Franco, consciente del nuevo escenario internacional, aceptó ofrecer una “imagen democratizadora” de España a través de la realización de algunos comicios sindicales y la promesa de llevar a cabo otros en el futuro.²⁹ Además, como sostiene Payne, se acentuó la identidad católica del Estado y se proyectó cierto énfasis Monarquista bajo el supuesto de que sería la evolución natural del régimen.³⁰ El conjunto de estas modificaciones tenía como uno de sus objetivos centrales consolidar el modelo político a efecto de otorgarle una legitimidad de la cual todavía carecía y, al mismo tiempo, posicionarlo como un sistema viable dentro del concierto internacional. En buena medida, se buscaba dejar atrás ese estado de transitoriedad y excepción que parecía haber surgido tras la guerra civil hasta alcanzar una condición de mayor formalidad y continuidad institucional.

Hacia finales de los años cincuenta, se observaría cierta maduración en el régimen político español. Los pilares sobre los cuales descansaba el Estado franquista dejaban atrás su estatus larvario para asentarse de forma más marcada y estable, aunque todavía pervivía una matriz de carácter autoritaria y el propio Franco, según indica Tusell, era más bien renuente a la idea de una institucionalización.³¹ Desde el Estado se continuaba dirigiendo buena parte de la economía, mientras que los ámbitos cultural, religioso y educativo eran guiados por la doctrina del nacional catolicismo. Cabe recordar que, en esta amplia red administrativa del Estado español, las Fuerzas Armadas continuaban jugando un rol clave en la mantención y reproducción del sistema insertándose de lleno en las más diversas tareas burocráticas.

Sin duda que en el tránsito hacia los años sesenta el régimen mostraba signos evidentes de consolidación y estabilidad. Ello fue acompañado de un

importante crecimiento y desarrollo económico que se insertaba, claro está, dentro de una tendencia prácticamente mundial. Se trató, no obstante, de un crecimiento intensivo, sobre todo en sectores como la industria, el turismo, los servicios y el comercio interior, estos últimos fortalecidos gracias al aumento del poder adquisitivo en algunos segmentos de la población.³² A pesar de esta dinámica, los alcances de estos logros comenzaban a chocar con un reimpulso de las actividades opositoras que gatillaron sendos movimientos huelguísticos en diversos puntos del territorio español. Al mismo tiempo, comenzaban a sumarse nuevos actores sociales a este tipo de movilizaciones, como los estudiantes universitarios e inclusive ciertos segmentos del clero. Eduardo González Calleja, dentro de las tres etapas con que define la historia de la disidencia estudiantil bajo el franquismo, caracteriza a la tercera de ellas, 1965-1968, como la que marcaría el apogeo del activismo en favor de una Universidad democrática y en defensa de las libertades de crítica, acción y expresión. Un cuarto periodo reseñado por el autor, 1968-1969 debió afrontar el declive de la movilización y la crisis de los sindicatos democráticos como consecuencia, entre otras cosas, de la represión oficial decantada hacia finales de esa década.³³ Desde un ángulo más general, Tony Judt sostiene que la legislación represiva y coercitiva que aún existía en España en ese periodo hacía pensar que en realidad la década de las utopías había pasado de largo en este país, deteniendo su reloj histórico todavía en 1939.³⁴

A pesar de estos hechos, el régimen activó algunas modificaciones de cierta importancia. Se impulsó, por ejemplo, una nueva orientación económica que apuntaría hacia una apertura mayor del intercambio comercial y el fomento de la inversión privada. Este cambio, que ya se venía observando desde la década anterior, sería ejecutado fundamentalmente por personeros de perfil más bien técnico ligados en muchos casos al Opus Dei. El objetivo de estas medidas, era dejar atrás las prácticas autárquicas que habían caracterizado al régimen durante sus primeros años. No se trataba en ningún caso de transformaciones estructurales que cambiaran la orientación del sistema, pero sí una apuesta por reformar y actualizar algunos aspectos dentro de ciertos cauces. Como indica Tusell, el concepto “apertura”, que sintetizaba esta nueva orientación, no quería decir en ningún caso cambio sustancial, sino más bien un deseo por “aflojar” los estrictos controles de antaño.³⁵

Al mediar esta década, se introdujeron también algunos cambios en materia legislativa al aprobarse una ley de prensa y medios de comunicación que abría la puerta hacia un mayor pluralismo. En la práctica, esta nueva normativa eliminaba la censura previa, reservándola únicamente para casos de emergencia, y permitía a los periodistas recurrir las sanciones administrativas. No obstante lo anterior, algunas disposiciones podían contravenir dichas formulaciones, como por ejemplo la disposición que obligaba al depósito previo de las publicaciones, o bien, aquella que estipulaba el secuestro administrativo de las mismas. Tal legislación, aun cuando significó un avance con respecto al cuerpo normativo que le precedía, invitaba, como ha sostenido Carrillo, a la autocensura y la cautela profesional del propio periodista.³⁶ Independiente de estas limitaciones, se abría un pequeño intersticio que permitiría, al menos, leer voces un poco más críticas o conocer realidades que se encontraban vedadas para el público en general.

Desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, asomaban dos cuestiones características para España. Por una parte y de la mano de un conjunto de profesionales de perfil técnico y pragmático, esta nación redefinió hacia fines de los sesenta algunas de sus prioridades y orientaciones en materia de política exterior. Esto permitió plantear relaciones diplomáticas más flexibles –alejadas de la rigidez ideológica de antaño– observando con mayor interés los procesos que se desarrollaban en el mundo socialista o en Latinoamérica.³⁷ De hecho, como indica Payne, el régimen se esforzó por mantener relaciones cordiales con América Latina a objeto de no ser desplazado por la política exterior norteamericana fundada en esos años dentro de la denominada Alianza para el Progreso.³⁸ Esto significó, por ejemplo, visualizar con mayor tolerancia, y cierta expectación, algunas experiencias políticas que indudablemente guardaban diferencias ideológicas con el régimen franquista como fue el caso de la vía chilena al socialismo al iniciarse los setenta.

El segundo elemento característico dentro del ámbito internacional español fue que a diferencia de otros países de la región europea la nación ibérica no se involucró en una guerra de tintes coloniales.³⁹ La experiencia de ese momento indicaba que un enfrentamiento bélico de este tipo auguraba con seguridad algunas derrotas, o en su defecto, una retirada obligatoria

de las fuerzas militares que bien podía entenderse como una capitulación. Todo ello podía abrir la puerta a una progresiva erosión de la legitimidad del régimen y sus autoridades, decantando procesos de movilización social que podían empalmar hacia un descontento mayor en contra del gobierno, como estaba ocurriendo, por ejemplo, en la vecina Portugal. Asimismo, el contexto sociocultural de esos años auguraba que una incursión bélica de estas características debería lidiar no solo en el campo de batalla sino también confrontar a una opinión pública internacional crecientemente crítica con el colonialismo y las formas de opresión en general.

En tránsito hacia los primeros años de la década del setenta comenzaría a discutirse el problema de la sucesión de Franco. El deterioro físico del general era evidente para buena parte de los españoles, lo que auguraba que en un plazo de tiempo no tan largo el jefe de Estado ya no detentaría el poder político. Las previsiones más optimistas apuntaban, bajo este escenario, que el régimen evolucionaría casi de forma natural hacia una monarquía autoritaria que sería dirigida por Juan Carlos de Borbón bajo los principios rectores del franquismo. Pero antes de los cambios proyectados en la jefatura del Estado se observaron otras modificaciones a nivel ministerial y en la conducción del Gobierno –con la llegada de Luis Carrero Blanco, por ejemplo– las cuales mostraban que la esencia del régimen se mantenía incólume. Con todo, Paul Preston sostiene que este escenario fue propicio para que se desencadenara una toma de posición de diversos actores y tendencias, muchos de ellos antagónicos entre sí, para actuar una vez que Franco finalmente falleciera. Estos sectores iban, indica el historiador, desde la extrema derecha fascista de Blas Piñar hasta las tendencias aperturistas representadas por hombres como Manuel Fraga.⁴⁰

Los primeros años de la década del setenta orbitaron así en torno al tema de la sucesión de Franco, que se encontraba más débil y senil. Tal perspectiva se hacía bajo el entendido de que el edificio institucional que se había construido a lo largo de las décadas no podría ser derrumbado en el mediano plazo. Es decir, se pensaba proyectar al régimen más allá de las circunstancias particulares que, objetivamente, terminarían por sacar a Franco de la escena política en los próximos años. Sin embargo, un conjunto de factores críticos irrumpiría en esta etapa. A las tensiones internas dentro del gobierno

se sumarían las crecientes movilizaciones sociales y la irrupción cada vez más sostenida de Euskadi Ta Askatasuna (ETA). En ese marco, y presionado por los sectores derechistas de las Fuerzas Armadas, Franco se dejaría llevar por una aplicación dura de la represión que fuese entendida como una demostración de la fuerza que aún conservaba el régimen. Aunque también se impulsaron ciertas reformas, por ejemplo dentro del agitado ámbito universitario, estas corrieron en paralelo a la mantención estricta del orden público y una represión indiscriminada de casi cualquier alboroto.⁴¹ Para Preston, tanto las políticas represivas como las condenas a muerte dictadas en contra de algunas personas, además de ser revanchistas y mostrar la disminuida capacidad de discernimiento del propio jefe de Estado, hacían evidente la decadencia del régimen.⁴²

El embajador chileno en Madrid, Sergio Sepúlveda Garcés, referiría a través de diversos informes diplomáticos algunas de estas situaciones vinculadas al tema de la represión. Así, por ejemplo, en enero de 1971 y en el marco del denominado proceso de Burgos, este representante indicaba que no obstante las críticas y cuestionamientos hacia la autoridad, el franquismo mantendría su inmovilidad, y aun cuando no estuviera el jefe de Estado, la dureza del régimen no desaparecería.⁴³

La situación española de comienzos de los años setenta se encontraba así dentro de un marco de creciente complejidad. Desde luego, su actor protagónico y elemento que proporcionaba dosis importantes de cohesión y legitimidad estaba transitando un camino que progresivamente lo iría retirando de la primera línea política. Aunque el marco institucional aparentaba cierta solidez y capacidad de proyección, diversos factores comenzaron a tensionar esa estructura. Desde la década anterior, los procesos contraculturales y la activa movilización social venían irrumpiendo con cierta frecuencia, cuestionando así el autoritarismo del régimen y una parte de sus valores y simbologías.

Bajo una perspectiva todavía más radical, algunos grupos armados asumieron una lucha frontal en contra del Estado, lo que significaría materializar un cuadro de conflictividad al interior de la sociedad española y también dentro del propio franquismo respecto a la forma en cómo se encararía esta realidad. De este modo, los problemas que hacía menos de veinte años

atrás parecían impensados para el régimen se tornarían ahora factores de polarización transitando en distintas direcciones. Aunque no parece abrirse todavía un cuadro generalizado de cuestionamiento al Estado, sí se puede observar una eclosión de tensiones que desorientan el accionar de las autoridades y hacen menos nítida una proyección incólume del franquismo para el largo plazo.

Por su parte, el contexto en el cual se asientan las bases del Estado Novo portugués tendría algunas diferencias importantes respecto a su vecino peninsular. Desde luego, en el país atlántico no existió una guerra civil que significara la fractura de la vida social y política, como ocurrió en España, aunque el marco epocal de inicios del siglo XX, con las tensiones derivadas de la crisis del liberalismo, sí tendría una incidencia importante en los problemas internos de Portugal. Además, las consecuencias que siguieron al triunfo de la revolución bolchevique en la Rusia de 1917, unido a las persistentes dificultades económicas, conformarían un cuadro de creciente fragilidad de la democracia y de aquellas visiones basadas en el respeto y promoción de las libertades políticas.⁴⁴

En efecto, casi una década antes de que en España explotara el conflicto civil, en el país atlántico se produjo la caída de la Primera República Portuguesa como consecuencia de una creciente situación de crisis política y económica que abriría paso a la intervención militar liderada por el general Gomes da Costa en 1926. A partir de entonces, se instauró una dictadura militar que gobernaría hasta 1933 siguiendo un esquema más o menos común a las dictaduras de este tipo: con restricción de las libertades públicas y una administración del Estado a través de decretos con fuerza de ley. Al comenzar la década del treinta, la promulgación de la Constitución Política marcaría un punto de inflexión dentro de la trayectoria institucional del régimen al instaurarse legalmente el denominado Estado Novo. En este contexto, tendría un rol de primera importancia Antonio Oliveira Salazar, quien se había destacado como un eficiente ministro de finanzas, llegando a ser nombrado presidente del Consejo de Ministros en 1932.

Los principios rectores que estipuló el texto constitucional señalado conformaron la base jurídica e ideológica del nuevo Estado portugués. En sintonía con las tendencias antidemocráticas de este periodo, dicho cuerpo

legal remarcaría un énfasis de cuño antiparlamentario bajo la sombra de un marcado nacionalismo. Se trataba de un régimen que al igual como ocurría en otros países de Europa, según indica Ismael Saz, legitimaron procesos antiliberales, utilizando algunos referentes de tipo organicista y corporativo y que, además, instauraron numerosas prácticas represivas y policiales.⁴⁵ Se crearía así una instancia de participación oficial de la sociedad portuguesa a través de la Unión Nacional, junto con la instauración de una policía política que a mediados de los cuarenta pasaría a llamarse Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE). También emergería en esta nación una concepción imperial del Estado, que estaba influenciada directamente por el integrismo lusitano y el fascismo.⁴⁶ Bajo estas coordenadas, Portugal lograría un importante nivel de estabilización política que, con ciertas modificaciones, se mantendría incólume de la mano de Salazar hasta por lo menos fines de la década del sesenta.

Dentro de los estudios contemporáneos referidos a Portugal se tiende a identificar dos grandes fases en la evolución del régimen salazarista. La primera de ellas arranca en 1933, fecha en que se dictó la Constitución Política que dio forma al Estado Novo, y se extendió hasta 1945. En esta etapa se observó una influencia directa de las tendencias autoritarias que imperaban en algunos países europeos. La segunda fase en la evolución del Estado Novo se abriría a partir de 1945. Indudablemente los cambios internacionales producidos tras el término de la Segunda Guerra Mundial tendrían un impacto al interior de las fronteras portuguesas. Así, por ejemplo, las medidas restrictivas del Estado tendieron a flexibilizarse permitiendo cierta participación de la oposición política al régimen en ciertos eventos electorales. Con todo, predominará una concepción más bien organicista en materia democrática y en las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad civil.

En el ámbito donde sí se observaron ciertas modificaciones fue en el económico. A partir de los años cincuenta, comenzaría un proceso de estímulo del mercado interno y la acumulación de capitales que entroncará, ya en los sesenta, hacia una política general de desarrollo basado en la industria, aunque sin perder de vista el papel rector del Estado. Estas iniciativas se verían refrendadas con la apertura de Portugal al capitalismo internacional a través

de su adhesión al Acuerdo Europeo de Libre Comercio y su participación en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).⁴⁷

Sin embargo, este impulso al desarrollo portugués, que se conectaba en buena medida con las tendencias que marcaban el ritmo económico y político en el Viejo Continente, se vería ensombrecido con el inicio de la guerra colonial al iniciarse la década de los sesenta. Como ha indicado Antonio Reis, la Constitución de 1933 había fijado de forma clara el carácter pluricontinental y plurirracial de Portugal en tanto estructura fundamental del Estado unitario.⁴⁸ A la luz de estos principios, los intentos autonómicos e independentistas que comenzaron a aflorar en buena parte del continente africano –y por ende en las colonias portuguesas– fueron vistos como factores de ruptura y amenaza de los valores consagrados en la metrópoli. Portugal respondería, en este marco, con la ocupación militar de sus territorios, lo que tendría como consecuencia incrementar su aislamiento internacional y consumir una cantidad ingente de recursos económicos del erario nacional. Antonio Costa Pinto señala a este respecto que, a inicios de la década del setenta, Portugal gastaba cerca de un 45% del presupuesto en las áreas de defensa y seguridad movilizando a más de 140 mil hombres en este conflicto.⁴⁹

Un punto de inflexión dentro de la escena política portuguesa pareció asomarse a finales de los años sesenta cuando la enfermedad y agonía que aquejaba a Salazar hizo inevitable el traspaso de poderes a otro dirigente. La responsabilidad recayó en Marcello Caetano, profesor universitario y ministro de Estado de larga trayectoria dentro del régimen. Su propuesta tendiente a brindar una evolución del sistema, pero manteniendo cierta continuidad, se mostraría a la larga como una ecuación difícil de resolver, por lo que en la práctica no hubo transformaciones de gran magnitud.⁵⁰ A decir verdad, el aire aperturista que representó en algún momento Caetano chocaba de frente con la ideología y prácticas represivas que el régimen había desplegado dentro de la sociedad portuguesa.⁵¹ Bajo este contexto, resultaba inviable cualquier modificación sustancial de los términos en que se desarrollaba la guerra colonial.

Con relación a algunos de estos tópicos, Marcello Caetano, señalaría poco tiempo después de asumir su cargo que Ultramar revestía una importancia fundamental en la vida política portuguesa, la cual se veía alterada por los brotes de violencia y subversión existente en dichos territorios. Adi-

cionalmente, el jefe de Gobierno indicaba que los movimientos y partidos que prestaban su apoyo a la subversión del orden en esta zona contaban con una amplia audiencia y “decidido favor” en la prensa extranjera, algunas cancillerías y en la Asamblea General de la ONU. A pesar de estos obstáculos, Caetano insistía en remarcar la posición inflexible de Portugal en cuanto a mantener el control sobre estos territorios, pues el país era responsable de la seguridad de las poblaciones que allí vivían y de todo cuanto aconteciese en las mismas.⁵²

En pocos años, el conflicto impactaría de forma crítica a las autoridades lusas, pues en el contexto de cambio epocal que se vivía en los sesenta el tema de las luchas por la liberación e independencia del Tercer Mundo fue uno de los tópicos que alcanzaría mayor respaldo y solidaridad a nivel internacional. Se trataba, pues, de una disputa bélica muy difícil de legitimar para el régimen portugués, tanto a nivel continental y mundial como dentro de sus propias fronteras.⁵³ No obstante ello, el gobierno luso impulsó a lo largo de este periodo una serie de publicaciones que ponían en conocimiento de los militares algunas cuestiones relativas a la administración del Estado y a la lucha que se libraba en territorio africano. Uno de estos materiales era un pequeño folletín llamado *Soldado! Coisas importantes que debes saber!* El número 19 de esta publicación se dedicó exclusivamente al tema de la subversión comunista, la cual, bajo la óptica portuguesa, había sido el factor detonante de la guerra ultramarina. Para confrontar esta estrategia y reconquistar a una población “subvertida”, esta publicación indicaba que los militares debían conocer y comprender el carácter e idiosincrasia de dichos pueblos y al mismo tiempo ayudarlos a librarse de los elementos clandestinos y subversivos.⁵⁴

Otra publicación que iba en la misma línea era *Opinião*. En el número 8, correspondiente a 1971, esta revista expuso las principales características de lo que denominó como guerra psicológica en contra de Portugal. Según esta perspectiva, tanto la Unión Soviética como China, a través de un intenso proceso de “comunização” de los pueblos, deseaban controlar las riquezas naturales del mundo. Si no resultaba posible llevar a cabo este objetivo en todo el planeta, el comunismo internacional, indicaba *Opinião*, se satisfacía con dificultar la vida en los países de occidente, incentivando por ejemplo

las independencias en los territorios africanos. En este punto, aseguraba la revista, la estrategia de la URSS y China chocaba con Portugal, que por su posición geográfica-territorial y su marcado anticomunismo había terminado por transformarse en un blanco especial de la guerra subversiva y psicológica que dichos países llevaban a cabo. De este modo, la nación atlántica debía hacer frente a numerosas operaciones provenientes desde el mundo comunista como eran la creación de redes subversivas, las acciones violentas en ultramar, la creación de un ambiente de insurrección general, entre otras prácticas.⁵⁵

Además de estos énfasis, la preocupación de las autoridades lusas en torno al impacto de la guerra colonial también se hizo extensiva hacia el rol que jugaba otro tipo de actores dentro del concierto internacional. Gracias a los informes del embajador español en el Vaticano, Antonio Garrigues, se ha podido conocer con mayor detalle el conflicto diplomático entre Portugal y la Santa Sede, verificado en julio de 1970, a propósito de una audiencia concedida por el Sumo Pontífice a un grupo de líderes independentistas de las colonias portuguesas. Según el representante hispano, el embajador luso presentó a comienzo de ese mes una enérgica nota de protesta ante el cardenal secretario de Estado por la audiencia del Papa Pablo VI antes referida. A tal punto llegaba la molestia del gobierno luso, que el embajador de este país le comentó a Garrigues que existía la posibilidad de que se ordenara la devolución a la Santa Sede de la rosa de oro que el Papa había concedido al Santuario de Fátima en 1965. Según el embajador español, Portugal consideraba este incidente como el más grave para su país desde el inicio de las actividades subversivas en Ultramar.⁵⁶ El tema era sin duda importante porque involucraba a una figura de carácter mundial y porque ponía un punto de atención respecto a los énfasis de la política internacional del Vaticano. De acuerdo a Garrigues, este tema había sido, en efecto, ampliamente discutido dentro de la prensa escrita italiana, donde algunos medios interpretaron la audiencia concedida por Pablo VI como parte de un proceso de radicalización de su estrategia sociopolítica a favor de las pretensiones del Tercer Mundo.⁵⁷

En el marco de estas tensiones deben entenderse las miradas y diagnósticos que hizo el representante portugués en Santiago de Chile cuando

la UP accedió al poder en noviembre de 1970. Uno de los puntos de mayor preocupación para el embajador era, en efecto, la posición que asumiría la nueva administración chilena en relación al tema colonial. De hecho, los informes diplomáticos mostraban cómo este tema resultaba inquietante para el país atlántico, al punto de que aquel fue mencionado expresamente en la primera reunión que tuvo el embajador de Castro e Abreu con el canciller chileno Clodomiro Almeyda.

El tema era sin duda relevante para el diplomático portugués en virtud de que su país se encontraba con dificultades cada vez más grandes para legitimar, ante la comunidad internacional y el mundo en general, una guerra de carácter colonial. Este conflicto representaba para numerosos actores una dinámica más propia del siglo anterior que del momento social y político que se vivía en los años sesenta y setenta, donde las ideas de liberación, utopía y transformación estaban en boga. Unido a esto, cabría referir que no fueron pocas las denuncias que se hicieron en contra de Portugal en estos años respecto a situaciones de abuso y violencia cometidas por sus militares en contra de la población local. Todo lo anterior no hacía sino desprestigiar de forma constante la política exterior del país atlántico e inclusive provocar situaciones incómodas a sus propias autoridades cuando viajaban al exterior.⁵⁸

En suelo portugués comenzaba a interiorizarse que las tensiones derivadas de la guerra colonial, el aislamiento endémico del país y la falta de amplias libertades políticas sí podían constituir factores determinantes para materializar un cambio de ciclo en el corto o mediano plazo. A lo anterior habría que agregar un conjunto de modificaciones que operaron dentro de la propia sociedad portuguesa, como fueron un cierto estrechamiento del mundo rural y un aumento sostenido de las clases medias urbanas. Esto significaría, por ejemplo, una expansión importante de las matrículas universitarias y de los puestos públicos, segmentos que transitarían hacia una vertiente opositora al régimen, sobre todo en el caso de la enseñanza superior que se había visto influida por los ecos de mayo de 1968 en París. En ese marco, como señala Rui Ramos, resultaba más difícil mantener el control del espacio público sin incrementar los niveles de represión política.⁵⁹ El embajador chileno en Lisboa, Emilio Cheyre T., comentaba respecto al contexto social y político de inicios de los setenta que, a pesar de mostrarse

una situación muy tranquila y con llamados permanentes del gobierno a la unidad nacional en virtud de la guerra colonial, la actividad opositora era intensa en distintos puntos del país. Por ello, si las restricciones a la libertad de expresión se mantenían, aseguraba Cheyre, era probable que el descontento aumentara en distintos sectores de la población.⁶⁰

Ese descontento, cabe precisar, ya había anidado en el seno de los institutos militares desde tiempo atrás. En 1973 se había conformado el denominado Movimiento de los Capitanes, el cual dio forma tiempo después al Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), cubriendo así un espectro más amplio dentro de la oficialidad y suboficialidad castrense. La idea fuerza que cohesionaba el pensamiento de estos actores era que el fin de la guerra colonial solo se alcanzaría si se derrocaba al régimen que la sostenía.⁶¹ Ello implicaba materializar una acción de fuerza coordinada y sorpresiva que depusiera rápidamente a las autoridades políticas e iniciara la demolición de las instituciones del Estado Novo. Hacia finales de abril de 1974, se abrió una coyuntura que permitió, gracias a la rapidez y operatividad del MFA, alcanzar buena parte de los objetivos que se habían trazado. Aunque la denominada Revolución de los Clavos no estuvo exenta de contradicciones, reflujos y limitaciones, su emergencia puede anotar como un triunfo categórico el haber derribado un régimen autoritario en poco tiempo y con un saldo mínimo de víctimas.⁶² El punto de inflexión abierto por los militares portugueses hizo que más de cuarenta años de salazarismo comenzaran a quedar atrás.

Contexto europeo durante los años sesenta y setenta

Hacia finales de la década del sesenta, tanto la península ibérica como el espacio europeo en general fueron testigos de una realidad compleja que tendría en el fenómeno de la violencia política una de sus principales manifestaciones. Aunque se trata de un concepto polisémico, en este caso en particular cabría detenerse en algunas de las formas de violencia más características materializada por aquel entonces en el viejo continente. Si se comparte el criterio de Richard Vinen, habría que indicar que el *sesentaiocho* francés marcó un punto de inflexión dentro de la historia de occidente, el cual por

muy poco no cristalizó en un cambio estructural más grande.⁶³ Sin embargo, sus consecuencias materiales tenderían a perdurar, impulsando, simbólicamente, la extensión temporal de los sesenta hacia la década siguiente y abriendo la puerta a nuevos repertorios de acción para aquellos grupos que constataron con cierto desaliento el fracaso del programa *sesentayochista*. Para algunos autores, el “68” puede ser leído, en fin, a partir de una doble dimensión, es decir como triunfo y como fracaso, siendo los cambios culturales una de sus mayores conquistas, mientras que la toma del poder a través de la revolución una de sus derrotas.⁶⁴

En este contexto, algunos de los movimientos e individuos que constataron la derrota del programa revolucionario de los jóvenes parisinos comenzaron a visualizar e idear otros caminos para encauzar su lucha política. Para muchos de estos jóvenes, la vía armada se transformó en una de las alternativas más llamativas. Desde la perspectiva de Julián Casanova se trataba de organizaciones terroristas que utilizaron la violencia de forma calculada y sistemática de acuerdo a diversos objetivos (conseguir cambios políticos, eliminar enemigos, entre otros). Adicionalmente, indica este autor, la emergencia de estos colectivos representaría una amenaza creciente a la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.⁶⁵ Con la irrupción de este tipo de organizaciones se abriría así otra manifestación relevante de violencia política en Europa en el tránsito de los sesenta a los setenta. Por cierto, las conexiones entre el movimiento del 68 y las estrategias armadas de los grupos que actuarían en los años siguientes no fueron directas ni unilaterales. Como han señalado Avilés, Azcona y Re, el movimiento del 68 se caracterizó por su amplia participación y por ser en esencia no violento, situación que contrastaba con las acciones impulsadas por quienes tomaron el camino de las armas.⁶⁶

Al margen de estas diferencias, los movimientos que defendieron el uso de la violencia como método de acción política lograron causar un impacto no menor dentro de la esfera pública europea, situando a este fenómeno como una de las problemáticas más importantes en la década de los setenta. Esta dinámica, además, se escenificó de modo transversal dentro de los cuatro espacios que identifica Rafael Cruz cuando reflexiona sobre la violencia colectiva en el viejo continente: espacio de confrontación general, de control policial, de la seguridad y simbólico.⁶⁷ Desde una perspectiva temporal más amplia, este tipo de violencia

entroncó en algunos casos con aquellos procesos de transición democrática que significaron el paso desde regímenes autoritarios a otros de características democráticas. El problema surgía porque dicha evolución no significó en modo alguno el término abrupto de la violencia, sino su continuación y proyección dentro de otro marco político. Algunos autores han advertido, en este sentido, que en el contexto de algunas transiciones surgió como elemento de análisis fundamental el tema de la gestión de la violencia política, ya fuese en relación con la ocurrida en el pasado como con aquella que asomaba en el presente e incluso con la que se podía proyectar a futuro.⁶⁸ Mirando el conjunto de las coordenadas temporales y discursivas de esa etapa, Javier Muñoz y Sophie Baby sostienen que en estos años se produciría un intenso proceso de teorización y materialización de la violencia en Europa por parte de diversos actores.⁶⁹

Respecto a la naturaleza política de los movimientos que emergen entre los sesenta y setenta cabría señalar que en su mayoría formaron parte de aquella tendencia definida como Nueva Izquierda, y que autores como Alberto Martín y Eduardo Rey Tristán caracterizan como parte de una segunda gran oleada crítica del capitalismo liberal.⁷⁰ No se trató, en el caso europeo, de organizaciones cohesionadas en torno a programas ideológicos globales, sino que presentaban mixturas y características bastante particulares, además de estrategias que diferían de acuerdo al escenario territorial en donde emergían. Indudablemente había algunas características que unificaban a este tipo de organizaciones, sobre todo en temas de cultura política, componente generacional y rumbos de acción. Cabría precisar, además, que la respuesta de los Estados a través de diversas acciones represivas, a objeto de combatir y dismantelar a estos grupos, también se inserta dentro del marco general de violencia política que se ha indicado para este periodo.

Por supuesto que el espacio latinoamericano irrumpiría como un factor importante dentro de este contexto, sobre todo porque esta región asomaría como un ejemplo paradigmático de la lucha armada en tanto estrategia para alcanzar el poder. La revolución cubana de 1959 fue, en este sentido, uno de los hitos característicos –aunque no exclusivo– en la expansión de este tipo de ideas y de una cultura política particular para los segmentos de izquierda de varios países occidentales. También lo fueron los Tupamaros uruguayos que a través de su accionar armado esencialmente urbano levantaron no

pocas cuotas de admiración en el viejo continente.⁷¹ Latinoamérica irrumpía así como un faro para las estrategias revolucionarias de un conjunto no menor de agrupaciones e individuos que estaban dispuestos a abrazar la lucha armada. Había una dinámica propia dentro de las relaciones y conflictos sociopolíticos que agitaban a esta zona, pues se trataba de una región en esencia distinta a Europa. Con todo, los procesos de interacción y conformación de cierta cultura política común traspasaban muchas veces las fronteras territoriales.

Conviene señalar, ahora, algunas características concretas del escenario que se vivía en el Viejo Continente. En los países ibéricos las dinámicas de violencia y conflicto se fueron materializando de distinta forma. En España se observa la aparición de grupos que, como ETA, condensaban un ideologismo que reivindicaba una autonomía étnica y territorial confrontando por la vía armada al Estado.⁷² También comenzaron a emerger de forma sostenida agrupaciones estudiantiles que a través de sendos movimientos de protesta abogaban por mayores cuotas de democratización y libertad. La dura respuesta de los aparatos de seguridad del régimen contribuyó a incrementar la confrontación política entre los actores en pugna. Como comentan Muñoz y Baby, la represión franquista unida a los ejemplos de algunas revoluciones que lograron triunfar despertó las esperanzas de abrir el camino a la lucha armada en el país ibérico.⁷³

Portugal, por su parte, afrontaba fenómenos similares a su vecino peninsular, aunque cabría agregar que los episodios de violencia no estaban circunscritos solo al espacio continental, pues en ultramar se vivían escenas y coyunturas de similar magnitud. Al rechazo que se expresaba por la falta de libertad y democracia provenientes desde sectores de la izquierda portuguesa –y que a veces se tradujo en acciones armadas como atentados explosivos y choques con la policía– se sumaba el duro cuestionamiento, tanto local como internacional, por la guerra colonial aún en desarrollo. Ana Sofía Ferreira comenta que, si bien en los años cincuenta ya se habían esbozado algunas ideas respecto al uso de la violencia, esta alcanzaría una forma más definida desde finales de los sesenta y más específicamente a partir de 1970 con la irrupción de algunos grupos como las Brigadas Revolucionarias, una facción escindida del Partido Comunista de Portugal (PCP). Esta autora puntualiza, en todo caso, que la fase de institucionalización de la democracia portuguesa a partir de 1975, unido a la crisis económica de 1977, constituye-

ron para estos grupos alicientes importantes a objeto de seguir luchando por el socialismo a través de la violencia.⁷⁴

En el resto de Europa, el panorama social y político crecía en intensidad y confrontación hacia fines de los sesenta. El punto de inflexión que significó 1968 contribuyó a dinamizar, en el corto plazo, la movilización de diversos sectores sociales que por momentos parecieron poner en jaque la estabilidad política en diferentes países. En este marco de eclosiones aceleradas, rupturas y derrotas, la opción por las armas fue cobrando nuevamente validez y alcanzando resonancia en países como Alemania o Italia.⁷⁵ Los gobiernos de estos territorios no se quedarían a la zaga de esta situación y confrontarían a dichas agrupaciones a partir de diversos repertorios represivos. Además, se observaría en algunos de estos países el accionar de grupos de extrema derecha que –a veces en connivencia con el propio Estado o con sus aparatos de seguridad– combatieron de forma paralela a los grupos armados de izquierda. Se había conformado así un cuadro donde la violencia ocupaba un lugar preponderante dentro de la esfera pública en diferentes puntos del Viejo Continente.

En Latinoamérica, la amplia gama de movilizaciones y procesos de distinta naturaleza compartieron un escenario común con el modelo revolucionario que se impulsaba desde Cuba y que hizo emerger, en unión con otros factores internos, la eclosión de numerosos movimientos armados. En la mayor parte de estos procesos asomaba con carácter propio la lucha armada como elemento vehicular para alcanzar el socialismo y dar forma a un arquetípico hombre nuevo, aunque no se debe olvidar que también se ensayarían otras formas de alcanzar el horizonte revolucionario. En Europa se advertirían procesos de recepción y reelaboración conceptual de la lucha política al calor de las limitaciones que quedaron en evidencia tras los sucesos de 1968, observándose un despliegue más amplio de grupos que optarían sin ambages por la lucha armada y el terrorismo, y que extenderían su radio de acción temporal hasta bien entrados los setenta. Pero estos fenómenos también compartieron un espacio con otras corrientes globales. Alessandro Santoni recuerda, de hecho, que en este periodo hubo una conformación más compleja de las relaciones internacionales en virtud del surgimiento de nuevos actores y dinámicas, como fueron el Tercer Mundo, la realidad de los países no alineados, el cuestionamiento al liderazgo norteamericano o el debilitamiento del poder de Moscú.⁷⁶

Aunque existen diferencias temporales y programáticas en el surgimiento y composición de los grupos que abrazaron el camino revolucionario, y también respecto a las respuestas fácticas de los Estados y otros actores para hacer frente a los mismos, parece existir un marco global común para todas estas expresiones. En el plano ideológico-estratégico es la idea de revolución la que copa gran parte de los programas y estrategias de los movimientos decididos a alcanzar el socialismo. Bajo un registro distinto, el ámbito institucional reforzará su énfasis en torno a la defensa de la democracia en tanto estructura amenazada por la emergencia de la revolución, la cual supone alterar sus cimientos y orientaciones más esenciales. Y desde una perspectiva equidistante de las dos anteriores, surgiría una corriente anticomunista que englobaría en su seno a una amplia gama de grupos y culturas políticas de muy diverso origen, pero que tienen como denominador común el plantear una crítica frontal a los intentos revolucionarios y a la democracia como sistema político.

La realización concreta de algunas de estas elaboraciones y estrategias de acción llevaría aparejado el despliegue de distintos niveles de violencia política. Y esto fue observable desde los actores que materializaron sus prácticas revolucionarias hasta los dispositivos represivos elaborados por el Estado y también respecto a aquellos grupos que confrontaron, desde el nacionalismo de extrema derecha, a los movimientos revolucionarios. En virtud de lo anterior, la violencia política fue una problemática de primer orden para numerosos actores, llegando a ocupar una posición relevante en los medios de comunicación y en los análisis de corta y mediana duración que intervinieron en el debate político nacional e internacional. Aunque la intensidad y despliegue de estos tipos de violencia fueron en muchos casos diferentes, todas ellas comparten un escenario temporal común, es decir un marco de confrontación en particular.

Será dentro de este escenario desde donde España y Portugal mirarán buena parte de la realidad latinoamericana, un espacio que albergó durante casi tres años la experiencia de la vía chilena al socialismo. En este sentido, los análisis y percepciones que construyeron las naciones ibéricas, en relación con Chile y algunos países de América del Sur, reflejarían notablemente cómo el tema de la violencia política constituía una problemática de primer orden en esta región.

Notas

- 25 Stanley G. Payne, *El régimen de Franco 1936-1975*, Madrid, Alianza, 1987, p. 245.
- 26 Julián Casanova, *República y guerra civil*. Volumen 8 de la colección dirigida por Josep Fontana y Ramón Valladares, *Historia de España*, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 261-262.
- 27 Borja de Riquer, *La dictadura de Franco*. Volumen 9 de la colección dirigida por Josep Fontana y Ramón Valladares, *Historia de España*, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 14.
- 28 *Ibíd.*, p. 13.
- 29 Javier Tusell, *Dictadura franquista y democracia, 1939-2004*. Barcelona, Crítica, 2005, p. 68.
- 30 Stanley G. Payne, *El régimen de Franco... op. cit.*, p. 380.
- 31 Javier Tusell, *Dictadura franquista... op. cit.*, p. 153.
- 32 Borja de Riquer, *La dictadura de Franco... op. cit.*, p. 609.
- 33 Eduardo González Calleja, *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea, 1865-2008*. Madrid, Alianza, 2009, pp. 257-258.
- 34 Tony Judt, *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*, Madrid, Taurus, 2006., p. 746.
- 35 Javier Tusell, *Dictadura franquista... op. cit.*, p. 218.
- 36 Marc Carrillo, "El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España (1975-1978)", *Historia Constitucional* (revista electrónica), n° 2, 2001, p. 8.
- 37 Por supuesto que no se trata de un proceso mecánico ni homogéneo. De hecho, España ya en la década del cincuenta mantenía contactos más o menos estables con diversos países y distintos tipos de regímenes, independientemente de su orientación ideológica.
- 38 Stanley G. Payne, *El régimen de Franco... op. cit.*, p. 552.
- 39 No obstante ello, cabe indicar que España apoyó en diverso orden de materias a Portugal en el marco de su guerra ultramarina. María José Tiscar sostiene la existencia de tres ámbitos de apoyo de España a Portugal en el concierto internacional. El primero de ellos consistió en una política de contención de las condenas al país luso en las organizaciones internacionales, tanto en la Asamblea General de la ONU como en su Consejo de Seguridad. El segundo ámbito fue la representación de los intereses portugueses en los países africanos que habían roto relaciones con el país atlántico, mientras que en tercer lugar se daría un apoyo de material bélico a través del Alto Estado Mayor español. Este último aspecto se llevaría a cabo mediante la venta directa de armamento y a través de operaciones de distracción del embargo internacional que pesaba sobre Portugal. Véase, María José Tiscar, "El papel de España en la política africana de Marcello Caetano", *Espacio, Tiempo y Forma*, serie V, t. 19, 2007, pp. 212-213.
- 40 Paul Preston, *Juan Carlos. El rey de un pueblo*, Barcelona, Plaza & Janés, 2003, p. 293.
- 41 Borja de Riquer, *La dictadura de Franco... op. cit.*, p. 693.
- 42 Paul Preston, *Juan Carlos... op. cit.*, p. 294.
- 43 Oficio "confidencial" n° RIE 17/3 del embajador en España al ministro de Relaciones Exteriores, Madrid, 9 de enero de 1971. Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile [en adelante AMINREL], Fondo países. Embajada de Chile en España, Vol. 54.
- 44 Para Tony Judt, la violencia escenificada en el marco de la Primera Guerra Mundial se "metamorfosó" en una serie de conflictos domésticos atizados por el nacionalismo, los prejuicios raciales, enfrentamientos de clases y guerras civiles. Tony Judt, *Postguerra... op. cit.*, p. 23. Según Antonio Reis, en los países que no contaban con la suficiente tradición democrática, los problemas derivados de la inestabilidad política y económica fueron resueltos a través de la concentración autoritaria del poder, es decir por medio de la dictadura. En esta perspectiva se insertaron países como Italia, Alemania y los de la península ibérica. Antonio do Carmo Reis, *Nova história de Portugal. Das origens, no extremo ocidente da Ibéria, á actualidade, na União Europeia*, Lisboa, Casa das Letras, 2005, p. 197.
- 45 Ismael Saz, "La «guerra de los treinta años» del siglo XX (1914-1945)", en Jordi Casassas (coord.), *La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días*. Barcelona, Ariel, 2005, p. 289.
- 46 Antonio do Carmo Reis, *Nova história de Portugal... op. cit.*, p. 201.
- 47 Algunos autores destacan que una de las claves que permiten explicar la extensión del régimen salazarista radicó, precisamente, en la capacidad de Portugal por adaptarse a las nuevas circunstancias internacionales además de su inserción en las estructuras de poder del mundo occidental. Véase, Bernardo Futscher Pereira, *Orgulhosamente Sós. A diplomacia em guerra (1962-1974)*. Lisboa, D. Quixote, 2022, p. 23.
- 48 *Ibíd.*, p. 209.
- 49 Antonio Costa Pinto, *A busca da democracia*. Volumen 5 de la colección dirigida por António Costa Pinto y Nuno Gonçalves Monteiro, *História Contemporânea*

nea de Portugal, 1808-2010, Lisboa, MAPFRE y Penguin Random House, 2015, p. 32.

50 María Cândida Proença, *Uma história concisa de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, 2016, p. 697.

51 Antonio do Carmo Reis, *Nova história de Portugal... op. cit.*, p. 211.

52 Discurso pronunciado en la Asamblea Nacional el 27 de noviembre de 1968, en Marcello Caetano, *Escritos Políticos*, Madrid, Editora Nacional, 1970, pp. 144-145.

53 Como señala Futscher Pereira, a inicios de la década del 70 la idea de que Portugal trababa una guerra ilegítima se consolidó y generalizó en distintos escenarios. En ese marco, destaca el autor, recrudescieron la hostilidad de la opinión pública internacional y la presión de las Naciones Unidas. *Orgulhosamente Sós... op. cit.*, p. 25.

54 *Soldado! Coisas importantes que deves saber!*, n° 19, s/d. Arquivo da Defesa Nacional [en adelante ADN], caja Boletín Opinião e outros, UI-94.

55 *Opinião*, n° 8, 1971, II serie. ADN, caja Boletín Opinião e outros, UI-94.

56 Telegrama n° 97 del embajador español en el Vaticano al ministro de Asuntos Exteriores, 3 de julio de 1970. Archivo General de la Administración [en adelante AGA], caja 82/21393, expediente n° 14.

57 Telegrama n° 100 del embajador español en el Vaticano al ministro de Asuntos Exteriores, 4 de julio de 1970. AGA, caja 82/21393, expediente n° 14.

58 Antonio Costa Pinto señala que en 1973 Marcello Caetano, de visita en el Reino Unido, logró escapar al filo de la hora de una

inminente declaración que votaría el parlamento de Londres que condenaba los abusos y malos tratos de las tropas portuguesas en África. Antonio Costa Pinto, *A busca da democracia... op. cit.*, p. 34.

59 Rui Ramos (coord.), *História de Portugal*, Lisboa, A esfera dos livros, 2009, p. 703.

60 Oficio "confidencial" n° RIE 178/15 del embajador en Portugal al ministro de Relaciones Exteriores, Lisboa, 2 de mayo de 1972. AMINREL, Fondo países. Embajada de Chile en Portugal.

61 María Cândida Proença, *Uma história concisa... op. cit.*, p. 709.

62 Un trabajo relevante que indaga en la coyuntura del 25 de abril de 1974 y su proyección a mediano plazo es el de José Meideiros Ferreira, *A Revolução do 25 de abril. Ensaio Histórico*. Lisboa, Shantarín, 2023.

63 Richard Vinen, 1968. *El año en que el mundo pudo cambiar*, Barcelona, Crítica, 2018.

64 Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68: La deriva terrorista en Occidente*, Madrid, Sílex, 2019, p. 11.

65 Julián Casanova, *Una violencia indómita. El siglo XX europeo*, Barcelona, Crítica, 2020, p. 210.

66 Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68... op. cit.*, p. 12.

67 Rafael Cruz, "Pensar la violencia colectiva europea en perspectiva histórica", en Javier Muñoz, J. Luis Ledesma, Javier Rodrigo (coords.), *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Madrid, Siete Mares, 2005, p. 16.

68 Sophie Baby, Olivier Compagnon, Eduardo González Calleja, *Violencia y transiciones políticas... op. cit.*, pp. XI-XVI.

69 Javier Muñoz y Sophie Baby, "El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1972)", en Javier Muñoz, J. Luis Ledesma, Javier Rodrigo (coords.), *Culturas y políticas de la violencia... op. cit.*, p. 280.

70 Alberto Martín, y Eduardo Rey Tristán, "La dimensión transnacional de la izquierda armada", *América Latina Hoy* 80 (2018), p. 10.

71 José Manuel Azcona y Matteo Re, "Las influencias exteriores: Del Che a los tupamaros", en Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68... op. cit.*, pp. 75-101.

72 Otro movimiento español representativo de este periodo fue el denominado GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). Su historia, recorrido y declinación ha sido indagada recientemente por Jonathan Rodrigues López, *Los GRAPO contra el Estado. 1968-1985*, León, Marciano Sonoro Ediciones, 2023.

73 Javier Muñoz y Sophie Baby, "El discurso de la violencia en la izquierda... op. cit.", p. 285.

74 Ana Sofía Ferreira, "Terrorismo en Portugal: Las Forças Populares 25 de abril (1980-1984)", en Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68... op. cit.*, pp. 518-523.

75 Matteo Re, "El Movimiento del 68, la izquierda, la derecha y la violencia en Italia", en Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68... op. cit.*

76 Alessandro Santoni, "El Partido Comunista Italiano, la lección de Chile y la lógica de los bloques", en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (editores), *Chile y la Guerra Fría global... op. cit.*, p. 135.

Miradas ibéricas sobre el Cono Sur

Desde finales de los años sesenta, pero con mayor intensidad a partir de 1970, los países ibéricos concentraron numerosos informes y documentos que daban cuenta de las tensiones sociales y políticas que sacudían al Cono sur. El problema de la violencia política era, en este sentido, uno de los tópicos más recurrentes en los análisis diplomáticos, situándose como un tema transversal a la hora de detallar la realidad de algunos territorios. Bolivia fue uno de los casos más significativos a este respecto. A comienzos de los años setenta, el país andino atravesaba fuertes conflictos que alcanzaban incluso al seno de las propias fuerzas armadas. Estas últimas controlaban el país desde mediados de los sesenta intentando proyectar, con desiguales resultados, algunas de las políticas implementadas bajo la Revolución Nacional iniciada en 1952. Dentro de este contexto, el tema de la guerrilla rural –que en 1967 había tenido una fuerte repercusión nacional y mundial a propósito del intento de Ernesto *Che* Guevara por decantar un movimiento de este tipo en la zona de Santa Cruz de la Sierra– volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda nacional.

En este caso se trató de las acciones llevadas a cabo entre julio y octubre de 1970 por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –integrado por bolivianos, chilenos y militantes de otras nacionalidades– en lo que parecía ser una prolongación de la frustrada incursión del *Che* en Ñancahuazú. El embajador de España en Bolivia, Sánchez-Mesas, remitió a este respecto un informe a finales de julio de 1970 donde comentaba algunas alternativas sobre este nuevo foco guerrillero. Según el diplomático, los campesinos no demostraban mayor interés en apoyar a los guerrilleros, entre otras cosas, porque estos les hablaban en un lenguaje con temas sociales que no les “interesaban”. Con todo, Sánchez-Mesas sostuvo que el contingente guerrillero del ELN

resultaba un poco más conocido que aquel de 1967, que estuvo formado básicamente por oficiales del ejército cubano y que podía describirse, según el diplomático, como un grupo de “bárbaros extranjeros.”⁷⁷

En octubre de 1970, otro evento ocurrido en tierras altiplánicas atrajo la atención de los diplomáticos acreditados en La Paz. Un movimiento militar y popular, liderado por el general Juan José Torres, asumió el poder en medio de una compleja situación social y política. Al poco tiempo, el proyecto del nuevo gobierno asumió las características de un modelo marcadamente revolucionario, inscribiéndose dentro de una tendencia izquierdista que lo hermanaba con su símil peruano e inclusive con los objetivos propuestos por Salvador Allende en Chile. La preocupación de algunos observadores, entre ellos la del embajador español Sánchez Mesas, radicaba en que Bolivia podría llegar a constituirse en “una segunda Cuba”, alterando de este modo los equilibrios geopolíticos de la región.⁷⁸

Un énfasis similar, respecto a aquellos países que impulsaban transformaciones de carácter socialista, fue descrito por el también embajador español, Fernando Olivie, desde Paraguay. En un documento de carácter reservado correspondiente al 8 de octubre de 1970, el diplomático indicaba que los últimos acontecimientos políticos vividos en Sudamérica, y en particular el ascenso de Torres al gobierno de Bolivia, eran vistos con inquietud por la administración paraguaya. El punto más conflictivo de esta preocupación radicaba en que el éxito de los proyectos revolucionarios de Chile y Bolivia podría decantar que la zona del Pacífico Sur se transformara en un enclave “marxista”.⁷⁹ En esa misma línea se ubicaba la opinión del embajador boliviano en Perú, general Joaquín Zenteno, quien señalaba que Allende y su gobierno constituían un riesgo para Bolivia al presentarse como un “santuario” para los guerrilleros comunistas que actuaban en territorio altiplánico.⁸⁰ Bajo este mismo contexto, los embajadores españoles en Costa Rica y Guatemala revelarían a través de algunos informes fechados en noviembre de 1970 la preocupación de las autoridades locales por la reanudación de relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba. Desde San José, el ministro de Asuntos Exteriores costarricense había señalado que esta situación “debilita[ba] el sistema interamericano”,⁸¹ mientras que la cancillería guatemalteca estaba barajando la posibilidad de publicar una nota oficial a través de la cual se criticaría fuertemente a Cuba.⁸²

Por otra parte, y al igual que como había ocurrido en otros países de la región, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay hizo llegar, también a mediados de 1970, una circular confidencial a todas las reparticiones diplomáticas indicando una serie de recomendaciones de seguridad. Tal documento se había confeccionado en virtud de los hechos de violencia y enfrentamiento que se vivían en dicho país, los cuales habían alcanzado incluso a representantes de otras naciones que se encontraban acreditados en este territorio. Entre las medidas que se sugerían destacaban el “solicitar los antecedentes del servicio doméstico” o evitar trámites a “altas horas de la noche”. Adicionalmente se autorizaba el porte y uso de armas de fuego por parte del personal diplomático “para su defensa personal” como una medida de carácter “especial”.⁸³ Otro documento, fechado el 10 de agosto de 1970 y rotulado como “muy confidencial y secreto”, refiere una reunión sostenida en la Nunciatura Apostólica de Montevideo a la cual asistió la mayor parte de los embajadores destinados en Uruguay. El objetivo era consensuar una declaración conjunta que se haría llegar al grupo Tupamaros en la cual se rogaba extender el plazo fijado por este movimiento a fin de que no asesinaran a dos personas secuestradas que estaban en su poder. La idea, según comenta el embajador español Juan Serrat, fue resistida sobre todo por el embajador soviético quien calificó la convocatoria del nuncio como una “intervención” en la política interna del país.⁸⁴

Al calor de estas dinámicas y pronunciamientos que emergían al iniciarse los setenta, resultarían bastantes reveladoras las informaciones provistas por el embajador de España en Brasil, Emilio Pan de Soraluce, respecto a la forma en cómo las autoridades de este país dimensionaban el problema de los grupos guerrilleros. Tal perspectiva estaba influida, ciertamente, por los recientes acontecimientos ocurridos en Uruguay a propósito del secuestro del cónsul brasileño Aloysio Días Gomide, lo que había tensionado las relaciones entre ambos países. En un informe de carácter reservado, con fecha 12 de agosto de 1970, el diplomático hispano comentó que había ido tomando forma una corriente de opinión

“[...] de la que participa también buena parte del Gobierno, que no puede por menos de reconocer que el diálogo con los terroristas a poco conduce y que es necesario un entendimiento a escala continental para reprimir la subversión, adoptando todos los países modos de proceder similares.”⁸⁵

Se trata de un documento revelador que entrega algunas de las primeras pistas respecto a la idea de una coordinación de las dictaduras militares sudamericanas a fin de combatir y exterminar a los grupos guerrilleros y militantes de izquierda en diferentes países de la región, objetivo que fue concretado formalmente a través del denominado Plan Cóndor en 1975.⁸⁶

En Argentina, en tanto, los tópicos de discusión a nivel diplomático también referían el tema de la “subversión guerrillera” como uno de los principales fenómenos del momento. En un telegrama reservado del día 24 de marzo de 1972 el embajador español en Buenos Aires, J. de Erice, comentaba que en una reunión sostenida entre el presidente Lanusse y el canciller francés, el mandatario argentino dedicó gran parte de la conversación a comentar el problema de la “subversión revolucionaria en el mundo”. Tal situación, apunta de Erice, se entendía por el contexto que vivía Argentina en esos momentos, en donde el director general de la Fiat, Oberdán Sallustro, había sido secuestrado por un comando guerrillero. En vista de estos tópicos, la visita del canciller galo se había visto “notoriamente oscurecida.”⁸⁷

Las percepciones y análisis portugueses recogieron elementos similares a los expuestos por España respecto a esta región, incluyendo también la forma en cómo algunos eventos y reformas de carácter estructural eran entendidos en otros países. A mediados de junio de 1969, el embajador portugués en La Habana, Lopes da Costa, comentó las positivas reacciones que el proceso de reforma agraria peruano había generado en la isla. Según el diplomático, los medios oficiales cubanos alababan las medidas “progresistas” adoptadas por el gobierno de Velasco Alvarado, las que fueron calificadas de “antiimperialistas”. Lopes da Costa sostenía que el apoyo cubano tenía como objetivo reanudar las relaciones diplomáticas con el país andino a fin de obtener una embajada en América del Sur que “tão útil seria para efeitos de propaganda interna e externa do regime e que não deixaria de ser classificada como «decisiva victoria» de este primeiro ministro contra o injusto «isolamento» diplomático que Cuba vem sofrendo na América Latina.”⁸⁸

Respecto a Sudamérica, los informes portugueses tomaron nota con bastante precisión de las tensiones y conflictos derivados del accionar de diversos actores y movimientos.

El caso de los tupamaros en Uruguay, por ejemplo, fue recogido con bastante periodicidad por los documentos diplomáticos lusos, en especial cuando este grupo irrumpía en la escena pública a través de algunas acciones de gran impacto mediático. El secuestro del banquero Gaetano Pellegrini a inicios de septiembre de 1969 en Montevideo fue precisamente uno de esos hechos. En su telegrama, el embajador portugués indicaba de forma preliminar que el rapto podría tener alguna vinculación con una reciente huelga bancaria ocurrida en el país. Sin embargo, el funcionario reconocía más adelante que sabía de forma muy confidencial que el plagio se había inspirado en el secuestro del embajador de Estados Unidos en Brasil, Charles Burke Elbrick, ocurrido el 4 de septiembre pasado a manos de dos pequeñas agrupaciones (Alianza Libertadora Nacional y Movimiento Revolucionario 8 de octubre).⁸⁹

Bajo este contexto, la temática sobre los secuestros y amenazas al cuerpo diplomático establecido en el Cono Sur constituyó un tema de preocupación permanente para los representantes asentados en estos países. En efecto, el embajador luso en Brasil remitiría en marzo de 1970 un completo informe sobre esta situación al ministro de Negocios Exteriores. En la parte central del documento, el funcionario señaló que el cuerpo diplomático establecido en Brasil se mostraba sereno y calmado a pesar de estar conscientes de que cualquiera de sus miembros podía ser “víctima de actos de terrorismo”. Más aún, el diplomático recordaba que luego del secuestro del embajador de Estados Unidos “deflagaram bombas nas residências dos Embaixadores da Argentina, Salvador e Checoslováquia, e que o Embaixador do Chile foi ameaçado de morte por elementos terroristas.”⁹⁰

Desde Paraguay también se recogerían algunas temáticas que las autoridades de dicho país referían sobre la actuación de los grupos armados de izquierda. Como ya se ha señalado, buena parte de estos análisis escapaba del plano local y se situaba dentro de una óptica regional. Un informe fechado el 19 de octubre de 1972, elaborado por el embajador portugués en Buenos Aires que recientemente había visitado la capital paraguaya, abordó algunos de estos tópicos. El documento daba cuenta de un decreto de seguridad aprobado por el gobierno de Stroessner con el cual se buscaba combatir la subversión existente en dicho territorio, aun cuando ella operaba

“em escala bem menor” respecto a los países vecinos. El decreto señalado extendía el estado de sitio por espacio de 90 días tanto en la capital como en tres departamentos provinciales. Según comenta el embajador portugués, las autoridades guaraníes adoptaron tal decisión en virtud de la existencia de “organizações internacionais” que tenían como propósito la “Subversão da ordem legítima e o emprego de meios violentos com o fim de destruir as bases fundamentais sobre que assenta a nossa sociedade”. Al mismo tiempo, se señalaba desde el gobierno paraguayo que la actuación clandestina, “no nosso Continente”, de diversos agentes de dichas organizaciones se hallaba “convincientemente comprobada por “factos que são de conhecimento público”. Con todo, el embajador sostenía que el carácter de dicho decreto era solo preventivo, pues el movimiento subversivo en Paraguay no podía compararse con los que se manifestaban en otros países de la zona.⁹¹

En 1973, los análisis globales respecto al tema de la violencia política por parte de los diplomáticos portugueses se volcaron de nuevo hacia Uruguay. La actuación de la guerrilla tupamara se había concretado a través de diversas acciones armadas las cuales, no obstante la respuesta de los aparatos represivos del Estado, no se habían podido aplacar. Se había conformado una crítica situación social y política que ponía en entredicho periódicamente la legitimidad de las autoridades civiles. En este marco, se produjeron a mediados de febrero fuertes desavenencias entre el presidente Bordaberry y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, situación que solo se pudo superar con la aceptación por parte del primer mandatario de una serie de exigencias que buscaban incorporar a los militares en diversas tareas de seguridad interna. En la práctica, se observaba un claro deslizamiento hacia un gobierno cívico-militar, situación que se consolidaría a partir del golpe de Estado de junio de 1973.

Estos últimos acontecimientos, según un aerograma de la embajada portuguesa en Montevideo redactado el 21 de septiembre de 1973, colocaban a Uruguay “na vanguarda de um movimento global de reacção ao marxismo no chamado Cone Sul da América”. Al mismo tiempo, el documento expresaba algunas ideas respecto a Chile, cuyo gobierno popular había sido recientemente derrocado por las fuerzas armadas de ese país. En efecto, se indicaba que el país andino había estado desde hace mucho tiempo minado por la infiltración

comunista al constituirse en receptor “dos residuos dos movimientos guerrilheiro-terroristas más ou menos derrotados e expulsos de, pelo menos, 5 países sul-americanos (Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia).”⁹²

Como se puede apreciar, las percepciones y análisis ibéricos no se detenían solo en el rol de los grupos armados de izquierda dentro de los escenarios de cada país, pues también hubo espacio para referir las alternativas del accionar uniformado en contra de aquellos movimientos. Y aunque muchos de estos documentos referían situaciones particulares, como en este caso los hechos ocurridos en Uruguay entre febrero y junio de 1973, en la práctica los énfasis derivaban de modo invariable hacia lecturas de carácter regional. Es decir, así como se enfatizó en que el problema de la subversión guerrillera repercutía a escala continental, la capacidad de neutralización de aquella por parte de las autoridades civiles y militares también tenía un componente trasnacional. Como se vio anteriormente, ya en 1970 las autoridades brasileñas compartían una “corriente de opinión” que enfatizaba en la necesidad de combatir a escala continental a los grupos armados de izquierda, con los cuales no cabía ningún tipo de diálogo. Los casos de Uruguay y Chile se insertan también dentro de esta perspectiva en tanto ejemplos de cómo la iniciativa castrense marcó, según la mirada portuguesa, un claro punto de inflexión en la lucha contrasubversiva convirtiendo sobre todo al país oriental en la vanguardia de la lucha global contra el marxismo.

El conjunto de estas percepciones y análisis daba cuenta de forma bastante nítida de cómo la realidad local de cada uno de los países del Cono sur latinoamericano revisados aquí fue leída en muchas ocasiones en clave regional. En este sentido, gran parte de las problemáticas expresadas por los funcionarios diplomáticos remitían a realidades trasnacionales que compartían elementos comunes entre los distintos países de la región. Algunos hechos de violencia como secuestros y atentados explosivos no eran representativos solo de Uruguay, sino que también podían remitir a Brasil o Bolivia porque se visualizaba una corriente transversal de movilización y agitación social que era común a todos estos territorios. Inclusive en aquellos países donde los hechos de violencia política no tenían la magnitud de otros lugares, su conexión a una realidad regional más amplia también lograba expresarse. Así, por ejemplo, el proceso político chileno abierto en 1970, que

buscaba transitar al socialismo bajo un esquema democrático, fue visto con preocupación por diversos países del entorno debido al efecto modelo que podía significar para algunos partidos y plataformas programáticas. Incluso, desde países como Bolivia y Uruguay se expresaría una honda preocupación por el hecho de que Chile se transformara en un centro receptor –y eventualmente coordinador– de guerrilleros latinoamericanos, contribuyendo de este modo en incrementar la inestabilidad política a nivel regional.

Notas

77 Informe n° 640 del embajador en Bolivia al ministro de Asuntos Exteriores, La Paz, 30 de julio de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 4.

78 Telegrama n° 107 del embajador en Bolivia al ministro de Asuntos Exteriores, La Paz, 7 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 5.

79 Informe n° 608, “reservado”, del embajador en Paraguay al ministro de Asuntos Exteriores, Asunción, 8 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 5.

80 Declaraciones del general Joaquín Zenteno reproducidas en carta del embajador español en Perú, Manuel Alabart, al ministro de Asuntos Exteriores, Lima, 5 de noviembre de 1970. AGA, Leg. R-11387, expediente n° 43.

81 Telegrama n° 133 del embajador en Costa Rica al ministro de Asuntos Exteriores, San José, 17 de noviembre de 1970. AGA, Leg. R-13439, expediente n° 19.

82 Informe n° 570, “reservado”, del embajador en Guatemala al ministro de Asuntos Exteriores. Tegucigalpa, 19 de noviembre de 1970. AGA, Leg. R-13439, expediente n° 19.

83 Circular n° 2, “reservada”, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Montevideo, 4 de junio de 1970, en AGA, Leg. R-11393, expediente n° 20.

84 Informe n° 297, “muy confidencial y reservado”, del embajador en Uruguay al ministro de Asuntos Exteriores, Montevideo, 10 de agosto de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 20.

85 Informe n° 700, “reservado”, del embajador en Brasil al ministro de Asuntos Exteriores, Río de Janeiro, 12 de agosto de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 19.

86 Dos obras básicas para indagar en los alcances y características del Plan Cóndor son las de Patrice Mc Sherry, *Los Estados depredadores: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, Santiago, Lom, 2009 y John Dinges, *Los años del Cóndor. Operaciones internacionales de asesinato en el Cono Sur*, Santiago, Debate, 2021.

87 Telegrama n° 37, “reservado”, del embajador en Argentina al ministro de Asuntos Exteriores, Buenos Aires, 24 de marzo de 1972. AGA, Leg. 12452, expediente n° 7.

88 Aerograma n° 5065, del embajador en Cuba al ministro de Negocios Estrangeiros, La Habana, 30 de junio de 1969. Archivo Diplomático Ministerio de Negocios Estrangeiros [en adelante ADMNE], Caja 326,40 a 326,90, carpeta n° 326,70.

89 Telegrama n° 6764, del embajador en Uruguay al ministro de Negocios Estrangeiros, Montevideo, 10 de septiembre de 1969. ADMNE, Caja 326,40 a 326,90, carpeta n° 326,80.

90 Informe n° 355, “confidencial”, del embajador en Brasil al ministro de Negocios Estrangeiros, Río de Janeiro, 19 de marzo de 1970. ADMNE, Caja 327, carpeta n° 327,2^a.

91 Informe n° 354, del embajador en Argentina al ministro de Negocios Estrangeiros, Buenos Aires, 19 de octubre de 1972. ADMNE, Caja 326, 50 a 326, 90, carpeta n° 326,60.

92 Aerograma n° 12527, de la embajada en Uruguay al ministro de Negocios Estrangeiros, Montevideo, 21 de septiembre de 1973. ADMNE, Caja 326,30 a 326,90, carpeta n° 326,80.

SEGUNDA PARTE

**MIRADAS
HISPANOPORTUGUESAS
SOBRE LA VÍA CHILENA
AL SOCIALISMO**

Coyuntura electoral de 1970 y primeras inquietudes

Junto al impacto mundial que causó, la experiencia de la Unidad Popular condensó en su seno un conjunto de dinámicas locales y tensiones propias del desarrollo histórico de Chile. Para el historiador Peter Winn, esta experiencia constituía el punto de llegada del gran proyecto histórico de la izquierda chilena, fraguado en el transcurso de las primeras décadas del siglo XX al calor de las luchas del movimiento obrero y de los partidos que pugnaban por disputar el poder político a la elite.⁹³ Aunque podría intuirse cierta comunión de intereses entre la izquierda política y el movimiento proletario, lo cierto es que se trató de una relación compleja, con acercamientos y acuerdos, pero también con distancias y conflictos. No se trataba, pues, de una relación homogénea ni plenamente complementaria ya que las expresiones de autonomismo del segmento trabajador chocaban con los intentos coercitivos de los partidos por conducir o controlar este movimiento.⁹⁴ Las disputas y tensiones, también alcanzaron a la propia alianza izquierdista, que luego de su asociación en los años treinta bajo la forma de un frente popular, marcharía por caminos algo separados en las décadas siguientes. Solo en la segunda mitad de los cincuenta se constituyó una plataforma unitaria más sólida, el Frente de Acción Popular, FRAP, que permitió reunir de nuevo a socialistas y comunistas bajo un mismo techo e impulsar lo que se denominaría, según comenta Joaquín Fernández Abara, como allendismo.⁹⁵ Esta alianza fue el antecedente directo de la Unidad Popular, creada en 1969 con el objetivo de afrontar las elecciones presidenciales del año siguiente. Como se puede ver, existía una larga trayectoria de la izquierda chilena, animada por el diálogo y la disputa, antes de alcanzar el gobierno en 1970.

En cuanto al programa de gobierno propuesto por la UP este partía de un diagnóstico claro respecto a las razones del atraso y estancamiento del país. A juicio de dicho documento, las limitaciones del modelo económico y el cúmulo de problemas insolubles que asolaban a Chile eran una evidencia palpable de la crisis estructural del capitalismo.⁹⁶ Frente a ello no cabían sino soluciones integrales que involucraran un cambio estructural, en este caso bajo el sello del socialismo. Este diagnóstico crítico de la realidad nacional no había sido planteado solo por la izquierda pues otras agrupaciones y colectividades hicieron diagnósticos similares⁹⁷, aunque entendidos desde sus respectivas matrices ideológicas, como fue el caso de la Democracia Cristiana a partir de su enfoque humanista-cristiano. En lo que respecta al programa de la UP, sus énfasis se articulaban en torno a tres objetivos estratégicos. El primero de ellos consistía en crear tres áreas de la economía en el país, predominando aquella de corte estatal –denominada Área de Propiedad Social– y que estaría por sobre la privada y una de carácter intermedia denominada como mixta. Un segundo objetivo apuntaba a una política integral de nacionalizaciones de las riquezas minerales y estatización de la banca privada. Por último, se planteó una profundización de la reforma agraria, inaugurada en la administración anterior, a efecto de acabar con el régimen latifundista y hacendal que existía en el país. A partir de estos ejes se derivaban otro tipo de medidas como aquellas de corte social que implicaron una movilización y protagonismo masivo de actores en la consecución de los cambios propuestos. Cabe precisar que buena parte de estas transformaciones requerirían de la aprobación de leyes y reformas por parte del Congreso Nacional, en el cual la izquierda no contaba con mayoría. Esto suponía de algún modo supeditar una parte del programa de la UP a los lineamientos que fijara el parlamento. Como se puede apreciar, se trataba de un programa ambicioso por la magnitud de sus objetivos y por la forma en que se ejecutaría, todo lo cual implicaba abrir un escenario social y político hasta entonces desconocido en Chile.

Además, los intereses económicos que un modelo de estas características trastocaría a lo largo de su implementación comenzarían a crecer de forma periódica. No solo los grandes capitalistas, afectados por la oleada de estatizaciones que tempranamente se puso en marcha, se vieron perjudicados, sino también medianos empresarios. Otro factor de conflicto tuvo que

ver con la movilización social, que ya venía al alza desde los años sesenta, y que ahora se intensificó en distintas direcciones. Esto constituyó una dinámica de tensión debido a que fue un contingente amplio de actores, incluidos aquellos situados en la oposición, los que asumieron el ritmo confrontacional que se imponía en el país, adscribiendo a determinados grupos o ideologías. El conjunto de estos elementos se escenificaba, además, en el marco de una confrontación epocal y mundial entre corrientes ideológicas excluyentes y en donde Chile se situaba en un lugar expectante.

Considerando los elementos arriba descritos, los meses de septiembre y octubre de 1970 fueron particularmente complejos para Chile en virtud de la elección presidencial. El día 4 de septiembre, las urnas arrojaron unas cifras que no calmaron la tensión política de ese momento, al mostrar una mayoría relativa de Allende (36,3%) por sobre el candidato de derecha Jorge Alessandri (34,9%). En tercer lugar se ubicó el demócratacristiano Radomiro Tomic con un 27%, constituyéndose, no obstante la derrota, en un actor relevante pues los votos de los parlamentarios de su partido serían claves para ratificar al nuevo mandatario en una decisión que debía tomar el Congreso Pleno.⁹⁸ Los medios y documentos diplomáticos españoles aportaron, en este contexto, distintas miradas sobre un proceso electoral que en pocas horas atrajo la atención mundial debido a sus implicancias políticas. La prensa siguió en detalle las alternativas que surgían desde el país sudamericano, situación que, en opinión del embajador chileno en Madrid, Sergio Sepúlveda Garcés, ponía de relieve el interés de los medios hispanos por resaltar el funcionamiento y mecanismos de una “auténtica democracia.” Esto último se entendía, señalaba el diplomático, en virtud de que las autoridades hispanas se encontraban en esos momentos abocadas al estudio de una reforma electoral en distintos ámbitos institucionales, por lo que Chile podía servir de modelo respecto a este tipo de materias.⁹⁹

En este marco, *La Vanguardia* puso el acento en la tranquilidad con que se habían efectuado los comicios, advirtiendo en todo caso que de ganar la izquierda las estructuras sociales y económicas del país podrían cambiar sustancialmente. Al mismo tiempo, este medio indicaba, con algo de sorpresa, que en comparación con los comportamientos y dinámicas verificadas en las candidaturas del centro y la derecha, la UP había demostrado disciplina,

cálculo y rigor.¹⁰⁰ En el periódico *Pueblo* se explicitaron énfasis bastante similares, al destacar, por ejemplo, las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Rojas, quien calificaba como “ejemplar” la conducta del electorado chileno.¹⁰¹ Este enfoque fue reafirmado días más tarde por el columnista José Luis Alcocer quien señalaba que a través de los más “irreprochables mecanismos del sufragio universal” el país andino había resuelto el carácter de su futura política. Al mismo tiempo, Alcocer reconocía que sería lamentable observar, en el mediano plazo, tanto a un gobierno de izquierdas realizando persecuciones como también la concreción de un “golpe de fuerza” que concluyera con su mandato.¹⁰²

Para *El Alcázar*, la elección del 4 de septiembre tenía un difícil pronóstico producto de los apoyos con que contaban las tres candidaturas. A la hora de retratar al candidato de la UP, este periódico indicó que Allende, a pesar de definirse como socialista, tenía una clara filiación “marxista-leninista” y que a través de la campaña electoral había defendido la implantación de medidas “made in Cuba” en Chile. Con todo, *El Alcázar* también señaló que el candidato de la UP había declarado que respetaría a las personas y a la propiedad privada.¹⁰³ En el periódico falangista *Arriba* se expuso una nota biográfica de Salvador Allende en la cual se destacaba que el líder socialista parecía haberse ido “radicalizando progresivamente” al robustecer su espíritu de “lucha y combatividad”.¹⁰⁴ Aunque esta mirada podía entenderse como una crítica abierta en contra de quien se transformaría en el próximo presidente del país, cabría precisar que *Arriba* mostraría un posicionamiento más bien heterogéneo para referir la experiencia chilena, no vertiendo solo juicios negativos en contra de la UP.¹⁰⁵ De hecho, en algunas coyunturas verificadas a lo largo de 1971 se destacó cómo el Gobierno socialista buscaba mantener firmemente el orden constitucional y político en el país, alejando así la posibilidad de un golpe de Estado. Ambas perspectivas, tanto la que criticaba la orientación ideológica de la vía chilena al socialismo como aquella que enfatizaba en su defensa de la institucionalidad, compartieron un espacio en este medio.

Desde el periódico del Partido Comunista de España (PCE), *Mundo Obrero*, se enfatizaron dos cuestiones esenciales respecto a la coyuntura electoral de 1970. En primer lugar, se indicaba que el triunfo parcial de Salvador

Allende impactaba de forma clara en diversas áreas y lugares del planeta, sobrepasando así los límites de sus “propias fronteras”. El segundo punto que resaltó la crónica de este medio estuvo referido a los desafíos que debería afrontar un futuro gobierno de izquierdas en Chile. En particular, señaló que las fuerzas “reaccionarias e imperialistas” estarían dispuestas a acometer todo tipo de acciones en contra del proyecto popular, operaciones que irían desde el caos económico y financiero, pasando por la fuga de capitales, hasta un golpe militar. En virtud de lo anterior, este medio hacía un ferviente llamado a diversos actores del concierto nacional e internacional a prestar toda la “solidaridad posible” con el pueblo de Chile. “Es nuestra propia lucha”, sentenciaba *Mundo Obrero*.¹⁰⁶

Desde una óptica diametralmente distinta, el semanario *Fuerza Nueva* recalcó los eventuales peligros que significaría la llegada de un candidato marxista al poder en el país sudamericano. Ya desde mediados de 1970, esta publicación –que se identificaba con los sectores más inmovilistas del franquismo– venía advirtiendo sobre un posible triunfo de lo que denominó como alianza frentepopulista.¹⁰⁷ Dicho énfasis sugería una lectura en clave transnacional, pues para *Fuerza Nueva* la alianza socialista-comunista que podía alcanzar el poder en Chile no era otra cosa que una reconstrucción local del Frente Popular español de la década del treinta. Bajo este ángulo interpretativo se buscaba que el público lector peninsular entendiera a partir de nociones que le eran familiares la realidad de un lejano país que en poco tiempo se encontraba en la primera plana de las noticias mundiales. Además, esta mirada también revelaba una clave de interpretación global de los conflictos internacionales en curso, pues para *Fuerza Nueva* el posible triunfo de la izquierda chilena sería indicativo de los propósitos del marxismo soviético –y de su base satelital, Cuba– en orden a expandir su esfera de influencia hacia distintas partes del mundo.¹⁰⁸ Desde estas premisas se caracterizó lo sucedido en el país sudamericano tras el 4 de septiembre, aunque enfatizando, adicionalmente, la responsabilidad de la administración democratacristiana por pavimentar el camino al comunismo. De hecho, respecto a este tipo de gobiernos, *Fuerza Nueva* expresaba que ellos “[...] no sirven más que para que los comunistas ganen votos en cada elección.”¹⁰⁹

Por su parte, *Cuadernos para el Diálogo*, una de las publicaciones símbolo de los sectores culturales y políticos antifranquistas, también reservó un espacio para abordar la coyuntura electoral chilena.¹¹⁰ En su editorial del mes de octubre de 1970, esta publicación sostuvo que los recientes comicios daban cuenta de la madurez política del pueblo chileno, pues saltaban a la vista la moderación y el juego limpio entre las distintas candidaturas, además de la prescindencia gubernamental. Aunque quedaba claro que la coalición de izquierdas tenía la primera opción de triunfo en la votación del Congreso Pleno, esta revista recalca que el PDC continuaría siendo el árbitro de la situación, tanto en la actual coyuntura como también a futuro.¹¹¹ En esta misma edición, el columnista Eugenio Viejo planteaba dos escenarios posibles que podrían abrirse en Chile a partir de los resultados electorales. El primero de ellos seguía el énfasis declarado por la propia UP en el sentido de que dicho proyecto se transformaría, en efecto, en el primer gobierno marxista que llegaba al poder por medios legales dentro del marco de la democracia burguesa. El segundo escenario planteaba la posibilidad de un golpe de fuerza que cerrara “violenta y definitivamente” la vía electoral.¹¹²

Pocos días después de ocurrida la elección, el periódico *El Alcázar* resaltó dos puntos esenciales. En el primero, redactado de forma especial para este medio por el periodista de EFE Rafael Alonso, se mostraba la preocupación que existía en Estados Unidos frente a la posible llegada de Allende al poder. El columnista señalaba, en efecto, que los resultados electorales habían significado una “nueva espina” en la garganta de los norteamericanos, situación que ponía en jaque el predominio económico, político y “hasta cultural” de la nación anglosajona en la región latinoamericana. El segundo punto se conectaba directamente a esta nueva dimensión de las relaciones interamericanas, pues, según Alonso, España tenía ahora la oportunidad de “volver” a sus antiguos pueblos como una “reserva de riqueza cultural e intelectual”.¹¹³ Es decir, ante el distanciamiento de los norteamericanos frente a los procesos de transformación social y política que se verificaban en Latinoamérica, la nación ibérica podía ocupar un lugar de acompañamiento que se materializaría a través de un incremento de los intercambios comerciales y culturales. Evidentemente, esta nueva perspectiva del rol de España no se dimensionaba bajo un criterio tutelar ni asimétrico con sus antiguas colo-

nias, sino que desde una perspectiva más tolerante y abierta con los distintos países y experiencias sociopolíticas que existían en esta región.

Desde los informes diplomáticos hispanos, en tanto, también se dio cuenta de la importancia de los comicios presidenciales chilenos. Una de las primeras referencias a este respecto corresponde al telegrama enviado por el Embajador español, Miguel Sainz de Llanos, al ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo. En el documento, fechado el 5 de septiembre de 1970, el representante peninsular comentaba que el proceso electoral no estaba del todo cerrado, pues el Tribunal Calificador de Elecciones debía proclamar el resultado definitivo. En ese marco, Sainz de Llanos llamaba la atención sobre el hecho de que la autoridad militar hubiera autorizado una manifestación de izquierda, donde el senador Allende, “hablando ya como presidente de la República”, señaló que haría cumplir sin claudicaciones el programa de su partido. Un programa “claramente marxista y revolucionario”, acotaba el embajador.¹¹⁴ En un telegrama posterior, del 8 de septiembre, el diplomático español hacía notar que el triunfo de Salvador Allende había despertado “gran inquietud” en el país, observándose como consecuencia directa de ello una gran afluencia de españoles y chilenos a las oficinas de la representación diplomática manifestando su deseo de abandonar el país.¹¹⁵

Pocos días después, el 11 de septiembre de 1970, Sainz de Llanos envió un sugerente informe reservado al ministro López Bravo en que daba cuenta de una conversación que había mantenido con el General Valenzuela respecto a diversos puntos del acontecer nacional. El embajador español relataba, en primer término, que dicho oficial había trasladado a toda su familia hacia Argentina en un avión militar de la Fuerza Aérea, situación que a juicio del diplomático suponía un nivel de entendimiento entre determinados elementos de las fuerzas aéreas de ambos países. Al mismo tiempo, este hecho graficaba, según Sainz de Llanos, que Chile había llegado a una situación “grave” tras los comicios del día 4. En la segunda parte de su informe, el representante hispano indicaba que el mismo oficial le aseguró de modo terminante que las Fuerzas Armadas y de Orden Público estaban de acuerdo “y totalmente decididas” a mantener la legalidad, “ya sean 100 o 500 las víctimas” que pudieran producirse si aquella era transgredida.¹¹⁶ Aunque esta declaración admite varias lecturas, es posible suponer que lo señalado por Valenzuela apuntaba

a que serían las fuerzas de izquierda, en virtud del programa de transformaciones estructurales que propugnaban, el actor que representaba la principal amenaza para la mantención de la legalidad.

Casi una semana más tarde, las informaciones enviadas por Sainz de Llanos reafirmarían el tenso clima que se apoderó del país tras conocerse los resultados electorales. Ello obedecía, se recordará, a una multiplicidad de elementos que comenzaron a sobrevolar dentro del espacio social y político del país sudamericano. La posibilidad cierta de que una alianza socialista-comunista, portadora de un programa de transformación revolucionaria, alcanzara el poder gatilló distintas respuestas y la elaboración de toda clase de teorías y estrategias. Pronto se hizo pública la idea de que, en la votación del Congreso Pleno, a realizarse a finales de octubre, la mayoría de los parlamentarios podrían eventualmente elegir a Jorge Alessandri –segunda mayoría relativa– por sobre Salvador Allende. Dicha estrategia, como era de suponer, elevó el calor del debate político en pocas horas. El embajador español comentaría a este respecto que en caso de que el Congreso escogiera a Alessandri se generaría con seguridad un “levantamiento masivo de los extremistas con el consiguiente derramamiento de sangre”.¹¹⁷ Tal énfasis daba por sentado que en el seno de la UP existían contingentes armados pre-dispuestos a defender por las armas la victoria parcial del 4 de septiembre, situación que acarrearía, según la óptica del diplomático, terribles consecuencias materiales y humanas para el país.

Sin embargo, a diferencia de lo que aventuraba a mediados de septiembre el embajador Sainz de Llanos, respecto a una acción de fuerza por parte de la izquierda que significara un derramamiento de sangre, la violencia no provino en realidad desde este sector. Fue un grupo de la derecha nacionalista, además de algunos elementos vinculados a la oficialidad militar, quienes planearon y ejecutaron un conjunto de acciones de violencia entre finales de septiembre y octubre de 1970. Dichos actos tenían como objetivo crear un escenario de desestabilización y desorden que permitiera cerrar el paso a la candidatura de Allende a la presidencia. Tras los resultados del 4 de septiembre, que señalaron una posición expectante del candidato de la UP de cara a la votación del Congreso Pleno, se sucedieron numerosos atentados explosivos en diversos puntos del país. También surgieron campañas comunica-

cionales tendientes a crear un clima de temor dentro de la población ante la inminente llegada del “comunismo” al poder. Se llegaron a editar, inclusive, periódicos de muy corta duración cuyo único propósito fue contribuir en la creación de un estado de ánimo contrario al candidato de la UP a efecto de favorecer la opción de Jorge Alessandri. Este fue el caso del periódico *Pueblo Libre* en cuya producción participó el periodista Manuel Fuentes, futuro dirigente de Patria y Libertad, junto a otras personas.¹¹⁸

Con todo, el hecho de violencia que causó mayor conmoción en el país fue el asesinato del comandante en jefe del Ejército, General René Schneider, el día 22 de octubre, a menos de 48 horas de la trascendental votación que realizaría el Congreso Pleno. El objetivo original de esta operación era secuestrar al alto oficial para así gatillar una intervención de las Fuerzas Armadas que alejara la posibilidad de que la UP llegara al poder. La operación, sin embargo, fracasó y Schneider fue baleado mortalmente al interior de su vehículo.¹¹⁹ Los medios de comunicación españoles cubrieron desde distintos ángulos esta noticia. Para *ABC*, basándose en información de la Agencia EFE, detrás del homicidio del alto oficial no estarían agrupaciones “tradicionales” del país, por lo que cabía buscar entre movimientos “ultras”, “y no debe olvidarse que entre los ultras –sentenciaba este medio– se encuentran los «maoístas»”.¹²⁰ En su edición del 24 de octubre, en tanto, el corresponsal de *ABC* en Santiago de Chile¹²¹ señalaba que el crimen de Schneider había generado un rechazo unánime en todos los sectores políticos del país. Asimismo, indicaba que más allá de las especulaciones de la izquierda y del PDC sobre los responsables del homicidio, el hombre de la calle se preguntaba si este atentado correspondía a una larga serie de acciones terroristas, o bien, se insertaba dentro de un plan sedicioso de mayor alcance “cuyas proyecciones se desconocen”.¹²²

Desde las páginas de *El Alcázar*, se indicó que este “dramático suceso” no tenía antecedentes en el país desde al menos 1843, cuando fue asesinado el ministro y vicepresidente de la República Diego Portales. Respecto a los autores del crimen, este medio señaló que en él habría participado un “presunto comando de ultraderecha”.¹²³ En ediciones posteriores, *El Alcázar* entregaría más antecedentes sobre este punto, detallando, por ejemplo, la detención ocurrida en Madrid de dos implicados en el caso (Julio Izquierdo Menéndez y Eduardo Ureta Castro).¹²⁴ Desde la óptica de *Pueblo*, también se

enfaticó en el carácter político del homicidio y al igual que como lo hiciera *El Alcázar*, aquel medio puso sobre la mesa el caso del ministro Diego Portales a fin de graficar cómo este tipo de prácticas constituían hechos más bien aislados en la historia de Chile.¹²⁵ El diario falangista *Arriba* enfocó su cobertura del crimen destacando que las autoridades chilenas, junto con condenar el suceso, deseaban asegurar la continuidad del proceso electoral. Para este medio, el hecho respondía nítidamente a lo que calificó como “complot terrorista”, aunque no precisó la adscripción ideológica de los victimarios.¹²⁶ Luego de la votación del Congreso Pleno que ratificó a Salvador Allende como primer mandatario, *Arriba* destacó, el 25 de octubre, el importante papel que había jugado el Ejército en esos días, el cual, según este medio, apoyaba “sin reservas” el proceso electoral.¹²⁷

Por su parte, *La Vanguardia* enfatizó dos tópicos principales en relación al crimen de Schneider. El primero de ellos apuntó a resaltar las reacciones de condena que siguieron al atentado, destacando a este respecto las declaraciones de Salvador Allende quien manifestaba que el homicidio del General formaba parte de un plan sedicioso que tenía “profundas raíces”.¹²⁸ El segundo tópico se refería a la motivación política del crimen, pues según este medio, los elementos de extrema derecha que estarían detrás de aquél tenían como propósito “alterar” el proceso constitucional y electoral que llevaría a Allende a la presidencia. Todo esto chocaba fuertemente con las propias convicciones de Schneider, indica *La Vanguardia*, en el sentido de que el alto oficial creía que las Fuerzas Armadas debían abstenerse de intervenir en la vida política del país.¹²⁹

Para el semanario *Triunfo*, la muerte de Schneider se insertaba dentro de un marco más amplio vinculado a las directrices que comenzaban hacerse presentes en el Cono Sur. Según se comentaba en su edición del 31 de octubre, tanto la muerte del alto oficial chileno como así también otros hechos ocurridos en la región estaban dando cuenta de una situación que se inclinaba “velozmente”, producto de sus resultados, en contra de los intereses oligárquicos y capitalistas. En el caso del crimen de Schneider, *Triunfo* advertía que su concreción produjo el efecto contrario al deseado, alertando a los sectores obreros, movilizandolos una amplia adhesión en torno al presidente electo y dejando aislado al sector que había panificado dicha operación.¹³⁰

Mundo Obrero también referiría algunas líneas sobre la tensa coyuntura política que vivía el país sudamericano. En su edición del 30 de octubre de 1970, este medio publicó una entrevista a un dirigente del Comité Central del PCE quien recientemente había estado de visita en Chile. Junto con señalar que la UP era una manifestación genuina de una alianza de fuerzas “antiimperialistas y antioligárquicas”, el dirigente español se refirió al crimen del General Schneider. A su juicio, dicho suceso tenía como propósito alterar la proclamación de Salvador Allende como presidente electo, objetivo que sin embargo fue detenido por la actitud “profesional e institucionalista” del Ejército chileno. En esta institución, finalizaba el entrevistado, existían “efectivas” corrientes democráticas de respeto a la voluntad popular.¹³¹

Visto en su conjunto, la prensa hispana condenaría de forma unánime el homicidio en contra del General Schneider, ya fuese porque lo consideraban un evento ajeno a las tradiciones históricas chilenas como también porque aquél buscaba torcer el camino institucional que había indicado la ciudadanía el 4 de septiembre. El embajador chileno en Madrid, Sergio Sepúlveda, destacaría precisamente estos énfasis de los medios españoles respecto al “abominable crimen” en contra del comandante en jefe.¹³²

Por su parte, los informes diplomáticos emanados desde la representación española en relación a este suceso, y al marco general de tensión en que se encontraba Chile, aportaron numerosos elementos. A inicios de octubre, el embajador Sainz de Llanos señalaba que la violencia había brotado en las calles de Santiago a raíz de los enfrentamientos entre grupos políticos rivales en el marco de una marcha organizada por el Movimiento Cívico Patria y Libertad.¹³³ Aunque se trataba de un hecho que llamaba la atención del representante español, éste reconocía que la UP, siguiendo una táctica “cautelosa”, había logrado mantener la disciplina de sus bases militantes a efecto de evitar cualquier acusación de anarquía o transgresión del orden público.¹³⁴ Días más tarde, este mismo funcionario envió otro informe al ministro de Asuntos Exteriores a través del cual detallaba numerosos actos de terrorismo que habían impactado a la opinión pública chilena en las últimas horas. Entre ellos se contaba un atentado explosivo en el Aeropuerto de Pudahuel y otro de similares características en contra del Canal 9 de la Universidad de Chile. A juicio del embajador era factible pensar que “efectivamente” este tipo de hechos podía

proceder de grupos de derecha, aunque no era descartable una intervención de la izquierda a efecto de culpabilizar a los “sectores reaccionarios”.¹³⁵

Otro punto de tensión que existía en Chile en estas semanas estaba articulado torno a la posición que asumiría el eventual gobierno de Allende ante los mandos militares. En este contexto, el embajador español transmitió las declaraciones que había hecho el militante comunista de la UP, Sergio Vuskovic, en orden a que no habría cambios drásticos en los altos mandos de las Fuerzas Armadas: “no se producirá ninguna degollina”, afirmaba el dirigente. A juicio de Sainz de Llanos, este tipo de declaraciones tenderían a impedir la formación de “milicias populares”, iniciativa esta última que de materializarse constituiría un factor de temor dentro del mundo uniformado y de los sectores conservadores en general.¹³⁶

Pero las tensiones que sobrevolaban el espacio público chileno en estas semanas no fueron advertidas solo por el representante español en Santiago de Chile. También se ha constatado la existencia de diversos informes que daban cuenta de este clima y que provenían desde otras embajadas de la región. Así, por ejemplo, el embajador de España en Paraguay, Fernando Olivie, informaría detenidamente respecto a la visión del embajador chileno en Asunción, Juan Bancalari, sobre la coyuntura política que atravesaba su país. Según Olivie, en una conversación que mantuvo con el representante chileno (que además era general en retiro del Ejército) éste le manifestó que si Allende era apartado del poder “las fuerzas marxistas provocarán una verdadera guerra civil”. Por el contrario, si Allende era elegido la situación social y política, opinaba Bancalari, se deterioraría de tal forma que las Fuerzas Armadas se verían “impulsadas a derribarle.”¹³⁷ Tales comentarios resultan relevantes porque explicitaban un conjunto de ideas que ya se habían puesto en circulación por parte de diversos actores en torno al impacto y consecuencias de la llegada, o no, de Salvador Allende a la Presidencia de la República. Incluso, se puede advertir que ciertos énfasis, como aquel que hablaba de una eventual guerra civil en Chile y que en estricto rigor emergerían con fuerza en la nación andina a partir de 1973, ya estaban presentes dentro de la óptica de algunos actores en 1970.

Semanas más tarde, el mismo Olivie reportaría que en una conversación sostenida con algunos “capitalistas chilenos”, estos le confirmaron que ha-

bían logrado sacar dinero del país y establecerse por un tiempo en Paraguay ante la incertidumbre generada tras el 4 de septiembre. Respecto a la visión de estos empresarios sobre la coyuntura política, el embajador español sostenía que entre ellos predominaba la idea de que el Ejército sería un actor más bien pasivo, donde no había oficiales de izquierda pero que tampoco se sublevaría. A decir verdad, esta imagen no calzaba con lo que había sucedido hacía menos de un año atrás en Chile (la sublevación del Regimiento Tacna) ni tampoco con los trascendidos que hablaban efectivamente de cierta inquietud de parte de la oficialidad militar por la inminente llegada de Allende a la presidencia. Según Oliví, los “capitalistas chilenos” habían enfatizado en cuestiones más bien presupuestarias y socioculturales respecto al mundo uniformado, señalando que era un grupo mal pagado, sin peso en la vida del país y socialmente marginados.¹³⁸

Un enfoque distinto respecto al tema castrense, y que se conectaba mejor a la corriente de opinión predominante en esas semanas, la aportó el diplomático español Gabriel Fernández de Valderrama. En una carta que le dirigió al embajador en Santiago de Chile, Miguel Sainz de Llanos, y fechada el 26 de octubre de 1970, aquél le relataba sobre una conversación que sostuvieron el presidente del Consejo de Ministros del Perú, General Ernesto Montagne, y el ministro de Asuntos Exteriores de España Gregorio López Bravo. Según la misiva, el secretario de Estado peruano le comentó a López Bravo que un general retirado –chileno– le había advertido que las Fuerzas Armadas estaban a la expectativa para intervenir “[...] si el país deriva[ba] abiertamente hacia el marxismo.”¹³⁹ Algunos meses después llegaría desde Cuba una información que se conectaba con este mismo énfasis. En un informe de carácter “muy reservado”, el encargado de negocios de España en la isla, Juan Torroba, comentaba las conversaciones que había sostenido con algunos marinos chilenos que habían visitado ese país a bordo del Buque Escuela Esmeralda. Según el funcionario hispano, los uniformados con los que pudo conversar le expresaron sin disimulo el “desfavorable efecto” que les había producido La Habana, señalándole además que “en ningún caso” las Fuerzas Armadas chilenas “consentirían” que su país llegase a una situación similar.¹⁴⁰

Volviendo a territorio chileno y con relación al crimen de Schneider, los documentos diplomáticos españoles mostraron diversos enfoques. El emba-

jador Sainz de Llanos, en un informe fechado el día 30 de octubre, se refirió a las declaraciones que había hecho el candidato de la UP, Salvador Allende, quien condenó categóricamente el homicidio del alto oficial. A su juicio, no había nada nuevo ni “digno de destacar” en las palabras del dirigente socialista. Más bien, los temas de interés que preocupaban a Sainz de Llanos, y que se vieron reflejados en los subrayados que hizo a la prensa periódica chilena que adjuntó en su informe, se refirieron al eventual carácter comunista del futuro Gobierno, la política económica y las relaciones internacionales.¹⁴¹ Por su parte el embajador en Asunción, Fernando Olivie, comentaría en una misiva enviada al ministro López Bravo acerca de una conversación que sostuvo con el ex representante guaraní en Santiago de Chile, Dr. Alberto Nogués. Según Olivie, éste le refirió palabras muy sentidas sobre el extinto militar, destacando el prestigio con que contaba al interior de las Fuerzas Armadas y su conducta respetuosa de la Constitución. Asimismo, Nogués le confirmaría al embajador español que Schneider había sido asesinado por elementos de extrema derecha en virtud de que el oficial se negó terminantemente a bloquear la subida de Allende a la presidencia.¹⁴²

Las tensiones y dificultades del proceso postelectoral chileno fueron referidas, como se ve, en distintos puntos del Cono Sur. Ello revelaba que la situación social y política de este país había cobrado una relevancia de primer orden para distintos actores, situándose como un problema que traspasaba las fronteras domésticas. En este contexto, había dos elementos centrales que le otorgaban ese carácter trascendente a la política chilena de esas semanas. El primero de ellos se refería a la posibilidad cada vez más cercana de que una coalición de izquierdas, portadora de un proyecto de transición al socialismo, alcanzara el poder por una vía democrática e institucional. El precedente que ello podía sentar en una región acostumbrada a un lenguaje revolucionario más inclinado hacia la lucha armada era evidente, dado que podía instalarse una suerte de “modelo chileno” que fuese copiado en otros puntos del continente. Tal situación, en fin, traspasaría las fronteras latinoamericanas hasta ubicarse como un objeto novedoso y preocupante al mismo tiempo para otros países del orbe, en particular para Estados Unidos. El segundo elemento que otorgaba ese carácter trascendente a la política chilena estaba articulado en torno a las posibilidades de éxito y proyección de

esta experiencia. Advirtiendo que se trataba de un elemento central del debate, la mayoría de los medios de comunicación hispanos, además de los diversos informes diplomáticos revisados, reseñaron precisamente este tópico.

Tras los obstáculos que la alianza de izquierda logró sortear en este periodo, y que incluyeron entre otros sucesos el crimen del General Schneider y la votación final del Congreso Pleno, su acceso al poder se concretó a inicios del mes de noviembre. A partir de entonces lo que comenzaría a discutirse, desde distintos ángulos, fueron las posibilidades de sobrevivencia de un gobierno que, a pesar de no contar con una sólida mayoría electoral, planteaba un conjunto de transformaciones estructurales bajo el sello del socialismo. En ese contexto, cualquier traba o problemática que surgiera en el camino de la UP sería examinado con atención por un número importante de actores.

Esto último quedaría reflejado, por ejemplo, cuando a poco menos de un mes de iniciado el gobierno de Allende, la prensa escrita española se referiría en detalle a la muerte del militante del MIR, Arnoldo Ríos Maldonado ocurrida en la ciudad de Concepción. Dicho caso, sentó un temprano signo de interrogación respecto a las tensiones existentes dentro de la izquierda chilena, pues en el crimen de Ríos estuvieron involucrados militantes del Partido Comunista.¹⁴³ Para *ABC*, el ataque armado daba cuenta de un hecho absolutamente “inusitado” dentro de la convivencia académica chilena, al tiempo que refería que diversos dirigentes de las colectividades involucradas en el hecho viajaban raudos a Concepción a objeto de mediar en el conflicto y buscar una solución.¹⁴⁴ *La Vanguardia* comentó, en tanto, que el enfrentamiento se produjo por la disputa de una pared, ubicada al interior de un recinto universitario, lugar en que se colocaría propaganda electoral concerniente a unas elecciones estudiantiles.¹⁴⁵

El embajador español, por su parte, sostuvo que el crimen de Arnoldo Ríos puso de manifiesto que los conflictos estudiantiles tenían una inmediata repercusión política a nivel nacional. En este sentido, Sainz de Llanos comentó, en un informe del día 10 de diciembre, que el propio presidente Allende debió intervenir en este hecho a fin de lograr armonizar la tensión existente entre el MIR y el PC.¹⁴⁶ En un segundo documento, con fecha 16 de diciembre, el representante español destacaba como positivas las palabras

del primer mandatario en orden a que en Chile “no hay ni habrá milicias populares”, pues ellas reflejaban la voluntad del presidente por mantener el más estricto espíritu democrático en el país. Sin embargo, Sainz de Llanos advertía que se juzgaba con reservas la eficacia de las medidas que el Ejecutivo pondría en práctica para extirpar el terrorismo político, dado que las órdenes impartidas a las fuerzas de orden público eran “excesivamente benévolas.”¹⁴⁷

Vistos estos elementos, la mirada de los actores españoles tomaba nota desde muy temprano respecto a que el problema de la violencia política estaría orbitando de forma permanente en torno a la experiencia de la UP. Y esto se reflejaría no solo en aquellos hechos que generaran un alto impacto público, como había sido en el caso del homicidio del General Schneider, sino también con estos sucesos más acotados y originados en espacios locales. En el marco de los procesos de transformación estructural que prometía la UP, este tipo de sucesos también podían mellar los propósitos de transición pacífica al socialismo que habían sido declarados enfáticamente por el presidente Salvador Allende y una parte no menor de la dirigencia oficialista.

Ahora bien, desde qué ángulo miró Portugal este complejo periodo que se abrió en Chile tras las elecciones del 4 de septiembre. A diferencia de su vecino español, Lisboa, a través de sus representantes diplomáticos y la mayor parte de los medios de comunicación, analizó de forma resueltamente crítica la experiencia socialista chilena. Los análisis que provinieron desde estos actores se caracterizaron, en efecto, por visualizar en el gobierno de Allende un caso inequívoco de expansión del comunismo internacional. Desde tal premisa, las referencias, sobre todo a nivel diplomático, darían cuenta de las contradicciones, errores y limitaciones de la UP, enfatizando de forma recurrente las acciones que suponían poner en evidencia el carácter totalitario y marxista de esta administración. Mirado en perspectiva, los análisis portugueses sobre el gobierno de la UP respondían a un esquema interpretativo más bien ortodoxo de la Guerra Fría, donde cualquier experiencia o actor que trasuntara un acento cercano a la izquierda, o incluso a posiciones de avanzada, sería calificado como colaborador o agente del marxismo internacional. Como se recordará, el embajador luso en Santiago de Chile, Armando de Castro e Abreu, había escrito, a finales de los cincuenta, una

serie de informes diplomáticos en que advertía de los peligros de la amenaza soviética para el mundo libre.¹⁴⁸ En el caso de la UP, este marco de análisis global se complementaría con una serie de perspectivas más específicas, aunque no menos importantes, respecto a la orientación y trayectoria de una experiencia que a juicio del embajador transitaba hacia la instauración de una tiranía comunista. En este contexto, algunas de las conversaciones que el embajador portugués sostuvo con numerosos actores de la escena política chilena y del mundo diplomático en general resultarían reveladoras para conocer los juicios críticos de estos personajes sobre el gobierno de Allende.

Incluso antes de las elecciones del 4 de septiembre, los documentos elaborados por de Castro e Abreu ya revelaban cuestiones igualmente importantes. En un telegrama secreto fechado el 22 de mayo de 1970, el representante portugués comentaba que el embajador norteamericano Edward Korry había confidenciado a su par brasileño, Antonio Câmara Canto, que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, había solicitado apoyo del gobierno norteamericano “ao candidato presidencial de Democracia Cristã Radomiro Tomic.” La respuesta de Korry, según de Castro e Abreu, fue que su Gobierno quería mantener una “rigorosa neutralidade” respecto a la política interna chilena.¹⁴⁹ La actitud del embajador Norteamericano es confirmada, en este caso particular, por Peter Kornbluh, quien en una nota de prensa publicada en 2007 señala que Korry, a través de diversos documentos ahora desclasificados, instó a las autoridades de la Casa Blanca a mantener una efectiva “neutralidad electoral”.¹⁵⁰ Este planteamiento, por cierto, fue desoído en Washington desde donde se transfirieron cuantiosos recursos para financiar una campaña negra en contra de la candidatura de Salvador Allende y, aún más, para ayudar de modo indirecto, a través de Anaconda e ITT, a Jorge Alessandri.

La primera reacción del embajador portugués tras los resultados de la elección presidencial del 4 de septiembre se conoce a través de un telegrama enviado al día siguiente de celebrados los comicios. En dicho documento de Castro e Abreu señala que Chile avanzaba derechamente a la instauración de un régimen comunista lo que constituiría una grave pérdida “para mundo occidental e perigo para toda América Latina”.¹⁵¹ Desde esta óptica, el proceso político que se abría en Chile despertaba una preocupación a escala

continental dado que la casi segura llegada de Allende al poder significaría realinear las dinámicas de poder e influencia ideológica en esta zona. De hecho, el embajador portugués en Montevideo manifestó por esos mismos días que el triunfo de Allende resultaba “muito mais produtivo” que los actos terroristas de los Tupamaros.¹⁵²

La prensa peninsular, por su parte, enfatizaría detalladamente las características ideológicas de Salvador Allende y de la coalición política con la que se había presentado a las elecciones presidenciales. *Diário de Lisboa*, por ejemplo, sostuvo que “O marxista Allende venceu a primeira volta”¹⁵³, destacando, tanto en esta como en ediciones posteriores, que la alianza de izquierdas no tenía mayoría suficiente para acceder de inmediato a la presidencia.¹⁵⁴ *Diário de Noticias*, en tanto, detalló otras características del candidato de la UP: “É’ateu, e costuma afirmar com orgulho que pertence á Maçonaria há 33 anos”, sostenía este medio. Al final de la nota, *Diário de Noticias* sostenía, en un claro intento por vincular a la izquierda chilena con el comunismo internacional, que los resultados electorales habían causado “regozijo em Moscovo”, donde las cifras preliminares fueron acogidas con “satisfação não dissimulada”.¹⁵⁵

Desde *O Século* –que caracterizaba a Allende como un firme admirador de Fidel Castro– se remarcaba la idea de que, según diversos observadores, Chile enfrentaría un futuro político tenso e incierto “após a vitoria do candidato marxista”. Al mismo tiempo, este medio indicaba que una parte sustancial de las preocupaciones de las principales fuerzas políticas chilenas sería respecto a la reacción que se produciría en lugares como Washington, Moscú o La Habana “e das potências militares da América Latina”.¹⁵⁶ A partir de esta perspectiva, la victoria parcial de Allende constituía sin duda un factor relevante dentro del concierto mundial y regional, que podía en el corto plazo tensionar o distender las relaciones entre distintos actores. *Diário Popular* enfatizó, por su parte, que uno de los principales tópicos de la campaña electoral estaba articulado en torno a la cuarta tentativa de Salvador Allende por “transformar o Chile num Estado marxista”.¹⁵⁷ *Jornal de Noticias* apuntaría hacia los mismos temas que se venían desarrollando en el resto de las publicaciones, destacando en este sentido la adscripción ideológica del candidato de la UP y la satisfacción producida en Moscú ante

los resultados.¹⁵⁸ Una lectura distinta sobre el significado de las elecciones chilenas hizo el periódico del PC portugués *Avante!*, el cual destacó la unidad de acción de los partidos comunista y socialista como una de las claves de la victoria de Allende.¹⁵⁹ A diferencia del resto de publicaciones que tenía una circulación de alcance nacional o regional, *Avante!* estaba circunscrito a espacios muy restringidos de la opinión pública –la de los propios militantes comunistas– por lo que su capacidad de incidir dentro del debate político no era especialmente significativo. Quizás la revista cultural y política *Seara Nova*, que agrupaba desde hacía años a la oposición democrática portuguesa, tuvo mayor impacto dentro de algunos círculos intelectuales. En su edición de octubre de 1970, Ennio Polito comentaba que las elecciones chilenas habían significado una fuerte derrota para el reformismo democratristiano que no pudo sacudirse, a través de su candidato Radomiro Tomić, de la ambigüedad que significaba respaldar al Gobierno de Frei Montalva y promover al mismo tiempo transformaciones revolucionarias. Polito finalizaba su columna señalando que la mayoría de los chilenos habían escogido el socialismo y se encontraban a la espera de que el parlamento ratificara ese pronunciamiento.¹⁶⁰

No obstante estos análisis, en la prensa portuguesa primó en su mayoría una mirada crecientemente crítica y escéptica respecto al advenimiento de lo que se calificó como un gobierno marxista en Chile. Tal situación decantaba, a juicio de estos medios, en un escenario de inestabilidad e incertidumbre para distintas esferas del acontecer nacional y regional. En este contexto, algunos medios, como *O Século*, darían amplia publicidad a las reacciones producidas tras confirmarse la victoria parcial de Allende. En su edición del 8 de septiembre, por ejemplo, este medio daría cuenta de que miles de chilenos habían corrido a los bancos a sacar sus ahorros mientras que la Bolsa de Comercio había paralizado sus operaciones. Aunque se aclaraba más adelante que la situación se normalizó, la nota indicaba que la alteración de las transacciones bancarias pudo deberse a que Allende había manifestado su intención de nacionalizar los bancos y algunas de las principales industrias del país.¹⁶¹

Este cuadro de tensión que se observaba en el país sudamericano también fue explicitado, desde su particular punto de vista, por el embajador portugués. En un informe fechado el día 28 de septiembre, de Castro e Abreu

manifestaba que a medida que pasaban los días “cresce a tensão e a inquietação neste país”. Tal situación se explicaba, según el diplomático, porque buena parte de la sociedad no se conformaba con la idea de que los chilenos “deverão submeter-se à tiranía marxista de um terço apenas que votou pelo Senhor Salvador Allende.”¹⁶² Dos días más tarde, el mismo embajador emitiría otro informe en el que se daba cuenta de una particular solicitud que había llegado a sus manos de parte de Ana Helfant, crítica de arte rumana pero naturalizada chilena y militante del PDC. Según de Castro e Abreu, la mujer, quien vivía con su madre en Santiago, estaba muy preocupada por la situación política del país, que podía derivar en el corto tiempo hacia la implantación de un régimen comunista. Ante ello, Helfant pedía algún tipo de protección de la embajada portuguesa, solicitando expresamente que la representación peninsular aceptara “em arrendamento simulado, e por tanto gratuito” un departamento de su propiedad. En dicha vivienda, afirmaba Helfant, se encontraban “verdadeiras joias de arte” por lo que, si se concretaba el contrato de alquiler en los términos indicados, el departamento podía constituirse en una especie de anexo cultural de la Embajada de Portugal. A juicio del representante portugués se trataba de una situación especial por lo que solicitaba al Ministerio de Negócios Estrangeiros someter a consideración el pedido de Helfant.¹⁶³

A mediados de septiembre, de Castro e Abreu manifestó una de sus preocupaciones fundamentales en relación al nuevo gobierno en materia de relaciones internacionales. Dicho tema refería al posicionamiento que había hecho la Unidad Popular respecto a las luchas de liberación de los pueblos colonizados del Tercer Mundo. En el documento remitido por el diplomático, se indicaba que la alianza de izquierda había explicitado su deseo por desarrollar una política de solidaridad con aquellos pueblos sometidos, condenando abiertamente el colonialismo y reconociendo el derecho a rebelión de los mismos.¹⁶⁴

Como se recordará, la cuestión de ultramar constituía una problemática de primer orden dentro de su política exterior, al punto de que este país había destinado cuantiosos recursos materiales y humanos a objeto de mantener la legitimidad de la guerra colonial. En efecto, Lisboa editó numerosos folletos y pequeñas revistas que circulaban al interior de los cuarteles milita-

res y cuyo objeto era mantener en alto la moral de los soldados que viajaban a África y, al mismo tiempo, advertirlos de las amenazas externas que buscaban desacreditar la lucha en ultramar. En este contexto, el temor portugués era que el Chile de la UP se situara como otro punto de apoyo internacional a la causa independentista de los territorios coloniales.¹⁶⁵

En medio de estas preocupaciones, la tensión política en Chile continuaba su ritmo ascendente producto de los resultados electorales del día 4 de septiembre. A comienzos de octubre, cuando parecía viable un acuerdo entre el PDC y la UP a objeto de que Salvador Allende asumiera la presidencia, las informaciones de la embajada portuguesa transmitían una sensación ambiente de máxima preocupación. En un telegrama del día 9 de este mes, la representación diplomática advertía que en el país sudamericano persistía “inquietação [e] terror” ante la inminente instauración de un gobierno marxista, lo cual, según el documento, hacía empeorar día a día la situación económica.¹⁶⁶

El punto de eclosión de la mayor parte de estas tensiones se decantó, como ya se indicó, en el marco del intento de secuestro y posterior muerte del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, ocurrido el 22 de octubre. La primera información que provino desde la embajada portuguesa en Santiago de Chile informaba, el día 23, que el atentado sufrido por el alto oficial había suscitado una profunda indignación en todos los sectores políticos. Al mismo tiempo, el documento detallaba que Schneider se debatía entre la vida y la muerte al haber sido “perfurado seu diafragma, figado e pulmão esquerdo”.¹⁶⁷

En la prensa portuguesa se haría un seguimiento en general exhaustivo a este hecho. *Diário de Notícias* se preguntaba, en su edición del 23 de octubre, si este evento constituía parte de una conspiración “das direitas” para impedir que “o marxista Salvador Allende” asumiera la jefatura del Estado.¹⁶⁸ En su edición del 26 de octubre, cuando se daba cuenta del fallecimiento del general, este medio indicó que el atentado había sido interpretado entre diversos actores como una operación destinada a provocar confusión a efecto de provocar “uma revolta militar”.¹⁶⁹ Por su parte, *O Século* hablaría de pistoleros desconocidos para referirse a los autores del atentado, aunque también consignaría, en su edición del 23 de octubre, que diversos dirigen-

tes de la izquierda chilena habían advertido que “extremistas das direitas” estaban conspirando para materializar distintos actos de violencia.¹⁷⁰ En ediciones posteriores, este mismo medio entregaría otros antecedentes como la detención de algunos sospechosos acusados de participar en el asesinato del alto oficial, el cual ya se atribuía sin ninguna duda a la “extrema-direita chilena”.¹⁷¹ Sobre este mismo punto, *Diário Popular* detallaba que habían sido detenidos más de 40 elementos ligados a este sector, entre los cuales se encontraban el abogado Pablo Rodríguez Grez y Jaime Melgoza Garay. Según información recogida en la Policía de Investigaciones, Melgoza habría confesado su participación en el crimen, al tiempo que se indicaba que en el lugar en donde fue detenido, la policía civil halló “pistolas, espingardas, granadas de mão e munições.”¹⁷² El órgano del PCP, *Avante!*, sostuvo que detrás del crimen de Schneider estaban sectores de la burguesía que habían sido derrotadas en las urnas y cuyo único propósito era desorganizar la vida económica y “criar um estado de inquietação na opinião pública”. Con ello, según este medio, se buscaba presionar al Congreso Pleno a efecto de anular la victoria de Allende, estrategia que de no dar resultado debería abrir paso a la preparación de “um golpe militar de tipo fascista”.¹⁷³

Como se puede apreciar, tanto la respuesta diplomática más inmediata como las informaciones emanadas desde la prensa escrita portuguesa enfatizaron en la gravedad del crimen del comandante en jefe del Ejército. Con todo, para el embajador Armando de Castro e Abreu existía una preocupación de fondo respecto a la situación chilena, la cual iba más allá de la coyuntura crítica vivida a propósito del reciente homicidio. En efecto, para el representante luso era la orientación ideológica y estructura del régimen que estaba *ad portas* de acceder al poder en el país andino el punto de tensión más relevante. En un informe fechado a mediados de noviembre de 1970, cuando Allende ya estaba en la presidencia, de Castro e Abreu sostenía que independiente de los inicios favorables con que se vislumbraban los primeros días del gobierno popular no se podía ocultar que la situación chilena “envolve riscos gravíssimos”. A juicio de este diplomático, dichos riesgos provenían tanto de la actuación de elementos extremistas de izquierda que procurarían acelerar el proceso revolucionario como de la “infiltração paciente e firme do Partido Comunista em todo país”.¹⁷⁴

Desde este ángulo de análisis, la UP representaba para el diplomático portugués un proyecto político de transformación social sujeto a las luchas intestinas y estrategias de los diversos partidos que la conformaban. En este marco, asomaban como preocupantes las operaciones de infiltración a escala nacional llevadas a cabo por el PC, lo cual revelaría de modo patente el poder de esta colectividad para insertarse hábilmente en diversos planos del quehacer público. Como se puede advertir, esta situación, unida al propósito de los sectores más radicalizados de la izquierda chilena por acelerar el proceso revolucionario, auguraba, bajo la óptica del representante portugués, un cuadro de creciente conflictividad y tensión tanto en Chile como en el exterior.

Dicho pronóstico le sería en buena medida confirmado a de Castro e Abreu por el senador radical Raúl Juliet en un encuentro que ambos sostuvieron en la quincena de diciembre de 1970 y que el embajador detalló a su cancillería a través de un telegrama confidencial. En el documento se señala que el político chileno, “amigo do presidente Allende”, reveló que la situación del nuevo Gobierno era muy difícil porque “enfrenta grande hostilidade de países vizinhos e dos Estados Unidos da América”. Según Juliet, Washington habría amenazado a Chile con aislarlo del resto del mundo “fechando-lhe Canal do Panamá e o Estreito de Magalhães”. Asimismo, indicaba de Castro e Abreu, el senador radical preveía grandes dificultades económicas y financieras.¹⁷⁵

Las directrices generales que se pueden advertir en la percepción portuguesa sobre este complejo periodo que vivía Chile revelan, a diferencia de su vecino español, una mirada mayoritariamente crítica y pesimista. A las visiones diplomáticas del representante luso, que veía en este proyecto político un caso inequívoco de expansión del comunismo internacional, se sumaba la visión de la prensa que desde distintos ángulos orbitaba en su mayoría en una dirección similar. Un ejemplo representativo de lo anterior fue la columna escrita por George Suffert, destacado periodista francés del semanario *L'Express*, y publicada en exclusiva por *Diário Popular* el día 23 de octubre. En ella, Suffert insistía en que lo acontecido en Chile en las últimas semanas daba cuenta de una sociedad inquieta, con vaivenes económicos, fuga de capitales y una salida masiva de chilenos al exterior. En este marco, una de las decisiones más importantes que debería tomar el presidente Allende, según

el periodista galo, consistía en liquidar a “os grupos esquierdistas” constituido por entre 500 a mil hombres todos armados. Desde esta perspectiva, la pregunta transversal que se hacía Suffert era si Chile se transformaría en una nueva Cuba en América latina.¹⁷⁶

Mientras España hacía un esfuerzo por visualizar al emergente Gobierno popular a través de un filtro más pragmático, Portugal seguía este proceso desde una óptica más estrecha, y claramente maniquea, donde la izquierda no podía representar sino el caos y el fin de la libertad.

Notas

93 Peter Winn, *Tejedores de la Revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*, Santiago, Lom, 2004, passim.

94 José Ignacio Ponce, “Autonomía versus politización. Tensiones en la cultura política sindical entre la ‘vieja democracia’ y el inicio de la postdictadura chilena.” *Revista Rosa*, Santiago, 26 de agosto de 2019. Disponible en <https://www.revistarosa.cl/2019/08/26/autonomia-versus-politizacion-tensiones-en-la-cultura-politica-sindical-entre-la-vieja-democracia-y-el-inicio-de-la-postdictadura-chilena/>. Consulta: 18.11.2023.

95 Joaquín Fernández Abara, “Allende, el allendismo y los partidos: El Frente de Acción Popular ante las elecciones presidenciales de 1958.” *Revista Izquierdas*, n° 23, 2015, pp. 157-190.

96 *Programa básico de Gobierno de la Unidad Popular*, Santiago, 17 de diciembre de 1969, pp. 3-7.

97 Este énfasis en Luis Corvalán Marquéz, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Sudamericana, 2001.

98 De acuerdo a la Constitución Política de 1925, si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta en la elección sería el Congreso Pleno la instancia

que elegiría al nuevo presidente de entre las dos primeras mayorías. En elecciones anteriores, se respetó la voluntad expresada en las urnas escogiendo siempre a la primera mayoría.

99 Informe n° 757/333 del embajador en España al ministro de Relaciones Exteriores, Madrid, 8 de septiembre de 1970. AMINREL, fondo países. Embajada de Chile en España, Vol. 50.

100 *La Vanguardia*, Barcelona, 5 de septiembre de 1970, p. 3.

101 *Pueblo*, Madrid, 5 de septiembre de 1970, p. 9.

102 *Pueblo*, Madrid, 7 de septiembre de 1970, p. 2.

103 *El Alcázar*, Madrid, 4 de septiembre de 1970, p. 7.

104 *Arriba*, Madrid, 6 de septiembre de 1970, p. 7.

105 Inclusive, cuando Allende tomó posesión del poder en noviembre de 1970, este medio publicó una nota titulada “Un respetuoso de los principios democráticos”. En ella se exponían algunos rasgos personales del senador socialista además de los alcances e impacto del proyecto de la UP para la región latinoamericana, en lo que este medio entendía como un “nuevo camino” en la lucha por la

emancipación del continente. Véase, *Arriba*, Madrid, 4 de noviembre de 1970, p. 11.

106 *Mundo Obrero*, Madrid, 30 de septiembre de 1970, p. 7.

107 *Fuerza Nueva*, N° 183, 11 de julio de 1970, p. 10.

108 Un estudio en profundidad sobre los énfasis y recursos discursivos de esta publicación a lo largo de los tres años del Gobierno de la UP se encuentra en, Francisco Javier Morales Aguilera, “«No fue un golpe; fue un alzamiento». Análisis y perspectivas sobre la vía chilena al socialismo desde las páginas de la revista *Fuerza Nueva*”, *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, n° 24 (1), 2020.

109 *Fuerza Nueva*, n° 193, 19 de septiembre de 1970, p. 10.

110 Un buen estudio sobre los alcances y perspectivas ideológicas de esta publicación en, Javier Muñoz, *Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo*, Madrid, Marcial Pons, 2006.

111 *Cuadernos para el Diálogo*, n° 85, octubre de 1970, p. 9.

112 *Cuadernos para el Diálogo*, n° 85, octubre de 1970, p. 31.

- 113** *El Alcázar*, Madrid, 7 de septiembre de 1970, p. 8.
- 114** Telegrama n° 66, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 5 de septiembre de 1970. AGA, caja 82/21393, expediente n° 16.
- 115** Telegrama n° 68, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 8 de septiembre de 1970. AGA, caja 82/21393, expediente n° 16.
- 116** Informe n° 500, "reservado", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 11 de septiembre de 1970. AGA, Leg. R-11387, expediente n° 40.
- 117** Informe n° 503, "reservado", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 17 de septiembre de 1970. AGA, Leg. R-11387, expediente n° 40.
- 118** Manuel Fuentes, *Memorias secretas de Patria y Libertad y algunas confesiones sobre la Guerra Fría en Chile*, Santiago, Grijalbo, 1999, pp. 72-73.
- 119** El entorno familiar de Schneider cuenta que el general recibió múltiples presiones desde distintos sectores políticos a objeto de que el Ejército interviniera en la coyuntura poselectoral evitando así el ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Véase, Víctor Schneider Arce, *General Schneider. Un hombre de honor, un crimen impune*, Santiago, Ocho Libros, 2010., p. 95-100.
- 120** *ABC*, Madrid, 23 de octubre de 1970, p. 17.
- 121** Este corresponsal, que firmaba sus textos bajo el seudónimo de "Veritas", era el abogado y exdiputado del Partido Conservador de Chile, Jorge Iván Hübner.
- 122** *ABC*, Madrid, 24 de octubre de 1970, p. 37.
- 123** *El Alcázar*, Madrid, 23 de octubre de 1970, p. 10. Cabe precisar que el ministro Diego Portales Palazuelos fue asesinado en 1837 cerca de la ciudad de Valparaíso mientras pasaba revista a un batallón del Ejército comandado por el coronel José Antonio Vidaurre.
- 124** *El Alcázar*, Madrid, 3 de noviembre de 1970, p. 4.
- 125** *Pueblo*, Madrid, 23 de octubre de 1970, p. 9.
- 126** *Arriba*, Madrid, 24 de octubre de 1970, p. 9.
- 127** *Arriba*, Madrid, 25 de octubre de 1970, p. 1.
- 128** *La Vanguardia*, Barcelona, 23 de octubre de 1970, p. 1.
- 129** *La Vanguardia*, Barcelona 24 de octubre de 1970, p. 15.
- 130** *Triunfo*, n° 439, 31 de octubre de 1970, pp. 4 y 5.
- 131** *Mundo Obrero*, Madrid, 30 de octubre de 1970, pp. 4 y 5.
- 132** Informe n° 869/373 del embajador en España al ministro de Relaciones Exteriores, Madrid, 26 de octubre de 1970. AMIN-REL, Fondo países. Embajada de Chile en España, Vol. 50.
- 133** El Movimiento Cívico Patria y Libertad fue fundado por el Abogado Pablo Rodríguez Grez en el marco de la elección presidencial de 1970. Su objetivo era impedir el acceso de Allende a la presidencia desde una perspectiva eminentemente institucional. Al no alcanzar su propósito, el movimiento se disolvió para reaparecer, como un grupo armado de choque, en abril de 1971 bajo el nombre de Frente Nacionalista Patria y Libertad. Un estudio pormenorizado de este movimiento en José Díaz Nieva, *Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2015.
- 134** Informe n° 561 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 1 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11387, expediente n° 40.
- 135** Informe n° 573 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 8 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 1.
- 136** Informe n° 612 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 21 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11518, expediente n° 90.
- 137** Informe n° 581, "reservado", del embajador en Paraguay al ministro de Asuntos Exteriores, Asunción, 28 de septiembre de 1970. AGA, Leg. R-11393, expediente n° 1.
- 138** Informe n° 631, "reservado", del embajador en Paraguay al ministro de Asuntos Exteriores, Asunción, 19 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11387, expediente n° 40.
- 139** Carta de Gabriel Fernández de Valderrama al embajador de España en Chile, Madrid, 26 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11387, expediente n° 40.
- 140** Informe n° 301, "Muy reservado", del encargado de negocios en Cuba al ministro de Asuntos Exteriores, La Habana, 7 de julio de 1971. AGA, Leg. R-12110, expediente n° 16.
- 141** Informe n° 633 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 30 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11511, expediente n° 47.
- 142** Carta del embajador en Paraguay al ministro de Asuntos Exteriores, Asunción, 26 de octubre de 1970. AGA, Leg. R-11511, expediente n° 48.

- 143** El hecho se había producido en dependencias de la Universidad de Concepción en el marco de las elecciones estudiantiles de dicho plantel. En esos días, además, Salvador Allende se encontraba de visita en una ciudad cercana a Concepción donde procedería a firmar uno de los primeros decretos de expropiación de su gobierno. Como se puede advertir, el crimen causó un profundo impacto en las huestes de izquierda, con acusaciones cruzadas y polémicas que no lograron disiparse fácilmente.
- 144** *ABC*, Madrid, 4 de diciembre de 1970, p. 45.
- 145** *La Vanguardia*, Barcelona, 4 de diciembre de 1970, p. 19.
- 146** Informe n° 739 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 10 de diciembre de 1970. AGA, Leg. R-11459, expediente n° 97.
- 147** Informe n° 759 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 16 de diciembre de 1970. AGA, Leg. R-11459, expediente n° 97.
- 148** Véase, por ejemplo, *A Guerra Fria em 1957. Desarmamento e "sputniks"*. Relatório anual referente ao ano de 1957. ADMNE, processo n°211, 1 (108), 1957 y *Os Estados Unidos e a ONU*. Relatório anual referente ao ano de 1956. ADMNE, processo n°211, 1(108), 1956.
- 149** Telegrama n° 4119, "secreto", del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 22 de mayo de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20 II^a
- 150** Peter Kornbluh, "Documentos desclasificados: Cómo Jorge Alessandri buscó apoyo clandestino de EE.UU. en 1970.", 12.12.2007, publicada en: <https://www.ciperchile.cl/2007/12/12/documentos-desclasificados-como-jorge-alessandri-busco-apoyo-clandestino-de-eeuu/>. Consulta: 17.07.2021.
- 151** Telegrama n° 7128, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 5 de septiembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20 II^a.
- 152** Informe n° 104, del embajador en Uruguay al ministro de Negocios Estrangeiros, Montevideo, 7 de septiembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36. P3 / 35064, carpeta n° 326.20 / II^a.
- 153** *Diário de Lisboa*, 5 de septiembre de 1970, p. 1.
- 154** *Diário de Lisboa*, 6 de septiembre de 1970, p. 21.
- 155** *Diário de Noticias*, Lisboa, 6 de septiembre de 1970, p. 9.
- 156** *O Século*, Lisboa, 6 de septiembre de 1970, p. 16.
- 157** *Diário Popular*, Lisboa, 4 de septiembre de 1970, p. 9.
- 158** *Jornal de Noticias*, Porto, 6 de septiembre de 1970, p. 8.
- 159** *Avante!*, n° 422, noviembre de 1970, p. 6.
- 160** *Seara Nova*, n° 1500, octubre de 1970, pp. 335-336.
- 161** *O Século*, Lisboa, 8 de septiembre de 1970, p. 7.
- 162** Informe PEA 278, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 28 de septiembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36. P3 / 35064, carpeta n° 326.20 / III^a.
- 163** Informe 5-A S.P. 281, "confidencial", del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 30 de septiembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36. P3 / 35064, carpeta n° 326.20 / III^a.
- 164** Telegrama "confidencial", del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 16 de septiembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20 II^a.
- 165** Con todo, el embajador de Abreu e Castro notificaría, a mediados de noviembre, que en una conversación que sostuvo con el recientemente asumido ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Allende, Clodomiro Almeyda, éste reaccionó de forma muy amistosa ante las preocupaciones de su país en materia colonial. Según el embajador portugués, el canciller chileno le dijo que seguiría con el mayor cuidado las cuestiones relativas a la ONU con el objetivo de no hostilizar ni herir las susceptibilidades del país ibérico. Asimismo, Almeyda le indicó al representante luso que el Gobierno chileno defendía que los cambios efectuados en las sociedades debían materializarse dentro del campo jurídico, rechazando soluciones ilegales y violentas. Véase, Telegrama N° 80, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 16 de noviembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36. P4 / 35075, carpeta n° 326,20.
- 166** Telegrama n° 8353, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 9 de octubre de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20, II^a.
- 167** Telegrama n° 8906, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 23 de octubre de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20, IV^a.
- 168** *Diário de Noticias*, Lisboa, 23 de octubre de 1970, p. 1.
- 169** *Diário de Noticias*, Lisboa, 26 de octubre de 1970, p. 13.
- 170** *O Século*, Lisboa, 23 de octubre de 1970, p. 5.

- 171** *O Século*, Lisboa, 26 de octubre de 1970, p. 1.
- 172** *Diário Popular*, Lisboa, 25 de octubre de 1970, p. 5.
- 173** *Avante!*, n° 422, noviembre de 1970, p. 6.
- 174** Aerograma n° 9947, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 2 de noviembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20, IV^a.
- 175** Telegrama, “confidencial”, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 18 de diciembre de 1970. ADMNE, caja S3. E36.P3 / 35064, carpeta n° 326,20 IV^a.
- 176** *Diário Popular*, Lisboa, 23 de octubre de 1970, p. 11.

Del optimismo oficialista a la reorganización opositora

El primer semestre de 1971 dio cuenta de un importante impulso transformador en Chile como consecuencia de la aplicación del programa de gobierno de la UP. Este proyecto estaba constituido por una serie de modificaciones estructurales que buscaban, como se indicó en su momento, la socialización de importantes medios productivos, una reconfiguración de las áreas de la economía y la intensificación de la reforma agraria.¹⁷⁷ Dichos cambios fueron acompañados, además, de un creciente proceso de movilización, a veces autónomo, de la sociedad, el cual incluía a sectores obreros, campesinos y populares.

Al tratarse de una experiencia de indudable densidad histórica, las perspectivas que apuntaban a establecer un tránsito ordenado al socialismo, como lo reclamaba el propio presidente Allende, se verían muy pronto sobrepasadas por la realidad. El gobierno se vio enfrentado, en efecto, a un fenómeno que posiblemente no logró prever en toda su magnitud. La vía chilena al socialismo impactaba en las estructuras económicas y políticas del país y también en la base social al despertar un proceso de creciente protagonismo de muy diversos, y nuevos, actores. Como es de suponer, estos últimos no fueron dinamizados de la noche a la mañana, pues su participación social y política venía creciendo desde al menos inicios de la década anterior. La UP fue, en este sentido, un periodo donde dicha participación alcanzó uno de sus puntos culminantes dentro del siglo XX chileno. No obstante lo anterior, el plano institucional no dejaba de anotar expectativas halagüeñas que hacían creíble que un proyecto de transición al socialismo pudiera realizarse dentro de los marcos de la legalidad y la democracia. El apoyo mayoritario que el oficialismo alcanzó en las elecciones municipales de abril de 1971 corroboraba en buena medida esta apreciación.

Desde este ángulo, el proyecto de la UP se fue configurando en el plano de las transformaciones estructurales –de la mano de un sostenido apoyo político en el campo institucional– y también en el de la activa movilización social. Así, no fue extraño que numerosos actores se involucraran directamente en la materialización de este proyecto, apoyando desde sus respectivos espacios laborales o comunitarios algunas de las medidas que buscaba implementar el Gobierno. Sin duda esto se prestaría para que los marcos de contención y regulación que la propia UP había fijado fueran desbordados, o en casos más extremos, sirvieran para decantar en sendos conflictos con actores que se oponían a la puesta en marcha del proceso transformador. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Gregorio López Bravo, de visita en Chile a inicios de abril de 1971, comentaría que la decisión de viajar al país sudamericano se basaba en que la experiencia de la UP comenzaba a suscitar numerosas “dudas y preocupaciones”. Al mirar esta situación desde un ángulo más amplio, el ministro señalaba que el conjunto de naciones iberoamericanas clamaba por el progreso económico y la justicia social, cuestión que indudablemente había creado un clima de inquietud política.¹⁷⁸ En otras palabras, la preocupación por la experiencia chilena no era exclusiva de este territorio, sino que involucraba a la región en su totalidad. La particularidad del país sudamericano radicaba, pues, en la forma en cómo se desarrollaba su tránsito al socialismo al interior de los marcos institucionales de una democracia liberal. Resultaba natural que en este contexto existiera un margen de preocupación en distintos actores por los intentos de conjugar dentro de un solo proceso político dos conceptos –socialismo y democracia– que por entonces parecían bastante contradictorios.

Los elementos señalados constituirían, pues, los lineamientos que sugieren el perfil fundamental de los primeros meses de la UP en el poder. Es decir, un proyecto que navega sin mayores contratiempos en su marcha hacia la configuración de un Estado socialista y que se sustenta, en buena medida, en una masiva movilización social y un importante respaldo político-institucional. Aunque no se divisaban grandes obstáculos, algunos tópicos referidos al extremismo y radicalidad con que operaban ciertos actores partidarios del gobierno comenzaría a poner sobre la mesa las primeras inquietudes. En ese marco, un grave hecho de violencia política marcará un punto de inflexión en el país –y en el proyecto popular– al mediar 1971.

A inicios del mes de febrero, el embajador español redactó un informe en el cual comentaba las declaraciones de algunos dirigentes del PDC en orden a la existencia de grupos guerrilleros en el sur del territorio. A juicio de Sainz de Llanos, el extremismo en Chile estaba transitado un camino creciente de “injurias, desprestigio y progresiva organización paramilitar en contra de las Fuerzas Armadas, creando un clima de violencia y tensión.” Las palabras del representante español se hacían eco de numerosas denuncias públicas que había comenzado a realizar el PDC, y la oposición en general, respecto a que, en diversos puntos del país, pero sobre todo en espacios rurales, operaban grupos armados vinculados a la izquierda. Estos actores tendrían como propósito fundamental, según se denunciaba, materializar por vía de la violencia el programa de gobierno de la UP, radicalizando en especial el proceso de reforma agraria. Según acotaba Sainz de Llanos, estos grupos extremistas “que asaltan, toman predios, cortan caminos” eran principalmente pertenecientes al MIR.¹⁷⁹

Desde este ángulo se ponía un punto de atención sobre uno de los tópicos que más destacarían los informes diplomáticos, y también la prensa peninsular, y que guardaba relación con el accionar de numerosos grupos e individuos armados. Con su programa de transformación revolucionaria, la UP había creado, según los énfasis que estaban implícitos en estos documentos, las condiciones necesarias para el surgimiento y despliegue de este tipo de acciones, cuestión que en la práctica no podía ser negada. Lo que se podía advertir también era una preocupación inicial por la cantidad de civiles que formaban parte de estos grupos y que más aún tenían acceso a armas y entrenamiento paramilitar. Se trataba, en definitiva, de un problema, que aun cuando no representaba una amenaza seria para la viabilidad del proyecto popular, su sola enunciación podía despertar un nivel de inquietud en algunos actores. Sin embargo, ello no cristalizaría, de momento, en una corriente de opinión mayoritaria que pusiera en el centro de la discusión pública el tema de los grupos armados.

Un sector de la prensa española advertiría, en todo caso, sobre otras medidas que adoptaba el gobierno de la UP y que a su juicio trasuntaban un carácter inequívocamente comunista. Según indicaba el semanario *Fuerza Nueva*, el anuncio de creación de los “tribunales populares” constituía una

de las medidas más graves que había tomado el presidente Allende “en su camino hacia el precipicio”. El gobierno había planteado, en efecto, la idea de establecer tribunales vecinales con el objetivo de resolver disputas locales y agilizar de este modo los procedimientos judiciales. Sin embargo, esta iniciativa se vio envuelta en una áspera discusión debido a sus alcances, situación que coincidió con los ataques que desde el oficialismo se hicieron en contra de la Corte Suprema al iniciarse 1971. Algunos medios acusaron entonces que el objetivo último de esta iniciativa era destruir el Poder Judicial.¹⁸⁰ Compartiendo buena parte de esta mirada, *Fuerza Nueva* sostendría que el establecimiento de este tipo de instituciones podría significar que Chile se acostase una noche bajo el manto del frentepopulismo, y amaneciese comunista “sin darse cuenta siquiera.”¹⁸¹ Es decir, para esta publicación el problema de fondo de la experiencia socialista chilena radicaba en que sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo buscaban al establecimiento de una sociedad comunista y totalitaria.

Desde las páginas de *Cuadernos para el Diálogo*, en tanto, la mirada no estuvo puesta en los aspectos más coyunturales que destacaban el embajador español y la prensa de extrema derecha. En su edición de enero de 1971 su énfasis analítico fue de carácter regional a efecto de visualizar la experiencia chilena dentro de un marco más amplio. El enfoque de Hugo Neira, llamaba la atención respecto a diversas problemáticas de lo que llamó bloque de los socialismos andinos, en alusión al carácter ideológico de los gobiernos que estaban al frente de Bolivia, Chile y Perú. A su juicio, se trataba de un bloque antiimperialista donde sus objetivos de reducir la dependencia externa descansaban en una fuerte organización estatal. Sin embargo, también había diferencias importantes. En el caso de Chile, su vida política estaba articulada en torno a los partidos y las organizaciones sindicales, siendo los primeros quienes mediaban entre el Estado y las clases sociales. En Bolivia y Perú, en cambio, el rol de los partidos había fracasado, mientras que la clase política actual provenía de las academias militares y las universidades. Ello había dado forma a una tecnocracia nacionalista. Miradas en su conjunto, finalizaba Neira, las experiencias andinas daban cuenta de procesos transicionales más que de rupturas abiertas, por lo que carecían de espectacularidad, pero no de originalidad.¹⁸² En su edición del

mes siguiente, esta publicación volvía a insistir en tópicos estructurales para entender la experiencia chilena, enfatizando fundamentalmente las directrices económicas que estaban en juego durante el primer semestre de 1971. Desde esta perspectiva, la propuesta de nacionalización del cobre asomaba como uno de los puntos más destacados.¹⁸³

Como se puede ver, distintos enfoques predominaban entre los actores hispanos para ir refiriendo lo que sucedía con la UP durante los primeros meses de 1971, situación que daba cuenta, por cierto, de la superposición de planos (coyuntural y estructural) que existía dentro de la experiencia chilena. Hacia el mes de abril, la actividad política en el país sudamericano estuvo centrada en las elecciones municipales. Sobre este evento, cuyos resultados favorecieron, como se sabe, a la alianza oficialista, el embajador español refirió importantes elementos.¹⁸⁴ En primer lugar, destacaría las condiciones de “libertad, orden y calma” en que se desarrollaron los comicios, un marco que, según sus palabras, ya era habitual en Chile. Enseguida, Sainz de Llanos indicaría que la única excepción a este clima de tranquilidad existente fue la muerte de un joven demócratacristiano en la ciudad de Puerto Aysén, al sur del país, producto de un enfrentamiento entre brigadistas de la colectividad a la que pertenecía la víctima y miembros del PS. Aunque el embajador destacaba la madurez política de Chile, no dejaba de preguntarse sobre cuál sería el “desenlace” de esta experiencia.¹⁸⁵

Tal interrogante, efectuada en el contexto de un proceso político que todavía daba muestras de cierta tranquilidad, se reactualizaría bajo un tenor distinto tras el homicidio del exministro demócratacristiano Edmundo Pérez Zujovic ocurrido a inicios de junio. El crimen fue cometido por un grupo de extrema izquierda denominado Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) en atención, según se dijo, a la responsabilidad que le cabía a Pérez Zujovic en la represión y muerte de un grupo de pobladores el año 1969, cuando aquél ocupaba la secretaría de Interior. Sobre este crimen y el accionar de la VOP en particular se ha tejido toda suerte de teorías, especulando con que se trataba de un movimiento infiltrado por la CIA o que no era más que un grupo integrado por delincuentes comunes y lumpen en general. Algunas investigaciones han avanzado en el análisis de su composición interna y estrategia de lucha avizorando la existencia de un corpus teórico y factual

más o menos definido en favor de la lucha armada.¹⁸⁶ Era evidente que, el crimen del exministro impactó fuertemente en la escena pública dadas las consecuencias políticas que un hecho de este tipo causaría en las relaciones entre el gobierno y la Democracia Cristiana, marcando en la práctica un alejamiento casi definitivo entre ambos actores. Más aún, desde esta última colectividad se acusó en duros términos al oficialismo al señalarlo como responsable de la creación del clima de odio y enfrentamiento que decantó en la materialización del homicidio.¹⁸⁷

La primera crónica de *ABC* con que se informó de este hecho apuntaba a resaltar el carácter político del crimen, mencionando la probable participación de la VOP en el homicidio.¹⁸⁸ En su edición del 10 de junio, este mismo medio aportó dos elementos relevantes sobre el hecho y su contexto de fondo. En primer lugar, destacó las palabras del ministro del Interior, José Tohá, quien en una sesión especial del Senado sostuvo que el gobierno había tenido conocimiento de un plan sedicioso denominado “Plan Calvo Sotelo” que proyectaba el asesinato de una figura de la oposición. Tales declaraciones llamaban indudablemente la atención de este periódico porque hacían recordar el caso del político español José Calvo Sotelo asesinado en julio de 1936 por un grupo armado de izquierda. En segundo término, *ABC* destacó, a través de una crónica titulada *Chile, entre el desorden y la explosión*, una visión bastante crítica sobre el Gobierno de la UP. En efecto, a juicio de este medio la situación del país se había ido deteriorando sobre todo por la “acción de los grupos extremistas” como el MIR y su “filial” el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). A juicio de *ABC*, el problema político chileno radicaba en el aumento del desorden social, donde la tensión había llegado a niveles difíciles de tolerar en un ambiente “cargado de electricidad”.¹⁸⁹

Dos días más tarde, este mismo medio analizaría desde un ángulo más amplio las consecuencias del homicidio de Pérez Zujovic a través de su editorial internacional. Según *ABC*, este crimen daba cuenta de la existencia de una guerra intestina dentro de América Latina protagonizada fundamentalmente por grupos armados castristas que tanto en Chile como en Bolivia se habían decantado por el asesinato de connotaciones políticas. En este contexto, la muerte del exministro demócratacristiano era un claro desafío al modelo de “revolución pacífica y ordenada” que perseguía el presidente

Allende. Además, este rotativo se preguntaba por qué en el marco de una situación de extrema tensión, el primer mandatario chileno decidía “movilizar a los cuadros del comunismo pro soviético” prescindiendo de aquellas fuerzas que no eran comunistas. Tal situación, sentenciaba *ABC*, comprometía gravemente la base de serenidad con que se mantenía el Ejército.¹⁹⁰ Desde este ángulo, las decisiones adoptadas por el líder chileno lejos de aquietar la tensión existente más bien la aumentaba, situación que podría alterar inclusive a las propias Fuerzas Armadas.

El semanario *Triunfo* destacaría un énfasis similar al que expusiera *ABC* en relación a las semejanzas entre el caso chileno y la España de la década del treinta. A juicio de esta publicación, Chile se había transformado en una metáfora que hermanaba la realidad de ambos países a objeto de visualizar y analizar las posibilidades de supervivencia y proyección de los sistemas políticos donde gobernaba la izquierda. Respecto al crimen en sí, *Triunfo* señalaba algunas hipótesis que podrían explicar su ejecución. Una de ellas era que se trataría de una venganza personal o política por la responsabilidad de Pérez Zujovic en la matanza de Pampa Irigoín en 1969, cuando éste era ministro del Interior. Otra explicación, indicaba *Triunfo*, refería a que el homicidio constituía una especie de provocación al régimen de gobierno por parte de los extremos del arco político.¹⁹¹

Para *El Alcázar*, el crimen de Pérez Zujovic había decantado en una situación de evidente “tensión política” en el país sudamericano, con declaraciones y acusaciones cruzadas entre distintos actores. En su edición del 9 de junio, este medio informaba que uno de los autores del crimen –identificado como Ronald Rivera Calderón– pertenecía a una organización de “delinquentes comunes” a los cuales les cabía responsabilidad en otros hechos de sangre ocurridos semanas antes. Adicionalmente, este medio indicó que el Gobierno había presentado un proyecto que establecía “el máximo rigor de la ley” para quienes pretendieran alterar la seguridad y el orden constitucional del país.¹⁹² En los días siguientes, *El Alcázar* se sumó a las informaciones que otros medios refirieron sobre los responsables del crimen, en particular respecto al enfrentamiento y posterior muerte de los hermanos Calderón y la acción suicida de un tercer dirigente de la VOP, Heriberto Salazar Bello, quien atacó con armas de fuego y explosivos el cuartel central de la Policía

de Investigaciones. En dicho contexto, este medio destacó que el presidente Allende, en un discurso pronunciado el 16 de junio, aludió en diversas ocasiones al “espíritu constitucionalista” de las Fuerzas Armadas, bajo el entendido de que ellas eran un factor decisivo en la mantención del orden.¹⁹³

La Vanguardia, por su parte, en su primera referencia a este hecho habló explícitamente de un asesinato de connotaciones políticas, señalando luego que en estos mismos días se habían conocido amenazas de muerte en contra de otras figuras del PDC, como el senador Juan de Dios Carmona.¹⁹⁴ En su edición del 10 de junio, en tanto, este medio recogía numerosas declaraciones de los principales actores políticos del país, destacando las palabras del presidente Allende en orden a que el crimen tenía como objetivo quebrar el sistema institucional. También se incluían las reacciones del partido donde militaba la víctima, la DC, que acusaban la responsabilidad del gobierno por su tolerancia frente a la violencia que vivía el país.¹⁹⁵ Al día siguiente se informó que ya habían sido identificados los autores del crimen (los hermanos Rivera Calderón), al tiempo que se publicaban las palabras del ministro de Defensa chileno quien advertía sobre una serie de rumores y panfletos que estarían circulando entre la oficialidad militar y que llamaban a una “irrupción en el orden civil”.¹⁹⁶

Con un énfasis que también se centró en la respuesta de las autoridades de Gobierno, el periódico *Arriba* comentó diversos aspectos del reciente crimen. En su edición del 9 de junio, este medio informaba que ante el luctuoso suceso el gobierno de la UP no se dejaría “amedrentar” por el terror ni tampoco estaría dispuesto a permitir que se crearan las condiciones necesarias para que se produjera un golpe de Estado. Para los círculos oficialistas, según reproducía el rotativo falangista, existía meridiana claridad de que el crimen en contra de Pérez Zujovic era parte de una “conspiración” en contra de la UP. Por otra parte, y al igual que como habían hecho otros medios, *Arriba* señaló que uno de los autores del crimen, el vopista Ronald Rivera Calderón, pertenecía a una organización de “delincuentes comunes”.¹⁹⁷ En los días siguientes, el énfasis general con que este medio había observado el crimen se mantuvo en primera línea, es decir, destacando la intención de las autoridades por recobrar cuanto antes la calma y la tranquilidad.¹⁹⁸ Por contrapartida, algunos hechos que se verificaron posteriormente, en especial la operación suicida de Heriberto

Salazar Bello en contra del cuartel de investigaciones, fueron definidos por *Arriba* como actos terroristas.¹⁹⁹ Mirado en su conjunto, la apuesta de este periódico fue recalcar que el crimen ocurrido en la capital chilena había despertado una enérgica respuesta de parte de las autoridades civiles a objeto de que el camino institucional que se había trazado el proyecto de la UP no se viera alterado por algunos actos de violencia.

En el número extraordinario de *Cuadernos para el Diálogo* publicado en junio, Pedro Altares calificaba el crimen de Pérez Zujovic como un nuevo asesinato político proveniente desde el “ángulo irresponsable del terrorismo”. Según el periodista, este hecho demandaba que Allende actuase con decisión y sorpresa respecto a la movilización de las masas y también para confrontar a una derecha que podía romper en cualquier momento su aceptación del juego democrático.²⁰⁰ Desde *Fuerza Nueva* el punto de llegada al crimen de Pérez Zujovic se hizo a través de un análisis de la guardia personal del presidente Allende, el GAP, la cual bajo la óptica de esta revista fue denominada como “la motorizada”, en alusión a la guardia que había tenido el dirigente socialista español Indalecio Prieto. Según esta revista, el GAP era integrado por los grupos de choque del MIR bajo la anuencia y responsabilidad del propio Allende. En su parte final, que era donde se establecía la conexión entre todos estos elementos, *Fuerza Nueva* sostenía que había sido uno de los hombres del MIR, Ronald Rivera Calderón –a quien calificaba como delincuente común– la persona que había asesinado al exministro Edmundo Pérez Zujovic.²⁰¹ A partir de este ángulo, se trataba de vincular el crimen del dirigente democratacristiano a las altas esferas del gobierno de la UP.

Desde la representación diplomática española, en tanto, se indicó que el asesinato de Pérez Zujovic constituía una mancha de sangre para el país sudamericano. Una de las principales preocupaciones del embajador respecto a este hecho era, en efecto, que la tradicional templanza y tranquilidad que caracterizaban al país sudamericano pudiera estar en franco retroceso.²⁰² En este sentido, el factor determinante en dicha ruptura no era otro que la violencia, la cual constituiría, según ciertos observadores, un elemento más bien ajeno a la tradición histórica chilena.

Tres días después, Sainz de Llanos envió un telegrama con carácter “muy secreto” al ministro de Asunto Exteriores español, López Bravo, indicándole

que Allende había anunciado la formación de una comisión especial para que investigara el reciente crimen. Dicha instancia estaba integrada por el presidente del Senado y algunos militares, lo que a juicio del embajador español ponía a las Fuerzas Armadas como actores importantes y no meros espectadores de la vida política chilena. Según Sainz de Llanos, la inclusión de los uniformados había sido una medida impuesta al presidente Allende, situación que explicaba el tono contemporizador de sus declaraciones y la ausencia de lo que el embajador consideraba como “natural agresividad” en el primer mandatario.²⁰³

Este rol que comenzaban a tener las instituciones castrenses en Chile fue reafirmado de nuevo por el embajador español en un informe fechado el 17 de junio. En él, Sainz de Llanos afirmaba que el crimen de Pérez Zujovic había sin duda dado origen a la imposición del Ejército al Gobierno para que sus servicios de inteligencia colaboraran en la búsqueda de los responsables del homicidio. Como se recordará, efectivamente el Ejército colaboró en las operaciones de captura de los miembros de la VOP involucrados en el hecho, aunque cabría precisar que dicha tarea se realizó de forma conjunta con la Policía de Investigaciones, la cual respondía a las órdenes de la autoridad civil. En el mismo documento del 17 de junio, el embajador español comentaba, además, sobre una de las últimas acciones de violencia de la VOP acaecidas en el país, en la cual uno de sus militantes atentó en contra del cuartel central de la Policía de Investigaciones el día 16 de junio matando a dos detectives. Según Sainz de Llanos, este hecho daba cuenta del “fanatismo revolucionario” de dicha organización.²⁰⁴

Esta acción comando que perpetró el vopista Heriberto Salazar Bello fue también referida por la prensa peninsular. *ABC* identificó a Salazar Bello como uno de los asesinos de Pérez Zujovic, al tiempo que daba cuenta que la temeraria acción finalizó cuando el atacante detonó el cinturón de explosivos que llevaba adosado.²⁰⁵ *La Vanguardia*, en tanto, refería más o menos los mismos antecedentes, pero incluía el llamado que había hecho el presidente Allende condenando la subversión y el terrorismo.²⁰⁶

Al finalizar junio, el embajador español remitió una carta personal al ministro López Bravo en la cual hacía una síntesis general de los últimos acontecimientos vividos en Chile. En la misiva, Sainz de Llanos indicaba

que entre los principales factores que afectaban al país se encontraba la actuación de los grupos armados, cuyas operaciones contribuían a crear un “ambiente de inquietud y de falta de seguridad que perturbaban la vida del país”. En este marco, recalca el embajador, el “nudo del problema” era que los Carabineros habían recibido la orden de evitar la violencia y actuar con persuasión, evitando disparar sus armas de fuego.²⁰⁷

Mirando las coordenadas de la mayoría de la prensa española y la información diplomática proveniente desde Santiago resultaba evidente que el panorama auspicioso y expectante con que se analizaba la experiencia chilena comenzaba a cambiar. Y fueron algunas medidas que el Gobierno de la UP comenzaba a esbozar dentro del espacio público, así como la acción de ciertos grupos que buscaban acelerar el proceso revolucionario los puntos iniciales de preocupación por el rumbo que tomaba Chile. Indudablemente existían medios que, como *Fuerza Nueva*, condenaban de forma categórica todo lo que emergía y se desarrollaba en el país sudamericano, homologando en muchos casos la situación chilena a la España de los años treinta. Desde el ángulo diplomático, se enfatizaba en que las acciones extremistas conducirían a un camino problemático, de creciente agitación y violencia, que solo acarrearía el desprestigio del propio país. Como señalaría el propio embajador Sainz de Llanos, la tendencia que indicaba que en Chile nunca pasaba nada se estaba rompiendo con cierto dramatismo. El punto culminante de este proceso, como se ha visto, fue el homicidio de Edmundo Pérez Zujovic, el cual puso sobre el debate público, entre otras cosas, los verdaderos límites de la violencia con la que operaban ciertos grupos en el país.

Los análisis de la prensa portuguesa y la embajada de este país en Santiago fueron menos matizados que su vecino peninsular. En efecto, las percepciones y análisis del embajador de Castro e Abreu estaban estructuradas en torno a una mirada homogénea y monolítica del proceso chileno al que identificaba como un eslabón más dentro de la expansión del comunismo internacional. Tal perspectiva no cambiaría a lo largo de los meses, sino por el contrario, ella se vería reforzada a partir de los numerosos episodios de conflicto y violencia que emergían en el país. En los primeros días del año 1971, este representante anotaba, por ejemplo, que la situación chilena envolvía “riscos gravísimos” dadas las acciones que perpetraban diversos grupos de extrema izquierda.

Según el embajador, esta situación hacía que el panorama político en su conjunto se tornase “confuso e perigoso” pues quedaba en evidencia “a sombra ameaçadora do regime comunista para a qual Chile parece caminhar a passos largos.”²⁰⁸ Bajo la óptica del diplomático luso, los procesos de movilización social que comenzaban a operar en Chile, y que desde otros ángulos eran vistos como parte consustancial de cualquier proceso revolucionario, constituían un reflejo evidente de que Chile se acercaba a la instauración de una dictadura comunista.

A finales del mes de enero, de Castro e Abreu volvió a insistir en los peligros que envolvía la experiencia chilena. En un aerograma fechado el 29 de ese mes, el embajador comentaba que un destacado senador chileno le había indicado que Allende ya había perdido el poder y estaba siendo arrastrado por los “extremistas e agitadores de masas” capitaneados por el PC. Del mismo modo, el parlamentario chileno reveló también que en Chile había cerca de 4.500 cubanos especialistas en guerrilla dispuestos a entrenar a los chilenos. Más adelante, el diplomático portugués agregaba algunas notas sobre el rol desempeñado por el ministro de Agricultura Jacques Chonchol; “um frustrado engenheiro agrônomo, filho de um judeu francês, que colaborou na reforma agrária de Cuba, onde fracassou” se apuraba a describir de Castro e Abreu. A su juicio, el secretario de Estado, al trasladarse a la región de Temuco para acelerar la reforma de los campos, hizo un auténtico trabajo revolucionario “violando impudentemente as leis”. Todo lo anterior, sentenciaba el diplomático, había generado un clima donde reinaba la “incerteza, ilegalidade e violência.”²⁰⁹

Poco tiempo después, a mediados de marzo de 1971, el embajador luso remitiría un aerograma donde comentaba una información relevante sobre al expresidente chileno Eduardo Frei Montalva. En el documento, de Castro e Abreu contaba que el embajador de Brasil en Chile, Antonio Câmara Canto, le reveló que, en una conversación privada con Frei, éste manifestó una serie de preocupaciones y aprehensiones respecto al futuro del país. Como punto de partida, el expresidente sentía una cuota de responsabilidad importante por haber entregado el poder “aos marxistas”. Enseguida, Frei manifestó, según Câmara Canto, que estaba convencido de que el gobierno de Allende acabaría en una guerra civil con “un grande banho de sangue”.²¹⁰

Lo interesante de este documento es que revela algunas de las impresiones más íntimas del ex jefe de Estado chileno en un momento en que el proceso social y político de su país no daba muestras de una situación catastrófica o de extrema tensión. Más aún, en marzo de 1971 no se había producido todavía ni la muerte de Edmundo Pérez Zujovic, ni tampoco hechos de violencia de gran magnitud. En buena medida, las revelaciones hechas por el embajador portugués daban cuenta de una predisposición anímica –de rechazo, naturalmente– de Frei Montalva respecto al gobierno de la UP. Cabe suponer que para de Castro e Abreu este tipo de episodios y conversaciones, y la información que luego trasladaba sobre las mismas a la Cancillería portuguesa, se hacía con el propósito de reafirmar y respaldar su visión crítica de la experiencia socialista chilena. De este modo, no eran solo las percepciones de un representante diplomático las que daban cuenta de los peligros del proceso que se vivía en Latinoamérica, sino que también aquellas realizadas por actores políticos de primera línea, como era en este caso el expresidente demócratacristiano.

Pocas semanas después de enviado el anterior documento, de Castro e Abreu, refirió un informe más extenso, esta vez enmarcado en torno a la coyuntura de las elecciones municipales celebradas a comienzos de abril. En dicho documento, en que se analizó brevemente el resultado electoral, comentaría sobre el incidente que acabó con la vida de un militante demócratacristiano en el sur del país a raíz de un enfrentamiento con brigadistas del PS. El diplomático portugués manifestaría en relación a este suceso que el secretario general del partido, Carlos Altamirano, se “esforçou-se por culpar os demócratas-cristãos do triste sucesso, acusando-os de provocadores”. El incidente, continuaba de Castro e Abreu, había impresionado bastante a Allende quien prometió castigos enérgicos para los culpables.²¹¹ Cabe indicar que el referido informe fue acompañado de tres recortes de la prensa chilena correspondientes solo a periódicos de la oposición (*La Prensa* y *Las Últimas Noticias*), proceder que era bastante característico en la manera de informar de este embajador.

A finales de abril, los informes portugueses vuelven a entroncar con el tema de la agitación y la presencia de activistas extranjeros en la política chilena. En un escrito del 28 de abril, de Castro e Abreu, apoyándose en

información proporcionada por el periódico del PDC, *La Prensa*, advertía con preocupación la llegada de personajes como el ministro cubano Rafael Rodríguez y del cantante Dean Reed. Este último, según el embajador, había sido contratado por la Central Única de Trabajadores (CUT) como “concientizador de masas”. También inquietaba a este diplomático la llegada de numerosos miembros “dos grupos marxistas e terroristas de vários países deste continente para formar a «Brigada Internacional.»”²¹² Lo anterior constituía, bajo la óptica del embajador luso, una prueba irrefutable del carácter revolucionario y extremista que tenía el proyecto de la UP tanto a escala local como también desde un ángulo regional. Es decir, la experiencia socialista chilena se vinculaba, a través de un permanente trasvasije e intercambio de activistas y terroristas de izquierda, a un propósito continental –y por cierto mundial– de expansión del comunismo.

Como era de suponer, todas estas aprehensiones y perspectivas críticas con que el representante portugués miraba el desarrollo de los acontecimientos en Chile se verían reafirmados a raíz del crimen de Edmundo Pérez Zujovic. La primera comunicación con la Cancillería de su país fue un telegrama fechado el mismo día del homicidio, 8 de junio, a las 14:04 de la tarde a través del cual comunicaba las primeras referencias en torno a este hecho.²¹³ En su informe del día 10 de junio, en tanto, entregó más antecedentes sobre el caso. Allí, además de sostener que el exministro era un hombre moderado, “bom e patriota”, indicó que la cadena radial realizada por el gobierno, a efecto de informar a la población sobre el luctuoso suceso, fue aprovechada para dar una interpretación conveniente a sus intereses políticos. En dicha transmisión, apuntaba de Castro e Abreu, se dibujó un cuadro de “conspiração e deliberada provocação” cuyo objetivo no era otro que alterar el orden constitucional e impedir la implantación del socialismo.²¹⁴

Un énfasis similar para referir las características de los individuos que cometieron el homicidio refirió *Diário de Notícias*, que sostuvo que tanto Ronald Rivera Calderón como su hermano Arturo formaban parte de un grupo de “disidentes marxistas e criminosos de delito común.”²¹⁵ *Diário de Lisboa*, por su parte, indicó que Ronald Rivera Calderón era um “extremista sem profissão conhecida” además de poseer un “cadastro bem guarnecido.”²¹⁶ *Jornal de Notícias* caracterizó a este individuo como un “pergioso cadastrado, autor

de vários assaltos e atentados mortais”, además de sindicarlo como jefe de un grupo “de mais de 15 elementos extremistas da esquerda”. No obstante estos énfasis, este periódico indicaba una importante consecuencia política derivada del crimen, a saber, que se ponía en peligro la alianza entre la izquierda y el PDC.²¹⁷ Finalmente, *O Século* indicó que la muerte de uno de los responsables del homicidio en el marco de un enfrentamiento con la policía ocurrió poco después de se anunciara la creación de una “alta comissão” encargada de dirigir las investigaciones.²¹⁸

Al mirar las percepciones portuguesas, sobre todo aquellas de su representante diplomático, cabe destacar que estas fueron bastante más críticas que las emanadas desde la embajada española. Desde esta última repartición, aun cuando no se compartía el perfil ideológico del proyecto chileno, hubo visiones más matizadas respecto a las dinámicas sociales y políticas del periodo y el origen de los problemas. El análisis del embajador portugués a lo largo de este primer semestre de 1971 fue cerradamente crítico con la UP, responsabilizando solo a las autoridades de gobierno y las bases militantes de la izquierda por los hechos de violencia que sucedían en el país. Tal diagnóstico emergía en función de algunos ejes a partir de los cuales se interpretaba la totalidad del proceso político chileno, siendo uno de los más importantes aquel que caracterizaba esta experiencia como un proyecto encaminado a construir un estado totalitario.

A lo largo del segundo semestre de 1971, la oposición a la UP retomó un papel protagónico en la escena pública, dejando atrás una etapa de cierto enclaustramiento en la que se encontraba. Sin duda la sensación ambiente era ya distinta. Junto a las grandes transformaciones que materializaba el gobierno, surgieron los primeros problemas, como el desabastecimiento o el incremento de la confrontación política entre ciertos actores. Todo ello impregnaba, quiérase o no, a una sociedad que en su conjunto veía un cambio significativo en la forma en cómo se desarrollaba la lucha social y política. Fue en este contexto que la oposición coordinó una importante acción de masas en la capital a inicios del mes de diciembre. El evento, conocido como la marcha de las cacerolas vacías, agrupó a miles de mujeres que premunidas de utensilios de cocina como ollas y sartenes reclamaban en contra de la escasez de alimentos que se vivía en algunos barrios.²¹⁹ Al cabo de unas

horas, la marcha cambió de tono sucediéndose violentos enfrentamientos entre brigadistas de gobierno y oposición.²²⁰ En el balance final se anotaron decenas de heridos de diversa consideración –inclusive por el uso de armas de fuego– y daños a la propiedad pública y privada. El impacto de la marcha y sus consecuencias encontró al oficialismo sin respuestas inmediatas para procesar y entender el significado de esta protesta. Solo algunos dirigentes comprendieron que este tipo de eventos estaba marcando un punto de inflexión respecto a la forma en cómo la oposición confrontaría al gobierno a partir de ese momento.²²¹

En menos de seis meses, el cuadro político había cambiado radicalmente en Chile. Si a inicios de 1971, el oficialismo podía mostrar un avance progresivo en distintas áreas y materias, al finalizar este año un manto de dudas comenzaría a sobrevolar en la izquierda en relación a la viabilidad y proyección del programa socialista. Eric Hobsbawm, había advertido en un artículo de prensa publicado en septiembre de 1971 en Estados Unidos que los problemas económicos en Chile se agudizarían en los meses siguientes, debido sobre todo al carácter dependiente de la estructura productiva del país sudamericano.²²² Como se puede advertir, comenzaban a emerger distintos problemas dentro de la experiencia socialista chilena, los cuales eran advertidos por los propios protagonistas de este proceso y por algunos observadores extranjeros. En este contexto, las miradas y percepciones ibéricas tomaron nota con bastante detalle respecto a este nuevo cuadro que se estaba configurando en el país sudamericano.

En el mes de octubre, las comunicaciones de la embajada española dieron cuenta de un hecho de violencia que tocaba directamente a la representación diplomática. Un funcionario español, identificado como Juan Pérez Gómez, fue herido a bala cuando paseaba cerca de su hogar en horas de la noche. Una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fechada en Madrid el día 11 de octubre, comentaba algunos detalles del hecho. Se indicaba, en efecto, que la víctima fue atacada con un arma de fuego por dos hombres que lo abordaron mientras caminaba por calle Carlos Antúnez. Por fortuna, continuaba el documento, el disparo solo dañó el dedo de una mano, quedando el proyectil alojado en la dermis del abdomen.²²³ Aunque las referencias del embajador Sainz de Llanos y las notas publicadas por la

agencia EFE hablaron de inmediato de un ataque de connotaciones políticas²²⁴, el documento antes citado indicaba que se había ordenado al director general de Política Exterior que se modificase “la connotación política del atentado.” Para María José Henríquez este hecho se insertaba dentro de un contexto más amplio relacionado con la incompreensión que suscitaba entre numerosos actores una política exterior dialogante y respetuosa entre dos proyectos de muy diferente signo ideológico. Con todo, sentencia Henríquez, el hecho no agrietaría las relaciones chileno-españolas, manteniendo a firme el propósito de “vencer las resistencias y generar las confianzas.”²²⁵

Superado este hecho, los informes del embajador español retomaron su atención en aquellos temas de fondo del proceso social y político que se vivían en Chile. Gran parte de estos tópicos estaban articulados, pues, en torno a numerosos conflictos y tensiones que afloraban con mayor periodicidad en distintos puntos del país. El impulso transformador de la UP había generado una amplia movilización social de distintos actores, tanto de quienes deseaban sumarse al proyecto de construcción del socialismo como de aquellos que se oponían enfáticamente a él. Cuando ambas visiones comenzaron a confrontarse en distintos espacios los hechos de violencia no tardarían en aparecer. A finales del mes de octubre, un miembro del MCR, identificado como Moisés Huentelaf, perdió la vida en un intento de toma de un fundo en la provincia de Cautín, al sur del país. El hecho generó numerosas reacciones en distintos actores, además de reforzar los discursos más radicalizados de la organización a la que pertenecía Huentelaf que era el brazo político del MIR en las zonas rurales.

El embajador Sainz de Llanos advirtió sobre el tenor de los discursos que estaban apareciendo en la esfera pública a propósito de este caso. En un informe de inicios del mes de noviembre, el diplomático comentaba sobre la concentración pública que realizó el MIR como homenaje a la víctima. Dicho encuentro, según indicaba el diplomático, se caracterizó por su “máximo extremismo revolucionario”. Adicionalmente, se daba cuenta que no obstante las fricciones y quiebres existentes entre el movimiento izquierdista y el oficialismo, era bastante habitual verificar la existencia de una doble militancia entre miembros de ambos sectores, llegando a colaborar incluso en “actividades extremistas fuera de toda legalidad.”²²⁶

El anterior suceso y la preocupación manifestada por el embajador español se enmarcaban dentro de las coordenadas que comenzaban a estampar un ritmo particular a la vía chilena al socialismo. Como se indicó más arriba, en el segundo semestre de 1971 se hacía evidente que los niveles de confrontación se habían incrementado en distintos puntos del país, sobre todo en aquellos lugares que como las zonas rurales constituían un espacio de materialización concreta del programa de la UP. En dichos lugares, había comenzado a emerger sostenidamente una organizada oposición a los planes de transformación gubernamental, lo que se traducía en la aparición de grupos de choque y plataformas de defensa de ciertos intereses levantados desde la civilidad. Resultaba evidente que existían resistencias importantes en algunos sectores de la sociedad chilena al proyecto socialista.

Respecto a la denominada marcha de las cacerolas vacías de diciembre de 1971, el encargado de negocios de la embajada española, Domingo Sánchez y Sánchez, refirió en distintos documentos las alternativas de estos sucesos. En un telegrama enviado el 2 de diciembre, el funcionario indicaba que la manifestación femenina protestaba por la creciente escasez de alimentos y tensa situación política. Sobre las medidas adoptadas por la autoridad, se indicaba que la finalidad de estas (declaración del Estado de Emergencia) era cortar por la base la creciente oposición al Gobierno.²²⁷ Al día siguiente, en un informe de mayor extensión, Sánchez precisaba que la oposición de signo más extremo estaba encaminada a concretar una nueva escalada antigubernamental, lo que la situaba como un actor responsable del clima de polarización que existía. Con todo, el funcionario diplomático también recordaba que las brigadas de choque de comunistas y socialistas habían atacado con violencia a los manifestantes. Las consecuencias prácticas de esta confrontación, apuntaba Sánchez, eran un centenar de heridos, “algunos de ellos a bala de origen desconocido”, disparos y lucha cuerpo a cuerpo entre diversos individuos.²²⁸

En los medios escritos hispanos se informó desde distintos ángulos sobre este suceso. Para *ABC* la manifestación del 1 de diciembre representaba una reacción del pueblo chileno en contra del gobierno de Allende debido a que las “doradas promesas electorales” se habían traducido “para una inmensa mayoría de ciudadanos” en escasez y penuria. A la hora del balance, este

medio destacaba que se habían registrado más de cien heridos y casi ciento treinta detenidos en una manifestación que contó con la escolta de grupos de choque de la oposición.²²⁹ En esta misma edición se incluyó una significativa columna de Miguel Torres titulada El polvorín chileno, en la cual se describía el “terrible escenario” que se había abierto en Chile con este tipo de incidentes. A juicio del columnista, se trataba de la más grave crisis de orden público desde el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, al tiempo que responsabilizaba a Fidel Castro –quien se encontraba de visita en el país– por haber acelerado el proceso de descontento de un sector amplio de la población. En esta misma línea Torres responsabilizaba de este clima de tensión al Gobierno “frentepopulista” y a los grupos de extrema izquierda que parecían actuar “en la más absoluta impunidad”.²³⁰ En ediciones posteriores, se remarcarían énfasis similares al sostener, por ejemplo, que cabía dilucidar hasta qué punto la radicalización abierta con la visita de Castro no había sido intencionalmente buscada con el objetivo de entrar “a la vía totalitaria.”²³¹

Para el periódico *El Alcázar*, se trataba de uno de los incidentes callejeros más graves de los registrados durante la administración de Allende, enfoque que se vería reforzado con las palabras del propio mandatario quien calificaba este hecho como parte de un “plan sedicioso”.²³² Conectando este evento con la visita que realizaba a Chile Fidel Castro, este medio sostuvo que su acto de despedida se realizó en un contexto que todavía vivía las “tensiones” desencadenadas por los “hechos de violencia” registrados en la marcha de mujeres del día miércoles 1 de diciembre.²³³ En los días posteriores, *El Alcázar* consignó con bastante detalle los desórdenes y enfrentamientos que todavía se producían en Santiago, como aquel incidente que dejó a tres jóvenes heridos tras atacar a una patrulla de la Policía de Investigaciones.²³⁴

La perspectiva del diario *Pueblo* fue bastante interesante en virtud de que las notas de prensa sobre estos incidentes fueron realizadas por su enviado especial a la capital sudamericana, Gonzalo de Bethencourt. En su edición del día 2 de diciembre, el informe de este corresponsal indicaba que Chile había vivido el día “de más dramática violencia” desde el asesinato del general Schneider ocurrido en octubre de 1970. Es decir, se trataba de un evento que además de sus implicancias inmediatas, marcaba un relevante punto de

inflexión para el mediano y largo plazo. Desde su privilegiada estancia en Santiago, de Bethencourt indicaba haber sido testigo de cómo las “fuerzas de choque de la oposición”, donde actuaban elementos democratacristianos, del PN y del FNPL, cortaban algunas avenidas del sector oriente de la capital gracias al uso de barricadas incendiarias. No obstante este punto, el corresponsal reconocía que por encima de las llamas se produjo prontamente un nutrido intercambio de piedras entre los opositores y las fuerzas de choque de la izquierda. Respecto a la marcha de las cacerolas vacías, de Bethencourt –que cifraba la convocatoria en cerca de sesenta mil mujeres– consignaba que habían sido hostilizadas por grupos de izquierda, a lo que sumó luego la acción de Carabineros que las dispersó con gases lacrimógenos.²³⁵

Desde las páginas de *Arriba* se abordaron distintas perspectivas sobre este suceso. Si bien los énfasis de este medio seguían destacando los esfuerzos de las autoridades por mantener la vía chilena al socialismo dentro de los cauces legales e institucionales, aquellas miradas más críticas con el Gobierno de Allende comenzaron a tener cada vez más espacio. Así, por ejemplo, el periodista J. L. Gómez Tello, que también escribía para la revista *Fuerza Nueva*, comenzaría a publicar columnas de actualidad en este periódico a objeto de analizar diversos aspectos de la política mundial, pero con especial atención en Latinoamérica. En una de ellas, aparecida el 13 de noviembre, Gómez Tello sostenía que la visita de Fidel Castro a Chile podía servir a Allende para calmar las “impacencias” de la izquierda más ultra que le presionaba periódicamente, aunque también se preguntaba si la llegada del líder cubano no provocaría acaso un desbordamiento hacia la izquierda en el país andino.²³⁶

Sobre los sucesos del 1 de diciembre, las notas de prensa de *Arriba* se orientaron a recalcar la gravedad de lo sucedido, haciendo hincapié en el gran número de heridos y detenidos producto de los choques que se verificaron en el centro de la capital. Esto obligó, señalaba el periódico falangista, a que el Gobierno decretara el estado de excepción en Santiago para hacer frente a los “sangrientos disturbios” que se habían sucedido en las últimas horas.²³⁷ Esta mirada compartió el espacio con aquellos enfoques que analizaron la realidad chilena desde una perspectiva más crítica para con el proyecto de la UP. El editorial de *Arriba* del día 4 de diciembre soste-

nía, en efecto, que esta alianza se encontraba ahora frente a una oposición importante, “multitudinaria y organizada” que rechazaba la posibilidad de que en Chile se estableciera una “República marxista”. En este sentido, se recalca que el presidente Allende no tendría más remedio que moderar sus objetivos doctrinarios, o de lo contrario, “arrojar la careta” y presentar el verdadero rostro de la vía chilena al socialismo, el cual hasta ahora permanecía encubierto.²³⁸ Por su parte, Jesús Suevos indicó a través de su columna “Socialismos contradictorios” que los proyectos políticos de Fidel Castro –quien estaba por finalizar su visita a Chile– y Salvador Allende representaban cuestiones diferentes entre sí. Mientras el líder caribeño era tildado como un “fascista de izquierdas”, el presidente chileno representaba un perfil socialdemócrata que buscaba implantar un socialismo con “rostro humano”. Aunque ambas experiencias se distanciaban en diversos puntos, ninguna de las dos, según Suevos, podría ser la solución para los problemas de Latinoamérica. En el caso chileno, el principal problema radicaba en que la revolución que se había propuesto llevar adelante Allende se había hecho entregándole las armas “al enemigo”, es decir, manteniendo el grueso de las estructuras institucionales propias de una democracia liberal desde donde lucharía la oposición.²³⁹ Los hechos del 1 de diciembre se prestaron, así, para que a través de las páginas de *Arriba* circularan numerosos puntos de vista sobre la realidad chilena, no enfocándose únicamente en una perspectiva doméstica del problema.

En *La Vanguardia*, en tanto, se enfatizaría que los desmanes habían sido provocados por “manifestantes antigubernamentales” en el marco de “la mayor y más violenta” manifestación producida en contra del Ejecutivo. El saldo que anotaba este periódico indicaba la existencia de dos personas heridas a bala, seis atendidas en estado grave y más de noventa examinadas por contusiones leves.²⁴⁰ El énfasis de este medio, a diferencia de los puntos que recalca *ABC*, estuvo puesto en el carácter anti oficialista y violento de la marcha, destacando la participación de numerosos grupos de choque de la oposición. Respecto al eventual impacto que supuso la visita de Fidel Castro para acelerar el clima de confrontación en Chile, *La Vanguardia* no se hizo eco de estas interpretaciones, anotando por contrapartida –el día 4 de diciembre– algunos detalles del “multitudinario” acto de despedida que se

realizó en su honor en la capital chilena. En esta misma edición, el periódico catalán volvió a poner el centro de atención en los disturbios que se habían producido entre el 2 y 3 de diciembre, situación que obligó al Gobierno a decretar el toque de queda.²⁴¹

Desde su tribuna en *Sábado Gráfico*, Alfonso Palomares hacía un interesante análisis sobre la visita de Castro a Chile señalando que el líder cubano y Allende representaban dos vías revolucionarias diversas en sus métodos y dialécticas. No obstante ello, Palomares destacaba que la aceptación de Fidel para conocer la experiencia chilena reflejaba su “sentido realista” de los procesos sociopolíticos que afloraban en el continente.²⁴² Por la fecha de cierre de esta edición, el autor no pudo englobar en un solo artículo el viaje de Castro con la marcha de las cacerolas vacías y el cambio de ciclo que parecía avvicinarse en Chile. Como era de suponer, las referencias de *Fuerza Nueva* a la visita de Castro a Chile se caracterizaron por sus críticas tanto al líder caribeño como al presidente Allende a quien acusó de ser el mascarón de proa de una confabulación de “socialistas, comunistas e izquierdistas de todo pelaje.” La nota era acompañada por algunas imágenes que mostraban diversos enfrentamientos y desórdenes ocurridos en las calles de Santiago, aunque no se señalaba con claridad que ellas correspondieran a la denominada marcha de las cacerolas vacías.²⁴³

Finalmente, *Mundo Obrero* explicitó diversos elementos para referir la marcha de la oposición del día 1 de diciembre. La nota firmada por Marcos Ana, seudónimo de Fernando Macarro Castillo, insertaba esta manifestación en el contexto de una profunda lucha de clases, donde cualquier dificultad era aprovechada para crear un descontento en contra del gobierno. A juicio del columnista, la marcha reflejaba el descontento de “señoras y señoritos” que bajaban con sus ollas vacías y los “estómagos llenos” arrastrando tras de sí a algunas personas traumatizadas por la demagogia demócratacristiana. Sobre la naturaleza de la manifestación, el columnista no duda en tacharla de reaccionaria al tiempo que recalca cómo “pistoleros fascistas” habían cometido numerosos desmanes y atentados. Al finalizar su texto, el autor sostenía que la alianza de izquierda debía reafirmar su unidad, ampliándose “sin sectarismo”, ganándose a las clases medias y aislando a la derecha antinacional y reaccionaria.²⁴⁴

La carta de un militante comunista español, de paso por Chile a finales de 1971, aporta algunas interesantes referencias respecto a la visión de los cubanos sobre el proceso político chileno en el marco de la visita de Fidel Castro. Según la misiva, un aspecto “muy valioso” de lo dicho por el líder caribeño en uno de sus mítines se refería a que visualizaba a los propios cubanos como “especialistas en errores” situación que les permitiría estar en condiciones de enseñar a los chilenos a no cometer “esos mismos errores”. También comentaba que la delegación cubana se había formado la opinión de que el gobierno de la UP no era todo lo representativo que debería ser y que en él había personalidades que simplemente eran “amigos de Allende” y no tenían militancia política. Por otra parte, los cubanos concluyeron que en cuestiones contingentes la derecha estaba “más unida” que la izquierda y con capacidad para montar una “inteligente campaña” en contra del Gobierno. En relación a la marcha de las mujeres por el centro de la capital, se indicaba que la delegación isleña consideraba que ante el desfile opositor se debió haber dado una “respuesta de masas.”²⁴⁵

Considerando todos estos elementos, la marcha de las cacerolas vacías había tenido, sin duda, una amplia repercusión nacional e internacional, suscitando numerosas preguntas en torno al origen y consecuencias de un hecho que impactaba a distintos observadores. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España resaltó, a través de una nota informativa, la gravedad de la situación que se vivía en Chile debido a la imposibilidad “absoluta” de diálogo entre las partes enfrentadas.²⁴⁶

Una óptica que responsabilizaba exclusivamente al oficialismo por el clima de confrontación existente en Chile se pudo advertir en otro documento español de esas semanas. El escrito, que está basado en un informe de una “personalidad europea” que acababa de visitar Chile, indicaba la existencia de una “economía decadente” y una situación política cada vez “más caótica”. A partir de esta constatación, el documento señalaba que el conjunto de acontecimientos que se vivían en Chile se deslizaba “hacia un importante desenlace”, aunque reconocía que el Ejército no estaba todavía preparado para hacer nada. Además, se mencionaban distintos hechos de coyuntura como el “terrorismo en las universidades” o la organización, por parte de la izquierda, de su “propio ejército privado” para graficar la compleja situación

que se vivía. Bajo este panorama, el informe creía imposible la realización en Chile de un “referéndum honrado.”²⁴⁷

Por último, otra nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores fechada a finales de diciembre llamaba la atención sobre diversos aspectos de la realidad chilena. El documento parte por describir la situación social y política del país sudamericano como “inquietante”, haciéndose evidente la aparición de rasgos como el encono y la intransigencia en distintos actores, tanto de oposición como de Gobierno. En segundo término, la nota indicaba la existencia de cierta inquietud en algunos círculos militares dada la situación imperante, lo cual tenía cierta conexión con las esperanzas de la derecha en que se decantara algún tipo de golpe de Estado. En su parte final el texto recomendaba una “actitud de prudencia” de parte de las autoridades españolas respecto a Chile.²⁴⁸

Mirado en su conjunto, la mayor parte de las reacciones españolas no dejaban de advertir con algo de sorpresa la situación que se había desencadenado en Chile a raíz de la marcha de las cacerolas vacías. Aunque hubo miradas que entendieron esta coyuntura como una respuesta a las limitaciones y vacíos del programa socialista chileno, estas fueron bastante específicas concentrándose de preferencia en ciertos sectores de la prensa conservadora y nacionalista, y en un número muy acotado de documentos diplomáticos. El resto de las miradas provenientes desde España y su embajada recalcan que la situación chilena era preocupante, pero advertían al mismo tiempo sobre la responsabilidad que tenían numerosos actores, incluida la oposición y sus grupos de choque, en el desarrollo y advenimiento de este escenario. Evidenciando una dosis no menor de pragmatismo y cautela, las autoridades peninsulares reconocían que se trataba de un contexto complejo y que en ningún caso su decantación podía atribuirse solo al oficialismo.

Por su parte, y al igual que como había ocurrido en otras coyunturas, la mirada diplomática del representante portugués fue resueltamente crítica con la experiencia socialista en este periodo. Ya antes de los sucesos ocurridos en diciembre, el embajador luso daría cuenta de los elementos que más le inquietaban en el actuar de la izquierda chilena. En un informe confidencial, fechado el 23 de agosto, de Castro e Abreu comentaba el análisis que se había realizado en la Cámara de Diputados a propósito de la ola de

violencia que reinaba en el campo y también respecto a las últimas declaraciones efectuadas por el líder del MIR, Miguel Enríquez. Estas llamaron la atención del representante portugués toda vez que en ellas se indicaba que uno de los miembros de la directiva nacional del movimiento, Luciano Cruz, disponía de numerosos “expedientes para iludir a perseguição policial”. Adicionalmente, reveló que el dirigente mirista procuraba captar para su causa a “oficiais jovens do Exército.”²⁴⁹ Sin duda este era un punto problemático para el embajador porque reafirmaba el carácter subversivo que tenía buena parte de la izquierda chilena, con capacidad táctica para inclusive tomar contacto con las Fuerzas Armadas, y en el cual venía insistiendo desde hacía bastante tiempo atrás.

En el mes de octubre, de Castro e Abreu volvería a insistir en estos tópicos al comentar las declaraciones del ministro del Interior quien señaló que tras el homicidio de Edmundo Pérez Zujovic debían darse por concluidas las actividades de la ultraizquierda armada. A juicio del embajador, tales afirmaciones no eran correctas y más aún aparecían “desmentidas pelos factos” pues al margen del MIR “foram-se constituído outros grupos sediciosos.”²⁵⁰ Como es de suponer, a juicio del diplomático, el concepto de sedición representaba únicamente el actuar de los grupos de izquierda y no así de aquellos pertenecientes a la derecha o de quienes buscaran derrocar al gobierno de la UP.

En la coyuntura que se vivió a mediados de noviembre de 1971, a propósito de los enfrentamientos ocurridos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la mirada crítica del embajador luso volvió a hacerse presente en contra de la izquierda. Cabe recordar que este conflicto se arrastraba desde el mes de octubre cuando el Consejo Superior de dicha universidad estableció una nueva estructura orgánica para varias facultades. La oposición, que controlaba la rectoría, así como diversos centros de estudiantes, se opuso a la medida iniciándose un proceso de toma y paralización de diversas dependencias y escuelas del plantel de educación superior. En este contexto, las disputas y enfrentamientos no tardaron en aparecer entre los alumnos de oposición y del oficialismo.

En un telegrama del día 18, de Castro e Abreu informaba que las brigadas de choque de los partidos comunista y socialista, además del MIR, ha-

bían atacado “brutalmente com ácido, ferros e outros objectos contundentes a alunos anti-marxistas”, infringiendo numerosas quemaduras y heridas.²⁵¹ Días más tarde, el diplomático portugués volvería a referirse a este tema evidenciando así que el conflicto en la Universidad de Chile no era, al igual como sucedía con otros casos, un problema aislado o marginal dentro del debate público. En un informe del 23 de noviembre, de Castro e Abreu sostenía que el conflicto entre los estudiantes de la UP y el denominado Frente Universitario que agrupaba a la oposición revestía “novos aspectos de discrepância e violencia” que se proyectaban hacia la esfera gubernamental, parlamentaria e inclusive judicial. En su parte final, el embajador volvía a llamar la atención respecto a los desórdenes y enfrentamientos producidos entre los días 16 y 17 de noviembre responsabilizando solo a los militantes de izquierda por el origen de dichos actos.²⁵²

Bajo la óptica del representante portugués, el cuadro generalizado de desorden y enfrentamientos que comenzaba a apoderarse de las calles del país tenía en las huestes de izquierda su factor precipitante. Ello no significaba que los grupos opositores no respondieran a las agresiones o no estuvieran plenamente incorporados a la lucha política, sino que en la perspectiva del embajador ello se situaba siempre como una reacción a las actitudes violentas y provocaciones iniciadas por los partidarios de la UP. En este sentido, de Castro e Abreu consideraba que la única violencia condenable, y que más aún estaba vinculada a propósitos programáticos más estructurales, era aquella que emanaba desde la izquierda chilena.

Sobre los hechos del 1 de diciembre, el diplomático luso destacó la cantidad de heridos que hubo, deteniéndose en especial en el segmento femenino que fue atacado por las huestes de izquierda con piedras, fierros “e batatas recheadas de lâminas de barbear.”

En los medios escritos portugueses se observó una mirada un poco más matizada para referir esta coyuntura. De hecho, gran parte de los periódicos de este país consignaron que en los desórdenes que se habían producido en la capital chilena tuvieron participación grupos de choque tanto del oficialismo como de la oposición. *Diário de Noticias* comentaba inclusive de algunos incidentes y agresiones que habían afectado a figuras del gobierno, incluyendo un apedreamiento al vehículo del presidente Allende. A juicio de este

medio, desde hacía varios días la confrontación ideológica entre los partidos oficialistas y de oposición había degenerado en “campanhas de violência.”²⁵³ *Jornal de Noticias*, por su parte, consignó en primer término las reacciones de las autoridades respecto a que los incidentes registrados en la noche del día 2 de diciembre correspondían a un plan subversivo destinado a destruir “o régimen democrático e o reino do Direito.” Sobre la marcha de mujeres, este medio indicó que, en el marco de su desarrollo, militantes de izquierda y de la oposición entraron en conflicto dejando un saldo de 96 heridos y 120 detenidos.²⁵⁴ En *O Século* se señalaba que elementos izquierdistas “agitando bandeiras vermelhas e pretas do Movimento Revolucionário de Esquerda” atacaron a una columna de mujeres. Dicha acción, continuaba el periódico, produjo que “elementos opositoristas armados de cacetes” intervinieran para repeler a los atacantes.²⁵⁵ Fue *Diário Popular*, en tanto, el medio que conectó de modo más explícito la visita de Fidel Castro con el clima de polarización que existía en Chile. A juicio de este medio, la gira del primer ministro cubano había aumentado las “divisões internas” en el país, exacerbando a la extrema derecha y aproximando a la oposición centrista con aquella conservadora. El periódico finalizaba señalando que a pesar de que Castro se marchaba la situación quedaba “mais tensa” con manifestaciones y contramanifestaciones multiplicándose a lo largo del país y con espíritus cada vez más “quentes.”²⁵⁶

Desde el punto de vista de la prensa escrita se observaba una visión más heterogénea para referir los incidentes del 1 de diciembre. Un punto de análisis que fue transversal en este sentido indicaba que en los enfrentamientos habían participado, con similares grados de intensidad, grupos de uno y otro bloque político. Tal perspectiva guardaba un margen de diferencia con las anotaciones y análisis que hiciera el embajador de Castro e Abreu, para quien la marcha de las cacerolas vacías había sido interrumpida por la acción extremista de los grupos de izquierda. Adicionalmente, en los informes de este diplomático no se hizo ninguna mención a los grupos de choque de la oposición que custodiaron a las manifestantes, los cuales marcharon también con una predisposición anímica proclive al enfrentamiento. Tampoco hubo mayores referencias sobre los incidentes que se produjeron en la madrugada del día 2 de diciembre en el sector oriente de la capital,

donde tenían una fuerte presencia grupos como Patria y Libertad y en general sectores juveniles de la oposición. Desde el ángulo del embajador luso, la violencia que se materializó a contar del 1 de diciembre en las calles de la capital quedaba remitida solo a aquella que provenía desde la izquierda y sus bases militantes.

Al finalizar 1971, quedaba flotando en el aire una atmósfera de mayor polarización y crisis en Chile que los países ibéricos entendieron desde premisas distintas. Para España se estaba transitado hacia un cuadro de mayor complejidad, que daba cuenta de un país donde sus pilares históricos y culturales se iban resquebrajando con inusitada celeridad. Con todo, ello no era un obstáculo, como tampoco lo serían las diferencias ideológicas, para avanzar en los procesos de cooperación económica e intercambio comercial entre ambos países. Con seguridad la mirada hispana advertía, como de hecho lo habían indicado algunos medios escritos de la península, que el proyecto de la UP transitaba por un camino lleno de obstáculos en que la oposición jugaría un papel importante en la reafirmación, o erosión, de los marcos institucionales.

Para Portugal, y en especial para la mirada de su representante diplomático, el punto central de análisis partía desde una premisa fundamental. El programa socialista de Allende constituía en sí mismo un factor vehicular en la expansión del comunismo internacional, situación que obligaba a hacer una lectura crítica sobre esta experiencia. De este modo, la totalidad de coyunturas y episodios críticos que se vivían bajo el gobierno de la UP se analizaban como producto de las acciones u objetivos estratégicos de la izquierda por avanzar en la construcción de una tiranía comunista. Es decir, el actor más relevante en este plano era la izquierda en su afán por ubicar a Chile dentro de la órbita del marxismo internacional, situación que dejaba a la oposición en un papel más bien pasivo frente a la amenaza oficialista. A partir de estos elementos, la mirada portuguesa destacaría recurrentemente las medidas represivas que se tomaban en contra de la oposición o en el accionar violento de los grupos armados de la extrema izquierda que buscaban acelerar el programa de gobierno. Como se puede suponer, este tipo de énfasis no se modificaría en los meses siguientes, sino por el contrario se reforzaría a partir de nuevas coyunturas y conflictos.

Notas

- 177** Una de las medidas de mayor significación política y económica de este periodo fue la Nacionalización de la gran minería del cobre aprobada en votación unánime por el Congreso Pleno el día 11 de julio de 1971.
- 178** Conferencia del ministro de Asuntos Exteriores de España en los Reales Alcázares de Sevilla, 26 de abril de 1971, en, Gregorio López Bravo, *España e Iberoamérica en la década de los años 70: Impresiones de un primer viaje*, Madrid OID. Biblioteca Escuela Diplomática, Caja 2 B/7, pp. 4-10.
- 179** Informe n° 74, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 5 de febrero de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.
- 180** *El Mercurio*, Santiago, 12 de enero de 1971, reproducido en, Arturo Fontaine y Miguel González (editores), *Los mil días de Allende*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1997, p. 57.
- 181** *Fuerza Nueva*, n° 211, 23 de enero de 1971, p. 16.
- 182** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 88, enero de 1971, pp. 27-28.
- 183** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 89, febrero de 1971, pp. 31-33.
- 184** La Unidad Popular alcanzó el 50,86% de los votos versus el 49,14% de la oposición. Se trató de un triunfo ajustado, pero que insufló de ánimo al conjunto del oficialismo. El mayor número de regidores que lograron los partidos opositores se compensó con la elección de alcaldes de izquierda en las principales ciudades del país, como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valdivia y Punta Arenas.
- 185** Informe n° 214, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 6 de abril de 1971. AGA, Leg. R-13429, expediente n° 53.
- 186** Felipe Guerra, "La Vanguardia Organizada del Pueblo y su escalamiento en la violencia política. Cultura política y militancia (1969-1971)." Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile, 2019 (Tesis de Magister).
- 187** Este fue el énfasis de la declaración que emitiese el PDC y que fue leída por el senador de este partido, Tomás Reyes, en la cámara alta. Véase, Senado, Diario de Sesiones, 5ª sesión, martes 8 de junio de 1971, p. 284.
- 188** *ABC*, Madrid, 9 de junio de 1971, p. 25.
- 189** *ABC*, Madrid, 10 de junio de 1971, p. 23.
- 190** *ABC*, Madrid, 12 de junio de 1971, p. 26.
- 191** *Triunfo*, n° 472, 19 de junio de 1971, pp. 4 y 5.
- 192** *El Alcázar*, Madrid, 9 de junio de 1971, p. 11.
- 193** *El Alcázar*, Madrid, 17 de junio de 1971, p. 14.
- 194** *La Vanguardia*, Barcelona, 9 de junio de 1971, p. 42.
- 195** *La Vanguardia*, Barcelona, 10 de junio de 1971, pp. 5 y 6.
- 196** *La Vanguardia*, Barcelona, 11 de junio de 1971, pp. 5 y 6.
- 197** *Arriba*, Madrid, 9 de junio de 1971, p. 1 y 14.
- 198** *Arriba*, Madrid, 15 de junio de 1971, p. 13.
- 199** *Arriba*, Madrid, 17 de junio de 1971, p. 14.
- 200** *Cuadernos para el Diálogo*, n° XXVI extraordinario, junio de 1971, p. 63.
- 201** *Fuerza Nueva*, n° 232, 19 de junio de 1971, p. 13.
- 202** Informe n° 374., del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 10 de junio de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83-3.
- 203** Telegrama n° 67, "my secreto", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores. Santiago, 13 de junio de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83-3.
- 204** Informe n° 397, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 17 de junio de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83-3.
- 205** *ABC*, Madrid, 17 de junio de 1971, p. 39.
- 206** *La Vanguardia*, Barcelona, 17 de junio de 1971, p. 20.
- 207** Carta del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores. Santiago, 25 de junio de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.
- 208** Aerograma n° 303, del embajador en Chile al ministro de Negocios Extranjeros, Santiago, 08 de enero de 1971. ADMNE, caja S3. E37.P2 / 35105, carpeta n° 326,20.
- 209** Aerograma n° 903, del embajador en Chile al ministro de Negocios Extranjeros, Santiago, 29 de enero de 1971. ADMNE, caja S3. E37.P2 / 35105, carpeta n° 326,20.
- 210** Aerograma n° 2727, del embajador en Chile al ministro de Negocios Extranjeros, Santiago, 19 de marzo de 1971. ADMNE, caja S3. E37.P2 / 35105, carpeta n° 326,20.

- 211** Informe PEA 142, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 07 de abril de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20, IIIª.
- 212** Informe PEA 171, del embajador al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 28 de abril de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20, IIIª.
- 213** Telegrama n° 5404, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 08 de junio de 1971. ADMNE, caja S3. E37.P2 / 35105, carpeta n° 326,20 IIIª.
- 214** Informe PEA 226, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 10 de junio de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20, IIIª.
- 215** *Diário de Noticias*, Lisboa, 10 de junio de 1971, p. 5.
- 216** *Diário de Lisboa*, 9 de junio de 1971, p. 22.
- 217** *Jornal do Noticias*, Porto, 10 de junio de 1971, p. 8.
- 218** *O Século*, Lisboa, 14 de junio de 1971, p. 6.
- 219** Un estudio en profundidad sobre el rol de la mujer opositora al gobierno de la Unidad Popular se encuentra en Margaret Power, *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973*, Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2008.
- 220** *El Mercurio*, Santiago, 2 de diciembre de 1971, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días... op. cit.*, pp. 244 y ss.
- 221** Entre ellos se cuenta el propio presidente Allende quien, según cuenta el general Carlos Prats, identificó claramente que la marcha de las cacerolas vacías tenía intenciones "más trascendentes". Véase, Carlos Prats, *Memoorias. Testimonio de un soldado*, Santiago, Pehuén, 1985, p. 229.
- 222** Eric Hobsbawm, "Chile: año uno", *New York Review of Books*, 23 de septiembre de 1971, compilado en Leslie Bethell (ed.), *¡Viva la Revolución! Eric Hobsbaum sobre América Latina*, Barcelona, Crítica, 2018 p. 417.
- 223** Documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid, 11 de octubre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3/1.
- 224** Telegrama, "secreto", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 12 de octubre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3/1. Tres días más tarde, el mismo embajador envió un informe en el cual indicaba que a pesar del cariz político que podía tener el hecho había decidido no hacer ningún tipo de declaración a efecto de no entorpecer las investigaciones ni tampoco poner al Gobierno en una posición delicada. Con todo, Sainz de Llanos reafirmaba que el hecho, si tenía la connotación política que él creía, podía endosarse tanto a la izquierda como a la ultraderecha, sector este último que estaba muy molesto por la política de cooperación y buenas relaciones que mantenían España y Chile. Véase, Informe N° 678, "reservado", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 15 de octubre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3/1.
- 225** María José Henríquez, "Los mil días Hispano-chilenos... op. cit.", pp. 283-284.
- 226** Informe n° 738, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 4 de noviembre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.
- 227** Telegrama n° 138, del encargado de negocios en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 2 de diciembre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3.
- 228** Informe n° 822, "reservado", del encargado de negocios en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 3 de diciembre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83. En una comunicación efectuada horas después, este mismo funcionario comentaba que a pesar de las medidas decretadas por la autoridad, los disturbios callejeros habían continuado en la madrugada del día 2 de diciembre provocando nuevos heridos. Véase, Telegrama n° 139, del encargado de negocios en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 3 de diciembre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.
- 229** *ABC*, Madrid, 3 de diciembre de 1971, pp. 1 y 17.
- 230** *ABC*, Madrid, 3 de diciembre de 1971, p. 19.
- 231** *ABC*, Madrid, 5 de diciembre de 1971, p. 18.
- 232** *El Alcázar*, Madrid, 2 de diciembre de 1971, p. 36.
- 233** *El Alcázar*, Madrid, 3 de diciembre de 1971, p. 44.
- 234** *El Alcázar*, Madrid, 4 de diciembre de 1971, p. 28.
- 235** *Pueblo*, Madrid, 2 de diciembre de 1971, p. 4.
- 236** *Arriba*, Madrid, 13 de noviembre de 1971, p. 10.
- 237** *Arriba*, Madrid, 3 de diciembre de 1971, p. 1.

- 238** *Arriba*, Madrid, 4 de diciembre de 1971, p. 3.
- 239** *Arriba*, Madrid, 5 de diciembre de 1971, p. 3.
- 240** *La Vanguardia*, Barcelona, 3 de diciembre de 1971, pp. 3 y 4.
- 241** *La Vanguardia*, Barcelona, 4 de diciembre de 1971, p. 25.
- 242** *Sábado Gráfico*, n° 755, 20 de noviembre de 1971, pp. 8 y 9.
- 243** *Fuerza Nueva*, n° 257, 11 de diciembre de 1971, pp. 10 y 11.
- 244** *Mundo Obrero*, Madrid, 24 de diciembre de 1971, p. 7.
- 245** Carta a camarada Santiago, La Habana, 19 de diciembre de 1971. Archivo Histórico Partido Comunista de España (en adelante, AHPCE), Sección Emigración Política. Microfilm Jacq. 506.
- 246** Nota informativa sobre actualidad política chilena. Madrid, 11 de diciembre de 1971. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3.
- 247** Documento "reservado" basado en informe de personalidad europea, diciembre de 1971. AGA, Leg. R-12111, expediente n° 2. El documento no tiene mayores referencias, aunque sí lleva adjunta una tarjeta de presentación del entonces ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez-Bella.
- 248** Nota informativa n° 312 sobre actualidad política chilena. Madrid, 28 de diciembre de 1971. AGA, Leg. R-12111, expediente n° 2.
- 249** Informe PEA 360, "confidencial", del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 23 de agosto de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20, VIª.
- 250** Informe PEA 472, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 22 de octubre de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20, VIIª.
- 251** Telegrama n° 10795, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 18 de noviembre de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20 / VIIª.
- 252** Informe PEA 550, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 23 de noviembre de 1971. ADMNE, caja S3. E37. P2 / 35105, carpeta n° 326.20, VIIª.
- 253** *Diário de Noticias*, Lisboa, 3 de diciembre de 1971, p. 1.
- 254** *Jornal de Noticias*, Porto, 3 de diciembre de 1971, p. 11.
- 255** *O Século*, Lisboa, 3 de diciembre de 1971, p. 5.
- 256** *Diário Popular*, Lisboa, 3 de diciembre de 1971, p. 28.

Dinámicas, conflictos y asedios a la vía chilena al socialismo

Para 1972 buena parte de los actores terminarían por definir con mayor precisión sus estrategias de acción bajo la perspectiva de una lucha que se fue percibiendo como de largo aliento. Es decir, se configurarían mejor los perfiles de los partidos y movimientos dentro de un marco de conflictos que exigía estrategias no solo de carácter coyuntural. Uno de los puntos centrales a definir, en este contexto, tendría que ver con la capacidad que tuviera el proyecto de la UP para consolidar sus transformaciones, sobrepasar los obstáculos –entre ellos, moderar el accionar de sus grupos más rupturistas– y proyectarse a lo largo del tiempo. Al calor de estos lineamientos y tensiones serán referidos los principales hechos de violencia política del periodo.

A finales de enero de 1972 un telegrama rotulado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España con el sello “estrictamente confidencial” fue remitido al despacho del jefe de Estado, Francisco Franco. En el documento, el nuevo embajador español en Santiago de Chile, Enrique Pérez Hernández, daba cuenta del cambio de gabinete que se había producido en el país sudamericano a propósito de la destitución del titular de Interior José Tohá. El diplomático comentaba a este respecto que el nombramiento del “obrero socialista” Hernán del Canto a cargo de aquella cartera no auguraba una “etapa de garantías individuales” ni tampoco una “salvaguardia del orden público” o, en último caso, un “freno” a las ocupaciones ilegales de fincas y fábricas.²⁵⁷ Lo que el embajador parecía advertir era que los cambios a nivel institucional que operaban en el gobierno de la UP no tenían mayor repercusión dentro la escena social y política como para frenar de forma significativa los conflictos y problemas que se sucedían en el país. Es decir, ya fuese por la incapacidad de los propios secretarios de Estado o por el nivel de

desbordamiento de los marcos legales de parte de los actores, la conducción político-estratégica del Ejecutivo se encontraba, en este contexto, seriamente cuestionada.

Con todo, la mirada del representante hispano también lograba advertir cierta prudencia en algunos círculos oficialistas. En la segunda quincena de marzo, con motivo de la negativa a autorizar una marcha de la oposición, Pérez Hernández sostuvo que dicha medida debía entenderse como producto de la situación de tensión que se vivía en el país. Más aún, el embajador español advertía que tal disposición evidenciaba el propósito del Gobierno en orden a evitar que cualquier enfrentamiento callejero pudiera desembocar en un conflicto de “más serias proporciones.”²⁵⁸ En buena medida, la mirada de este funcionario reflejaba que los puntos de tensión en Chile habían alcanzado un nivel preocupante, pudiendo llegar inclusive a generar un cuadro de insospechadas consecuencias. El marco de referencia para elaborar tal diagnóstico estaba centrado indudablemente en las consecuencias derivadas de la marcha de las cacerolas vacías de diciembre del año anterior, cuyos efectos todavía sobrevolvaban el ambiente político chileno.

Los primeros meses de 1972 testimoniaron efectivamente un incremento sostenido de diversos hechos de violencia, en especial en las zonas rurales del país, donde avanzaba con ímpetu la implementación de la reforma agraria. A mediados de enero, por ejemplo, un grupo de individuos asaltó el fundo La Rinconada ubicado en la zona de Curicó, al sur de la capital. En dicha operación, golpearon a los propietarios del terreno, los hermanos Eliana y Raúl Quezada Moreno, siendo este último el más afectado por la acción falleciendo en los días posteriores. Otro hecho de sangre se produjo en el marco de unas elecciones complementarias que se realizaron en la provincia de Colchagua, también de carácter rural, donde falleció un individuo identificado como Francisco Palominos Nalhue al ser atacado, al parecer, por activistas de una de las candidaturas. A inicios de marzo, las acciones de violencia seguían apareciendo en distintos puntos de la zona centro sur del país, sobre todo en lo que respecta a tomas de terreno por la fuerza y enfrentamientos al interior de las propiedades agrícolas.²⁵⁹

Resultaba evidente que el proceso de reforma agraria no se canalizaba en su totalidad a través de los marcos legales y normativos que había fijado

la autoridad, observándose numerosos actos que a través de la fuerza y la acción de distintos grupos tomaban en sus manos la ocupación de fundos y haciendas. Uno de los puntos más inquietantes que referían los testigos, nacionales y extranjeros, era que dentro de la escena chilena comenzaba a observarse un cuadro generalizado de polarización y enfrentamiento que no sería fácil de aplacar.

Dentro de estas coordenadas se ubicarían las impresiones que el cónsul general de España en Chile, Juan Pérez Gómez, transmitió en una carta al subdirector general de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Carlos Robles Piquer. En la misiva, fechada el día 10 de mayo, el cónsul señalaba que el país estaba en una “crisis feroz”, de consecuencias económicas negativas y con un Gobierno muy impopular. A juicio de Pérez Gómez, se rumoreaba la posibilidad de un autogolpe de parte de la UP para imponer orden en el país, lo que debía aquilatarse, en todo caso, respecto al proceder que tendrían los sectores más “extremistas del marxismo.”²⁶⁰

Una visión algo distinta del ambiente que reinaba en ese periodo tenía el militante comunista español Antonio Guardiola quien se encontraba de visita en Chile al mediar 1972. A través de un detallado informe que elevó a la dirección del PCE, Guardiola comentaba distintos aspectos de la experiencia socialista chilena, sin eludir, por cierto, las principales problemáticas que emergían en estos meses. Aunque reconocía que las transformaciones eran de importancia, este militante consideraba que ellas no se valoraban lo suficiente ni tampoco se explicaban a la población. Estas deficiencias, unidas a los episodios de división que se advertían en el seno de la UP, complotaban en contra del éxito de la revolución chilena facilitando por contrapartida la ofensiva de la oposición. Respecto al PC de Chile, Guardiola señalaba que era la fuerza más solvente, capaz e inteligente de la alianza, pero ello de poco servía si no se luchaba con unidad a favor de propósitos comunes. Por último, se indicaba que en base a impresiones recogidas dentro del entorno presidencial se observaba que tanto los asesores como el propio Allende demostraban demasiado “optimismo y confianza” en los recursos constitucionales.²⁶¹ Desde el ángulo en que miraba este observador, buena parte de los problemas por los que atravesaba la vía chilena al socialismo eran de naturaleza eminentemente política. Es decir, se apreciaban varios déficits

en materia de conducción estratégica, relación con las masas y despliegue de una política comunicacional adecuada que reforzara los logros del gobierno popular.

Por su parte, el embajador español retomó a mediados de mayo un punto que ya había explicitado a comienzos de año en relación con el papel y capacidad de interpelación que tenían las autoridades políticas. En este caso, Pérez Hernández, en referencia a un reciente hecho ocurrido en las afueras de Santiago (en que un grupo liderado por el MIR se había tomado las dependencias del juzgado local) reflexionaba sobre la capacidad de exhortación del propio Presidente Allende. A juicio del diplomático hispano, las palabras del primer mandatario condenando este tipo de hechos eran una voz que “clama en el desierto”, con muy poca capacidad de convencimiento y que solo unos pocos seguían creyendo.²⁶² Desde este punto de vista, Pérez Hernández reconocía que Allende tenía una visión distinta en relación a aquellos actores que deseaban acelerar de forma radical el proceso de cambios, situación que en todo caso no impactaba de momento de forma tan significativa, pues sus palabras estaban siendo progresivamente desoídas por muchos actores. La mirada del embajador español, como se puede advertir, guardaba en este punto una diferencia importante respecto a los diagnósticos que hacía el representante portugués y que caracterizaban al conjunto de la izquierda, y por ende a sus dirigentes más destacados, como parte de un proyecto totalitario.

Bajo estas premisas, se construía, en efecto, la mayor parte de los documentos del representante luso en Santiago. En un temprano informe fechado el 12 de enero de 1972, de Castro e Abreu refería, a partir de algunos incidentes producidos en la Universidad de Chile, que este conflicto había revelado una vez más “o espirito sectario do Govêrno e dos seus adeptos”. Según el embajador, los grupos de izquierda utilizaban todos los medios a su alcance “sem excluir a violência física” para intimidar a todos quienes representaban posiciones democráticas y antimarxistas.²⁶³

Cuando a finales de enero se conoció la noticia de la detención del abogado y miembro de la oposición Juan Luis Ossa Bulnes, y las supuestas torturas a que éste habría sido sometido, de Castro e Abreu sostuvo que el subdirector de la Policía de Investigaciones y militante del PC, Carlos Toro,

había participado personalmente en dichos flagelos.²⁶⁴ Semanas más tarde, los dardos se dirigieron en contra del titular de economía, Pedro Vuskovic, a quien el embajador portugués acusó de haber acrecentado el clima de polarización “atiçando as chamas do odio” con el fin de decantar la violencia revolucionaria de los partidos marxistas.²⁶⁵ Como se puede ver, estos énfasis estaban articulados en torno a una imagen mayor que este diplomático había construido respecto al proceso político de la UP y de sus cuadros dirigentes. Dicha figura no era otra que aquella que representaba a la vía chilena al socialismo como un siniestro intento por instaurar un régimen totalitario basado, como lo apuntó de Castro e Abreu en un informe del 16 de marzo de 1972, en la “ditadura do proletariado.”²⁶⁶ Bajo esta óptica, los funcionarios y cuadros dirigentes de la UP actuaban motivados por el único propósito de alcanzar el objetivo antes señalado, es decir, contribuir en la instauración de un gobierno autoritario donde las libertades individuales serían conculcadas.

A inicios de abril, la coyuntura social y política mostraba signos evidentes de polarización y progresivo deterioro de la convivencia entre los distintos actores. El embajador español, se recordará, había llamado la atención en ese momento respecto al clima enrarecido que existía en el país, en que incluso se habían sacado a colación los hechos ocurridos en España en la década del treinta. Este diagnóstico, que graficaba una preocupación por el actuar del conjunto de los actores políticos chilenos no se observaría del mismo modo en la mirada del embajador portugués. Casi al mismo tiempo en que Enrique Pérez Hernández manifestaba su preocupación por el clima existente en el país sudamericano, de Castro e Abreu advertía sobre los peligros que implicaban los grupos armados de izquierda. El descubrimiento a finales de marzo de una camioneta que pertenecía a la guardia personal de Allende y en cuyo interior se encontraron diversas armas y municiones fue un hecho analizado escrupulosamente por el representante luso. A su juicio, este suceso venía a demostrar lo que la oposición había señalado en relación a la “existencia de grupos armados de extrema esquerda, que operam com a convivência e até com a colaboração estreita das autoridades do Governo da Unidade Popular.” A partir de esta situación, de Castro e Abreu sacaba conclusiones más generales respecto a la situación política chilena, a la que calificaba como “ameaçadora, preocupante e extremadamente perigosa”.

En efecto, el embajador sostenía que los partidos de la UP estaban armando a sus militantes para “amanhã tentarem tomar o poder pela força e esmagar uma possível acção das Forças Armadas e de Carabineiros.”²⁶⁷

Aunque bajo el prisma del representante portugués la izquierda chilena parecía conformar un todo homogéneo, y más aún un bloque férreo unido tras el único propósito de instaurar una tiranía comunista, lo cierto es que existían bastantes diferencias y hasta contradicciones relevantes en su seno. Se ha visto cómo en diversas coyunturas, estas divergencias estratégicas asomaron en la escena pública causando fuertes discusiones entre las colectividades en pugna. Un factor de fondo que explicaba esta situación tenía que ver con la forma en cómo se llevaría a cabo el proceso de transición al socialismo. También surgieron diferencias tácticas en torno a cómo responder a las acciones de la oposición, e incluso si debía impulsarse una estrategia de acercamiento con el centro político. No menos relevantes fueron aquellos hechos de violencia en que se vieron involucrados militantes de izquierda, o bien en coyunturas donde actuaron fuerzas policiales que respondían directamente a las órdenes de la autoridad civil. En este caso, las recriminaciones y acusaciones cruzadas no tardarían en aflorar en la alianza oficialista.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió a inicios del mes de agosto de 1972 a raíz de la muerte de un poblador²⁶⁸ en la capital, suceso que los medios y representantes diplomáticos ibéricos siguieron con bastante detalle. Esto último reflejaba, una vez más, cómo los hechos de violencia política, independiente de su connotación y actores involucrados, eran referidos como una problemática importante dentro de las vicisitudes por las que transitaba el gobierno de la UP. Desde un punto de vista más amplio, el seguimiento y atención respecto a estos sucesos indicaba que el tema de la violencia, en tanto problemática general del mundo contemporáneo, constituía, ya fuese a pequeña, mediana o gran escala, un tópico de primera importancia.

En relación al hecho, cabe indicar que en la madrugada del día 5 de agosto, un numeroso contingente de la policía civil y uniformada practicó un allanamiento a un campamento ubicado en el sector sur oriente de la Santiago dejando como saldo un obrero muerto y varios heridos. Tanto la policía como el Ejecutivo señalaron que la operación tenía como propósito capturar a un delincuente prófugo que se escondía en dicho lugar. Sin embargo, al practicar

la diligencia, los efectivos policiales fueron atacados desde distintos puntos del campamento lo que originó el enfrentamiento con el resultado ya conocido.²⁶⁹ El hecho, como se indicó, crispó las relaciones en la izquierda chilena, tensionando los debates en su interior. Sin ir más lejos, el Partido Comunista fue particularmente crítico con la ultraizquierda a la que acusó de estar detrás de esta operación cuyo resultado no era otro que la erosión de la imagen del gobierno.²⁷⁰

Los medios escritos de España abordan distintos ángulos de la noticia. *ABC*, por ejemplo, señalaría que el hecho tuvo como antecedente inmediato un enfrentamiento entre el miembro del Ejército Nacional de Liberación, Héctor Prieto Cayupil, y la policía civil en el “barrio” denominado “Asalto al Cuartel Moncada”, lugar donde aquél había buscado refugio. Una vez ocurrido el allanamiento, indicaba el periódico, y tras conocerse la muerte del poblador René Saravia Arévalo, fueron suspendidos temporalmente las máximas autoridades de la policía civil. Dentro de las declaraciones que recogía *ABC* estaban las del ministro del Interior, Jaime Suárez, quien sostuvo que el problema si bien podía ser analizado desde un ángulo judicial, ello no sería correcto desde el punto de vista “revolucionario.”²⁷¹ En una edición posterior, este medio referiría la visita de Allende al lugar, al tiempo que describía que la mayoría de los dirigentes de este y otros campamentos similares del sector estaban organizados por el MPR perteneciente al MIR.²⁷²

Desde *La Vanguardia* se puso el acento en las consecuencias políticas del hecho, sobre todo a partir de la suspensión provisional de las autoridades de la policía civil. Este medio señalaba que dicha medida era solo una de las “agudas derivaciones políticas” que había dejado el “sangriento enfrentamiento”. Al igual que *ABC*, el periódico barcelonés consignó diversas declaraciones de testigos y autoridades, entre ellas las del ministro del Interior, Suarez, y las de algunos pobladores que se quejaban por el trato vejatorio y violento de los funcionarios policiales.²⁷³ Respecto a la visita que hizo el presidente Allende al lugar, *La Vanguardia* destacaría el diálogo que sostuvo éste con los pobladores y las casi dos horas que permaneció en la población.²⁷⁴

El embajador español, en tanto, refirió los hechos señalando que la intervención policial produjo una resistencia “a tiros” de parte de los veci-

nos de Lo Hermida, situación que obligó a las fuerzas policiales a utilizar sus armas en contra de los pobladores. En ese marco, destaca el informe de Pérez Hernández, se produjo la muerte de un individuo y “un buen número de heridos”, entre los cuales también se contaba un funcionario de la policía. Más adelante, el diplomático español indicaría que la presencia de la ultraizquierda en la escena pública se hacía cada vez más “nítida”, manifestándose, por ejemplo, en la ocupación de oficinas públicas o la colocación de algunos artefactos explosivos.²⁷⁵ Aunque el documento coincidía en general con la versión entregada por el gobierno, no deja de ser llamativo que éste se detuviera también en el caso de la ultraizquierda para referir el contexto de fondo sobre el cual se produjeron los hechos en la población Lo Hermida. Esto indicaría en buena medida que el embajador español lograba percibir que muchos de los actos de violencia o situaciones de confrontación producidas en el país tenían su origen en la acción de aquellos movimientos situados en los extremos del arco político. En este caso puntual se refería a la ultraizquierda, pero como se verá más adelante sus informes no esquivarían en ningún momento las referencias o críticas hacia los grupos de extrema derecha.

Esto, como ya se ha visto en otros casos, marcaba una diferencia importante respecto a la mirada de su homólogo portugués, quien enfatizaba de forma continua en la amenaza que significaba tanto la ultraizquierda como el propio gobierno de la UP para el país. Los hechos ocurridos el 5 de agosto fueron recogidos por de Castro e Abreu precisamente desde los énfasis antes descritos, señalando, en primer lugar, que la policía civil y uniformada debió enfrentarse a un grupo de “moradores armados” que dejó como saldo “200 detidos, numerosos heridos e 1 muerto”. Enseguida se refirió a las características de los pobladores, indicando que en su mayoría eran organizados y dirigidos por el MPR “braço urbano marginal do MIR”. Por la forma en cómo se produjeron los hechos, el embajador luso concluía que los habitantes del lugar poseían un “intenso treino.” Bajo este ángulo, los pobladores de Lo Hermida aparecían como virtuales guerrilleros urbanos pertenecientes a organizaciones de ultraizquierda y especializados en el combate regular contra las fuerzas policiales.²⁷⁶ Es decir, la idea en torno a una confrontación más bien compleja, ocurrida a altas horas de la madrugada, fue desechada por de Castro e Abreu

al referir un episodio más próximo a un combate regular entre dos fuerzas armadas. Además, el documento del embajador portugués no hacía ninguna referencia a la visita del presidente Allende al lugar luego de producidos los incidentes, con lo cual no se refería la totalidad del contexto ni las consecuencias políticas del hecho.²⁷⁷

Las preocupaciones del representante luso se circunscribían sobre todo a la acción de los grupos extremistas de izquierda y sus planes por instaurar un régimen autoritario bajo sus propias normas y preceptos. Este fue, en efecto, el tema central de uno de los informes enviados a la cancillería portuguesa el día 18 de agosto, cuando los ecos de lo sucedido en Lo Hermida todavía flotaban en la esfera pública. Según el documento redactado por de Castro e Abreu, en los campamentos y poblaciones que tenían una fuerte presencia del MIR existían “copos de vigilancia que aplicam justiça directa”. Es decir, se trataría de territorios autónomos donde las leyes chilenas no tendrían ninguna validez. Asimismo, se indicaba que en Santiago operaban numerosos grupos terroristas de extrema izquierda, siendo los “mais perigosos” el Ejército de Liberación Nacional 16 de julio y los “restos da VOP” que habría alcanzado, según el embajador, “um maior gráu de organização”. A modo de síntesis, de Castro e Abreu señalaba que la situación política y económica era simplemente catastrófica.²⁷⁸

Transitando hacia el segundo semestre de 1972, el clima de confrontación y polarización política mantendría su curso ascendente. Si bien la situación no era todavía catastrófica como la refería el embajador portugués, sí asomaban varios indicios que apuntaban a la pronta materialización de conflictos de mayor densidad y complejidad. Entre la segunda quincena de agosto y las primeras semanas de septiembre se había observado un fuerte impulso movilizador de parte de los sectores gremiales en contra del Gobierno. A lo largo de todo el territorio cientos de pequeños empresarios, fundamentalmente comerciantes, cerraron sus locales en señal de protesta frente a las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo.²⁷⁹ A estas manifestaciones se sumaron muy pronto los estudiantes secundarios de oposición, situación que acabaría en la materialización de sendos conflictos en las calles y en algunos establecimientos con los estudiantes partidarios del Gobierno. En pocas semanas se había conformado un cuadro de creciente

tensión social y política, con enfrentamientos periódicos en distintas zonas y un cuestionamiento cada vez mayor hacia la UP. Desde los partidos oficialistas se denunció que las movilizaciones gremiales y de la oposición en general respondían a un plan estratégico de mayor alcance que buscaba derechamente derrocar al gobierno.

El 22 de agosto, el embajador español remitió un informe a través del cual comentaba las alternativas del paro nacional del comercio que había afectado en la jornada anterior a casi todo el territorio nacional. Según Pérez Hernández, el paro derivó muy pronto en alteraciones del orden público que se extendieron hasta el anochecer y que tuvieron, además, participación varios grupos de derecha. No obstante lo anterior, el diplomático refería que el sonar de las cacerolas en señal de protesta por el alza de los precios decretado por el Gobierno se hizo sentir incluso en barrios “populares”. En este sentido, el embajador concluía que los incidentes y paralizaciones respondían al descontento de un gran sector de la opinión pública y no solamente de la extrema derecha.²⁸⁰

En los primeros días de septiembre, el diplomático español volvía a advertir sobre el clima de confrontación que existía en Chile, del cual era responsable, apuntó, los dos bandos en disputa. Según esta mirada, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda podían mostrar “certificados de buena conducta”, pues la escalada de violencia era transversal. Asimismo, Pérez Hernández advertía que la moderación era un rasgo casi ausente en aquellos actores que querían ponerla en evidencia, o bien, que se habían caracterizado por actuar bajo ese criterio. En síntesis, indicaba el representante hispano, se había producido en el país una “escalada progresiva” de violencia que procedía de los dos bloques “en que ya se dividía el país.”²⁸¹ Desde este ángulo, la violencia política que se había desencadenado en Chile encontraba sus causas más relevantes en una acción transversal de distintos grupos, no pudiendo ser endosada a un actor o bloque en particular. La mirada del embajador hispano emergía, en este sentido, como un llamado de atención respecto a una problemática compleja que estaría agrietando severamente un rasgo histórico de la nación sudamericana –su pacifismo– que llevaba décadas asentado en el país. Días más tarde, Pérez Hernández volvería a insistir en el tema de la violencia –que “aparecía con demasiada frecuencia”– como un factor

característico del complejo proceso político chileno. En este contexto, el representante español señalaría que entre las salidas que comenzaban a vislumbrarse frente a la crisis social, política y económica se incluían, “y no en un lugar secundario”, la guerra civil o el golpe militar. Tales alternativas, concluía el diplomático, emergían a pesar de que ellas repugnaban a la peculiar idiosincrasia chilena.²⁸²

Bajo la mirada del embajador portugués, en tanto, el clima de violencia y tensión que vivía Chile en estas semanas se explicaba por una “reação indignada do povo” en contra de la política económica del gobierno de la UP. Los hechos que ocurrían en distintos puntos del país, como la muerte de un comerciante en la ciudad de Punta Arenas, habían generado una “situação extremadamente tensa”, anotaba de Castro e Abreu. Bajo su perspectiva, concluía que las medidas adoptadas por el Ejecutivo estaban de facto desmantelando al país y llevándolo en menos de dos años “à bancarrota e ao espectro fome.”²⁸³ Esta mirada sobre un punto de extrema tensión era compartida por el periódico lisboeta *Diário de Noticias* que ya en su edición del 6 de agosto hablaba de que la situación chilena entraba en una de sus fases más duras de lucha. El combate entre oposición y gobierno –este último calificado como “a ditadura de Allende”– sería sin tregua hasta por lo menos 1973, sentenciaba el periódico.²⁸⁴ Traspasando las fronteras del país luso, algunas publicaciones españolas como *Fuerza Nueva*, también referían el cuadro de tensión social y político a partir de una fuerte crítica a la alianza oficialista. Según este medio, la situación chilena no debía extrañar en virtud de que su gobierno “frentepopulista” avanzaba disparado hacia el comunismo como ya lo venía haciendo la Cuba de Fidel Castro. Aunque esta revista mencionaba los últimos incidentes que se habían producido en Chile, y que mostraban una fuerte ofensiva opositora en distintas áreas, su balance era más bien pesimista porque señalaba que el gobierno de la UP no había renunciado a la “bolchevización paulatina” de Chile.²⁸⁵

Independiente del enfoque conceptual o ideológico que asumieran los actores ibéricos que miraban a Chile en esas semanas, resultaba evidente que en el país sudamericano se estaba configurando un cuadro sostenido de alta polarización y enfrentamiento. Buena parte de los conflictos más arriba descritos confluyeron, en efecto, en la coyuntura crítica de octubre de 1972

que tuvo en el paro gremial de los camineros su evento más relevante. Como se ha indicado, los indicios de una gran ofensiva opositora se pudieron percibir ya en el mes de agosto con la movilización de pequeños comerciantes y estudiantes secundarios. A lo largo de septiembre, varios dirigentes gremiales emitieron sendas declaraciones a través de las cuales emplazaban al gobierno a modificar algunas de sus medidas, pues de lo contrario la avalancha de protestas crecería en todo el país.²⁸⁶ Y ya en octubre estalló la huelga de los camioneros como tal debido, según se explicó, al intento del Ejecutivo por crear una compañía estatal de transportes en el extremo sur del país.²⁸⁷ A dicha paralización se sumaron, como siguiendo un guion preestablecido, diversas asociaciones productivas y colegios profesionales. En escasos días la huelga alcanzó una dimensión pocas veces vista en contra de un gobierno, movilizándolo a numerosos actores y causando pérdidas millonarias para el país. A decir verdad, el paro gremial de octubre fue el punto culminante de una serie de movilizaciones previas que desde diversos espacios iban confrontando casi periódicamente a la Unidad Popular.

Desde la prensa española se destacaron distintos ángulos y énfasis sobre esta paralización. En los mismos días en que estaba *ad portas* de producirse este hecho, *ABC* destacaba dos noticias que daban cuenta del ambiente que se vivía en Chile. En su edición del 11 de octubre, destacaba la reunión anual que tenía en la capital sudamericana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), criticando con dureza los ataques que había recibido este organismo por parte de los “sectores marxistas” que habían organizado un evento paralelo. Incluso se llegó a criticar que desde este último bloque se contratara a la “activista comunista afroamericana Ángela Davis” para participar en el evento.²⁸⁸ Implícitamente lo que *ABC* dejaba traslucir era la idea de que la libertad de prensa se encontraba amenazada en Chile producto de los intentos de estatización de la economía y otros de similar tenor anunciados por el Gobierno. El 13 de octubre, en tanto, el periódico monarquista destacó una masiva marcha de la oposición desarrollada en la capital y cuyo objetivo central era, según *ABC*, repudiar los intentos de quienes deseaban “convertir a Chile en un Estado Marxista.”²⁸⁹ Mirado en su conjunto, estas primeras noticias ponían un punto de atención en relación a lo que este medio creía era un intento sostenido por transformar a Chile en una dictadura comunista.

Respecto a la paralización gremial, las primeras noticias de *ABC* pusieron el foco en las medidas que implementaba el Ejecutivo a efecto de confrontar a los huelguistas. Aunque estas destacaban los objetivos que perseguía la autoridad a fin de asegurar el normal funcionamiento del país, en algunas notas se incluían las declaraciones de los partidos de la oposición que insistían en responsabilizar al gobierno por el clima de “extrema tensión” que se vivía.²⁹⁰ Cuando el paro gremial ya entraba en su segunda semana de duración, *ABC* destacaría los problemas que generaba la masiva huelga de los transportistas, sobre todo en el suministro de bienes de consumo y transporte de diversas mercaderías.²⁹¹ En este marco, *ABC* señalaría, a través de su sección meridiano mundial, que la situación en Chile había llegado a un “punto límite”, en que no quedaba claro quién estaba infringiendo realmente la institucionalidad: si el gobierno con sus intentos de estatización o las fuerzas políticas que respaldaban una movilización que estaba quebrando las bases del desenvolvimiento mínimo del país. Asimismo, este periódico finalizaba su análisis advirtiendo que las Fuerzas Armadas constituían una defensa de las instituciones republicanas por lo que ponía en manos de los institutos militares una posible resolución del conflicto.²⁹²

Los hechos de violencia que comenzarían a registrarse en el marco de la paralización gremial también fueron consignados en diversas ediciones de este medio. En una de ellas, correspondiente al 18 de octubre, el corresponsal de *ABC* indicaba que en las últimas noches se habían registrado varios “actos de sabotaje”, atentados explosivos y “agresiones” a personas que se oponían al paro. De momento, indicaba el periodista, no se debían lamentar desgracias personales.²⁹³ Fue en su edición del 22 de octubre cuando este medio consignaría uno de los fallecimientos ocurridos en el marco de la paralización gremial, correspondiente al caso de Fernando Carrera Villavicencio quien no respetó la señal de detención que le hizo una patrulla militar. Además, se indicaba que más de 500 personas habían sido detenidas por no respetar el toque de queda.²⁹⁴

La parte final de esta huelga fue enmarcada a partir de las graves consecuencias materiales que ella estaba dejando en el país y los indicios de una posible solución al conflicto, donde la opción de un gabinete cívico-militar comenzaba a tomar fuerza.²⁹⁵ Asimismo, el corresponsal de *ABC* recalcaría

aquellos aspectos que significaban acusar al gobierno y a la izquierda en general por la adopción de medidas abusivas en contra de los manifestantes.²⁹⁶ Con la incorporación efectiva de tres miembros de las Fuerzas Armadas al Gobierno, que según *ABC* daba ciertas garantías a la oposición, la coyuntura crítica del mes de octubre se comenzaba a cerrar.²⁹⁷

El enfoque de *La Vanguardia* se caracterizó por un abordaje detallado de los principales eventos de la huelga, enfatizando las medidas que adoptaba el Gobierno para hacer frente a una movilización que, según este medio, venía “entorpeciendo la distribución de alimentos.”²⁹⁸ Las declaraciones de las autoridades chilenas que el periódico barcelonés consignó destacaban sobre todo las motivaciones políticas del paro y su carácter sedicioso que estaba orientado a subvertir el orden institucional en el país sudamericano.²⁹⁹ En ese contexto, *La Vanguardia* explicitaría en al menos dos ediciones el apoyo que comenzaba a prestar el PDC a la paralización gremial, con lo cual el cuadro de tensión política y social aumentaría significativamente.³⁰⁰ Al igual que *ABC*, este periódico complementarí dicho enfoque con las consecuencias materiales y hechos de violencia que se producían en Chile y que ponían a esta nación en “su hora más difícil.”³⁰¹

Un punto importante que enfatizó *La Vanguardia* estuvo relacionado con el masivo apoyo que proporcionaron los trabajadores al Gobierno a fin de contrarrestar los efectos materiales de la huelga. Esto había demostrado, afirmaba este medio, que el país no podía ser paralizado completamente por los camioneros.³⁰² Aunque en los últimos días de paralización comenzaba a observarse ya un manifiesto cansancio en los sectores gremiales en huelga, este periódico indicaba que el espíritu de la oposición política se mantenía “casi incólume.”³⁰³ Tal observación resultaba relevante porque lograba visualizar un punto clave del conflicto político, a saber: que esta movilización gremial constituía un primer paso dentro de una estrategia mayor asumida por los sectores opositores tendiente a cancelar el proyecto socialista de la UP. Es decir, se dimensionaba el proceso como una lucha de largo aliento en la cual, más allá de los desgastes coyunturales de una huelga en particular, lo importante era mantener en alto un espíritu de combatividad en contra del Gobierno.

En *El Alcázar* se refirieron diversos elementos y coyunturas de la paralización gremial. En una de sus primeras informaciones, fechada el día 12 de

octubre, este periódico indicaba que la huelga de los camioneros afectaba con particular crudeza a la capital ya que esta ciudad no había recibido alimentos ni otros productos de consumo.³⁰⁴ Con el correr de los días, la grave situación que se desencadenaba en el país andino fue abordada con amplitud por *El Alcázar*, enfatizando dos aspectos principales. El primero de ellos guardó relación con el papel que comenzaban a cumplir las Fuerzas Armadas, y en particular los jefes de las zonas de emergencia, a efecto de hacer frente a la paralización. El segundo punto se vinculó al rol que comenzaba a jugar el PDC en este escenario, en especial cuando dicho partido decidió apoyar el desarrollo de una “ola de paros” a partir de la influencia que tenía en ciertos sectores sindicales y gremiales. Según este medio, esta situación aportaba un elemento fundamental dentro del complejo escenario social y político que se vivía.³⁰⁵ Sin decirlo explícitamente, este medio ya avizoraba que el papel del principal partido de la oposición se mostraría como un factor clave en futuras coyunturas, sobre todo en aquellas donde estuviera en juego la continuidad o cancelación del proyecto socialista. Hacia el término de la paralización, verificado en los primeros días de noviembre, *El Alcázar* volvió a hacer hincapié en el actuar que tuvieron las Fuerzas Armadas tanto para controlar el orden público como para marcar un punto de inflexión en el escenario político al integrarse al Gabinete de la mano de tres altos oficiales. Esta arista en particular fue destacada por el columnista Luis Ezponda, quien señalaría que a pesar de que muchos pedían una intervención abierta y permanente del Ejército en la política chilena, su comandante en jefe había declarado expresamente que el deber de su institución era ser leal al gobierno constitucional.³⁰⁶

Desde las páginas de *Pueblo* se siguió, en general, este mismo enfoque para caracterizar la paralización de los camineros. Es decir, en primer término se recaló la compleja situación que comenzaba a observarse y que para la quincena de octubre ya había creado “serios trastornos” en casi todo el territorio.³⁰⁷ En lo sucesivo, se indicarían las distintas alternativas que se producían respecto a este conflicto y su vinculación con otras esferas del acontecer. Así, cuando la huelga cumplía poco más de una semana el enviado especial de este medio, Gonzalo de Bethencourt, puso énfasis en las raíces políticas que tenía la paralización de los transportistas, situación que, en su opinión, dejaba a las

demandas y énfasis gremiales que en algún momento se esbozaron “fuera de cuadro”. Junto con lo anterior, el corresponsal entregó una valoración respecto al posicionamiento de distintas clases sociales en dicha coyuntura. De este modo, los sectores altos apoyaban, según de Bethencourt, “incondicionalmente” este tipo de huelgas, mientras que en las clases medias el respaldo era de cerca del 70 por ciento. En la baja clase media, y proletariado en general, el respaldo al Gobierno oscilaba en torno a un 80 por ciento.³⁰⁸ Cuando a inicios de noviembre las autoridades militares fueron convocadas a integrar el Gabinete, el corresponsal de *Pueblo* enfatizó en que ello marcaría un “pulso firme” en la conducción política del país y al mismo tiempo sería un factor para garantizar el orden constitucional frente a los extremismos.³⁰⁹

En el diario falangista *Arriba* se mezclaron distintos puntos de vista e informaciones sobre la contingencia chilena. En el marco de los primeros días de paralización se dio cuenta, por ejemplo, del clima de agitación que se vivía en Chile y en particular de las protestas que estaban llevando a cabo diversos sectores de la oposición. Una de ellas, protagonizada fundamentalmente por mujeres el día 11 de octubre, fue caracterizada como una movilización que reclamaba ante el hambre y carestía que el modelo económico “frentepopulista” amenazaba con llevar a los hogares chilenos.³¹⁰ En los días siguientes, cuando el paro comenzaba a tomar vuelo, *Arriba* enfatizó la “grave situación” que significaba la movilización de los camioneros para el país y cómo las autoridades comenzaban a poner bajo jurisdicción militar diversas zonas del territorio. Aunque esta mirada describía en detalle las medidas que adoptaba el Ejecutivo a fin de controlar la situación y normalizar el flujo productivo –entendiéndolas de modo implícito como propias de cualquier Gobierno que busca resguardar el orden– este medio no dudó en calificar críticamente el carácter de algunas decisiones. Así, por ejemplo, cuando se anunció la requisición de todos los camiones que participaran en la huelga, *Arriba* indicó que se estaba en presencia de una “medida dictatorial.”³¹¹ En medio de esta cobertura, el columnista J. L. Gómez Tello, que también escribía para la revista *Fuerza Nueva*, sostuvo que la movilización de los transportistas chilenos no tenía un carácter político ni tampoco “seditioso”. Según su óptica, si Chile había llegado a este nivel de confrontación, era responsabilidad del Gobierno “frentepopulista” de la UP. Cuando el paro

alcanzaba dimensiones estructurales, el rotativo falangista insistió en la gravedad del caso, detallando numerosos hechos de violencia que acompañaron esta coyuntura, así como las declaraciones de diversos actores políticos que insistían en lo amenazante de la situación.³¹² El peligro de una guerra civil –idea que ya comenzaba a circular en el espacio público chileno– también fue recogido por este medio en algunas de sus ediciones de mediados de octubre, en especial para referir a las advertencias que el presidente Allende había hecho en esta misma dirección.³¹³

En los días finales de la paralización, *Arriba* comenzó a incluir las notas de su enviado especial a la capital chilena Diego Carcedo. En una de sus primeras crónicas resaltó tanto los temas vinculados al término de la huelga gremial como aquellos de índole más regional, como fue el caso de Bolivia. Sobre este país el periodista resaltaba el hecho de que dos expresidentes de esa nación, Hernán Siles Suazo y Juan José Torres, se encontraban residiendo en la capital chilena, lo que configuraba un cuadro bastante llamativo dada la cantidad de factores y hechos que confluían explosivamente en el país austral.³¹⁴ La llegada de los militares al Gabinete, y el fin efectivo de la movilización de los camioneros, fue entendida por Carcedo dentro de una lucha propagandística entre oposición y gobierno por resaltar los triunfos o virtuales fracasos que la reciente coyuntura había dejado en el país. Respecto a los ministros castrenses, el corresponsal reconocía que dada la independencia de los tres oficiales que llegaban al Ejecutivo, que en ningún caso se los podía identificar como marxistas, su presencia en las reuniones y deliberaciones resultaría “extraña.”³¹⁵

Desde las páginas de *Mundo Obrero* se hizo un balance general sobre la movilización gremial que afectó al país sudamericano. El columnista de este periódico J. Izcaray apoyaría sus impresiones en el diagnóstico que había hecho por ese mismo periodo el secretario general del PC de Chile, Luis Corvalán L pez. En este sentido, Izcaray sostuvo que se estaba en presencia de un nuevo tipo de golpe de Estado cuyo prop sito fundamental era paralizar la actividad productiva y provocar un “caos econ mico”. En relaci n a los promotores de esta huelga, el autor indic  que formaban parte de un “Estado Mayor” de la sedici n integrado por representantes nacionales y tambi n por el “imperialismo yanqui.” Este punto en particular tambi n fue destacado

por el histórico dirigente comunista español Santiago Carrillo, quien en sus memorias relata que en su visita a Chile en 1972 pudo notar la ofensiva norteamericana en contra de la UP, además de las actitudes opositoras del PDC y la derecha.³¹⁶ Volviendo a la columna de *Mundo Obrero*, Izcaray sostenía un paralelismo entre los objetivos evidenciados por la reacción chilena con aquellos empleados en contra del Frente Popular español en la década del treinta y que reflejaban tácticas similares como la provocación de disturbios, la excitación de las pasiones e imposibilitar la vida normal. Por último, el columnista hacía un llamado a denunciar el ataque de que era víctima la UP y a protestar enérgicamente en contra de él.³¹⁷

En *Cuadernos para el Diálogo* se enfatizaron diversos puntos de vista para analizar la compleja situación que vivía Chile. Un primer elemento que se expuso guardó relación con que la coyuntura de octubre venía a mostrar las crecientes dificultades por las que estaba atravesando el proyecto socialista, sobre todo en virtud de que la oposición había pasado a la ofensiva. En este marco, se indicaba que la verdadera estrategia de los grupos dominantes consistía en empujar al PDC a una posición de confrontación en contra de la UP para así salvar al capitalismo.³¹⁸ Dicha operación, y en general la de un bloque opositor más amplio, había sido preparada por los medios de comunicación de la derecha, sobre todo a través de *El Mercurio*. A pesar de estos éxitos iniciales, *Cuadernos para el Diálogo* señalaba que la “contrarrevolución” iniciada en Chile no midió la fuerza del oficialismo, creyendo, por ejemplo, que el 33 por ciento obtenido por Allende en 1970 sería fácilmente doblegable. Algo similar ocurrió con los sectores de derecha que apostaban por la irrupción de los militares para bloquear al gobierno, situación que en la práctica se materializó en sentido contrario, es decir, los militares salieron a “proteger” a éste.³¹⁹ Desde la visión de este medio, el conflicto se situaba como uno de naturaleza política, donde al menos dos factores de primera importancia –apoyo popular y rol de los militares– jugaban todavía a favor de la UP.

Para *Sábado Gráfico*, existían numerosos problemas y desafíos a la vía chilena al socialismo que el paro de los camioneros había puesto sobre la mesa. Desde consecuencias materiales, que según el columnista Alfonso Palomares estaban conectadas a una estrategia electoral con vista a los comi-

cios de marzo de 1973, hasta aquellas de índole política respecto a la viabilidad futura del programa.³²⁰ De fondo, se desarrollaba una pugna de carácter jurídico-legal por transformar las estructuras heredadas del pasado que la burguesía visualiza como un acto esencialmente revolucionario y apela, por ende, a la violencia para oponerse a ella.³²¹ Sobre la incorporación de los militares al gabinete, este medio señalaría que se trató de una jugada “hábil e inteligente” por parte del presidente Allende, no obstante ella tendría un carácter circunstancial pues se debían resolver los problemas de fondo, que –como el económico– seguían existiendo.³²²

El semanario *Triunfo* anotaba, por su parte, que la forma en cómo se desencadenó la huelga de los transportistas y el apoyo que fue recibiendo de numerosos gremios y actores formaban parte de los elementos clásicos de lo que se llamaba “contrarrevolución”. En este marco, indicaba *Triunfo*, el rol del PDC había resultado clave pues con sus últimos llamados a retornar al trabajo aparecía ante la opinión pública como una fuerza moderada y al mismo tiempo con capacidad para sujetar al país. También se apuntaba hacia el tema militar como un factor relevante dentro de la contingencia. A juicio de esta publicación, la sombra del golpe de Estado planeaba permanentemente sobre el proyecto socialista, pero hasta el momento el Ejército se mostraba respaldando al gobierno. Lo que parecía haberse ensayado en la crisis de octubre fue una especie de “golpe de Estado civil” que estuvo a punto de asaltar el poder, sentenciaba *Triunfo*.³²³

En las páginas de *Fuerza Nueva* fue donde se observó, como era de suponer, el énfasis más crítico respecto al gobierno de la UP y la reciente coyuntura de octubre. El columnista J.L. Gómez Tello sostuvo, en un tono muy similar al que expusiera anteriormente en el periódico *Arriba*, que los grupos sociales y gremiales que apoyaron la huelga no eran en ningún caso capitalistas y que su movilización, lejos de representar una acción sediciosa, era una respuesta de desesperación a la que se veía empujada la gente. En segundo lugar, Gómez Tello destacaba que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la huelga se habían caracterizado por su violencia, lanzando a la calle a los grupos paramilitares del “frente popular”. Como ya se venía observando a lo largo de los meses, *Fuerza Nueva* insistía en que la experiencia chilena era un símil de la de aquella vivida en territorio

español durante la década del treinta y que acabó con una cruenta guerra civil. El diagnóstico final de esta revista sobre la reciente coyuntura era que el proyecto socialista estaba condenado al fracaso, ya fuera porque se produjera una reacción nacional en contra del gobierno, o bien, porque Allende fuese arrastrado, por el extremismo de algunas fuerzas, hacia el comunismo “simple y puro.”³²⁴

Las perspectivas de los medios escritos españoles, como se ha visto, abordaron estos hechos desde distintos ángulos. Mientras la prensa diaria construía un análisis detallado y coyuntural de lo que iba sucediendo, los semanarios y revistas de actualidad establecieron análisis más globales que buscaban entender el sentido de lo que ocurría en la nación sudamericana. No obstante, en ambos casos se reconocería que lo sucedido en el mes de octubre marcaba un importante punto de inflexión dentro de la trayectoria del proyecto socialista chileno, es decir, tanto el impacto material de la huelga, como los hechos de violencia que se perpetraron y el posicionamiento de los actores dentro de la contingencia mostraba un evidente cambio de ciclo político en Chile.

Desde la embajada española se puso el acento sobre todo en la gravedad que significaba una movilización de estas características. Uno de los primeros documentos que refirieron esta coyuntura fue un informe enviado por el encargado de negocios Domingo Sánchez y Sánchez el día 18 de octubre. En el texto, se indicaba como elemento transversal que las situaciones de violencia se incrementaban periódicamente, destacando sobre todo los actos terroristas en contra de bienes públicos y privados.³²⁵ Días más tarde, el embajador Enrique Pérez Hernández volvería a insistir en la gravedad de la situación, enfatizando que uno de los problemas más relevantes era que el presidente Allende no gozaba ya de la confianza suficiente para una gran mayoría de la población. Respecto al rol que estaban cumpliendo las Fuerzas Armadas en tareas de mantención del orden público, el diplomático señalaba que aquellas estaban realizando su misión con “tino y discreción.”³²⁶

Su homólogo portugués aprovecharía la coyuntura de octubre para criticar, como ya venía siendo habitual, al conjunto del gobierno de la UP y de la izquierda chilena en general. Ya en el mes de septiembre, este representante había advertido que la situación se tornaba “día a día mais inquietante”

producto de los enfrentamientos callejeros entre la policía, los estudiantes secundarios y los “extremistas de izquierda.”³²⁷ De igual forma, la temática en torno a una solución de facto a gran escala que resolviera la crisis por la que atravesaba el país también estaba orbitando en los análisis que hacía el embajador de Castro e Abreu en el mes de septiembre. En un informe fechado el 12 de ese mes, este representante indicaba que los principales partidos de izquierda creían que solo a través de una guerra civil “a Unidade Popular poderá conquistar todo o poder no Chile e esmagar a oposição.”³²⁸ Desde el ángulo que lo miraba el embajador luso, era solamente la izquierda la que se había fijado como propósito fundamental una salida de este tipo con el objetivo de controlar todo el poder y más aún aplastar a sus adversarios.

Bajo estas coordenadas, la mirada que se hiciera desde la embajada portuguesa al conflicto de los camioneros enfatizaría aquellos tópicos que permitían endosar una crítica abierta al régimen de la UP, como podía ser, por ejemplo, el uso de la fuerza por parte de la policía en contra de los manifestantes.³²⁹ Los hechos de violencia y desórdenes que acompañaron la huelga de los transportistas, en tanto, fueron referidos como una demostración expresiva de la agitación que venía reinando en el país en los últimos tiempos.³³⁰ Como era habitual en los informes confeccionados por el embajador portugués, este tipo de temáticas y referencias eran acompañados de un nutrido número de recortes de prensa los cuales provenían casi en su totalidad desde medios escritos de oposición. A partir de estas características, resultaba evidente que las autoridades peninsulares de Portugal se formaban una visión igualmente crítica respecto a lo que sucedía en Chile bajo el gobierno de la UP.

A lo anterior contribuiría en alguna medida la propia prensa del país atlántico que, en general, mostraba críticas abiertas sobre la experiencia socialista. Desde *Diário de Notícias* se destacaba la gravísima situación por la que atravesaba el país, subrayando cómo los hechos de violencia se habían desatado a pesar de las medidas que adoptaba el Ejecutivo.³³¹ En su edición del 18 de octubre, M.C., publicaría una columna en la sección internacional titulada “A cabalgada frenética do presidente Allende na rota do marxismo”. En ella se decía que el principal drama de la nación sudamericana era que el primer mandatario quería “inyectar esquemas marxistas” en una república

democrática, lo que indudablemente había generado la reacción de quienes se oponían a la “checoslovaquização” del país. Restaba saber, concluía el columnista, hasta cuándo los responsables de las Fuerzas Armadas “consentirão nesta cabalgada frenética para um estado marxista.”³³² Este medio también recalcaría las palabras del propio Presidente Allende que, según su interpretación, había confesado la bancarrota y anarquía del régimen chileno.³³³ Aunque también se hacían referencias a los atentados y hechos de violencia en general, este medio las enmarcaba dentro de la “greve dos patrões” en contra del “presidente marxista” Salvador Allende.³³⁴

Desde *O Século* se informaba el día 13 de octubre sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, al tiempo que consignaba la muerte de un “motorista” ocurrida en estos primeros días de huelga.³³⁵ En ediciones posteriores, este medio recalcó la grave situación que se vivía en el país, sobre todo desde el punto de vista del deterioro de la convivencia política. Se indicaba, al respecto, que si los demócratacristianos adherían a la propuesta de “resistencia civil” que había lanzado la derecha, el país quedaría definitivamente cortado en dos corrientes irreconciliables.³³⁶ Por su parte, el periódico *Época* enmarcaba las violentas manifestaciones que surgían en los primeros días de octubre como una consecuencia de la crisis económica que afectaba al país bajo el “regime socialista do presidente Allende.”³³⁷ En los días siguientes, desde este medio se enfatizaría la falta de alimentos y productos básicos que se observaba en las principales ciudades de Chile. Aunque implícitamente se entendía que ello se debía a la paralización gremial de los transportistas, *Época* hacía notar que se trataba de una movilización que ya había rechazado una oferta de mediación propuesta por el “Governo marxista” de la UP.³³⁸

El órgano del PCP, *Avante!*, haría una cerrada defensa del gobierno de la UP al tiempo que criticó a la mayor parte de los medios informativos lusos. Esto último se explicaba porque algunos de estos periódicos, señalaba *Avante!*, daban a entender que el complot constituía un movimiento de descontento de las masas trabajadoras, lo cual no era cierto. Con todo, esto no significaba, según se decía, que la oposición reaccionaria hubiera sido neutralizada en Chile, ya que ella era mantenida por el imperialismo norteamericano. En esta línea, se identificaba una serie de ataques, externos e internos, que debería afrontar la UP en el mediano plazo, como la presión

económica de los Estados Unidos o la contraofensiva de la oposición nacional que disponía de un importante poder político.³³⁹

A diferencia de lo que sucedía en España donde la prensa escrita mostraba una visión más heterogénea respecto al crisol de situaciones que suponía una experiencia como la de la UP, en Portugal los análisis tendieron a ser algo más homogéneos. La casi única excepción que constituía *Avante!* no era representativa de un panorama más amplio de diversidad en cuanto a las informaciones que se transmitían sobre la situación chilena. En este sentido, había mayor conexión entre el discurso diplomático y el de la prensa escrita en Portugal que en el caso de España. Esto no implicaba, por cierto, que no existieran fuertes críticas en territorio hispano, pero ellas muchas veces eran contrarrestadas por un número amplio de miradas que veían con cierto optimismo, y no menos admiración, las alternativas del gobierno de Salvador Allende.

En relación a la coyuntura crítica que se vivió en octubre y parte de noviembre de 1972, podría señalarse que ambos países consideraron lo ocurrido en Chile como algo extremadamente grave. Más aún, mirando el fondo de las noticias y énfasis que surgían en distintas direcciones, había un elemento transversal que indicaba un cambio en la predisposición anímica de los actores políticos, tanto de oposición como de gobierno, y la conformación de un nuevo marco de conflictos. Respecto a los actores, la mayor parte de las informaciones recogidas coincidieron en el papel relevante que habían tenido los gremios en la reciente huelga de transportistas, situación que los ubicaba como un factor clave para futuras movilizaciones. También se pudo advertir que dentro de los partidos políticos se enfatizó bastante el rol del PDC como una colectividad que dada su posición centrista estaba en condiciones de inclinar la balanza de la crisis política hacia su descompresión o también hacia su agudización. Todos estos elementos, en fin, daban cuenta de un nuevo ciclo político que se había abierto en la experiencia socialista chilena y que se caracterizaba por haber generado un nuevo contexto en el cual la lucha social sería cada vez más polarizada e intransigente. Resultaba evidente, bajo este marco, que los actores estaban predispuestos a ser parte de una confrontación más dura para alcanzar sus objetivos estratégicos, ya fuesen estos derrocar al gobierno o consolidarlo.

Aunque el ambiente social y político tras la paralización de octubre dio muestras de cierta distensión, los conflictos no desaparecieron del todo. Cuando se cerraba 1972, un enfrentamiento en la ciudad de Chillán acabó con la vida de un militante del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. El incidente se produjo la tarde del 20 de diciembre en el marco de unas elecciones estudiantiles de la sede regional de la Universidad de Chile, donde los resultados preliminares estaban dando el triunfo a la lista de la oposición. En pocas horas aparecieron las manifestaciones y marchas en el centro de la ciudad, sobre todo por parte de miembros de la izquierda, las cuales coincidieron con un acto político que se realizaba en un local de Patria y Libertad. En ese contexto, los incidentes no tardaron en aparecer. Primero fueron desórdenes en la vía pública que incluyeron ataques a locales comerciales y viviendas particulares para luego desarrollarse enfrentamientos entre distintos grupos e individuos. Bajo este escenario fue atacado a balazos, presumiblemente por un individuo que pertenecía al PS, el militante nacionalista Héctor Castillo Fuentealba quien falleció al día siguiente en un centro asistencial.

A pesar de que se trataba de un hecho ocurrido en una ciudad alejada de los grandes centros urbanos, la noticia fue recogida por diversas fuentes ibéricas, tanto de la prensa escrita como a nivel diplomático. En el caso de España, tanto *ABC* como *La Vanguardia* y también *Arriba*, informaron en términos muy similares, constatando que tras las elecciones del consejo estudiantil de una universidad en la ciudad de Chillán se produjeron enfrentamientos que terminaron con la muerte del funcionario de INDAP, Héctor Castillo, además de dejar dos heridos.³⁴⁰ Por su parte el periódico portugués *Diário de Notícias* informaba, bajo el título “Agitação social no Chile”, que los incidentes se habían producido por el choque de grupos rivales que dejaron un muerto y varios otros heridos.³⁴¹ Y desde el ámbito diplomático, el embajador luso señalaba que en el marco de los incidentes producidos en la ciudad de Chillán los “vítimados” eran todos militantes del PN, al tiempo que indicaba que los desórdenes habían dejado “um quadro desolador de destrozos na vía pública.”³⁴²

Estas referencias sobre un caso tan puntual daban cuenta, en primer término, que el tema de la violencia política constituía una de las problemáticas

más importantes por aquel periodo, y en este caso en particular, se podría decir que estaba instalada en el centro de las dinámicas de conflicto social de la experiencia socialista. Esto último se explicaba porque se había abierto un nuevo escenario de confrontación en el país sudamericano tras la larga paralización de los camioneros, el cual, como ya habían apuntado en su momento numerosas fuentes, se caracterizaba por su mayor polarización y tensión. En este sentido, la muerte del funcionario de INDAP en Chillán no emergía como un dato marginal o extemporáneo al contexto que se había decantado en Chile, sino más bien representaba cierto punto de continuidad con lo que se venía observando. En segundo término, y aquilatado desde un punto de vista más global, el tema de la violencia seguía constituyendo un tópico de permanente actualidad que en el caso de Chile compartía un espacio con otros hechos de similar tenor ocurridos en distintas partes del mundo. Es decir, si no resultaba un evento marginal dentro del concierto de las dinámicas estrictamente locales, tampoco lo era en el marco de las noticias internacionales.

El conjunto de estas coordenadas, que había marcado un precedente importante en la trayectoria de la vía chilena al socialismo durante 1972, se intensificaría con dramática rapidez y gravedad al año siguiente, etapa en que, como se sabe, quedaría sellado el destino final de la UP.

Notas

257 Telegrama n° 36, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 28 de enero de 1972. Fundación Francisco Franco, documento n° 4314, 1972.

258 Informe n° 348, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 24 de marzo de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -1.

259 Las referencias de prensa sobre estos hechos se pueden seguir a través de la recopilación de noticias de Manuel Salazar, Chile 1970-1973, Santiago, Sudamericana, 2003 y el trabajo de Fontaine y González, *Los mil días...* *op. cit.*, pp. 277 y ss. Un estudio pormenorizado del conflicto agrícola en la zona sur del país, es-

pecialmente en asentamientos de población indígena, se encuentra en Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yáñez, *La reforma agraria y las tierras mapuches, Chile 1962-1975*, Santiago, Lom, 2005.

260 Carta de Juan Pérez Gómez a Carlos Robles Piquer. Santiago, 10 de mayo de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3.

261 Informe de gestión de Antonio Guardiola en Chile y Argentina, 14 de junio de 1972. AHPCE, Sección Dirigentes, Caja 31, Carpeta 11.

262 Informe n° 525, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 15 de mayo de 1972. AGA, Leg. R-1342, expediente n° 83. Tres

días después, Pérez Hernández envió un nuevo informe en que advertía de la escalada de desórdenes, actos provocativos y "tomadas" perpetrada por el MIR, situación que comenzaba a causar cada vez mayor inquietud entre distintos sectores del país. Véase, Informe n° 534, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 18 de mayo de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.

263 Informe PEA 23, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 12 de enero de 1972. ADM-NE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20, 1ª.

264 Informe PEA 34, del embajador en Chile al ministro de Ne-

gócios Estrangeiros, Santiago, 26 de enero de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20, II^a. El caso de Juan Luis Ossa alcanzó cierta resonancia dentro de la opinión pública llegando incluso a presentarse una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado chileno respondió que luego de diversas indagaciones no quedó comprobado la perpetración del delito denunciado. Véase Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1973. AGA, Leg. R 16863, Carpeta OEA II, 1971-1974, n° de expediente 1.

265 Informe PEA 149, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 10 de marzo de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20 / III^a.

266 Informe PEA 156, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 16 de marzo de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20 / III^a.

267 Informe PEA 195, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 5 de abril de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20 / IV^a.

268 Habitante de un barrio chabolista.

269 *La Segunda*, Santiago, 5 de agosto de 1972, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días...* op. cit., p. 422.

270 *El Siglo*, Santiago, 6 de agosto de 1972, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días...* op. cit., pp. 423-425.

271 *ABC*, Madrid, 8 de agosto de 1972, p. 18.

272 *ABC*, Madrid, 9 de agosto de 1972, p. 18.

273 *La Vanguardia*, Barcelona, 8 de agosto de 1972, p. 15.

274 *La Vanguardia*, Barcelona, 9 de agosto de 1972, p. 16.

275 Informe n° 770, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 8 de agosto de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3.

276 Informe PEA 318, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 10 de agosto de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20 / IV^a.

277 Buena parte de las alternativas y detalles que omite el informe diplomático fueron, en cambio, recogidos por algunos medios de prensa como *Diário de Lisboa*. Este medio expondría, de hecho, las distintas versiones existentes además de algunas de las medidas adoptadas por el presidente Allende como fue la suspensión de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones. También se enfatizaba en las consecuencias políticas de este hecho, el cual ponía en el tapete las profundas divergencias existentes entre un sector del Gobierno y los grupos "mais impacientes dos revolucionários chilenos." Véase, *Diário de Lisboa*, 7 de agosto de 1972, p. 15. Énfasis similares se observaron también en *O Século*, que destacó las consecuencias políticas al interior de la izquierda chilena y las medidas que adoptó el presidente Allende con respecto a la dirección de la policía civil. Véase, *O Século*, Lisboa, 8 de agosto de 1972, p. 10.

278 Telegrama n° 9318, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 18 de agosto de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20 / IV^a. Cabe precisar que no está del todo documentado que la VOP actuara en 1972 con el nivel de organización que refiere el embajador portugués.

Véase, Felipe Guerra, "La Vanguardia Organizada del Pueblo... op. cit., pp. 111 y ss.

279 *La Segunda*, Santiago, 18 de agosto de 1972, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días...* op. cit., p. 430.

280 Informe n° 816, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 22 de agosto de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.

281 Informe n° 842, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 1 de septiembre de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83 -3.

282 Informe n° 845, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 5 de septiembre de 1972. AGA, Leg. R-13427, expediente n° 83.

283 Telegrama n° 9165, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 22 de agosto de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35150, carpeta n° 326.20 / IV^a.

284 *Diário de Notícias*, Lisboa, 6 de agosto de 1972, p. 11.

285 *Fuerza Nueva*, n° 295, 2 de septiembre de 1972, p. 25.

286 Una carta firmada por diversos gremios empresariales y dirigida al presidente Allende el día 29 de septiembre fue publicada en *Tribuna*, Santiago, 2 de octubre de 1972, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días...* op. cit., pp. 465-466.

287 La declaración de los dirigentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones fue publicada en *La Prensa*, Santiago, 10 de octubre de 1972, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días...* op. cit., pp. 474-475.

- 288** *ABC*, Madrid, 11 de octubre de 1972, p. 36.
- 289** *ABC*, Madrid, 13 de octubre de 1972, p. 42.
- 290** *ABC*, Madrid, 14 de octubre de 1972, p. 40.
- 291** *ABC*, Madrid, 15 de octubre de 1972, p. 24.
- 292** *ABC*, Madrid, 17 de octubre de 1972, p. 31.
- 293** *ABC*, Madrid, 18 de octubre de 1972, p. 39.
- 294** *ABC*, Madrid, 22 de octubre de 1972, p. 20.
- 295** *ABC*, Madrid, 26 de octubre de 1972, p. 34.
- 296** *ABC*, Madrid, 29 de octubre de 1972, p. 19 y 1 de noviembre de 1972, pp. 17-20.
- 297** *ABC*, Madrid, 4 de noviembre de 1972, p. 38.
- 298** *La Vanguardia*, Barcelona, 13 de octubre de 1972, p. 19
- 299** *La Vanguardia*, Barcelona 15 de octubre de 1972, p. 22.
- 300** *La Vanguardia*, Barcelona, 17 de octubre de 1972, p. 17 y 18 de octubre de 1972, p. 17.
- 301** *La Vanguardia*, Barcelona, 19 de octubre de 1972, pp. 1 y 17.
- 302** *La Vanguardia*, Barcelona, 24 de octubre de 1972, p. 22.
- 303** *La Vanguardia*, Barcelona, 25 de octubre de 1972, p. 19.
- 304** *El Alcázar*, Madrid, 12 de octubre de 1972, p. 10.
- 305** *El Alcázar*, Madrid, 16 de octubre de 1972, p. 40.
- 306** *El Alcázar*, Madrid, 4 de noviembre de 1972, p. 12.
- 307** *Pueblo*, Madrid, 14 de octubre de 1972, p. 14.
- 308** *Pueblo*, Madrid, 21 de octubre de 1972, p. 15.
- 309** *Pueblo*, Madrid, 4 de noviembre de 1972, p. 16.
- 310** *Arriba*, Madrid, 12 de octubre de 1972, p. 1.
- 311** *Arriba*, Madrid, 13 de octubre de 1972, p. 16.
- 312** *Arriba*, Madrid, 17 de octubre de 1972, p. 1.
- 313** *Arriba*, Madrid, 19 de octubre de 1972, p. 1.
- 314** *Arriba*, Madrid, 1 de noviembre de 1972, p. 18.
- 315** *Arriba*, Madrid, 4 de noviembre de 1972, p. 18.
- 316** Santiago Carrillo, *Memorias*, Barcelona, Planeta, 2007, p. 614.
- 317** *Mundo Obrero*, Madrid, 27 de octubre de 1972, p. 7.
- 318** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 104, noviembre de 1972, p. 681.
- 319** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 111, diciembre de 1972, p. 743.
- 320** Este columnista escribiría un texto de similares características para otra revista española de esos años donde advertía que, si los problemas y sabotajes continuaban en Chile, la vía chilena al socialismo dentro de la legalidad se vería recortada y reducida simplemente a "realizar el socialismo". Véase, *Cambio* 16, n° 50, 30 de octubre de 1972, p. 38.
- 321** *Sábado Gráfico*, n° 803, 21 de octubre de 1972, p. 19.
- 322** *Sábado Gráfico*, n° 806, 11 de noviembre de 1972, p. 17.
- 323** *Triunfo*, n° 526, 28 de octubre de 1972, pp. 22-25.
- 324** *Fuerza Nueva*, n° 303, 28 de octubre de 1972, p. 25.
- 325** Informe n° 958, del encargo de negocios en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 18 de octubre de 1972. AGA, Leg. R- 13427, expediente n° 83.
- 326** Informe n° 968, del embajador al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 18 de octubre de 1972. AGA, Leg. R- 13427, expediente n° 83.
- 327** Informe PEA 369, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 11 de septiembre de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35151, carpeta n° 326.20 / V^a.
- 328** Informe PEA 372, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 12 de septiembre de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35151, carpeta n° 326.20 / V^a.
- 329** Telegrama n° 116, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 19 de octubre de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35151, carpeta n° 326.20 / V^a.
- 330** Informe PEA 466, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 3 de noviembre de 1972. ADMNE, caja S3. E37. P7 / 35151, carpeta n° 326.20 / VI^a.
- 331** *Diário de Noticias*, Lisboa, 17 de octubre de 1972, pp. 12 y 16.
- 332** *Diário de Noticias*, Lisboa, 18 de octubre de 1972, p. 12.
- 333** *Diário de Noticias*, Lisboa, 19 de octubre de 1972, p. 1.
- 334** *Diário de Noticias*, Lisboa, 22 de octubre de 1972, p. 16.
- 335** *O Século*, Lisboa, 13 de octubre de 1972, p. 6.
- 336** *O Século*, 17 de octubre de 1972, p. 6.

337 *Época*, Lisboa, 12 de octubre de 1972, p. 8.

338 *Época*, Lisboa, 16 de octubre de 1972, p. 8.

339 *Avante!*, n° 448, dezembro de 1972, p. 8.

340 *ABC*, Madrid, 22 de diciembre de 1972, p. 44; *La Vanguardia*, Barcelona, 23 de diciembre de 1972, p.24; *Arriba*, Madrid, 22 de diciembre de 1972, p. 18.

341 *Diário de Notícias*, Lisboa, 23 de diciembre de 1972, p. 16.

342 Informe PEA 20, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 4 de enero de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / Iª.

Transitando hacia el fin de la experiencia socialista chilena

El término de la paralización a comienzos de noviembre de 1972 constituyó un respiro para el oficialismo, situación que no disipó, en todo caso, la tensión y el clima polarizador existente en el país. Se trataba de elementos de fondo que pesaban mucho más que la solución coyuntural de algunas situaciones. Lo que para varios actores se hacía evidente era que la violencia constituía un mecanismo válido dentro de la lucha política a objeto de resolver las disputas. Adicionalmente, aquellos eventos de carácter institucional que podían contribuir en la desaceleración del clima de confrontación estuvieron precedidos de tensas disputas que no lograron en lo fundamental alcanzar sus objetivos. Esto último ocurrió con las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, que mostraron su incapacidad para reencauzar el conflicto político o dirimirlo en alguna dirección. Así se abrió la puerta para que las estrategias rupturistas y extremas que clamaban por una solución de facto se consolidaran todavía más.

1973 marca un periodo donde un número amplio de factores comenzaría a cercar y estrechar las posibilidades de sobrevivencia del proyecto de la UP. Dicha alianza asumiría a plenitud un *modus vivendi* casi exclusivamente defensivo, evidenciando un comportamiento que en realidad ya se arrastraba desde el año anterior. Esto daba cuenta de que el oficialismo había perdido su capacidad de conducción política y de incidir con efectividad, con su lenguaje y conceptos propios, en la esfera pública. Si en 1972 el gobierno podía salir todavía fortalecido de ciertas coyunturas, inclusive de aquellas más críticas como fue el paro de octubre, al año siguiente esto no volvería a repetirse. Cada episodio y situación de confrontación que acaecía en el país, junto con incrementar la polarización general del escenario social y político,

terminaba por erosionar la legitimidad misma del gobierno, haciendo más plausible un término anticipado del proyecto socialista. Las piezas del tablero se iban posicionando de tal forma que resultaba previsible, ya antes del golpe militar de septiembre de 1973, que la crisis tendría una salida de facto.

El dirigente comunista español Santiago Carrillo comenta en sus memorias que en el tránsito hacia 1973 tuvo la “intuición” de que la experiencia socialista en Chile “no iba a tener un final feliz”. Entre los factores que le hacían adscribir a dicho diagnóstico, Carrillo señalaba haber constatado una situación “poco sólida”, de gran incertidumbre y frente a la cual el gobierno no tomaba las medidas suficientes para contrarrestar los peligros. Más aún, el dirigente español advertía que la UP se amparaba, como único escudo protector, en la legitimidad democrática, la cual resultaría posiblemente inservible –sentenciaba Carrillo– ante la fuerza bruta.³⁴³ Una mirada similar tenía el socialista Enrique Tierno Galván quien también tuvo la oportunidad de visitar Chile, poco antes de la caída de Allende. A su juicio, existían diversos factores que complotaban en contra de la experiencia de la UP y que iban desde el rol de los militares hasta la “precipitación dogmática” de algunos sectores de izquierda por radicalizar el proceso de cambios. El fin de la experiencia chilena, reconoce Tierno Galván, constituyó una lección histórica, aunque “muy amarga”, para muchos españoles en el sentido de actuar con prudencia en momentos de cambio y transición política.³⁴⁴

Como se puede ver, algunos actores relevantes del concierto político español enmarcaban los problemas existentes dentro de lo que advertían era una crisis integral del proyecto socialista chileno. Por su parte, los informes diplomáticos y la prensa en general aportarán, con sus diferencias y matices, un caudal importante de información, e incluso, aspectos pocos conocidos sobre un año crucial para la Unidad Popular.

Un primer escenario en el cual se desplegaron las miradas de España y Portugal estuvo articulado en torno a la coyuntura electoral de marzo de 1973. Estos comicios, se recordará, constituían un evento de la mayor importancia dados los objetivos que oposición y gobierno se habían trazado al respecto. Para la Confederación Democrática, que agrupaba a nacionales y demócratacristianos además de otros partidos menores, la cita electoral del 4 de marzo podía constituir un punto de inflexión mayor en su perspectiva

de frenar los alcances socializadores del proyecto de la UP. Incluso se esbozó la posibilidad de que se pudiera destituir al presidente Allende si se llegaba a controlar una fracción mayoritaria en el Senado. Pero esto requería del concurso de una sólida votación en prácticamente todos los distritos y agrupaciones electorales y aún más que la izquierda disminuyera sus porcentajes de apoyo hasta el mínimo posible. Para la izquierda, en tanto, resultaba de vital importancia que las elecciones se tradujeran en un apoyo sustancial al gobierno para de este modo consolidar el proceso de cambios y legitimar la vía chilena al socialismo. Además, el oficialismo esperaba que la votación a los candidatos de la izquierda les permitiera asegurar un porcentaje de las bancas parlamentarias para así evitar cualquier maniobra opositora tendiente a utilizar el Congreso como instrumento de presión que catalizara un descabezamiento del Ejecutivo.

Bajo estas coordenadas, la campaña electoral escenificada en los meses de enero y febrero fue una de las más polarizadas y violentas que se recuerden. A través de un informe evacuado por el Ministerio del Interior se indicaba que hasta el 19 de febrero se habían producido cuatro muertos, decenas de heridos de gravedad y casi 900 detenidos por diversas infracciones al orden público y a la ley electoral.³⁴⁵ Dichos incidentes, enmarcados dentro de la pugna política entre los bloques que disputaban la elección, compartieron el espacio con un número amplio de otras problemáticas y tensiones que también se verificaron en esos meses.

El periódico español *ABC* llamaba la atención en las primeras semanas del mes de enero respecto a los problemas de desabastecimiento de productos básicos y las medidas que se estaban tomando para racionar su distribución. En una nota del día 9, el corresponsal de este medio concluía que la escasez y carestía de mercancías constituía una evidencia palpable del “fracaso de la experiencia socialista en la economía chilena” que habían llevado al país a una situación “alarmante.”³⁴⁶ Días más tarde, este mismo corresponsal criticaría duramente la implementación por parte de las autoridades de una tarjeta de racionamiento, pues a su juicio este mecanismo vulneraba todas las “garantías constitucionales” e impedía de hecho “toda resistencia cívica al poder.”³⁴⁷

Esta visión crítica y casi apocalíptica de los planes que llevaba adelante el Gobierno de la UP fue compartida por el embajador portugués. En un

telegrama fechado el 11 de enero, de Castro e Abreu señalaba que luego de haber desmantelado el país, la UP anunciaba la imposición del racionamiento de alimentos a través de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), las que a su juicio eran verdaderas “checas” de “estilo comunista.”³⁴⁸ Resultaba indudable que el periódico español se había decantado, a través de las crónicas que enviaba su corresponsal «Veritas», hacia una visión del todo crítica de la experiencia chilena, dejando de lado su escepticismo inicial con que miró los primeros meses del gobierno de Allende. Dicha evolución se explicaba por los cambios que se decantaron dentro de la escena política chilena y que acusaban grados importantes de polarización entre la mayor parte de los actores y que exigían posturas cada vez más cerradas e intransigentes a la hora de evaluar el proceso de cambios. La postura del embajador portugués, en tanto, simplemente reafirmaba el criterio maniqueo con que venía analizando al Gobierno de la UP desde sus inicios. Para ambas miradas, en fin, las políticas de racionamiento y control del consumo que anunciaba el Ejecutivo chileno constituían una evidencia nítida de los oscuros planes por instaurar una dictadura comunista.

Aunque el tema de las restricciones en el acceso a bienes alimenticios fue una problemática que se extendería a lo largo de las semanas, la contingencia electoral puso prontamente el tema de la violencia política en un lugar preponderante de la agenda pública. Desde una perspectiva mundial, pero que conectaba en buena medida con los énfasis que se discutían en Chile, el columnista “Europeo” del periódico *El Alcázar* indicaba que acusar de violencia a la derecha y al centro político cuando se defendían del marxismo constituía una gran hipocresía. A su juicio, a partir de la Revolución Francesa y pasando por la Comuna de París, la primera violencia siempre fue desencadenada por la izquierda y sus cómplices.³⁴⁹ Desde el plano local, el embajador español llamaría la atención respecto a las palabras del presidente Allende quien sostuvo en un discurso público a inicios de febrero que el proceso chileno que él comandaba quería consolidar la revolución anticapitalista y antiimperialista evitando la guerra civil, pues el pueblo “no necesitaba la violencia”. Pero al mismo tiempo, indicaba Pérez Hernández, Allende había sostenido que lo anterior no significaba en ningún caso que el pueblo no estuviera movilizado y que no respondería al fascismo con la

“violencia revolucionaria.”³⁵⁰ Este tipo de declaraciones estaban inscritas dentro de lo que el diplomático advertía como un clima caracterizado por el deterioro económico y la “radicalización del país”, lo cual no auguraba un ambiente de calma para después de las elecciones. Considerando estos elementos, Pérez Hernández sostenía que las esperanzas seguían “centradas” en las Fuerzas Armadas, dando a entender con ello que los institutos castrenses eran los únicos actores capacitados para devolver la paz y la tranquilidad al país.³⁵¹

El embajador portugués, en tanto, advertía a lo largo de febrero que el clima de violencia que se observaba en el país resultaba bastante grave. Además de entregar una visión general de esta problemática, de Castro e Abreu se detenía en los numerosos incidentes y casos de violencia que se habían producido en las últimas semanas y que habían dejado “un saldo já significativo de mortos, feridos e detidos”. Siguiendo la información proporcionada por el Ministerio del Interior a través de un informe publicado a finales de enero, el diplomático indicaba que se habían verificado cerca de 30 atentados contra personalidades o sedes de partidos políticos.³⁵² Hacia la segunda quincena de febrero, el representante luso refirió uno de los hechos de violencia ocurridos en la capital donde un militante del PDC, Jaime Iglesias Contreras, fue abatido en un confuso incidente con brigadistas del PC. Según el embajador, el hecho correspondió a un ataque contra un grupo de jóvenes demócratacristianos que efectuaban propaganda electoral, y cuyo saldo fue la muerte de “um rapaz de 18 anos, membro de daquela colectividade política.”³⁵³ La información, como era habitual en los despachos de este representante sería acompañada únicamente con recortes de la prensa de oposición, en este caso de *El Mercurio* y *La Prensa*.

Desde un ángulo más amplio, el periódico lisboeta *Diário de Notícias*, a través de su sección internacional, refería el problema de la violencia política como una problemática regional. Según este medio, el clima de subversión que se vivía “não pode admitir-se por forma alguma, seja qual fos a rota em que actue ou o rótulo que ostente”. Siendo más preciso a este respecto, el rotativo indicaba que se venía verificando que en Latinoamérica, “e graças á central subversiva constituída por Cuba, e agora, amparada pelo Chile”, existía una infección que se propalaba por diversas zonas y que además de perturbar

y agitar “provoca perda de vidas e bens.”³⁵⁴ Bajo esta mirada, Chile se encontraba situado dentro de los países que promovían o amparaban la subversión que había emergido en esta región y frente a la cual, según *Diário de Notícias*, no existía otro camino que combatirla. A decir verdad, este enfoque no era del todo nuevo respecto a la experiencia socialista chilena. Se recordará que en algunas publicaciones españolas como *Fuerza Nueva*, y en general en los núcleos conservadores de toda Hispanoamérica, se identificó a la UP como parte de un proceso político mayor vinculado a la expansión del comunismo. Desde tales premisas, se sostuvo, en fin, que el gobierno de Allende compartía propósitos y estrategias comunes, y similares, con todos los movimientos revolucionarios del continente, especialmente con aquellos que operaban en Cuba, Uruguay y Bolivia.

Bajo este complejo marco, e identificado por algunos actores extranjeros como próximo a una subversión comunista de carácter continental, se realizaron los comicios parlamentarios a inicios de marzo. La conclusión más transversal y que estuvo presente en la mayoría de los análisis apuntaba a que los resultados de la elección no habían dirimido en lo fundamental la crisis social y política existente. Tanto la UP, al obtener un 44% de los votos, como así también la oposición, empujada sobre el 54%, se mostraban como fuerzas en general sólidas que contaban con respaldos masivos en distintos núcleos de la sociedad chilena.

El embajador español constató con certeza este ambiente de equilibrio político, en que ninguna fuerza podía derrotar a la otra, aunque comentaba de la existencia de una “profunda decepción” en sectores opuestos que confiaban en una victoria más rotunda. Tal situación, a juicio de Pérez Hernández, implicaría seguramente el “empeoramiento progresivo” de la economía y la radicalización de los dos sectores en que se encontraba dividido el país.³⁵⁵ Días más tarde, el diplomático advertía que las dudas que comenzaron a emerger respecto a la exactitud de los resultados electorales empezaban a generar un cuadro de cierto nerviosismo en algunos actores, traducándose en “desórdenes de cierta importancia” verificados al anochecer del día 5 de marzo.³⁵⁶

Este panorama que comenzaba a mostrar un incremento de la polarización política fue de nuevo remarcado por Pérez Hernández algunas semanas

después. En un telegrama fechado el 13 de abril, el diplomático sostuvo que, tras los comicios parlamentarios, se hablaba con insistencia de un “enfrentamiento que podría desembocar en una situación semejante a la de octubre pasado”, es decir, se asumía como cierta la posibilidad de un nuevo escenario de extrema tensión semejante al que se escenificó a finales de 1972.³⁵⁷

La prensa hispana, por su parte, observó desde distintos ángulos los resultados electorales verificados en Chile, aunque coincidiendo en la mayoría de los casos que aquellos no habían definido con rotundidad al triunfador. El periódico *ABC* sostuvo, en efecto, que el resultado no satisfacía a ninguno de los dos bandos en disputa, situación que haría muy difícil superar la crisis política que existía en el país sudamericano. Dicha crisis, argumentaba el corresponsal «Veritas», se había causado por la acción tenaz de un gobierno de “inspiración marxista” que se empeñaba en llevar adelante su programa en contra de la voluntad de una oposición “mayoritaria.”³⁵⁸ Días más tarde, el mismo corresponsal sentenciaba que la UP, gracias a la votación obtenida por socialistas y comunistas, se perfilaba con mayor nitidez como alianza “dominada por el marxismo”, lo que le permitiría dejar en el camino a sus compañeros de ruta como el PR o la Izquierda Cristiana.³⁵⁹ Desde las páginas de *El Alcázar* se sostuvo, en tanto, que más allá de las cifras la elección no había resuelto la pugna por el poder legislativo, pues tanto la izquierda como la derecha se “neutralizaban mutuamente”. Ello, sentenciaba el periódico, solo iba en detrimento del buen Gobierno para el país.³⁶⁰ El enviado especial de *Arriba*, Diego Carcedo, indicó que aun cuando no se conocían los resultados definitivos podía anticiparse que no habría “destitución del presidente”. Con todo, el periodista señalaba que los cuatro años de mandato que le restaban a Allende no serían fáciles, pues éste tendría que seguir capeando la “acción obstaculizadora del Legislativo” y enfrentarse a una muy probable campaña en contra desatada por la derecha.³⁶¹

Por su parte, *Cuadernos para el Diálogo* sostuvo que los resultados electorales constataban dos cuestiones esenciales. La primera de ellas era que la alianza opositora CODE no había alcanzado la mayoría suficiente como para poner en aprietos al Gobierno de la UP. La segunda conclusión era que la votación de la izquierda significaba un “espaldarazo popular” para la continuación de la política “social-reformista” que llevaba adelante

Allende. En esta misma edición, Mariano Aguilar Navarro analizaba los comicios chilenos desde una perspectiva bastante amplia, diríase que incluso mundial. Ello porque en su análisis posicionó la coyuntura del país sudamericano en paralelo a otros comicios que se realizaban en este mismo periodo en lugares como Irlanda, Francia y Argentina. A juicio del columnista, se trataba de eventos de distinta naturaleza, pero que por sus implicancias desbordaban los “confines” estrictamente nacionales. Es decir, las consecuencias de estos comicios podían incidir en terceros países e incluso en organismos internacionales como la Comunidad Económica Europea (CEE) o la Organización de Estados Americanos (OEA). Aguilar sostenía que, en todas estas elecciones, el porcentaje de abstenciones había sido bajísimo lo que reflejaba un alto grado de sensibilidad política en la ciudadanía, situación que demostraba, además, que en diversos sectores sociales existían nociones bastante importantes sobre el tiempo y el cambio. Es decir, parecía existir una fuerte conciencia acerca del momento histórico por el que atravesaban diversas sociedades.

En relación a la elección chilena, el columnista se detuvo sobre todo en la actuación de la opositora CODE. A su juicio, esta alianza había planteado en los hechos una lucha en contra de todo tipo de renovación, defendiendo una estrategia abiertamente contrarrevolucionaria. Más aún, según Aguilar, la batalla trascendental que libraba el gobierno de Allende en contra del neoimperialismo era un hecho que estaba en perfecta sintonía con los diagnósticos del propio Frei Montalva. Sin embargo, al llegar la hora de asumir un compromiso real en esta lucha buena parte del sector demócratacristiano liderado por el propio Frei había terminado por pactar “con los enemigos de la nación chilena.”³⁶²

Desde las páginas de *Sábado Gráfico*, Alfonso Palomares, destacaba que las cifras electorales habían “congelado” las esperanzas tácticas de la oposición que buscaban destituir al primer mandatario. El conjunto de los datos, afirmaba el columnista, daba cuenta de que en Chile se vivía un intenso proceso de politización, pues a pesar de las dificultades por las que atravesaba el gobierno, la izquierda había aumentado su votación.³⁶³ Bajo este prisma, los condicionantes económicos no se constituyeron en factores claves para decantar la inclinación de la balanza a favor de la oposición, pues el

significado político que encerraba el programa de transformaciones estructurales propuesto por la UP parecía tener mayor peso. En las páginas de *Triunfo* se destacó que el aumento de la votación de la UP era significativo y que, por contrapartida, el estancamiento en la votación de la oposición frenaba las aspiraciones derechistas dirigidas a destituir al presidente Allende. Según el semanario, si en estos dos años el gobierno socialista no había perdido votos, sino que incluso los aumentaba, se podría pensar que el proyecto de la UP tenía un “porvenir posible.”³⁶⁴

La mirada crítica respecto a las conclusiones triunfalistas que sacaba la UP y sus partidarios provino, como era de esperar, desde las páginas de *Fuerza Nueva*. Según esta publicación, las cifras electorales eran muy relativas, pues debían compararse con otros comicios, por ejemplo con las municipales de 1971 donde la UP había obtenido cerca del 50%. Pero más importante todavía era el hecho de que los graves problemas económicos y la “bancarrotta del régimen marxista” mostraban que, en el fondo, más allá de los “sofismas” y “deformaciones”, el Gobierno del frentepopular chileno estaba derrotado.³⁶⁵ Desde *Mundo Obrero*, en cambio, se publicaron los telegramas con que el PCE saludó a Salvador Allende y al secretario general del PC de Chile, Luis Corvalán L pez, por “la victoria de la Unidad Popular”. Adicionalmente, en ambos documentos se declaraba una esperanza manifiesta en torno a los nuevos avances y  xitos que pod a alcanzar esta coalici n.³⁶⁶

En Portugal, el peri dico comunista *Avante!* destac  la consciencia revolucionaria de la clase obrera que hab a permitido aumentar la votaci n de la izquierda respecto a la elecci n de 1970. Tal situaci n, a juicio de este medio, se explicaba en buena medida gracias a las realizaciones progresistas del gobierno de la UP, como la reforma agraria o la pol tica de nacionalizaciones de los recursos naturales. A pesar de este auspicioso panorama, *Avante!* advert a que la situaci n era compleja y que los sectores reaccionarios al interior del pa s sudamericano, junto a sus apoyos externos “n o se d o por vencidos”, por lo que no se pod a descartar que estos elementos recurrieran a la violencia.³⁶⁷ La revista cultural *Seara Nova* tambi n enfatiz  en que las cifras electorales pod an leerse como un triunfo de la coalici n oficialista, se nalando adem s que se abr a una etapa de “certa estabilidade pol tica” que permit a avizorar nuevas fases en la conducci n al socialismo.³⁶⁸ *Di rio de*

Lisboa, por su parte, destacaba el proceso electoral chileno en paralelo a las elecciones que habían tenido lugar en Francia y que arrojaron también una alta votación para la izquierda. Al analizar específicamente el caso chileno, este medio indicó que, aunque la oposición había alcanzado la mayoría, el bloque oficialista liderado por el “presidente marxista Salvador Allende”, obtuvo cerca del 40% de los votos, una cifra más alta que cualquiera que haya obtenido un gobierno anterior. Con todo, este medio destacaba que los resultados de los comicios parlamentarios fueron tomados como una victoria “pelos dois lados.”³⁶⁹

Mirado en perspectiva, las elecciones parlamentarias chilenas tuvieron dos coyunturas importantes en las cuales los actores ibéricos centraron sus análisis. La primera de ellas estuvo relacionada con los hechos de violencia política que se registraron en el marco de la campaña durante los meses de enero y febrero y que volvían a posicionar esta problemática como un factor creciente de desestabilización y polarización. Mientras el embajador español llamaba la atención respecto a los conceptos vertidos por algunas autoridades que amenazaban con utilizar la “violencia revolucionaria”, el representante portugués advertía que la situación se había tornado gravísima, sobre todo por la actuación de los grupos de choque de izquierda. La segunda coyuntura estuvo vinculada a los resultados mismos de los comicios, los cuales, como se ha detallado, no resolvieron en lo fundamental el *impasse* político existente en el país. Para la mayor parte de los observadores extranjeros, aun cuando resultaba evidente que la izquierda chilena había aumentado su votación, no se podía desconocer que la oposición seguía siendo una fuerza importante y mayoritaria. El punto clave en muchos análisis radicó en que dichos comicios, al revelar un virtual equilibrio entre los bloques en pugna, frenaron de golpe los propósitos y estrategias que algunas colectividades se habían trazado. En esta línea, no pocos analistas advirtieron que, a pesar de la ejemplaridad de la jornada eleccionaria chilena, sus resultados contribuirían a empujar la solución a la crisis social y política hacia afuera del marco institucional.

Lo anterior pareció confirmarse cuando estallaron sendos conflictos en las semanas siguientes a las elecciones a propósito de diversas materias que serían objeto de una intensa discusión. Esta dinámica de activación de las

tensiones políticas se vería reforzado por un incremento de la movilización social en las calles, situación que ya no se detendría hasta la antesala del golpe de Estado en el mes de septiembre. De aquí en adelante cada confrontación parecía superar en intensidad y violencia a la anterior, en una espiral que cada semana parecía alcanzar sus puntos más álgidos.

Efectivamente, entre mediados de marzo y abril se verificaron numerosos incidentes y desórdenes que tuvieron como telón de fondo dos grandes conflictos. El primero de ellos fue el relativo al proyecto gubernamental de la denominada Escuela Nacional Unificada (ENU) que en pocos días lanzó a la calle a miles de estudiantes secundarios de uno y otro sector, además de los grupos de choque de diversos partidos y movimientos. La polémica se desató al conocerse algunos documentos emanados desde el Ministerio de Educación que en apariencia perfilaban los reales objetivos del proyecto ENU, los cuales tenían directa relación con el proceso de transición al socialismo. Aunque el mencionado proyecto educacional se venía discutiendo desde hacía meses en el país, la información surgida en el mes de marzo desató una ola de críticas y declaraciones cruzadas entre los actores en pugna. Las voces más críticas provinieron desde las federaciones estudiantiles, los partidos de la oposición e inclusive desde la Iglesia Católica.³⁷⁰ Ante un panorama que se visualizaba en extremo complejo, y al carecer el mencionado proyecto de la suficiente legitimidad para abrir una discusión en torno a sus alcances, el gobierno decidió suspender su aplicación hasta nuevo aviso.

El segundo conflicto, iniciado a mediados de abril, orbitó en torno a la huelga de los mineros de El Teniente. A pesar de estar circunscrita a un espacio regional pronto alcanzaría dimensiones nacionales dadas sus implicancias económicas y el apoyo de numerosos actores, sobre todo de oposición, a las demandas de estos trabajadores.³⁷¹ El problema surgió por una interpretación oblicua que hicieron los mineros de la ley de reajuste de salarios promulgada por el gobierno poco tiempo atrás. A juicio de los trabajadores, dicha medida significaba que a ellos les correspondía un doble reajuste; el que ya se había aprobado para su empresa y el que ahora dictaminaba el Ejecutivo para todo el sector público. La autoridad política, como era de esperar, se negó terminantemente a conceder el doble reajuste decisión que fue respondida con manifestaciones y el inicio de una larga huelga en

el yacimiento El Teniente. En poco tiempo, esta problemática se materializaría incluso en las calles de la capital cuando cientos de mineros decidieron marchar, a mediados de junio, sobre Santiago a objeto de presionar a las autoridades ejecutivas.

Ambos conflictos catalizaron diversos hechos de violencia al contribuir en la creación de una atmósfera de máxima tensión muy proclive para el enfrentamiento entre actores rivales. Es decir, se había escenificado un conflicto social y político extremadamente denso en las calles de la capital, que albergaba en su entorno a actores con distintos propósitos y expectativas, aunque la mayor parte de estos manifestaba una predisposición anímica para la confrontación violenta.

En el caso concreto del proyecto educacional del gobierno, varios actores tomaron nota de sus implicancias y consecuencias, sobre todo respecto a las movilizaciones y desórdenes que se producían con regularidad en el centro de la capital, advirtiendo que incluso estaban en juego elementos más estructurales. El embajador español informó en un telegrama fechado el 26 de abril que los estudiantes secundarios se estaban manifestando “violentamente” en las calles de Santiago en contra del proyecto de la ENU. Al mismo tiempo, destacaba las palabras del ministro de Educación quien había hecho un llamado a la calma, además de reafirmar que ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno justificaba las reacciones de violencia que se habían observado en esos últimos días.³⁷² Desde Portugal, *Diário de Notícias* consignaba que los incidentes y marchas de los estudiantes secundarios habían dejado en apuros al presidente Allende debido al “plano de educação marxista” que se intentaba aplicar en el país.³⁷³ El diario *Época*, también de la capital lusa, indicaba que los chilenos rechazaban el plan educacional del gobierno lo que había desencadenado “novas manifestações contra Salvador Allende.”³⁷⁴ Por su parte, el embajador luso se refirió a esta coyuntura desde un punto vista más amplio. Según sus palabras, desde finales de marzo el gobierno de Allende había retomado con marcha acelerada sus intentos de “implantação república popular modelo marxista leninista” atropellando de esta manera la Constitución y las leyes.³⁷⁵ Desde este ángulo, las medidas coyunturales que adoptaba o buscaba implementar el gobierno de Allende debían necesariamente visualizarse al calor de un objetivo mayor

que consistía en la implantación de un Estado comunista. En este sentido, las acusaciones que se hicieron en contra del proyecto de la ENU calzaban a la perfección con los énfasis que manifestaba el embajador portugués.

Sobre los hechos de mayor violencia de estas semanas, ellos se materializaron entre finales de abril y la primera semana de mayo en el centro de Santiago. Como ya venía ocurriendo en esos últimos días, estos incidentes fueron protagonizados por estudiantes secundarios y militantes de diversos movimientos y partidos. El 27 de abril, los incidentes se produjeron frente a la sede del PDC que estaba, además, a escasas cuadras del palacio de gobierno. En horas de la tarde un grupo de trabajadores partidarios del gobierno comenzó a desfilarse por el sector, produciéndose algunos enfrentamientos y connatos de peleas con diversos individuos. En medio de estos hechos, cayó muerto el trabajador y militante comunista José Ahumada Vásquez al recibir un disparo perpetrado, presumiblemente, desde la sede demócrata-cristiana. Una semana después, y al alero de otros incidentes callejeros producidos en la capital, fue asesinado el militante de Patria y Libertad, Mario Aguilar Rogel, mientras perseguía a un presunto militante de izquierda que había disparado en contra de sus compañeros. Además de estas dos víctimas fatales, los incidentes habían dejado numerosos detenidos y una decena de heridos de diversa consideración.

La prensa española tomó rápida nota de estos hechos y del clima de confrontación que se vivía en Chile. El periódico *ABC* señalaba, ya desde el mismo día 27, la multiplicidad de incidentes y choques que se producían en la capital chilena. Así, por ejemplo, daría cuenta en dos ediciones sucesivas del apedreo que sufrió el palacio presidencial de La Moneda y los enfrentamientos entre los estudiantes secundarios y Carabineros.³⁷⁶ El día 29, en tanto, referiría los “graves desórdenes públicos” producidos en el país y que se materializaron, para el caso de la capital, frente a la sede del PDC teniendo como saldo un individuo fallecido. Según la versión de «Veritas» la víctima no había sido identificada todavía. Además, el corresponsal de este medio daría cuenta de otro suceso “deplorable”, que se refería a la agresión que sufriera el director del “combativo periódico anticomunista PEC”, Jaime Valdés, en el centro de Santiago.³⁷⁷ Respecto a los incidentes producidos a inicios de mayo, y que terminaron con la muerte de un militante de Patria

y Libertad en un cruento tiroteo, *ABC* habló de un “ataque marxista” en contra de una manifestación de este movimiento. A diferencia de lo que había sucedido con el fallecido del día 27 de abril, «Veritas» identificó rápidamente al militante frentepatrlista muerto, señalando, además, que este hecho tenía las características de ser una operación comando ejecutada por “elementos de ultraizquierda”. Por último, el corresponsal advertía que este tipo de hechos unidos a los actos de terrorismo y de violencia habían sido en otros tiempos ajenos a la serena y pacífica convivencia democrática.³⁷⁸ Con tal afirmación, «Veritas» daba a entender que dichos rasgos se habían perdido en el Chile de la UP, siendo reemplazados por otros valores y conductas. La conclusión final de *ABC* sobre el conjunto de incidentes que tenía lugar en el país sudamericano era que existía una compleja situación de orden público “susceptible de degenerar en hechos de violencia generalizada.”³⁷⁹

Desde *La Vanguardia* se informaba, en primer término, que los incidentes del día 27 de abril habían dejado un saldo de más cien detenidos y casi setenta personas heridas, teniendo un protagonismo activo en los disturbios cientos de jóvenes de la oposición que “sembraron de fogatas y barricadas” las calles del centro de la capital.³⁸⁰ En su edición de 29 de abril, este medio referiría la muerte del militante comunista, aunque sin señalar su identidad, al tiempo que consignaba la decisión de las autoridades chilenas en orden a adoptar todas las medidas necesarias para mantener el orden público.³⁸¹ Sobre el crimen del militante de Patria y Libertad, el periódico barcelonés enmarcaba este suceso como parte de un “violento choque” entre miembros de la ultraizquierda y la ultraderecha. Al mismo tiempo, este medio consignaba las declaraciones del dirigente del movimiento nacionalista Ion Cheffer (sic) quien sostuvo que el ataque en contra de sus militantes fue llevado a cabo por el MIR, además de recalcar que en ningún momento gente de su sector hizo uso de armas de fuego.³⁸²

La revista *Fuerza Nueva* señaló como punto de partida que el fracaso de los intentos por “bolchevizar” la enseñanza chilena habían causado la irritación de los dirigentes marxistas que convocaron con rapidez a una manifestación de apoyo al gobierno. En este contexto, casi diez mil “marxistas con cascos de acero”, indicaba esta publicación, comenzaron a desfilar por el centro de Santiago, produciéndose frente a la sede del PDC los inciden-

tes que terminaron con un muerto y siete heridos entre los manifestantes “o asaltantes, como se les quiera llamar”. En este contexto, *Fuerza Nueva* justificaba la reacción de los militantes democratacristianos que supuestamente dispararon en contra de los manifestantes porque lo hicieron en “defensa propia” porque de lo contrario “habrían sido degollados como corderos”. En relación a los incidentes del 4 de mayo, que acabaron con la vida de un militante de Patria y Libertad, esta publicación atribuyó la responsabilidad del crimen “a un grupo de pistoleros izquierdistas.”³⁸³

El periódico falangista *Arriba* enfatizaría, por su parte, la gravedad de los incidentes, destacando que se trataba de uno de los “peores brotes de violencia” ocurridos en el país en los últimos meses. En la materialización de los enfrentamientos, este medio destacaba la participación tanto de estudiantes como de trabajadores, estando estos últimos “protegidos con cascos y armados con largos palos”. Sobre la muerte del militante comunista José Ahumada, *Arriba* no entregó su identidad o militancia, pero sí describió lo ocurrido frente a la sede del PDC reconociendo en todo caso que se trataba de un incidente “confuso” producido luego de una batalla a pedradas entre distintos manifestantes.³⁸⁴ En relación a la muerte de Mario Aguilar, este periódico la insertó, siguiendo información proporcionada por algunas radioemisoras, dentro de un enfrentamiento entre el grupo “neofascista Patria y Libertad” y las “juventudes socialistas” en el centro de la capital.³⁸⁵ Poco después, se indicaría que en diversos medios periodísticos y políticos del país sudamericano se aventuraba como una posibilidad cierta que Patria y Libertad pudiese llevar a cabo acciones represivas en contra del grupo ultraizquierdista que estuvo detrás de la muerte de su militante.³⁸⁶

El embajador español, por su parte, que ya había referido su preocupación por los incidentes estudiantiles, aportó relevantes datos sobre el clima político que se vivía en esos días y el parecer de algunas autoridades. En un telegrama de carácter reservado, enviado el día 27 de abril, Pérez Hernández comentaba de una comida a la que había asistido la noche anterior y en la cual compartió con numerosos invitados, entre ellos el ministro secretario general de gobierno, Aníbal Palma, dirigentes socialistas y algunos diplomáticos chilenos partidarios de la UP. La conversación, indica el embajador, versó sobre los graves incidentes que se venían produciendo en el centro de la capital y que ya

dejaban decenas de heridos. Más adelante comentaría sobre la conversación que mantuvo con el ministro Palma, quien le manifestó “privadamente” que, de producirse un nuevo paro gremial de los camioneros, habría que vencer a este por “*Knock out*”. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, según informa Pérez Hernández, sostuvo que la izquierda no estaba dispuesta a permitir que la oposición ganara la calle y que para concretar tal propósito estaban dispuestos a recurrir a la “milicias obreras”. El embajador concluía su informe señalando que la situación se tornaba aún más confusa debido a la división que parecía existir en el Ejército y la FACH.³⁸⁷

En un telegrama posterior, Pérez Hernández destacaba las palabras que había pronunciado a comienzos de mayo el presidente Allende respecto a que en los incidentes que se venían produciendo en la capital tuvieron un protagonismo importante grupos de estudiantes que eran “lanzados” a la calle. Además de ello, Allende también había señalado, según el diplomático, que ante los intentos subversivos de algunos grupos recurriría a las Fuerzas Armadas y a la “fuerza organizada del pueblo” para combatirlos.³⁸⁸ Aunque sin decirlo expresamente, el mensaje del embajador daba a entender que existía cierta ambigüedad en las palabras del primer mandatario toda vez que por una parte condenaba los incidentes producidos por los secundarios, pero otro lado amenazaba con la fuerza de los sectores populares para hacerles frente. Este tipo de inconsistencias observadas no eran, en todo caso, exclusivas de algunos actores, sino que constituían un rasgo transversal dentro de los discursos políticos que recorrían el espacio público en aquellos momentos, muchos de los cuales, además, eran alimentados por los hechos de violencia que ocurrían en el país.

Desde Portugal, esta compleja coyuntura de finales de abril y comienzos de mayo fue referida enfatizando diversos aspectos. El periódico lisboeta *Diário de Notícias* señalaba, en su edición del 29 de abril, que cuando la manifestación de trabajadores pasaba frente a la sede del PDC “varias balas foram disparadas, causando a norte de um trabalhador e alguns feridos”. Tras los hechos, indicaba este medio, tanto el presidente Allende como la oposición “acusam-se mutuamente.”³⁸⁹ Por su parte *Diário Popular* indicaba que en los incidentes producidos la tarde del 27 de abril fueron heridas ocho personas por disparos de origen desconocido, los cuales no obstante causaron un muerto.

Este medio también consignó las declaraciones de algunas autoridades que señalaban que tras los desórdenes se escondía un plan para provocar “desordens e caos.”³⁹⁰ Sobre la muerte del militante de Patria y Libertad verificada el 4 de mayo *Diário Popular* la enmarcó dentro de una seguidilla de incidentes que se venían produciendo desde la semana anterior en las calles de la capital. Estos hechos, según el periódico, involucraban “a classe trabalhadora e a manifestações contra o Governo.”³⁹¹ El diario *Época* se enfocó sobre todo en la muerte del militante de Patria y Libertad. En su nota del 7 de mayo destacó diversos aspectos de este grupo, deteniéndose sobre todo en las declaraciones realizadas por sus dirigentes en el sentido de que comenzarían a utilizar sus “proprios meios” contra “os ataques dos esquerdistas.”³⁹²

Desde las páginas de *O Século* se desarrolló un énfasis similar al que había destacado *Diário Popular* en el sentido de explicitar las declaraciones del Gobierno que apuntaban a que los incidentes producidos formaban parte de un plan terrorista organizado por la oposición “centro-conservadora”. En esta misma nota, *O Século* indicaba que varios observadores se preguntaban si los llamados a la calma y la serenidad que hacía el presidente Allende serían suficientes para llegar al final del camino que el mandatario se había trazado.³⁹³ Sobre los incidentes ocurridos a inicios de mayo, este medio destacó la mayor parte de los detalles que ya habían entregado otros medios respecto a la muerte de un militante de Patria y Libertad, aunque señalando que los fallecidos habían sido dos, pues se incluía a Ernesto Miller como una de las víctimas. La atmósfera política que se vivía en la capital chilena a propósito de estos incidentes mostraba, según *O Século*, una tendencia al deterioro progresivo.³⁹⁴

Por último, la mirada del semanario *Expresso* fue bastante interesante porque expuso lo que a su juicio venía sucediendo realmente en las últimas semanas en el país sudamericano. Según su impresión, el presidente Allende venía sufriendo “constantes arremetidas da oposição cristã-democrática, a qual não tem hesitado em passar à violência para conseguir lançar o país no caos político.” Tal objetivo, señalaba este medio, ya había sido denunciado por el propio mandatario quien había declarado conocer de un plan para arrastrar al país “a uma guerra civil.”³⁹⁵

Desde la embajada portuguesa, Armando de Castro e Abreu sostuvo que la responsabilidad de los hechos de violencia ocurridos en las últimas sema-

nas recaía solo en la izquierda. Había sido, en efecto, el gobierno quien hizo salir a las calles a sus huestes armadas para atacar, según indicó, a los pacíficos estudiantes que se encontraban protestando. Esto provocó, concluía el diplomático, la “legítima defensa” de dichos manifestantes.³⁹⁶

La muerte del militante comunista José Ahumada Vásquez, verificada el 27 de abril, fue referida por el embajador luso a partir de los incidentes que se habían producido frente a la sede central del PDC. Según la información transmitida a la cancillería de su país, en el marco de los disturbios y enfrentamiento que estaban ocurriendo se produjo “um tiroteio, cuja origem e participantes são agora objecto de investigação judicial.”³⁹⁷ El informe referido por el diplomático llevaba adjunto once recortes de prensa provenientes, como ya había sucedido en la mayoría de los otros casos, de los periódicos *El Mercurio* y *La Prensa*.

Respecto a la muerte del militante de Patria y Libertad, el embajador luso indicó que ella se insertaba dentro de una ola de violencia más amplia desarrollada en los últimos meses. En relación al movimiento nacionalista, de Castro e Abreu recordaba que dicho movimiento se oponía de forma tenaz a los intentos de la izquierda por implantar un sistema totalitario.³⁹⁸ Como se puede apreciar esta mirada constituía un ejemplo perfecto de aquellas imágenes que habían construido una visión maniquea sobre la vía chilena al socialismo y que encasillaban al conjunto del oficialismo como parte de un proyecto que buscaba instaurar una tiranía en Chile. Al igual que como había ocurrido con el caso de los estudiantes secundarios, los militantes de los partidos y movimientos opositores al Gobierno de Allende eran vistos por este diplomático como víctimas de los oscuros planes de la izquierda. Tal perspectiva guardaba diferencias ostensibles con aquella manifestada por el embajador español, la que si bien no se mostraba partidaria del proyecto socialista de la UP al menos lograba referir con mayores cuotas de ecuanimidad las distintas coyunturas que se vivían en Chile, incluso aquellas más problemáticas.

Los episodios vividos entre finales de abril y los primeros días de mayo contribuyeron, sin duda, a incrementar los niveles de polarización política, no observándose un declive sustantivo de ellos en el futuro. A pesar de que algunos conflictos iban quedando atrás, sus consecuencias no desaparecían

inmediatamente y más aún ellas terminaban por conectarse con nuevos incidentes críticos que aparecían en la esfera pública.

Desde mediados de mayo el tema de los desórdenes y enfrentamientos callejeros volvería a aparecer en escena a propósito de la huelga de los mineros de El Teniente. Junto a esta manifestación emergería el tema de los militares como factor relevante dentro del acontecer nacional, ya sea por su mayor involucramiento en las labores de resguardo y mantención del orden público como respecto a su papel dentro de la crisis social y política que se vivía. Todas estas problemáticas se extenderían a lo largo de estos meses alcanzando sus puntos culminantes en la segunda quincena de junio y a lo largo de julio y agosto hasta desembocar en el golpe militar del 11 de septiembre.

Se recordará que, en el caso de la huelga de los mineros, esta tuvo su origen en una interpretación oblicua de la ley de reajustes por parte de los trabajadores, quienes deseaban obtener un incremento doble de sus salarios. Ante la negativa del gobierno a conceder dicho aumento, los mineros paralizaron sus faenas iniciando un conflicto de larguísima duración –desde mediados de abril hasta finales de junio–, el cual, en sus momentos más álgidos, se caracterizó por numerosas situaciones de violencia y extremismo. Como era de suponer, esta problemática no quedaría circunscrita a un plano estrictamente laboral, pues los partidos opositores apoyaron las demandas de los trabajadores como una forma de confrontar al gobierno. En otras palabras, la huelga de El Teniente sintetizó buena parte de la pugna política y social que se vivía en Chile en esos momentos.

El embajador español referiría en detalle el conjunto de estas problemáticas hacia finales del mes mayo, cuando el conflicto con los mineros alcanzaba uno de sus puntos culminantes. En un telegrama fechado el día 24, Pérez Hernández comentaba que los incidentes producidos en la ciudad de Rancagua (donde hubo un tiroteo en las inmediaciones de la sede regional del PS), unidos a conflictos localizados en otros puntos del territorio “caldeaban” gravemente la tensión política y social del país. Asimismo, el diplomático sostenía que una fuente “muy bien informada” le había señalado que Allende estuvo próximo a cancelar su viaje a Argentina para participar en el cambio de mando de ese país, cuestión que no ocurrió en virtud del propósito de aquél por mantener una sensación de normalidad en el exterior.³⁹⁹ Tal situación,

de ser cierta, no implicaba que Allende no estuviera preocupado de la compleja situación que se vivía en Chile. De hecho, el mismo embajador español comentaba en un telegrama posterior que un asesor personal e “íntimo amigo del presidente” le refirió la “angustia” con que el gobierno sufría la problemática económica, sobre todo en lo que tenía relación con el desabastecimiento de víveres y repuestos industriales.⁴⁰⁰

Desde un ángulo distinto, y como ya era habitual en sus informes y telegramas, el embajador portugués visualizaba el periodo de tensión por el que atravesaba Chile como producto de las acciones llevadas a cabo por el gobierno y sus bases militantes. En un documento de inicios de junio, de Castro e Abreu indicaba que la UP se había lanzado a una lucha frontal en contra de los otros poderes del Estado. De hecho, afirmaba el diplomático luso, se había desarrollado una violenta campaña de descrédito y calumnias en contra de diversos dirigentes de la oposición, temiéndose en breve plazo “assassinatos [de] suas figuras mais representativas.”⁴⁰¹ Aunque no se mencionaba en específico el conflicto laboral de los mineros, era del todo evidente que para el embajador este tópico formaba parte de un contexto de confrontación más amplio en el cual lo realmente peligroso eran las acciones y estrategias planificadas por el Ejecutivo. Es decir, los desórdenes incitados por los trabajadores en huelga y los destrozos cometidos por los grupos de choque de la oposición no trasuntaban un perfil desestabilizador ni amenazante para de Castro e Abreu como sí lo eran los planes de la izquierda que, según se indicaba, podía materializar numerosos homicidios políticos en el corto plazo.

A mediados del mes de junio, cuando el conflicto minero ya se arrastraba por más de sesenta días, se vivieron hechos de extrema gravedad en el marco de la marcha que hicieron los trabajadores desde la ciudad de Rancagua y su posterior arribo a la capital. Uno de los primeros incidentes se produjo en las afueras de Santiago cuando fuerzas de Carabineros intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros lanzaguas a objeto de evitar su llegada a Santiago. No obstante esta acción, los mineros ingresaron a Santiago a través de distintas vías, concentrándose en pleno centro de la ciudad, muy próximos a la sede del PDC. Al cabo de unas horas, y ante el llamado de los sectores oficialistas para que las bases de izquierda

salieran a las calles a apoyar al Gobierno –aunque se entendía que también era una invitación para confrontar a los huelguistas– se produjeron múltiples enfrentamientos y hechos de violencia.⁴⁰²

En dos telegramas sucesivos, fechados ambos el 16 de junio, el embajador español comentaría estos hechos. En el primero de ellos se señalaban algunos datos específicos de los choques que se habían producido en las calles de la capital entre los mineros “respaldados por estudiantes de oposición” con elementos pertenecientes a “distintas tendencias izquierdistas”. Según el diplomático, Carabineros solo logró controlar la situación en horas de la noche tras una refriega que había dejado como saldo “un muerto, dos heridos por arma de fuego y más de 100 contusos.”⁴⁰³ En el segundo telegrama, Pérez Hernández advertía que los incidentes producidos constituirían los “primeros brotes del temido enfrentamiento”. Tal apreciación se basaba, sobre todo, en la disposición estratégica de los grupos que se enfrentaron en el centro de la capital, con contingentes muy numerosos de estudiantes, demócratacristianos y militantes de Patria y Libertad, en el caso de la oposición, y “milicias obreras” encuadradas y armadas en el caso de la izquierda.⁴⁰⁴ Dos días más tarde, el representante español refería que los incidentes seguían produciéndose en la capital “dejando un saldo de 6 heridos por arma de fuego reparados entre oposición y Gobierno”. Ante este panorama, Pérez Hernández no visualizaba con claridad lo que venía a futuro, advirtiendo que la semana que se iniciaba “estaba llena de incógnitas por tensión reinante y anuncios de concentraciones políticas callejeras.”⁴⁰⁵

Bajo la óptica del embajador español, el cuadro de confrontación verificado en Chile alcanzaba uno de sus puntos culminantes. Y ello se debía no tan solo a la intensidad del conflicto huelguístico de El Teniente, sino a lo que aquél visualizaba como una predisposición anímica y operativa de numerosos actores para confrontarse mutuamente en distintos espacios. Aunque no lo explicitaba de este modo, Pérez Hernández estaba aquilatando un tópico que ya se discutía de modo transversal en la esfera pública chilena y que no era otra cosa que la posibilidad de que se decantara una guerra civil.

Dentro de esta línea de análisis comenzaba a cobrar cada vez más importancia el tema de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que en el marco del reciente conflicto minero la participación de los militares –ya fuese por su

rol en la mantención del orden público como por la actuación específica de algunos oficiales a cargo de las zonas de emergencia- había sido un punto de permanente debate dentro de la opinión pública.⁴⁰⁶ Inclusive, el embajador español había comentado a mediados de junio acerca del rumor en torno a que la decisión de Allende de recibir a una delegación de los mineros en huelga se debió a “ciertas insinuaciones” que habrían hecho las FFAA al primer mandatario.⁴⁰⁷ Aunque ello no había sido confirmado, y posiblemente se trataba de un trascendido falso, el contexto que se vivía entonces contribuía a amplificar este tipo de situaciones provocando, de hecho, que el papel de los uniformados cobrara cada día más relevancia. Desde esta óptica, en fin, los cuerpos militares aparecían como actores contingentes dentro de la escena pública, apartándose del carácter obediente y no deliberativo que les imponía la ley.

Desde un ángulo todavía más amplio, el tema de las FFAA resultaba particularmente sensible dentro de la experiencia de la UP. La línea de prescindencia política que intentaba materializar el comandante en jefe del Ejército, había sido erosionada en los últimos meses por grupos de interés que alentaba a los militares, ya sin ambages, para que intervinieran y derrocaran al gobierno socialista. Desde una perspectiva muy distinta, el presidente Allende apostaba por incorporar al mundo uniformado al proceso de cambios estructurales que promovía su gobierno de modo que estas contribuyeran, desde sus particulares campos de especialización, a alcanzar el desarrollo nacional. Y aún en las situaciones de mayor complejidad social y política por las que atravesó el país, el mismo Allende no dudaría en llamarlas a formar parte del gobierno a través de su incorporación en distintos puestos del gabinete, situación que se materializó inclusive hasta pocas semanas antes del golpe militar del 11 de septiembre. Se observaban entonces dinámicas y visiones contrapuestas respecto al rol de los institutos castrenses dentro de la situación política que se vivía.

En este contexto, a finales de junio el tema militar volvería a ocupar un rol destacado dentro de la agenda pública. El día 29 de ese mes, un grupo de oficiales y soldados del Regimiento Blindado N°2 se alzó en contra del gobierno movilizándolo algunos tanques hacia el centro de la capital con el propósito de rodear el Palacio de La Moneda y derrocar al gobierno.

Al cabo de unas horas la maniobra fracasó, pues la operación no contó con el apoyo de otras unidades ni del resto de las ramas de las FFAA. No obstante su fracaso, el alzamiento dejó un número importante de fallecidos y heridos de consideración producto del enfrentamiento armado.⁴⁰⁸

El día anterior al motín, el embajador español había remitido un revelador telegrama a través del cual comentaba dos aspectos referidos al tema militar y que estaban conectados a esta coyuntura. El primero de ellos abordaba el incidente que había sufrido el general Carlos Prats en la tarde del 27 de junio donde un grupo de automovilistas profirió insultos y gestos soeces al oficial cuando éste se desplazaba en su vehículo.⁴⁰⁹ Aunque lo ocurrido fue calificado por el embajador español como un suceso con “ribetes sainetescos”, se reconocía que el incidente generaría un “daño cierto” tanto en la reputación personal del general Prats –“como hombre moderado y de recio temple”– como en su “carrera política.” El segundo aspecto referido por Pérez Hernández era que algunas ramas militares, como la aviación y la armada, habían cambiado su posición respecto al gobierno, mostrándose menos proclives a participar en él, como en efecto le había informado un alto oficial de esta última institución. En esta línea, el diplomático afirmaba que una “fuente inmejorable” le reconoció que la actitud de las FFAA había mostrado una “evolución cierta”, lo cual podría acarrear nuevas dificultades.⁴¹⁰ Desde este ángulo, la problemática militar que comentaba el representante español no estaba circunscrita a casos puntuales o episodios de cierta resonancia pública, sino que por el contrario se trataba de un tópico de amplia significación que tenía que ver con movimientos estructurales dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, comenzaban a explicitarse tendencias abiertamente críticas con el gobierno de la UP al interior de estas instituciones, las cuales, si bien siempre existieron, ahora eran confirmadas por fuentes relevantes del mundo militar.

En relación a la sublevación del día 29 de junio, el embajador Pérez Hernández realizó, en su primera comunicación, un detallado relato de lo sucedido en torno al Palacio de La Moneda, enfatizando en la resistencia que prestaron las fuerzas leales al gobierno y los llamados del presidente Allende para que los obreros ocuparan sus lugares de trabajo.⁴¹¹ Al día siguiente, el diplomático expondría con mayor detención las implicancias y alcances de este

suceso, recalcando que el fracaso de la asonada militar se debió a la ausencia de preparación y al hecho de que no se unieran otras unidades militares. En relación a este punto, Pérez Hernández indicaba que las Fuerzas Armadas chilenas, en su gran mayoría, se encontraban poco dispuestas a sumarse a una sublevación, pero también a participar en el gabinete.⁴¹²

Pocos días más tarde, el embajador indicaría que la situación en Chile, más allá de lo que anotaba en su telegrama del 30 de junio, daba cuenta de una atmósfera “enrarecida”. Tal situación se había decantado hacia ese estado en virtud de que aún estaba pendiente la decisión del parlamento respecto a la dictación del Estado de Sitio y, además, por las recientes declaraciones del Ejecutivo en orden a que el país se hallaba al “borde de la guerra civil”. En este contexto, comentaba el embajador español, los mandos militares estarían presionando a la alta oficialidad para que la lealtad de las FFAA al gobierno estuviese condicionada a que éste no adoptara “medidas sectarias.”⁴¹³ Por medio de estas referencias, Pérez Hernández ponía en circulación el tema del rol que jugarían los militares frente al Ejecutivo ante un escenario abierto de confrontación entre distintos grupos políticos, es decir, en relación a una crisis integral muy próxima a un enfrentamiento fratricida. El dilema fundamental, en este sentido, era saber si en ese contexto las distintas ramas militares se dividirían, o bien, actuarían de forma conjunta para derrocar al gobierno. Dichas interrogantes estaban alimentadas ciertamente por los últimos acontecimientos y el alto nivel de polarización existente en el país.

Desde la prensa hispana se hicieron toda clase de evaluaciones respecto a la fracasada sublevación del día 29 de junio. El periódico *ABC* sostendría, en su edición del 30 de junio, que se trató de un “breve y descabellado connato revolucionario”, el cual, no obstante, dejó un saldo de al menos siete muertos y un número impreciso de heridos “que fluctúa probablemente entre treinta y cincuenta.” En esta misma edición, una columna firmada por J.J.B. señalaba que a pesar de que las Fuerzas Armadas habían logrado sobreponerse a la disidencia interna, todavía existían problemas dentro de la política chilena que auguraban que ésta discurriría por “zonas peligrosas”. Luego, el comentarista indicaba que no veía posible que la disputa entre la libertad política y el socialismo marxista se resolviese a favor de este último, pues el Ejército chileno tenía una ejemplar tradición de defensa de las

libertades y de la Constitución “liberal y no socialista.”⁴¹⁴ En otras palabras, esta tribuna visualizaba que en algún momento los militares chilenos, en atención a su tradición histórica, no podrían mantenerse ajenos al conflicto político si este demandaba la defensa de la libertad.

En el periódico *El Alcázar*, además de las informaciones coyunturales sobre la asonada militar, se enfatizaron dos puntos principales. El primero de ellos indicaba que gracias al apoyo de los trabajadores y del PDC a la Constitución y al gobierno se podía mirar con confianza el desarrollo futuro de los acontecimientos. Si bien este medio no detallaba el hecho de que aquel partido había manifestado su lealtad al sistema institucional solo después de que fracasara la intentona subversiva, lo importante radicaba en que, a juicio de *El Alcázar*, el principal partido de la oposición se había definido en favor de la legalidad. El segundo punto que remarcó este periódico estuvo orientado a destacar el rol que jugaron tanto el presidente Allende como el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, en esta coyuntura. Sobre el primer mandatario este rotativo señaló que en las horas más decisivas del día 29 de junio aquél nunca perdió el “control de sí”, lo cual resultaría vital para proporcionar la “necesaria racionalidad” a fin de aplastar a las fuerzas “insurrectas”. Respecto al alto oficial, se indicó que éste se había erigido en el “símbolo” de unas Fuerzas Armadas adictas a una tradición que las alejaba de actitudes anticonstitucionales.⁴¹⁵

Desde las páginas de *Arriba* se caracterizó la sublevación del regimiento de blindados como un intento de golpe militar que buscaba apoderarse del palacio presidencial y derrocar al gobierno. Si bien se destacaba el rol del general Carlos Prats y la activa defensa que la guardia de Palacio había tenido para rechazar a los amotinados, este medio destacaba que la situación no estaba del todo aclarada, pues se desconocía la repercusión del movimiento en provincias. *Arriba*, también dio importancia al número de fallecidos y heridos, consignando preliminarmente que habría cerca de una decena de muertos.⁴¹⁶ En su edición del 1 de julio, el periódico falangista destacó la tranquilidad que reinaba en la capital chilena, siendo la única excepción a este respecto el atraso en la venta de los periódicos. Mirado desde este ángulo, el fracaso de la sublevación el día 29 de junio y el retorno a la normalidad que se reflejaba en las calles fue entendido por este medio como una

demostración de la profunda “civilidad, constitucionalidad y democracia” que imperaban todavía en el país sudamericano.⁴¹⁷

Para el columnista de *Cambio 16*, Antonio Caballero, había dos elementos dignos de rescatar, los cuales estaban muy en sintonía con lo que venían planteado los principales medios de la prensa escrita hispana. El primero de ellos, era que las FFAA seguían siendo leales al gobierno y a la Constitución, y a pesar de que no habían formado parte del nuevo gabinete, eso no significaba que se encontraran excluidas de sus labores gubernamentales. Era indudable que los militares se estaban transformando, según Caballero, en árbitros de la situación, por lo que Allende requeriría del asentimiento y apoyo de las instituciones uniformadas para seguir gobernando. El segundo elemento que destacaba el columnista se establecía a partir de un punto de comparación entre lo sucedido en Chile respecto a Uruguay, país donde pocas semanas antes las FFAA, en alianza con el presidente Bordaberry, habían dado un golpe de Estado. Según Caballero, en Chile no existía un vacío de poder civil como sí existía en el país oriental, en que el primer mandatario se había visto reducido a un papel “cada día más opaco e insignificante”. En Chile, en cambio, Allende disponía de una amplia base política además de salir fortalecido tras el fracaso de la sublevación del día 29, aunque se reconocía la existencia de numerosas trabas y conflictos intra-institucionales con otros poderes del Estado. Para Caballero, en definitiva, los sucesos verificados en los dos países ponían sobre la mesa la creciente participación –e intervención– de los militares en política.⁴¹⁸

Por su parte, Alfonso Palomares, desde las páginas de *Sábado Gráfico*, hacía una evaluación más bien crítica sobre las consecuencias del alzamiento. A su juicio la afirmación de que Allende salía fortalecido del intento de golpe era un “espejismo”, pues ninguno de los problemas que existían en el país había sido, en la práctica, “allanado o paliado”. Lo que demostraba el fracaso de la sublevación del 29 de junio, según Palomares, era que los militares apoyaban la Constitución, que era precisamente el instrumento que tenía “encadenados” los pasos del Gobierno de Allende hacia el socialismo. Al imaginar un escenario de abierta confrontación entre los poderes del Estado, el columnista advertía que era probable que las Fuerzas Armadas pasaran de ser árbitros a protagonistas activos de una “nueva normalidad.”⁴¹⁹

A la luz de este comentario era indudable que las secuelas del denominado “tanquetazo” estaban destinadas a perdurar dentro del panorama político chileno, abriendo un espacio amplio para discutir todo tipo de hipótesis en relación al futuro de la nación andina.

Desde *Fuerza Nueva* se enfatizaba, en tanto, una perspectiva que también comparó lo sucedido en Uruguay y Chile. Mientras en el primer caso se hablaba de la “férrea y patriótica” decisión de las FFAA tendiente a batir a los Tupamaros, en el caso de Chile el análisis era más sombrío. El punto de partida fue criticar al general Carlos Prats, a quien se caracterizó como “émulo de Kornilov” en alusión al general ruso que aplastó a la oficialidad anticomunista, situación que a la larga significó despejar el camino a los bolcheviques. Respecto a la sublevación misma, *Fuerza Nueva* indicaba que no estaba clara la existencia de un complot previo al surgimiento de la acción, en la cual, además, se quería involucrar a la oposición de derecha “especialmente al movimiento nacionalista Patria y Libertad”. Con todo, esta revista indicaba que la marcha del regimiento de blindados sobre La Moneda daba cuenta de la profunda “crisis de conciencia” que había surgido en las filas del Ejército.⁴²⁰

Mundo Obrero referiría de modo muy breve, y solo a través de un titular con características de consigna, la situación ocurrida en Chile. En su portada se señalaba que la intentona “fascista” había sido aplastada por el “pueblo y el Ejército”, además de advertir que los comunistas españoles apoyaban al gobierno de la UP “hasta la victoria definitiva sobre la reacción y el imperialismo.”⁴²¹ Era indudable que con este mensaje se buscaba apoyar la idea de que el pueblo de Chile en alianza con las Fuerzas Armadas –en este caso el Ejército– podían constituirse en un dique de contención frente a los sectores reaccionarios y abrir el camino hacia una victoria final y decisiva del proyecto de la UP.

Una de las primeras reacciones de la embajada portuguesa sobre estos hechos estuvo fechada al día siguiente de ocurrida la sublevación. A través de un breve telegrama, el embajador luso, señalaría los antecedentes más generales de esa jornada, recalcando que en su punto más álgido se había producido un intenso y continuo tiroteo.⁴²² A casi diez días de ocurridos los hechos, de Castro e Abreu aportaría más detalles de la fracasada sublevación.

El primer elemento a destacar por parte del diplomático fue la negativa de la oposición a conceder el Estado de Sitio que reclamaba el oficialismo a fin de mantener el control y seguridad del país. El segundo punto que indicó el representante luso tuvo relación con la ola de agitación que cundió tras el Tanquetazo, en especial en las huestes de izquierdas que hicieron llamados masivos a la toma de fábricas y empresas.⁴²³

Una de las preocupaciones fundamentales del embajador radicaba, pues, en que el Tanquetazo había originado una reacción fáctica de parte de los obreros y sus organizaciones de clase en orden a tomar la iniciativa política y respaldar al gobierno bajo sus propias estrategias de movilización. Tal énfasis revelaba, sin duda, una preocupación por lo que de Castro e Abreu identificaba como un muy posible desborde y descontrol de los sectores proletarios, lo cual podría significar una arremetida de las milicias de izquierda en contra de la oposición. Este punto venía siendo continuamente enfatizado por el embajador, advirtiendo, en efecto, que de materializarse una situación de este tipo se estaba *ad portas* de la instauración de una tiranía comunista. Lo que esta mirada reflejaba en el fondo era que las situaciones y coyunturas más críticas por las que atravesaba el país, incluyendo aquellas que suponían un peligro para el propio gobierno, podían ser aprovechadas como una oportunidad para decantar una violenta acción que reafirmara y consolidara el proyecto socialista. En otras palabras, la amenaza no estaba situada en realidad, según el ángulo del embajador de Castro e Abreu, respecto al quiebre del sistema institucional sino al hecho de que la izquierda cercenara las libertades públicas y arrasara con quienes se le oponían.

En la prensa del país atlántico se observaron algunos matices menos críticos que los del embajador para referir los recientes sucesos. El periódico *Diário de Notícias* informó sobre las principales alternativas de lo sucedido en la capital sudamericana indicando que el presidente Allende había triunfado frente la revuelta militar que se había producido en contra de su gobierno. Al referir las alternativas del connato subversivo, este medio señaló que luego de casi dos horas de reñida lucha los tanques rebeldes se alejaron del Palacio de La Moneda “deixando atrás de si um rastro de destruição e de morte.”⁴²⁴ Días más tarde, al advertir la compleja situación que se había

abierto en el país sudamericano, *Diário de Notícias* indicó que se avizoraba una “guerra civil inminente no Chile.”⁴²⁵

Desde las páginas de *O Século* se hizo un análisis respecto a aquellos elementos estructurales que estaban detrás de la crisis chilena. A juicio de este medio había un hecho capital que explicaba las hostilidades de la derecha y el centro en contra del Gobierno y que estaba determinado por el programa de nacionalizaciones y “nivelamento económico” de la UP y que sus dirigentes y simpatizantes estaban dispuestos a materializar. Tal situación, había generado en la práctica un clima propicio para la “germinação de tensões e ódios capazes até de conduzir o país à guerra civil”. Y si esta todavía no se producía, indicaba *O Século* siguiendo la opinión de algunos observadores, se debía al hecho de que los altos mandos de las Fuerzas Armadas habían decidido defender la legalidad y no tomar partido por ninguno de los bloques en pugna.⁴²⁶ Como se puede ver, este medio advertía que el factor militar era un elemento clave dentro de la crisis política y social chilena, a efecto de evitar que esta se desbordara transformándose en una guerra civil de insospechadas consecuencias. Con todo, era evidente que se estaba ante una situación particularmente compleja y de muy difícil solución.

Diario *Época*, en tanto, sostuvo que el presidente Allende había logrado evadir “ao primeiro golpe de estado”, sosteniendo además que la policía uniformada parecía mantenerse fiel “ao Governo marxista de Allende.”⁴²⁷ Al igual que como habían enfatizado otros medios, *Época* también advirtió en los primeros días de julio sobre la posibilidad de una guerra civil en el país.⁴²⁸ Por su parte, *Diário Popular* puntualizaba en su edición del 29 de junio que la situación política del país había llegado a tal nivel de degradación que el presidente Allende podría adoptar una decisión “espectacular”. Ello emergía en el contexto de una nueva denuncia que hacían las autoridades sobre la existencia de un plan dirigido contra las instituciones del país, hecho que también fue destacado por *Jornal de Notícias* en su edición del 29 de junio.⁴²⁹ En relación a la revuelta militar, *Diário Popular* concordaba en la mayor parte de los datos que ya habían entregado otros periódicos, destacando que el ataque de los blindados al palacio presidencial había decantado un “violento tiroteio.”⁴³⁰ Respecto a lo sucedido en horas posteriores a la revuelta, este medio comentó con bastante detalle la manifestación que se

realizó en horas de la noche frente a La Moneda, lugar donde se reunieron más de “duzentos mil manifestantes”. Tal evento, según este medio, fue “uma demonstração maciça de fidelidade ao seu Governo de coligação das Esquerdas.” Además se informaba de las numerosas declaraciones de solidaridad y apoyo que había recibido Allende de parte de otros líderes latinoamericanos, como los presidentes de Argentina y México, Héctor J. Cámpora y Luis Echeverría, respectivamente.⁴³¹ En *Diário de Lisboa* se habló, en primer término de una tentativa de golpe de Estado en contra del gobierno de Allende sin entregar mayores detalles sobre la resolución de este conflicto.⁴³² Al día siguiente, 30 de junio, cuando ya se conocía del fracaso de la sublevación, este periódico destacó de modo especial que Fidel Castro había felicitado al mandatario chileno “após a sua vitória.”⁴³³

Por último, desde las páginas de *Expresso*, además de entregar los detalles generales de la revuelta militar, se indicaba, igual como lo había hecho *Diário Popular*, que tras el fracaso de la sublevación miles de manifestantes salieron a las calles. En este caso, el semanario indicaba los trabajadores desfilaron por la capital al grito de “Allende, Allende o povo defende-te” en el contexto de la más grave crisis que había debido enfrentar el gobierno de la UP.⁴³⁴

Mirado en su conjunto, la situación crítica del 29 de junio fue analizada por los actores ibéricos como un importante punto de inflexión dentro de la vía chilena al socialismo. Desde un ángulo más inmediato, o superficial si se quiere, el fracaso de la revuelta militar fue advertido por varios observadores como un triunfo del presidente Allende, o al menos como un obstáculo que había logrado sobrepasar.⁴³⁵ Si esto significaba un reforzamiento o no del poder del primer mandatario dependía del enfoque con que se aquilató este punto. Así, para algunos columnistas españoles, el fracaso de la revuelta no había solucionado ningún problema clave o importante del país, mientras que para el embajador luso la movilización social que se activó tras el motín podía entenderse como una preparación de un levantamiento general de los sectores proletarios de izquierda.

Visto desde un plano más estructural, lo ocurrido el 29 de junio ponía sobre la mesa dos cuestiones esenciales. La primera de ellas era que el factor militar irrumpía con inusitada fuerza en el país, transformándose en un

actor clave de la política doméstica. Su decisión en orden a confrontar a los amotinados fue advertida por numerosos actores no como un ejercicio de respaldo al proyecto de la UP, sino más bien como una acción de carácter legal en apoyo a la institucionalidad. Desde este punto de vista se derivaba una cuestión de la mayor importancia, a saber; que las FFAA respaldaban en estricto rigor a la Constitución y no necesariamente al gobierno socialista por lo que se podía esperar a futuro un cambio de dirección en este sentido. Como lo expresaron algunos analistas en su momento, el proyecto allendista quedaba a merced del apoyo de los institutos armados para mantenerse con vida. La segunda cuestión que se puso de relieve tras este evento, y que indudablemente estaba conectado al punto anterior, radicaba en las limitaciones del programa de la UP. En este sentido, lo que resultaba evidente para varios actores era que el modelo de la izquierda chilena estaba anclado a una institucionalidad que no le permitía materializar todas las transformaciones propuestas dado, por ejemplo, el rol que cumplía la oposición dentro de ella. En el fondo, lo que se deseaba advertir era que el proyecto socialista estaba amarrado a un sistema que era al mismo tiempo su sostén legal y su principal obstáculo para transformar las estructuras del país. Era evidente, en fin, que en la medida en que el gobierno se encontrara más distante de lo que podía denominarse como esfera legal, sus posibilidades de sobrevivencia, y de –más aún– contar con el respaldo de otras instituciones de la República como las FFAA, serían cada vez menores.

En lo que la mayoría, sino la totalidad, de los actores ibéricos coincidieron fue en que el cuadro de polarización y tensiones sociales y políticas no declinó tras el Tanquetazo. Aunque sobrevoló por algunos días cierta imagen de fortaleza en el Gobierno, ella rápidamente se disipó, volviendo a emerger una crisis de carácter más bien estructural. En este contexto, cobraría relevancia el tema de los grupos armados y la posibilidad de que se llegara a un punto culminante de la crisis que abriera paso a un enfrentamiento de grandes dimensiones. Sin duda que tras estos tópicos estaba el tema de la violencia política como eje de discusión transversal. Como se puede advertir, entre los meses de julio y agosto buena parte de los eventos más significativos que ocurrieron en el país estuvieron conectados a este tipo de coordenadas, enlazándose al final con el Golpe de Estado del 11 de septiembre.

Poco tiempo después de ocurrida la sublevación del 29 de junio, el embajador español contaría a través de un telegrama de la conversación que sostuvo con un importante dirigente de la DC en una cena ofrecida por el representante venezolano. El documento resulta relevante porque daba cuenta del parecer del principal partido de la oposición y de las percepciones que se tenían en esas semanas en relación a la lucha social y política. Según Pérez Hernández, el dirigente demócratacristiano estaba convencido de que las “milicias obreras” estaban fuertemente apertrechadas y que contaban, además, con el apoyo de instructores extranjeros. Respecto a la situación general del país, el embajador señaló que su interlocutor le confirmó que el convencimiento de la DC era que solo un gobierno militar podía “salvar” al país del marxismo. En este punto, el dirigente especificó que una intervención militar debía materializarse en poco tiempo ya que de no ser así el conflicto se arrastraría de forma intestina de modo muy similar a como ocurrió con la guerra civil española.⁴³⁶ Desde el ángulo del dirigente demócratacristiano las fuerzas populares que apoyaban al Gobierno de la UP estaban en condiciones de materializar una inminente ofensiva armada dada sus capacidades operativas y logísticas. En ese marco, el único dique de contención a estas milicias eran las Fuerzas Armadas, que debían propender, según el político chileno, a ejecutar una acción rápida y contundente en contra de aquellas. De lo contrario, la confrontación podría alargarse problemáticamente y decantar en un enfrentamiento fratricida en el cual intervendrían actores extranjeros.

Estos énfasis daban cuenta de cómo el tema de los grupos armados ocupaba un lugar preponderante dentro de las perspectivas analíticas de algunos actores. Indudablemente que para los sectores opositores este tópico constituía una realidad indesmentible que se palpaba a diario a través de numerosos incidentes y hechos de violencia, donde las bases militantes de izquierda, según se decía, estaban desbordando la legalidad y actuando con autonomía. Por cierto que este tipo preocupaciones no se manifestaba de la misma forma respecto al accionar de los grupos de choque de la oposición, los cuales desataron una oleada de atentados terroristas en los meses siguientes de ocurrido el Tanquetazo.⁴³⁷ Cabría precisar, por último, que los énfasis con que se recalcaron este tipo de cuestiones fueron casi los mismos

que las FFAA utilizaron para justificar el golpe de Estado del 11 de septiembre. Éstos apuntaban a destacar que los militares habían salvado al país de una inminente ofensiva armada del marxismo que a través de sus bases militantes y grupos operativos desataría una violenta ola represiva en contra de la oposición permitiéndole instaurar una dictadura comunista.

Si bien se trataba de una perspectiva explicitada sobre todo por actores nacionales, no es menos cierto que los observadores extranjeros –y en particular ciertos actores ibéricos– compartían, en mayor o menor medida, algunos puntos específicos de estas coordenadas. Tales elementos, como se ha visto en este capítulo, eran consignados sobre todo en la perspectiva de reforzar la idea de que en Chile se vivía una crisis estructural de muy difícil resolución y en la cual sin duda el Gobierno de la UP tenía la principal responsabilidad.

Por esta línea transitaron algunas de las informaciones emanadas desde la embajada española, como aquella de mediados de julio en la cual el representante hispano sostenía que la tensión política y social del país no había aminorado y que, más aún, se observaban ciertas dinámicas que hacían vislumbrar un escenario de mayor polarización. Una de ellas tenía que ver, indicaba Pérez Hernández, con la actitud del PC que solidarizaba abiertamente con los sectores más extremistas de la UP y al mismo tiempo se aferraba a una ya inminente implantación del “poder popular”. Ello suponía, según el diplomático, intensificar el armamento y la instrucción militar en los cordones industriales.⁴³⁸ Según esta visión, el marco de crisis que afectaba al país andino estaba determinado por las acciones de la izquierda chilena que buscaban instaurar un “poder popular” que, a través de la vía armada, controlaría todas las instituciones del Estado y arrasaría con la libertad y la democracia. Tal perspectiva de análisis acercaba a Pérez Hernández, en esta coyuntura, a la óptica interpretativa de su homólogo portugués, quien desde el comienzo de la experiencia socialista chilena enfatizó en este tipo de problemáticas. Con todo, el embajador español introduciría un matiz al finalizar el mes de julio al señalar que los llamados al diálogo realizados por el presidente Allende no rendirían sus frutos puesto que éste se encontraba sobrepasado por los sectores más radicalizados de la izquierda.⁴³⁹ Desde este ángulo se lograba diferenciar la actitud

del mandatario chileno, más proclive al consenso, respecto de aquella que manifestaban los actores más ultras del bloque oficialista.

La prensa peninsular, por su parte, mostró diversos ángulos para referir estas complejas semanas. El periódico *ABC*, por ejemplo, resaltaría dos puntos que en su opinión reflejaban la crisis por la que atravesaba el país después del Tanquetazo. Uno se refería a las declaraciones del presidente Allende en orden a evitar un enfrentamiento fratricida en Chile, insistiendo en este marco en los llamados al PDC para encontrar una solución, mientras que el otro punto refería la nueva huelga de los camioneros decretada a finales de julio.⁴⁴⁰ Esta última paralización, como se sabe, se insertaba dentro de un despliegue mayor de parte de las fuerzas de oposición que buscaba ya sin ambages el derrocamiento del gobierno. Desde las páginas de *Sábado Gráfico*, Alfonso Palomares consideraba precisamente que la paralización de los camioneros constituía un hecho clave de las últimas semanas pues a través de ella, y otras de similar tenor, la derecha estaba tratando de “estrangular” la economía nacional y llevarla al caos. Lo que se buscaba con este tipo de maniobras, según el columnista, era un “enfrentamiento abierto” que impidiera ejecutar el programa de la UP.⁴⁴¹

Bajo una óptica distinta, Ricardo Fuentes Castellanos indicaba a través de *Fuerza Nueva* que la tensa situación por la que atravesaba el país –y que lo tenía “al borde de la guerra civil”– no era más que una consecuencia del socialismo. Estableciendo un paralelo con la España de los treinta, este columnista volvía a insistir en un tópico que ya se había hecho habitual en estas páginas al señalar que, en Chile, al igual que en la etapa “republicana de 1931-1936”, se vivía un clima de “opresión, violencia y penuria.”⁴⁴²

Para el periódico lisboeta *O Século*, las dinámicas en que se hallaban insertos los principales actores políticos constituían uno de los rasgos más relevantes de la compleja situación por la que atravesaba el país a finales de julio. Este medio observaba, en efecto, que tanto sectores de derecha como de izquierda se oponían a cualquier tipo de acuerdo entre el gobierno y el PDC, advirtiendo que incluso el PS había declarado a través de algunos dirigentes su intención de abandonar la UP si se concretaba tal acuerdo. El dilema para Allende, según *O Século*, era si aceptaría una crisis en el seno de la izquierda, y de su gobierno, a cambio de la mantención de la paz.⁴⁴³

Diário Popular por su parte iba en una dirección similar al señalar que el primer mandatario y el pueblo de Chile en general se encontraban ante una alternativa dramática: “o diálogo ou a guerra civil”. Dentro de este contexto, emergía otro factor, según *Diário Popular*, que perturbaba cualquier tipo de salida política y que se refería al anuncio del gremio de los camioneros de iniciar una nueva paralización.⁴⁴⁴

Al mirar el conjunto de visiones y análisis que emergían desde los actores diplomáticos y medios de prensa ibéricos sobresalía, como tópico transversal, la idea de que en Chile se había decantado una situación en extremo crítica que lo tenía al borde la fractura interna. Bajo este escenario, circulaban diversos factores que en mayor o menor medida resultaban determinantes para acelerar la crisis hasta un punto de no retorno. No pocos análisis coincidieron en que la ofensiva opositora a través de una nueva huelga general de los camioneros tenía como objetivo último asfixiar a la economía chilena provocando la capitulación final del gobierno. Desde otra perspectiva, la crisis estaba enquistada en el accionar de los partidos y movimientos políticos que habían extremado hasta el límite sus estrategias de presión provocando con ello un incremento *ad infinitum* de la polarización y las tensiones en el espacio público. Finalmente se ubicaba aquella mirada que veía en la actuación de los grupos de izquierda y de las bases populares y proletarias, que se las asumía como entidades armadas, la causa fundamental de la crisis existente.

En este contexto, los hechos de violencia que comenzaron a recrudecer hacia finales de julio fueron incluidos dentro de ese escenario mayor que se había establecido en el país, de modo que no se les aquilató como sucesos aislados. Esto ocurrió, por ejemplo, con el asesinato del edecán naval del presidente, capitán Arturo Araya Peeters, acaecido en la madrugada del 27 de julio en su domicilio particular luego de que el oficial se asomara al balcón de su dormitorio tras escuchar una fuerte explosión producida en el exterior. El hecho fue bastante confuso y complejo pues en un principio un militante socialista se inculpó de haber colaborado en el crimen ejecutado, según dijo, por activistas extranjeros. Tras algunas indagatorias, la pista se centró en militantes de extrema derecha, a la larga autores del homicidio, quienes fueron detenidos y juzgados, pero años después, en plena dictadura, se les aplicó el indultado presidencial.⁴⁴⁵

El homicidio del edecán naval acentuó todavía más el oscuro panorama social y político del país sudamericano. Sus implicancias de corto y largo plazo admitían múltiples lecturas: desde las que veían en este homicidio una situación de violencia desbordada que ya no respetaba ningún tipo de autoridad, hasta aquellas que indicaban que el crimen era un mensaje implícito hacia los militares para que quitaran su apoyo al gobierno y le derrocaran. Más inquietante todavía era la versión que señalaba que el objetivo de este hecho era deteriorar desde un comienzo las conversaciones que sostendrían el presidente Allende y el PDC, en virtud de que se atentaba en contra de una persona cercana al primer mandatario.

La primera reacción del embajador español fue referir las principales circunstancias del asesinato destacando el perfil del edecán Araya, a quien calificaba como un gran amigo de España. Al mismo tiempo, el diplomático señalaba que las autoridades gubernamentales desconocían a los autores del crimen.⁴⁴⁶ Horas más tarde, cuando comenzaba a planear la sombra de la culpabilidad sobre Patria y Libertad como autores del crimen, Pérez Hernández descartaría dicha acusación. A su juicio, Araya era uno de los pocos actores que simbolizaban un nexo entre el presidente y las FFAA, de modo que al ser eliminado el edecán la relación entre Allende y los militares tendería a estrecharse de forma considerable. Y tal acercamiento, indicaba el diplomático, “no figura” dentro de los objetivos del movimiento nacionalista. El embajador se hacía eco más bien –“con las reservas que un caso como este impone”– de los comentarios existentes en algunos círculos diplomáticos que indicaban que los autores del crimen podrían ser grupos de ultraizquierda. Desde esta perspectiva, el asesinato del edecán naval serviría, según Pérez Hernández, para “presionar psicológicamente” al presidente y torpedear el inicio de las conversaciones con el PDC.⁴⁴⁷ Días más tarde, el representante hispano reafirmaría este tipo de sospechas gracias a la noticia de que un individuo que se había entregado a la policía confesó su participación en el crimen del militar involucrando a militantes del MAPU y miembros del GAP como instigadores de la operación. En base a estos antecedentes, Pérez Hernández señalaba que la versión entregada en su telegrama n° 179 tenía visos de “ser la verdadera.”⁴⁴⁸

Desde la embajada portuguesa se envió una información que conectó de inmediato el crimen del oficial al clima general de polarización existente en

el país. Fue el encargado de negocios de dicha repartición, Malheiro Días, quien refirió este suceso, señalando que los primeros indicios apuntaban efectivamente hacia la responsabilidad de Patria y Libertad. Sin embargo, este funcionario anotaba que uno de los dirigentes del grupo nacionalista, Roberto Thieme, se puso a disposición de la Armada para probar que ningún miembro de este movimiento había tenido participación en el crimen.⁴⁴⁹ Enseguida, Malheiro Días, señalaba que el homicidio “vem agravar a já tensa situação que vive o país” sobre todo en el marco de la paralización de los camioneros que se había iniciado el día anterior.⁴⁵⁰

En la prensa ibérica se hicieron distintas referencias sobre el reciente crimen. Para *ABC* se trataba de un “nuevo y misterioso atentado político” que impactó a la opinión pública, generando toda clase de reacciones algunas de las cuales, como aquellas efectuadas por dirigentes de la UP que acusaban a grupos de extrema derecha, fueron calificadas como “apresuradas” por parte del corresponsal de este medio. Además de insertar este hecho dentro de la grave crisis política que asolaba al país, resultó bastante interesante que la nota fuese publicada en un espacio de la sección internacional que llevó por título “Jornada de violencia en Hispanoamérica” donde se consignaban, junto con el crimen del oficial naval, otros hechos ocurridos en la región.⁴⁵¹ Este énfasis daba cuenta de cómo el problema de la violencia política, a ojos de ciertos actores, resultaba transversal a distintos países y regiones constituyéndose en un problema de largo alcance para numerosas sociedades. En lo que respecta a Chile, el periódico monarquista continuó abordando en los días siguientes la muerte del edecán naval junto a otros hechos de violencia. En su edición del 29 de julio, refirió la ola de atentados terroristas que sacudían al país, indicando inclusive el hecho que le costó la vida a Juan Bautista Ayala quien falleciera a causa de una pedrada que le impactó en la cabeza mientras conducía su camión. En esta misma edición, la sección *Meridiano Mundial* refería un punto central respecto al tema de la violencia señalando que su coste debía cargarse sobre quienes se oponían “radical y extremosamente” al diálogo entre el PDC y el gobierno. Desde este ángulo, sentenciaba *ABC*, la responsabilidad recaía tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda.⁴⁵²

Por su parte *La Vanguardia* entregó una información general del hecho enmarcándola de todos modos dentro del contexto general de crisis que vivía Chile y que mostraba una pequeña luz de esperanza a raíz del inicio de las conversaciones entre el Ejecutivo y el PDC. Respecto a los autores del crimen, este medio los identificó como “extremistas” que actuaron en el marco de las explosiones registradas en las inmediaciones del domicilio del oficial naval. Por último, el periódico catalán informaba sobre las numerosas reuniones que las autoridades de gobierno sostenían a fin de adoptar las más “enérgicas medidas” que les permitieran capturar a los autores del crimen.⁴⁵³

Para el periódico *El Alcázar*, el asesinato había sido obra de un comando extremista, aunque no precisó si este pertenecía a sectores de la derecha o la izquierda. De todas formas, se recalcó que se trataba de un hecho que además de la conmoción pública que había causado constituía un duro golpe para el gobierno de Allende. Con todo, dicha línea de análisis no fue la única que se logró advertir en este medio. El columnista “Europeo”, a través de su sección “Hablando con franqueza”, señaló dos puntos que mostraron una crítica abierta al gobierno de la UP. El primero de ellos refería a que las estrategias de movilización social que históricamente había usado la izquierda, y en particular la huelga, ahora estaban siendo empleadas por el nacionalismo en contra del gobierno de la UP. Tal perspectiva remitía, sin duda, a la paralización que habían anunciado los camioneros chilenos el día 25 de julio, la cual tenía como objetivo lograr la caída final del gobierno. El segundo punto caracterizaba lo que a juicio del columnista eran los propósitos esenciales del proyecto de la UP. En este sentido, se indicaba que los comunistas cuando entraban al Gobierno no lo hacían por “folklore” sino que bajo la perspectiva de implantar el comunismo mediante la bolchevización del país.⁴⁵⁴ Aunque estos elementos no remitían al crimen del edecán naval, ellos se situaban como un marco de fondo sobre el cual ocurrían este tipo de asesinatos.

La primera información proporcionada por *Arriba* respecto a este crimen fue referir sus características generales. En su edición del 28 de julio, se entregaron detalles precisos de cómo Araya Peeters se vio involucrado en el tiroteo con el comando extremista que al final acabó con su vida.⁴⁵⁵ Al día siguiente, este medio refirió la detención de un sospechoso involu-

crado en el crimen (José Riquelme Bascuñán), aunque precisando que se trataba de un dato que provenía desde una emisora (Agricultura) vinculada al PN. Enseguida, *Arriba* comentaría en detalle otras informaciones del acontecer nacional chileno, deteniéndose particularmente en el paro de los camioneros y en los atentados producidos en distintos puntos del país, los cuales habían dejado incluso un trabajador muerto en la provincia de Osorno. Desde un ángulo más amplio, este medio sostenía que los atentados parecían estar vinculados con el paro de los camioneros y con la intención manifiesta de este gremio en orden a agudizar las consecuencias materiales del mismo.⁴⁵⁶

En la edición del 18 de agosto de *Sábado Gráfico* Alfonso Palomares había señalado que observaba una clara operación de la derecha chilena tendiente a estrangular la economía nacional a través de las huelgas y paros de diversos gremios. En este marco, el crimen del edecán naval fue entendido como un producto de las tensiones político-económicas que comenzaban a mostrar una nueva fisonomía a través de diversos “golpes de fuerza”, los cuales tenían entre sus principales promotores a movimientos como Patria y Libertad.⁴⁵⁷

En una línea similar se ubicó el análisis de *Triunfo* que proyectó el crimen del edecán naval dentro de un marco de tensión más amplio, signado por la huelga de los transportistas y una ola de tensión y violencia. A diferencia de otros medios, esta revista no dudó en adjudicar la responsabilidad del homicidio a un miembro del “movimiento fascista Patria y Libertad”. Pero sin duda que lo más interesante de la perspectiva de *Triunfo* fue entender las problemáticas del proceso chileno dentro de un marco regional, específicamente en relación al Cono sur y los casos de Argentina y Uruguay. En el primero de estos países, se advertía de las consecuencias que podrían generar en la base militante los cambios internos dentro del peronismo, donde la figura de María Estela Martínez comenzaba a tomar un inusitado protagonismo. *Triunfo* advertía en especial respecto a la ira que podía estallar cuando se conocieran los alcances de este peronismo de “segunda mano”. En el caso de Uruguay, esta publicación apuntaba al cambio brusco que había significado la entrada de los militares al poder de la mano del presidente Bordaberry. Mirado en su conjunto, esta revista señalaba que los problemas y tensiones políticas estaban impactando a tres naciones que se habían caracterizado, en general, por

su estabilidad política. Aunque se trataba de tres procesos distintos, *Triunfo* destacaba la simultaneidad con que se estaban produciendo y, además, cómo se iban materializando posiciones contrarrevolucionarias.⁴⁵⁸

Desde la prensa portuguesa se informó enfatizando más o menos los mismos antecedentes que rondaban dentro de la prensa mundial. *Diário de Notícias*, por ejemplo, se limitó prácticamente a transcribir el comunicado oficial del gobierno de Chile sobre el asesinato, indicando de forma paralela el trasfondo social y político existente en Chile a raíz de la huelga de los camioneros y el inicio de las conversaciones entre el Ejecutivo y el PDC.⁴⁵⁹ Desde *O Século*, se informaba de modo similar, aunque indicando que los autores del crimen fueron terroristas de “extrema direita” quienes lanzaron explosivos al interior de la casa del edecán naval ametrallándolo luego cuando éste abrió la puerta. La noticia también compartía un espacio con aquellos antecedentes que daban cuenta del proceso de diálogo entre oposición y gobierno.⁴⁶⁰ Una óptica casi idéntica expuso *Diário Popular* en su edición del 27 de julio, aunque sin referir que los autores del crimen pertenecían a la extrema derecha. La nota, al enmarcar lo sucedido dentro de la discusión política más de fondo existente en Chile, titulaba entre signos de interrogación la posibilidad de un acuerdo entre la UP y los demócratacristianos.⁴⁶¹

El semanario *Expresso*, además de referir brevemente la muerte del edecán naval incluyó un análisis más amplio sobre los problemas por los que atravesaba la vía chilena al socialismo. El punto de partida fue calificar la situación como explosiva, en donde la ruptura parecía inevitable. Según la crónica, las dificultades que enfrentaba el gobierno tenían su origen en la estrategia reformista que sustentaba el proyecto de la UP, basada sobre todo en el apoyo electoral. Tal camino, aseguraba *Expresso*, lejos de mostrar que ella entregaría por sí misma el poder acabó por dar apenas “a posibilidad de gobernar durante algum tempo”. Al igual que como lo habían destacado otros medios en el marco del Tanquetazo, este semanario indicaba que el presidente Allende deberá escoger entre el compromiso con el PC, lo que involucraba reafirmar la política de diálogo con el PDC, o bien el apoyo del ala más dura del PS.⁴⁶²

Lo que de modo general transmitían las informaciones de prensa ibéricas y los representantes diplomáticos de estos países era la existencia de

un cuadro extremadamente complejo en el país, en el cual la polarización social y política no disminuía su ritmo ascendente. Bajo este marco de fondo orbitaban dos temas coyunturales para finales de julio. El primero de ellos tenía que ver con el proceso de diálogo que se abrió entre la oposición democratacristiana y el gobierno con el objetivo de buscar una solución a la crisis. Aunque la mayoría de los observadores fijaba cierta esperanza en los resultados de esta instancia, se advertían casi al mismo tiempo sus limitaciones y factores que auguraban su fracaso. No pocos analistas coincidieron, en este sentido, que las conversaciones con el PDC ponían a Salvador Allende ante un dilema capital respecto a qué estrategia defendería; si aquella que de algún modo le obligaba a transar ante un sector de la oposición, o bien, la que suponía adscribirse a la tendencia más ultra de la izquierda chilena. Si adoptaba esta última posición, la posibilidad de que se decantara un conflicto fratricida estaría cada vez más cerca. El segundo tema coyuntural que afloraba en estas semanas estuvo vinculado a los hechos de violencia que parecían estar fuera de control, siendo uno de sus puntos más expresivos el asesinato del edecán naval Arturo Araya Peeters.

Al calibrar todos los factores y hechos arriba referidos resultaba evidente que los elementos que reflejaban un carácter más extremista y polarizador del escenario político poseían mayor densidad y peso que aquellos que se perfilaban como institucionales o proclives al consenso. En este marco, las instancias que buscaban abrir la puerta a una salida democrática –como las conversaciones que llevaban a cabo el PDC y el gobierno– debían hacer frente, primero, a un contexto de fondo marcado por una crisis de dimensiones estructurales y, en segundo lugar, a coyunturas caracterizadas por la violencia y la confrontación. Mirado desde este ángulo resultaba en extremo difícil que una propuesta de acuerdo institucional tuviera posibilidades de éxito.

Al iniciarse el mes de agosto los elementos descritos se acoplarían con inquietante celeridad, resaltando dos tópicos fundamentales: los actos de terrorismo y el rol de las FFAA en la crisis que vivía el país. Ciertamente no se trataba de temáticas excluyentes ni tampoco con una temporalidad distinta respecto a otras problemáticas, pues todas ellas en su conjunto formaban parte del mismo escenario. Lo que sucedía era que la mayor densidad y periodicidad de ciertas dinámicas las hacían destacar por sobre el resto.

Así, los actos de terrorismo y violencia política en general fueron descritos de forma sistemática por el embajador español a lo largo de este mes. Al iniciarse agosto, por ejemplo, Pérez Hernández advertía que el país estaba sumido en un preocupante estado de “anarquía”. Asimismo, resaltaba que eran algunas agrupaciones de extrema izquierda las cuales mostraban una antipatía más clara en contra de las Fuerzas Armadas.⁴⁶³ Lo que expresaba el embajador era que los grupos izquierdistas habían sobrepasado la legalidad y la esfera de control de distintas instituciones, en especial de aquellas encargadas de velar por la seguridad y mantención del orden público. En ese marco, los institutos armados solo cumplían funciones rutinarias que las mantenían alejadas de cualquier pronunciamiento político relevante. Además, este enfoque dejaba entrever que el contexto general de violencia y extremismo se mostraba como un elemento inmanejable y casi imposible de controlar en su totalidad.

Este complejo escenario fue otra vez descrito al mediar el mes de agosto cuando el embajador español refiriera algunas situaciones particulares. En el contexto de un mensaje televisivo del presidente, un atentado explosivo cortó el suministro eléctrico en gran parte de la zona central del país por espacio de casi una hora. Para Pérez Hernández no existía claridad sobre los autores de este hecho pues podía atribuirse “a la derecha o a la izquierda según el color político del informante”. Las consecuencias materiales de este apagón fueron significativas, según concluía el diplomático, causando “hondo temor” que en los casos más extremos llegó “al pánico.”⁴⁶⁴ El 16 de agosto, en otra comunicación que reflejaba el mismo énfasis que el mensaje anterior, el representante español describía una situación dramática en el país, con atentados “cotidianos” que abarcaban desde instalaciones públicas hasta domicilios particulares de dirigentes y diplomáticos. Respecto al significado que encerraba un panorama de tal magnitud, Pérez Hernández sostenía que este no resultaba del todo anormal en un país que se hallaba bajo las circunstancias políticas que existían en Chile. Lo que sí era nuevo, sentenciaba el embajador, era el terrorismo, “prácticamente desconocido hasta ahora”, y que preocupaba por igual a distintas fuerzas políticas y por supuesto a la opinión pública, la cual, además, desconocía la “filiación de los terroristas.”⁴⁶⁵ Aunque es probable que una parte de la población, bombardeada por

distintos mensajes políticos, no supiera con exactitud el origen de los atentados, la preocupación que habrían manifestado todos los actores políticos, tanto de oposición como de gobierno según indicaba el diplomático español, no resultaba del todo correcta. Caber recordar que para la derecha resultaba favorable la creación de un clima de caos y desorden en el país, pues ello era funcional a su objetivo de lograr el derrocamiento de la UP. Así, y gracias a la conformación de una situación social y política excepcionalmente grave, en que los atentados terroristas figuraban como un elemento de acción primordial, se lograría en la práctica el propósito antes descrito.

El énfasis del embajador portugués, en tanto, refería en este punto a las mismas coordenadas que su homólogo español. A finales de agosto, de Castro e Abreu envió un telegrama en el que señalaba que el convulso ambiente chileno estaba siendo “sacudido violentamente todos los días por actos terrorismo” los cuales sumaban más de 300 en el último mes. En ese contexto, el diplomático luso indicaba que la existencia de una suerte de clamor nacional que pedía al presidente Allende que renunciara con el objetivo de permitir la reconstrucción del país.⁴⁶⁶

De forma paralela a la materialización de los atentados y hechos de violencia en general resurgiría la discusión sobre el rol de las FFAA dentro de la contingencia chilena. Las miradas se centraron, en este sentido, en torno a la actuación coyuntural que esta institución tenía en materias de orden público y seguridad, y también respecto a su papel dentro de la crisis social y política que afectaba al país. Este último punto había resurgido con fuerza a propósito del Tanquetazo de finales de junio, el cual, dadas sus implicancias, corroboró la idea de que los institutos militares se habían transformado, en la práctica, en un factor decisor de la contingencia nacional. Es decir, su actuación podía cambiar de forma radical el curso de los acontecimientos en una u otra dirección. En el caso de la coyuntura vivida el 29 de junio, quedó establecido que los mandos constitucionalistas todavía tenían un ascendente importante sobre la suboficialidad y la tropa, aunque rápidamente quedaría demostrado que dicha jerarquía era más bien frágil y estaba próxima a romperse. Algunos observadores hispanos anotaron, incluso, que en esa coyuntura las FFAA habían defendido, en estricto rigor, la Constitución Política del Estado y no al gobierno de Allende,

por lo cual este último se encontraba de algún modo condicionado por el apoyo y lealtad de aquellas.

Tal perspectiva abría la posibilidad de imaginar un escenario donde los militares retiraran su apoyo al presidente Allende y le derrocasen. Como se recordará, algunos actores chilenos habían comprendido desde hacía tiempo esta ecuación, por lo que sus estrategias y comportamientos estaban dirigidos, ya sin ningún tipo de duda, a lograr un cambio en la relación de fuerzas al interior de las filas uniformadas. Esto significó, pues, remarcar dos elementos esenciales dentro del debate público, consistentes en la ilegitimidad del gobierno de la UP y el estado de anarquía y caos en que se encontraba el país. Ambos énfasis, traducidos a un lenguaje operativo, constituían un llamado explícito a las FFAA para que intervinieran y pusieran término inmediato al proyecto de la izquierda.

Gran parte de estas tensiones y puntos de discusión en torno al tema militar fueron recogidos con sus particulares énfasis, por los actores ibéricos. Como se indicó más arriba, el embajador español había llamado la atención, al iniciarse agosto, respecto a un rol en apariencia pasivo de los militares dentro de la contingencia chilena, al señalar que estos seguían políticamente mudos.⁴⁶⁷ Esta especie de indefinición de las FFAA, que parecían decididas a no intervenir en política contingente más allá de las tareas que les asignaba la ley, parecía indisponer cada día más a diversos sectores políticos que esperaban una actitud distinta. En la segunda quincena de agosto, el mismo embajador español hacía notar que diversos grupos antimarxistas se hallaban “muy deprimidos” ante la poca firmeza de los altos mandos de las FFAA en relación al gobierno, pues continuaban participando en él al tiempo que mostraban signos de división en su interior.⁴⁶⁸

El embajador luso, por su parte, llamaba la atención sobre algunos hechos coyunturales que habían puesto en primera plana al mundo uniformado a inicios de este mes. El primero de ellos se refería a la participación de diversas unidades militares en el allanamiento efectuado a la Lanera Austral en la ciudad de Punta Arenas, hecho que como se recordará terminó con un obrero fallecido y una agria polémica pública. Al respecto, de Castro e Abreu señaló que la izquierda había arremetido duramente en contra del general a cargo del operativo, Manuel Torres de la Cruz, indicando en este sentido

que la muerte del operario puntarenense había sido explotada por el MIR y por diputados socialistas para redoblar los ataques en contra del oficial. El segundo hecho que resaltó el diplomático se refería al “movimiento subversivo en gestação” que había sufrido la Armada, según esta óptica, por parte de elementos de la ultraizquierda ligados al MAPU y al PS.⁴⁶⁹

Visto desde el ángulo en que lo enfocaba el embajador portugués, las FFAA parecían estar a merced de las oscuras maquinaciones y ataques de la izquierda que no dudaban en menoscabar el prestigio de algunos oficiales, e incluso trataban de infiltrarse en sus estructuras internas. El diplomático español, por su parte, resaltaba en sus mensajes un aspecto distinto que guardaba relación con un proceso de indefinición al interior de las filas castrenses respecto a la crisis social y política que aquejaba al país, conducta que, además, causaba incomodidad en ciertos sectores. Independiente de los matices de cada embajador, resultaba evidente que las FFAA, ya fuese por estar en el centro de los ataques políticos como por su virtual indecisión sobre ciertas materias, se habían constituido en un actor político de primera línea. Esto hacía que las miradas sobrevolaran permanente sobre sus autoridades y cursos de acción, por lo que cualquier cambio dentro de estos elementos sería analizado con detención. La revista española *Cambio 16* señalaba, en este sentido, que con el ingreso de los militares al gabinete que formó Allende en los primeros días de agosto las FFAA quedaban, en la práctica, encargadas de los problemas más vitales de Chile.⁴⁷⁰

Al mismo tiempo que surgía este tipo de diagnósticos comenzaron a producirse, en efecto, importantes realineamientos al interior de algunas ramas castrenses, en particular en la Fuerza Aérea y el Ejército, los cuales repercutirían en todo el sistema institucional. En relación a la FACH el punto de tensión se originó a propósito de la renuncia al cargo de ministro de Transportes de su comandante en jefe, César Ruiz Danyau, quien argumentó que se encontraba imposibilitado de poner término a la huelga de los camioneros sin que se desatase un enfrentamiento violento. El presidente Allende, al aceptar dicha dimisión, le pidió al oficial que también renunciase a la jefatura de la FACH, cuestión a la que Ruiz Danyau se habría negado.⁴⁷¹ Esto originó una fuerte polémica en círculos oficiales que trascendió en cuestión de horas a la opinión pública. Sobre este punto el embajador español comentaría, en

el telegrama del 21 de agosto citado con anterioridad, que algunas esposas de oficiales militares habían acudido al Ministerio de Defensa para aclamar al general de la FACH y repudiar a través de gritos y consignas a los comandantes en jefe del Ejército y la Armada. Finalmente, al concretarse la salida de Ruiz Danyau, el primer mandatario nombró a Gustavo Leigh Guzmán como máxima autoridad de esta rama uniformada.

En el caso del Ejército, y luego de sendas protestas ocurridas en su domicilio particular, unido al escaso apoyo que encontró dentro del cuerpo de generales para reafirmar su autoridad institucional, el comandante en jefe Carlos Prats renunció a su cargo y a su puesto como ministro de Defensa.⁴⁷² Sobre estos hechos en particular, el embajador español describiría que la protesta realizada en el domicilio del general se caracterizó por su forma “violenta” y cargada de insultos.⁴⁷³ Al mismo tiempo, Pérez Hernández reseñaba una dinámica que no había mermado en intensidad ni en extensión en el país. Esta se refería a los desórdenes callejeros y enfrentamientos que a diario copaban las calles de distintas ciudades. Respecto a los incidentes que refería el embajador español, y que se habían producido en el centro de la capital, se anotaba como una de sus consecuencias más significativas los numerosos heridos de gravedad por la acción de armas de fuego.⁴⁷⁴ Tal información también fue reproducida íntegramente por *ABC* en su edición del 23 de agosto en la cual señalaba que un grupo de militantes del PN había sido atacado a balazos por “extremistas marxistas.”⁴⁷⁵ El periódico falangista *Arriba* refirió estos mismos sucesos señalando que en el tiroteo ocurrido en la capital habían chocado “grupos políticos antagónicos” que dejaron un saldo de seis heridos, uno de los cuales se encontraba “al borde de la muerte”.⁴⁷⁶

Desde la óptica observada por el diplomático español, el conjunto de estos hechos se enmarcaba dentro a una crisis estructural que no veía un punto de salida posible. En este sentido, la renuncia del general Prats, además de su significado práctico en torno a las relaciones cívico-militares, era observada como producto de un cuadro abierto de polarización y enfrentamiento que erosionaba la convivencia de un número amplio de actores que incluía a la sociedad civil y a los grupos dirigentes. Para el embajador Pérez Hernández, la renuncia de Prats debía leerse como el término de la garantía de esta institución, es decir del Ejército, al gobierno de la Unidad Popular, aunque también

recalcó que se trataba de un “mini golpe incruento” que podía crecer en magnitud en poco tiempo más.⁴⁷⁷

El semanario *Cambio 16* indicaba, en este contexto, que los cambios ocurridos en las últimas semanas habían instalado un escenario donde todo pasaba a depender de los militares; desde su opción por la guerra civil hasta reforzar al gobierno de la UP. Con todo, también existía un tercer camino, indicaba esta revista, que consistía en apostar por una salida similar a la ocurrida en el Perú “con ellos [los militares] al timón.”⁴⁷⁸ Coincidiendo en que se trataba de un contexto dramático, *Sábado Gráfico* indicaba, no obstante, que la posibilidad de un golpe de Estado que llevara a los militares al poder era imposible, pues este abriría los caminos de una guerra civil “dura y tal vez larga”. Más aún, según este medio, los militares no actuarían de forma compacta ya que existían tanto regimientos a favor de una intervención en contra del gobierno como otros que estaban dispuestos a defenderlo.⁴⁷⁹ Pablo Álvarez a través de *Cuadernos para el Diálogo*, sostenía, en tanto, que la izquierda debía tomar nota de la importancia del factor político-militar dentro de la coyuntura de entonces, evitando, entre otras cosas, cualquier intento de reemplazo de las instituciones uniformadas por milicias populares armadas. Operar en sentido contrario, sentenciaba el columnista, demostraba una escasa capacidad de “comprensión histórica.”⁴⁸⁰

Por su parte, el embajador portugués indicaba que lo ocurrido con el general Carlos Prats se debió a que ante el desasosiego y preocupación que existía en las Fuerzas Armadas y de Carabineros, las esposas de algunos oficiales habían tomado la iniciativa pidiendo al comandante en jefe su renuncia.⁴⁸¹ Desde este ángulo, el conflicto suscitado con la máxima autoridad del Ejército era entendido como un hecho más bien puntual que había explotado en virtud de la angustia por la que atravesaba la denominada “familia militar”. En el semanario *Expresso*, en tanto, se señalaba lo contradictorio del planteamiento de la oposición chilena en las últimas semanas, que imponía a Allende la inclusión de los militares en el gabinete y ahora, en virtud de la declaración de la Cámara de Diputados del día 22 de agosto, sostenía que aquellos “participam num Governo ilegal”. La renuncia del general Carlos Prats era entendida, en este marco, como producto de un chantaje opositor que seguramente seguiría adelante.⁴⁸²

Aunque no podía darse por sentado que una reestructuración en la dirección del Ejército implicaría un cambio en la actitud de esta rama con relación al gobierno, para algunos actores resultaba indicativo que una figura como Prats, identificada como leal a la UP, quedara fuera de circulación. De este modo, la preocupación que habían manifestado algunos actores a inicios de agosto respecto a la indefinición de las Fuerzas Armadas comenzaba a quedar atrás, pues resultaba del todo relevante que los mandos constitucionalistas del Ejército fueran factualmente marginados de la institución. Desde esta óptica, las condiciones estratégicas se alineaban en la perspectiva de un “golpe cruento” en contra de la UP. Desplazado Prats y con él otros generales de su misma línea, los hilos de la trama cívico-militar que preparaba el golpe comenzarían a alistar sus últimas operaciones.

Haciendo una síntesis de los factores que se desarrollaron en las semanas previas al golpe de Estado se pueden señalar al menos tres elementos. El primero de ellos tenía que ver con el contexto social y político que no había disminuido su ritmo polarizador, incrementándose periódicamente en relación con diversos temas. En ese marco, la ola de atentados terroristas y hechos de violencia en general reforzaban la idea de un escenario fuera control en el cual el principal damnificado, ya fuese por su incapacidad para revertir este cuadro como por la erosión del principio de autoridad que ello implicaba, era el gobierno. El segundo elemento tenía relación con las dinámicas emanadas desde el plano institucional. Al finalizar agosto, las perspectivas de una salida consensuada a la crisis se habían cerrado con el fracaso de las conversaciones PDC-UP⁴⁸³, y lo que todavía resultaba más decidor fue que desde otro poder del Estado se acusó al Ejecutivo de actuar en la ilegalidad. El tercer elemento estaba circunscrito a los cambios que operaron en el seno de las FFAA y que significaron el alejamiento de los mandos constitucionalistas que todavía prestaban lealtad al gobierno de Allende.

Visto en su conjunto, estos tres factores confluyeron con toda su intensidad hacia el mes de septiembre sellando así la suerte del proyecto socialista de la UP, el cual seguía contando, no obstante, con un masivo apoyo social como quedó demostrado en la conmemoración del tercer aniversario del triunfo del 4 de septiembre. Pero ello no implicaba un cambio en las relaciones de poder que ya se habían alineado en la perspectiva de poner fin

al gobierno. Más aún, cualquier iniciativa que en este marco intentara abrir una vía de solución institucional debía sobreponerse a factores estructurales de mayor peso que iban en otra dirección, por lo que una idea de este tipo resultaba sencillamente irrealizable. Incluso, alguna medida de fuerza que se materializara por parte de las bases militantes de la izquierda para reforzar a la UP también resultaría ineficaz ante unas FFAA cada vez más cohesionadas detrás una estrategia de golpe militar que significaría, además, el despliegue de cruentas prácticas represivas.

De este modo, la mañana del 11 de septiembre de 1973 se selló el destino final del proyecto socialista de la UP. Las Fuerzas Armadas, en un despliegue operativo caracterizado por su eficacia y violencia, rodearon el palacio de La Moneda conminando al presidente Allende a entregar el mando a los sublevados.⁴⁸⁴ Tras una resistencia que se extendió unas cuantas horas, la sede del Ejecutivo fue bombardeada y en un acto cargado de simbolismo pensando quizás en una defensa moral de la Constitución y la Ley— Allende se quitó la vida de un disparo.⁴⁸⁵ Pasado el mediodía, el gobierno estaba descabezado y sus dirigentes sumidos en la confusión y el miedo sin saber exactamente qué hacer. La escasa resistencia armada que existió en algunos lugares, por ejemplo, en zonas industriales, fue desbaratada en breve tiempo no constituyendo una amenaza de consideración. La jornada se cerró en horas de la noche, al alero de un implacable toque de queda, cuando la Junta Militar de Gobierno hizo su aparición en la televisión. Los generales de las Fuerzas Armadas y la policía uniformada expusieron sus puntos de vista respecto a lo sucedido, así como las motivaciones que los impulsaron a derrocar al gobierno de la UP. Por el tenor de su contenido y la vehemencia para transmitirlo destacó la intervención del general del aire Gustavo Leigh Guzmán, quien indicó que estaban dispuestos a “extirpar el cáncer marxista hasta las últimas consecuencias”.

En este contexto, es interesante destacar dos elementos en torno a la coyuntura del golpe de Estado que fueron observados detenidamente por los actores ibéricos. El primero de ellos estuvo referido a los alcances y características de la operación militar que puso fin al gobierno de la UP, tópico desde el cual se desprendería una visión todavía más particular sobre la violencia. Tales referencias darían cuenta de la forma en cómo fue abordada esta problemática bajo un contexto que había cambiado de forma radical. En este sentido,

la violencia seguiría constituyendo un punto importante dentro de los análisis diplomáticos y comunicacionales, aunque ahora bajo coordenadas de materialización y extensión bastante diferentes. El segundo elemento se refiere a los diagnósticos que se hicieron sobre el fin de la vía chilena al socialismo y sus consecuencias de mediano y largo plazo. Este tipo de análisis implica extender el radio de análisis más allá del día del golpe a objeto de indagar en aquellas reflexiones que intentaron explicar desde una óptica más amplia este trágico suceso. A partir de este análisis se puede constatar qué cambios y continuidades analíticas hubo respecto al traumático fin de la experiencia socialista y el nacimiento de lo que parecía ser un nuevo orden en Chile.

Los primeros informes emanados desde las embajadas ibéricas referidos al golpe de Estado relataban numerosos antecedentes y situaciones acontecidas ya en la mañana de ese día. El embajador español, por ejemplo, a través de un telegrama fechado a primera hora de esa jornada comentaba que el presidente Allende se dirigía al país a través de una cadena de radioemisoras indicando que la Armada se había apoderado de la ciudad de Valparaíso sublevándose en contra del Gobierno. A juicio del diplomático, las palabras del primer mandatario se hicieron en un tono “mesurado”, expresando su convicción de que el resto de las FFAA no se acoplarían al levantamiento, al tiempo que pedía a los obreros que se movilizaran pero con serenidad y calma.⁴⁸⁶ Este documento narraba las primeras horas de aquella jornada, momento en que no existía suficiente claridad sobre el alcance de la operación militar, pero donde se remarcaba la disposición cauta del presidente Allende que aún confiaba en el respaldo de la mayor parte de las FFAA.

Avanzada la mañana, otro telegrama de Pérez Hernández daría cuenta de algunas situaciones que comportaban mayor tensión, sobre todo en lo que respecta a las comunicaciones. Según el documento, cerca de las 10 de la mañana los servicios de telégrafo, teléfono y télex con el exterior habían sido cortados, por lo que la única fuente de contacto era por la Agencia EFE, a través de la cual se había enviado el presente telegrama. En el texto también se informaba la imposición del toque de queda a partir de las tres de la tarde, señalando, además, que los funcionarios diplomáticos españoles, así como el personal de EFE e Iberia y la comunidad hispana residente en Chile, se encontraban perfectamente y sin novedades.⁴⁸⁷

Al día siguiente, cuando la situación ya se había definido en lo fundamental, el embajador español aportaría otros antecedentes sobre el reciente golpe de Estado. Junto con transmitir parte de las declaraciones que la propia Junta Militar había señalado, en el sentido de autodefinirse como un movimiento antimarxista y de respeto a las conquistas sociales, Pérez Hernández comentaba algunas impresiones personales. A su juicio, y no obstante la existencia de focos de resistencia en ciertas zonas, el movimiento uniformado se veía “triumfante” y concitaba, además, de un rápido apoyo dentro de los gremios comerciales y profesionales.⁴⁸⁸ El énfasis en torno al éxito que tuvo el levantamiento uniformado significaba dar cuenta, por parte del embajador español, de un importante punto de inflexión dentro del proceso político chileno. Es decir, el gobierno de la UP había sido depuesto en pocas horas quedando sumido en una derrota dura y amarga que no abría la puerta a ninguna posibilidad de recuperar el espacio y poder perdidos. La junta castrense que le reemplazó tuvo, en este sentido, la capacidad de monopolizar en pocas horas la esfera pública, controlando con firmeza la circulación de actores y discursos. En este marco, los militares se posicionaron de tal forma en la cúspide del poder que las dinámicas de confrontación armada existentes en algunos puntos fueron visualizadas como “focos de resistencia”, es decir como esfuerzos acotados de reacción ante un poder omnímodo que pronto los aplastaría. Es interesante anotar también que el embajador señalase que un conjunto importante de actores había prometido lealtad al “nuevo régimen”, reforzando con ello, quizás inconscientemente, la idea de que el movimiento militar suponía una refundación institucional de largo alcance para Chile.

Tales apreciaciones eran reforzadas por los propios discursos y noticias que emanaban desde las autoridades uniformadas y que transmitían una sensación de control absoluto de la situación. En un telegrama enviado casi a la medianoche del 12 de septiembre, Pérez Hernández informaba que pocas horas antes una patrulla militar había llegado hasta su residencia para entregarle una nota proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En ella se informaba que una junta militar “se había hecho cargo del Gobierno de la República” dejando establecido, además, que dichas autoridades ejercían “absoluto control” sobre el territorio nacional y que el orden público se mantenía “inalterado”. Por último, se garantizaba que la

tradicional política exterior de Chile continuaría respetando las obligaciones internacionales.⁴⁸⁹

En medio de estas comunicaciones, surgirían algunos matices desde la embajada española para referir a lo que estaba sucediendo. El jefe de la oficina comercial de esta repartición, Matías Rodríguez, señalaría el día 14 de septiembre que el golpe de Estado militar había derrocado al “gobierno constitucional” del presidente Allende. Ello indudablemente marcaba un matiz interesante al hablar de gobierno constitucional, sobre todo porque semanas más tarde el embajador Pérez Hernández indicaría que la intervención militar resultaba “imprescindible”, homologando dicha acción a una “intervención quirúrgica de emergencia.”⁴⁹⁰

Una de las primeras reacciones del embajador portugués ante el golpe militar está fechada tres días después de ocurridos los hechos. A través de un telegrama, de Castro e Abreu destacaba el carácter salvífico que había tenido el movimiento militar al rescatar al país de la anarquía y miseria en que se encontraba sumido bajo el régimen de la UP.⁴⁹¹ Pocos días más tarde, el mismo embajador remitiría otro telegrama en el cual destacaba las declaraciones que había pronunciado el general Augusto Pinochet en orden a que los tribunales de justicia serían severísimos con los extremistas, “que são na maioria estrangeiros”, y que continuaban ejecutando tareas de agitación. Al mismo tiempo de Castro e Abreu remitía a las cifras entregadas por las autoridades castrenses en orden a que el golpe de Estado había dejado “95 muertos e 4.400 detidos”, indicando que proseguía la búsqueda de “numerosíssimo material de guerra” que estaba en manos de los militantes de la UP.⁴⁹²

Estas primeras comunicaciones diplomáticas reflejan la importancia que se le asignó a la capacidad operativa con que las FFAA habían derrocado al gobierno de la UP a través de una acción rápida y eficaz que no permitió extender el enfrentamiento más allá del mismo día 11. En el caso español se observarían algunos matices respecto a la naturaleza del régimen de-puesto, aunque ello no trasuntaba en la práctica una discusión completamente relevante, pues el énfasis fundamental estuvo puesto en el cambio que un hecho de estas características significaba para el país sudamericano. Desde la embajada lusa, como era de esperar, se miró de forma condescen-

diente el golpe de Estado señalando que el movimiento uniformado había salvado a Chile. No obstante, se advertía que aún quedaban elementos extremistas –premunidos de grueso armamento– dispuestos a enfrentarse a las fuerzas militares. Ambas perspectivas, a pesar de sus matices, confluían en que lo sucedido el 11 de septiembre revelaba la materialización de un hecho que dejaría profundas consecuencias.

Lo reseñado por los diplomáticos ibéricos incluía, así, algunas referencias que se deslizaban directamente hacia el tema de la violencia. El punto de partida estaba enmarcado en torno a la operación que significó asaltar el poder por medio de disparos al palacio presidencial, y luego a través de un cruento bombardeo aéreo, hasta lograr la caída del Gobierno. Con todo, ello no fue visto como una acción de violencia a gran escala, sino más bien como la culminación de un proceso de progresivo deterioro de las relaciones sociales y políticas que tocaba a su fin gracias a la intervención de los militares. En otras palabras, se visualizaba el proceder castrense como una acción más bien rectificadora que pondría fin a un periodo de caos y desgobierno. En esta línea, los actos y hechos de violencia más condenables seguirían vinculados, según la mayor parte de las miradas diplomáticas que se hicieron en esas semanas, a las bases militantes y grupos extremistas de izquierda. Si bien las acciones de estos actores no pasaban de ser ejercicios de resistencia ante un sólido poder militar, los observadores ibéricos presuponían que de todos modos existía una fuerza marxista armada, que se movía en un plano subterráneo, y que estaba dispuesta a llevar a cabo diversas acciones de violencia para recuperar el poder.

Bajo esta perspectiva, la violencia política seguía anclada a un sector político en particular, en este caso la izquierda, aunque sin la capacidad de despliegue y operatividad que tenía bajo el extinto gobierno de la UP. Con todo, ciertos grupos y militantes pertenecientes a este bloque constituían todavía una amenaza para las nuevas autoridades militares, aunque, claro está, ella no parecía trasuntar la magnitud de lo que representaba pocas semanas atrás. En definitiva, las mismas nociones y conceptos que se utilizaron en el pasado para referir la violencia de los sectores de izquierda seguían teniendo vigencia para algunos observadores, pero ahora en el marco de un nuevo contexto en que dicha violencia estaba claramente replegada.

Con el paso de los días pudo observarse, sin embargo, un matiz interesante en el caso del embajador español. A través de diversos telegramas comenzaría a describir un conjunto de situaciones y hechos referidos a las prácticas de violencia cometidas por los militares. Tales observaciones, por cierto, se hicieron con el mayor cuidado y sin desatender el contexto general que ya se había descrito en mensajes anteriores. Una de las primeras referencias, pues, al tópico señalado fue descrita a través de un telegrama fechado el 17 de septiembre a través del cual el embajador cuenta de una entrevista personal que sostuvo con el general Augusto Pinochet. En un momento de la reunión, indica Pérez Hernández, Pinochet comenzó a referirse al tema de la represión cometida por los militares dando a entender que buscaba las “observaciones” del diplomático. Éste le indicó, a título personal, que “la moderación y la clemencia podrían rendir frutos positivos a corto y largo plazo”, ante lo cual Pinochet le indicó que tendría especial cuidado en general y “en casos concretos como el de Neruda”. Al finalizar la conversación, el militar volvió a insistirle a Pérez Hernández en que la situación del país estaba controlada pero que eran de prever “guerrillas urbanas y rurales.”⁴⁹³

Este documento es bastante revelador, pues corrobora que Pinochet y la junta militar estaban al tanto, y plenamente conscientes, de las prácticas represivas y acciones de violencia que estaban llevando a cabo los uniformados en distintos puntos del país. Más aún, el haber consultado a un observador extranjero sobre este tipo de cuestiones revelaría la preocupación de los militares por la imagen exterior que se estaba formando sobre Chile, y en particular sobre el actuar de los uniformados. Como se sabe, poco después del golpe de Estado, dicha imagen ya se había estructurado casi en su totalidad en torno a las denuncias que se hicieron por los crímenes y abusos cometidos por la junta de gobierno tras el derrocamiento del presidente Allende. En este sentido, las recomendaciones del representante español en orden a que la “moderación y clemencia” de parte de los militares podrían rendir frutos, estaban indicando que algunos representantes del cuerpo diplomático acreditado en Chile conocían con bastante claridad la intensidad y el nivel que estaba alcanzando la violencia represiva en el país sudamericano.

Otro hecho referido por el embajador Pérez Hernández, dentro del contexto descrito, estuvo circunscrito a aquellos episodios de violencia que

afectaron a algunos ciudadanos españoles en particular. En un telegrama redactado el 27 de septiembre, el diplomático informaba haber recibido la noche anterior el llamado de un médico forense quien le indicó que el día 20 había ingresado en la morgue del Instituto Médico Legal el cadáver del ciudadano español y sacerdote Juan Alsina Hurtos, quien entonces se desempeñaba como jefe de personal del Hospital San Juan de Dios. Ante este hecho, según detalla el embajador, solicitó inmediatamente una audiencia con el ministro del Interior del régimen, general Óscar Bonilla.⁴⁹⁴ En la reunión, efectuada dos días después, el diplomático informaba que le había hecho ver “con la seriedad del caso” el interés del gobierno español por conocer “circunstancias y detalles de la muerte del padre Alsina”. Al mismo tiempo, Pérez Hernández indicaba que solicitó al alto oficial una “investigación judicial a fondo” esperando que los implicados en dicho homicidio “sean castigados”. El secretario de Estado, apuntaba el embajador, se había comprometido a ello indicando además que nombraría un fiscal “ad hoc” para investigar el caso.⁴⁹⁵

A la luz de estos documentos, la posición del embajador español no resultaba cómoda ni sencilla. Su rol como diplomático le exigía máxima cautela a la hora de relacionarse con las nuevas autoridades, aun cuando era representante de un gobierno que en el papel miraba con cierta satisfacción la llegada de los militares al poder. Pero esto era en realidad más complejo que una simple ecuación ideológica. Como indica María José Henríquez, el impulso renovador de la política exterior española al finalizar los años sesenta y los proyectos de intercambio comercial y de otras materias construyeron unas relaciones hispano-chilenas a lo largo del periodo 1970-1973 caracterizadas por el pragmatismo, la buena voluntad y el respeto mutuo.⁴⁹⁶ En ese marco, no era sencillo para Pérez Hernández deshacerse sin más de ese legado, pues debía conjugar su rol como diplomático pero también hacer frente a un sinnúmero de situaciones concretas que demandaban una respuesta humanitaria en medio de la cruenta represión que se desataba en los días siguientes al golpe de Estado. Aunque su juicio sobre la UP transitaba por una senda más bien crítica, Pérez Hernández coordinó numerosas acciones que significaron refugio y amparo para diversas personalidades, entre ellas el asesor del fallecido presidente Allende, Joan Garcés.

Desde otras latitudes, el tema de la violencia militar y la imagen que se comenzaba a construir respecto a la dictadura fue visualizada bajo otros ángulos. El propio ministro de Asuntos Exteriores de España, Laureano López Rodó, advertiría a Pérez Hernández de las estrategias que adoptaría la representación chilena en la ONU frente al tema de los derechos humanos. Según el delegado español, el embajador chileno Enrique Bernstein le comentó un sinnúmero de detalles que la delegación del país sudamericano expondría ante la Asamblea de las Naciones Unidas a efecto de justificar el accionar de los militares. Entre ellos destacarían la revelación del denominado “Plan Z” –consistente en un supuesto plan ideado por la UP para asesinar opositores políticos– y de una carta personal de Fidel Castro a Salvador Allende “altamente comprometedor”. El delegado español le comentaría a Bernstein que el ambiente en la ONU sería adverso hacia la Junta Militar chilena, pero que más allá de algunas protestas iniciales les dejarían hablar.⁴⁹⁷

Por su parte, el ministro consejero español en la Santa Sede, Martínez Mata, le escribía al ministro López Rodó para comentarle de la visita efectuada al cardenal Benelli, por entonces alto funcionario de la Secretaría de Estado Vaticana. A lo largo de la conversación, Benelli le manifestó que ni él ni el cardenal Cassaroli, titular de la cartera, recibirían a la Comisión de Juristas Internacionales que había visitado recientemente Chile como tampoco lo harían en el caso de Beatriz Allende, hija del expresidente. La razón argumentada por Benelli era que en la Secretaría de Estado comprendían que la visita sería instrumentalizada con “fines políticos”. Al mismo tiempo, el cardenal italiano le manifestó “airadamente” a Martínez Mata que resultaba “escandalosa” la forma en cómo la prensa italiana se había referido a la actuación de la junta de gobierno en Chile, lo que incluía también al órgano oficial de la Conferencia Episcopal Italiana *Avenire*.⁴⁹⁸

Como se puede constatar, hubo diversas comunicaciones y mensajes que circularon en torno al golpe de Estado desde las representaciones españolas. Para el embajador Pérez Hernández la situación resultaba compleja pues debía calibrar su actuación considerando las exigencias de su cargo diplomático en el marco de una fuerte ola represiva que él mismo pudo constatar a los pocos días de consumado el golpe. Sus apreciaciones, en este sentido, si bien se hicieron eco muchas veces de las informaciones oficiales emanadas desde

la junta militar, también advirtieron la crudeza de la represión y cómo esta alcanzaba incluso a algunos ciudadanos españoles.

Desde la embajada de Portugal, en cambio, no hubo ni el menor cuestionamiento respecto al golpe de Estado y las prácticas represivas que se decantaron por parte de los militares. Los informes del embajador de Castro e Abreu reprodujeron íntegramente el punto de vista de las autoridades castrenses en diverso orden de materias. En un informe fechado el 20 de septiembre, el diplomático luso comentaba del reconocimiento que diversos países del mundo habían hecho de la nueva Junta Militar de gobierno, entre los cuales se encontraba, por supuesto, Portugal. Al mismo tiempo, de Castro e Abreu destacaría las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Almirante Ismael Huerta, quien recalcó que la posición internacional del país estaba situada en un sector que no era marxista leninista y que compartía un espacio con aquellos países que “têm os mesmos problemas que nós.”⁴⁹⁹

A comienzos de octubre otro telegrama del embajador portugués se hacía eco esta vez de la política universitaria que impulsaría el gobierno militar y cuyo propósito central era “extirpar marxismo no Chile”. Para tales efectos, indicaba el diplomático, se habían nombrado rectores militares, con amplias atribuciones, en todas las universidades del país. Tal medida respondía a lo que la junta militar, según de Castro e Abreu, había definido como una “extrema desvirtuação” de los planteles de educación superior, los cuales se habían aparatado de su naturaleza y vocación. Haciendo una aportación personal a este respecto, el embajador luso recordaba que muchas sedes y escuelas universitarias se habían convertido en “focos doutrinários” y de “propaganda marxista”, donde incluso se amparaba la violencia promovida muchas veces por “estrangeiros indesejáveis.” Por último, el diplomático señalaba que las nuevas autoridades habían revocado el decreto de democratización de la enseñanza, promulgado por el gobierno anterior, y que buscaba implantar en Chile un sistema educacional “inspirado nos modelos marxistas de Cuba e da órbita soviética.”⁵⁰⁰

El énfasis anterior volvía a poner en el tapete el tema de los lazos internacionales de la extinta UP con el mundo comunista, relación que a juicio del embajador luso había sido estrecha y concordante a lo largo de los casi tres años del gobierno de Allende. Lejos de ser un tópico ausente de los des-

pachos diplomáticos posteriores al golpe, este tema volvería a estar presente en las comunicaciones del representante portugués. Así quedó reflejado en un telegrama de finales del mes de noviembre –y caratulado como “confidencial”– en el cual de Castro e Abreu informaba de una oscura operación digitada por la Unión Soviética a objeto de desprestigiar al gobierno militar chileno. Según el diplomático luso, el ministro de Relaciones Exteriores, almirante Huerta, había informado al cuerpo diplomático acreditado en Santiago que los servicios de inteligencia descubrieron que el embajador de Suecia, Harald Edelstam, se encontraba *ad portas* de sufrir un atentado el cual sería ejecutado por miembros de la extrema izquierda. El objetivo, indicaba de Castro e Abreu, era convertir a Edelstam en un mártir para que de esa forma la Unión Soviética pudiera incrementar su campaña de desprestigio en contra del gobierno chileno, causando conmoción en todo el mundo al punto de hacer caer a la junta militar.⁵⁰¹ Los planes moscovitas, según Huerta, no terminaban allí, pues también informó que la URSS planeaba la “introdução clandestina” en corto tiempo de “perigosísimos sicarios internacionais” con el objetivo de raptar o asesinar a los embajadores acreditados en el país para de este modo incrementar la campaña de desprestigio en contra del gobierno Militar.⁵⁰²

Las líneas de análisis del embajador luso no sufrieron, como se ve, mayores modificaciones una vez ocurrido el golpe de Estado. El extremismo radical y todas aquellas dinámicas que suponían acciones de violencia remitían, bajo este criterio, solo al campo de la izquierda chilena y mundial. Desde este sector, según se indicaba, se preparaban acciones para erosionar el prestigio de las nuevas autoridades militares hasta lograr su caída. Independiente de los nuevos elementos que orbitaban dentro del escenario chileno, el tópico de una izquierda fanatizada por la violencia y la destrucción marcaban un punto de continuidad en los documentos diplomáticos de los últimos tres años. Esto, sin duda, marcaba una diferencia importante en relación a algunos diagnósticos –y gestiones– que hiciese el embajador español Pérez Hernández tras el golpe militar, no obstante su mirada en esencia crítica respecto a la experiencia de la UP.

En el marco de este cruce de comunicaciones que detallaban incidentes, pronosticaban sucesos trágicos o simplemente reproducían los énfasis oficia-

les de la junta militar, se deben indicar algunas líneas sobre los diagnósticos y balances que hizo la prensa peninsular sobre el derrocamiento del gobierno de la UP.

En el caso de España, los medios de comunicación escrita aportaron numerosos puntos de vista sobre este hecho, conectando diversos elementos de la realidad social y política, a veces con un claro énfasis transnacional. Desde las páginas de *ABC*, por ejemplo, se refirieron numerosos datos sobre la jornada del día 11 de septiembre, enfatizando que la acción militar marcaba un punto de inflexión en Chile. En la portada de su edición del 12 de septiembre, bajo el titular “Cae Allende”, se incluía un texto de claro matiz justificatorio del golpe de Estado, indicando que las FFAA, “columna vertebral de la nación”, habían salvado al país del caos y la ruina de la “dictadura marxista”. Al mismo tiempo, este medio deseaba que luego de cumplir la “misión quirúrgica de urgencia” que habían llevado a cabo, los militares fueran capaces de devolver a Chile al normal ejercicio de la democracia. Respecto a algunas situaciones específicas ocurridas en la jornada del día 11, *ABC* informaba que gracias a una comunicación que pudo establecer con Santiago de Chile (presumiblemente con su corresponsal «Veritas») se pudo confirmar el bombardeo al Palacio de La Moneda, además del atrincheroamiento de “1500 marxistas” en la industria Sumar y otros tantos en la azotea del edificio de la UNCTAD.⁵⁰³

Las reflexiones del periódico monárquico marcaban una línea de continuidad en relación a los énfasis que había asumido este medio en los últimos años. Si bien a comienzos de la experiencia socialista *ABC* había mostrado cierta cautela, al cabo de unos meses esa postura cambió abriéndose una perspectiva fuertemente crítica con el gobierno de Allende y la izquierda chilena en general. Uno de los puntos centrales de los cuestionamientos de este medio radicaba en que a su juicio el proyecto popular tenía como objetivo último instaurar una dictadura totalitaria que anulara las libertades públicas e individuales. Desde este ángulo, el golpe militar fue visto como una acción rectificadora que alejaría la amenaza totalitaria buscando resguardar los valores esenciales de la nacionalidad chilena. En este sentido, tanto *ABC* como el embajador de España compartieron y explicitaron un énfasis respecto al proceder de los uniformados, el que calificaron

como parte de una acción “quirúrgica” que permitiría limpiar y extirpar el mal que aquejaba a la nación sudamericana. Bajo esta perspectiva, el tema de la violencia política, para este medio escrito, quedaba resituado dentro de los marcos ya indicados, es decir que aquella continuaba enquistada en los grupos y bases militantes de izquierda, desplegándose ahora bajo la forma de “focos de resistencia”. Así, la violencia a gran escala desatada con el golpe de Estado no fue entendida bajo estos parámetros por *ABC*, pues el proceder castrense se aquilató, según se señaló arriba, como una acción rectificadora y salvífica que pondría fin a un ciclo latente de violencia iniciada por otros.

Desde las páginas de *La Vanguardia* se habló directamente de “golpe de Estado” para referir la acción que había derrocado al gobierno de la UP, al tiempo que se señalaba que al parecer el presidente Allende se había suicidado. A través de un breve comentario editorial, este medio dejaba en claro la cantidad de obstáculos y presiones que debió sufrir la UP, advirtiendo además cómo los hechos de sangre se habían iniciado con la muerte del comandante en jefe del Ejército en 1970 y habían continuado a través de la acción de los grupos de choque. En paralelo, este medio comentaría diversos aspectos de la jornada vivida el 11 de septiembre, en particular respecto a las primeras medidas que adoptaba la junta militar de Gobierno en materia de control y seguridad. También se incorporaron algunas cronologías sobre el país sudamericano, así como breves reseñas biográficas tanto del exmandatario chileno como de algunas de las nuevas autoridades militares.⁵⁰⁴ En su edición del 13 de septiembre, en tanto, este medio enfatizaría las noticias que circulaban en torno a la verdadera causa de la muerte de Allende, reproduciendo las declaraciones de la Junta Militar que insistían en el suicidio del expresidente como la causa de su fallecimiento. El conjunto de estas informaciones era englobado bajo una portada que mostraba el Palacio de La Moneda envuelto en llamas bajo el titular “La tragedia de Chile.”⁵⁰⁵ Bajo esta perspectiva se quería mostrar de algún modo que el aciago panorama para el país andino estaba articulado en torno a la violencia con que se habían destruido los símbolos del poder republicano.

La primera reacción de *El Alcázar*, el día 12 de septiembre, fue acentuar dos aspectos centrales. El primero de ellos se refería a la figura del presiden-

te Allende, de quien no se sabía aún si se había suicidado o había muerto en combate en contra de los militares. Este periódico habló incluso de la “presumible” muerte del mandatario, dejando abierta la posibilidad de que éste estuviera todavía con vida. El segundo punto conectó, a través de una crónica firmada por Rafael Alonso, los hechos de Chile con la política exterior norteamericana. De acuerdo a este autor, en Estados Unidos se esperaba con anticipación la caída de Allende, situación que representó, en términos prácticos, un verdadero “triumfo” de la política exterior del presidente Nixon. Con todo, Alonso aclaraba que, aunque el Golpe Militar era una buena noticia en las altas esferas del poder de Washington, nadie de este círculo lo reconocería públicamente.⁵⁰⁶

En los días siguientes, *El Alcázar* comentaría las distintas alternativas sobre la formación del nuevo gobierno militar, sin dejar de referir el costo humano que el golpe de Estado había causado en el país. En su edición del 13 de septiembre, este medio anotó, en efecto, que el número de muertos ya se elevaba a cerca de mil personas. Asimismo, se incluyeron algunas columnas de opinión que revelaron la mirada más crítica hacia el depuesto gobierno de la UP. En una de ellas, firmada por “Europeo”, se indicaba que los “turiferarios” del régimen socialista se negaron a creer en que el extinto mandatario –“que habitaba una gran villa en el barrio elegante de Las Condes”– pudiera ser derrocado, aun cuando aquél se mostrase cada vez más inseguro y vacilante. Desde un punto de vista más general, este columnista señalaba que el “país entero” estaba hartado de sufrir las consecuencias de una economía destrozada, de las amenazas de las bandas del MIR y “los pistoleros del GAP” y de ver cómo se preparaba un golpe de fuerza por parte de los comandos marxistas. Por todo lo anterior, la intervención castrense era saludada como una acción salvífica. Una segunda columna, publicada también en la edición del 13 de septiembre y firmada por el falangista Rafael García Serrano, indicaba que los militares chilenos se habían constituido en una Junta con el objetivo de “alzarse frente a la invasión marxista y la anarquía política”. En este sentido, García Serrano sostenía que era poco oportuno pedirles a los militares que luego de haber sacado “las castañas del fuego” volvieran a sus cuarteles para que se retomara la normalidad. En otras palabras, este columnista estaba indicando que la labor de las Fuerzas Armadas debía proyectarse en el tiempo traspas-

sando una actuación solo coyuntural o episódica. A pesar de estos énfasis, que eran claramente justificatorios del golpe y del derrocamiento del Gobierno popular, García Serrano sostenía que Allende era un “hombre valeroso” y que no le extrañaría que el mandatario se hubiese suicidado o estuviera organizando la resistencia armada en algún lugar.⁵⁰⁷

Hacia mediados de septiembre, *El Alcázar* daría cobertura a los comunicados y declaraciones oficiales que emanaban de las nuevas autoridades chilenas. Como es de suponer, en la mayor parte de ellas se exponía una crítica abierta al depuesto gobierno de la UP, al que se acusaba de haber llevado al país a la ruina y el caos. En ese marco, la actuación de los militares, según indicaban algunos ministros como Ismael Huerta y Óscar Bonilla, estaba plenamente justificada.⁵⁰⁸ En esta misma línea podrían ubicarse las declaraciones del exembajador chileno en Lisboa, Rafael de la Presa, quien al ser entrevistado por *El Alcázar* sostuvo que el Golpe de Estado había sido un “gran triunfo para la democracia en Chile y para la democracia en el mundo.”⁵⁰⁹

Desde las páginas de *Arriba* se destacarían dos elementos en su análisis sobre Chile. El primero de ellos, desarrollado en su edición del 12 de septiembre, se refería a la contundencia de la operación militar que derrocó al Gobierno de la UP, cuestión que había mostrado a unas FFAA cohesionadas y sin fisuras internas a la hora de alcanzar este objetivo. En este sentido, se destacó que las tres ramas militares, incluido el cuerpo de Carabineros, habían justificado su alzamiento en razón del caos que reinaba en el país, por lo que exigían la inmediata renuncia del presidente Allende. Aunque *Arriba* informaba la aparición de algunos focos de resistencia en la capital, se dejaba claro que las FFAA controlaban la situación en diversas ciudades del país.⁵¹⁰ Bajo este ángulo, se hicieron algunas menciones respecto al número de víctimas fatales producidas por la operación militar, indicando que no se podía entregar una cifra exacta, aunque quizás ella ya alcanzaba el medio millar entre muertos y heridos. Asimismo, se indicaba que las informaciones provenientes del país sudamericano se encontraban fuertemente restringidas por la Junta Militar.⁵¹¹ Visto en conjunto, el primer tópico que enfatizó este periódico remarcaba la contundencia de la acción militar a objeto de derrocar al gobierno de Allende y someter bajo su estricto control a la casi totalidad del territorio nacional.

El segundo elemento destacado por *Arriba* iba en una dirección que ya habían advertido otros medios y que refería el cambio de ciclo que significaba la irrupción de los militares chilenos en la escena política de este país. En su edición del 14 de septiembre, este medio titularía que Chile comenzaba “una nueva era” en alusión al camino de “normalidad” que se iniciaba y en el cual ya habían comprometido su colaboración los partidos Nacional y Demócrata Cristiano.⁵¹² Desde este ángulo, el gobierno de la UP quedaba reducido a las cenizas y escombros que las fotografías de esta edición mostraban del palacio presidencial de La Moneda. Ciertamente, ello podía entenderse como una sintomática metáfora de que no solo un gobierno había llegado a su fin, sino también un ciclo político en particular.

A la hora de un balance general sobre el depuesto gobierno de Allende, el periódico falangista brindó un espacio destacado para que el columnista J. L. Gómez Tello hiciera su análisis. En su opinión, el espíritu combativo que desplegaban hasta hace pocos días numerosos simpatizantes del gobierno popular contrastaba con un sinnúmero de situaciones críticas que se venían desarrollando en el país. Entre ellas destacaba la huelga de los camioneros o la “guerra” que habían declarado las mujeres al Gobierno de Allende hacía dos años atrás. En ese marco, indicaba el columnista, las Fuerzas Armadas –involucradas de lleno en este tipo de conflictos– se vieron impelidas a intervenir en contra de la UP a fin de evitar la “marxistización de Chile”. Al mirar el “alzamiento” desde una perspectiva más general, se indicaba que la acción uniformada había hecho desplomarse en pocas horas la gran mentira que la izquierda chilena intentó mostrar al país y al mundo, y que no era otra que la idea de que se podía convertir a un país en comunista a través de la democracia. Así, y a partir de estos énfasis, el golpe de Estado, o “alzamiento” como había remarcado Gómez Tello, se encontraba plenamente justificado.⁵¹³

Desde las páginas de *Pueblo*, dado su carácter vespertino, se entregaron algunas informaciones en la misma jornada del día 11 de septiembre, advirtiendo sin embargo que la situación era todavía confusa y no se disponía de más antecedentes que aquellos referidos al movimiento de tropas en la capital sudamericana.⁵¹⁴ En su edición del 12 de septiembre, este medio explicitaba que la muerte del presidente Allende envolvía una situación trágica de alcance nacional. Más aún, se señaló que con la desaparición del primer

mandatario moría también “la legalidad constitucional” de Chile, no descartándose en todo caso que pudiera iniciarse una guerra civil. Aunque esta última idea ya venía circulando con cierta profusión en distintos medios de prensa, para *Pueblo* resultaba importante que en algún minuto se develara cómo se había fraguado el golpe que puso fin a la experiencia socialista chilena. En esta misma edición, la columna de Gonzalo de Bethencourt advertía que con el derrocamiento de la UP se estaban matando las esperanzas por llevar a cabo cambios estructurales en Iberoamérica por un camino distinto al de la guerrilla y de los “hombres barbudos”.⁵¹⁵ En columnas posteriores, como aquella publicada por “ciudadano” el día 13 de septiembre, se volvería a enfatizar que la figura de Allende encarnó “hasta su último minuto” la legalidad constitucional y el respeto a la ley.⁵¹⁶ Bajo este ángulo, el golpe de Estado quedaba situado como una acción de fuerza y violencia que cortó de raíz un proyecto político que podía mostrar un camino distinto de transformación social y económica en que se respetara la institucionalidad.

En *Sábado Gráfico* se publicaron dos columnas de opinión sobre lo sucedido en Chile. La primera de ellas, firmada por Germán Álvarez Blanco, hacía un recorrido por la trayectoria política del país en los últimos veinte años, entroncando sus principales hitos electorales con aquellas dinámicas y factores que decantaron en la llegada de la UP al Gobierno en 1970. A partir de entonces, el elemento que orbita de forma permanente en el análisis de Álvarez se refiere a la capacidad de proyección y sobrevivencia de un modelo que contaba con numerosos enemigos y detractores. Desde luego, los militares –educados en principios alejados de la idea de revolución, según el columnista– eran un actor preponderante del panorama nacional y su actuación a la larga resultaría clave para mantener con vida al gobierno de Allende, pero también para sellar su fin. En ese marco, Allende le transmitió personalmente a Álvarez, en medio de un diálogo informal, que él no decantaría una guerra civil ni menos provocaría un enfrentamiento entre el pueblo y las FFAA. La segunda columna, escrita por Alfonso Palomares, abordaba algunos de los tópicos que ya habían sido indicados por este autor, sobre todo en lo que respecta al accionar de los grupos de interés y de choque por provocar la caída del gobierno de Allende. El presidente chileno, apuntaba Palomares, se había limitado a llevar adelante su revolución dentro de los

marcos constitucionales, los mismos que ciertos actores no dudaron en rebasar a objeto de oponerse a proyecto socialista. Bajo esta perspectiva, el golpe de Estado que acabó con un hombre “apegado a la legalidad” causaría que sus adherentes rechazasen la vía electoral decidiéndose por la lucha armada al margen de cualquier legalidad. Se trataba de una curiosa paradoja, pues la acción militar en contra de la institucionalidad chilena, sentenciaba Palomares, había matado muchas esperanzas en el mundo, entre ellas la confianza en la voz de las urnas.⁵¹⁷

La revista *Cambio 16*, en tanto, publicó numerosas informaciones sobre lo ocurrido en Chile. En su edición del 17 de septiembre el editorial advertía, bajo un tono más bien pesimista y de resignación, que la derrota del proyecto de la UP dejaba en claro que cualquier tipo de transformación en un país situado en los márgenes de un imperio –en este caso el norteamericano– resultaba sencillamente imposible. Bajo esta mirada, se indicaba que lo extraño de la caída de Allende no era que esta se hubiese producido, sino que su modelo de transformación social y política durara tanto. En esta edición también se publicó una nota que refería los últimos meses de existencia del proyecto socialista, situándolos dentro de una crisis estructural donde la oposición y las FFAA jugarían roles claves en decantar la salida final.⁵¹⁸ En la edición del 24 de septiembre de esta misma revista se compilaron diversos extractos de algunos discursos pronunciados por Allende, haciendo hincapié en aquellos tópicos que abordaban el subdesarrollo o la desigualdad desde una perspectiva latinoamericana.⁵¹⁹ El objetivo de *Cambio 16* era remarcar la imagen del extinto mandatario como una figura de alcance continental que a través de su trayectoria política, y en tanto conductor de un proyecto socialista particular, buscaba un camino para las transformaciones en su país y en la región.

Por último, para su edición del 1 de octubre, este semanario convocaría a un grupo de economistas y politólogos para que trazaran algunos diagnósticos y análisis sobre la fallida experiencia socialista. Desde el punto de vista de económico, especialistas como Rafael Martínez Cortiña y Arturo Cabello, coincidirían en que el factor de la dependencia chilena constituía un elemento relevante para explicar los quiebres y problemas en la aplicación del programa socialista. Dicho elemento se reflejaba, por ejemplo, en

los mercados de exportación de los recursos chilenos –que no podían cambiarse drásticamente como lo había hecho Cuba–, pero también en medidas de presión impuestas por las grandes potencias como fue la disminución de los créditos internacionales.

Desde el punto de vista político, los analistas consideraban que las características del sistema institucional chileno, unido a las contradicciones internas de la propia UP, emergían como los elementos más relevantes de la crisis del proyecto socialista. Con todo, también se pusieron sobre la mesa otros factores importantes que tuvieron que ver con actores que iban más allá de la izquierda, como fue el rol de la oposición –inicialmente desunida, precisaba Juan Trías– o el de los militares. Mirando a largo plazo, la opinión de los especialistas estaba dividida en cuanto a si la UP permitía hacer algún tipo de balance o diagnóstico regional y mundial respecto a ciertos temas. En opinión de algunos, la experiencia socialista chilena no permitía sacar conclusiones planetarias, pues existió un conjunto de factores y elementos muy particulares en juego, sobre todo a nivel de estrategias discursivas y factuales de ciertos actores. Desde otro ángulo, se sostenía que la trayectoria de la UP no debía ser vista solo como un fracaso, pues dejaba en la práctica una herencia inestimable en torno a una serie de transformaciones estructurales de indudable vigencia. La muerte de Allende, sentenciaba uno de los economistas, haría tomar conciencia a muchos países de su subdesarrollo y niveles de explotación, lo que podía traducirse en la adopción de medidas concretas para revertir dichas problemáticas.⁵²⁰

En *Cuadernos para el Diálogo* se desplegaron numerosos puntos de vista sobre los recientes sucesos chilenos. El editorial dedicado al país sudamericano articulaba diversos elementos para explicar la caída del gobierno de Salvador Allende, estableciendo como marco de fondo los intereses que se vieron afectados por el impulso transformador del proyecto socialista. En este sentido, cobraban relevancia aquellos actores que a través de diversas vías presionaron y acosaron de forma indiscriminada al presidente, cuestión que contrastaba con el respeto a la Constitución y la ley profesado por el primer mandatario. A modo de síntesis, el editorial recalca que el fracaso no había sido de la UP, sino de aquellos que no supieron estar a la altura de las circunstancias anteponiendo sus intereses a los del pueblo.

Más adelante, en esta misma edición, Roberto Mesa recalca que la UP tuvo que luchar en dos frentes al mismo tiempo; el internacional, cuyo principal representante fue Estados Unidos, y el nacional, donde la oligarquía terrateniente y la burguesía capitalista intentarían frenar el proyecto popular. Desde esta perspectiva, sentenciaba Mesa, al gobierno de Allende se le presentaron dos caminos posibles: el del socialismo democrático y reformista y el del socialismo revolucionario, siendo este último el que demandaba un esfuerzo mayor al requerir necesariamente la destrucción del Estado capitalista para su puesta en marcha. Si bien este tipo de estrategias advertía sobre la inevitabilidad del enfrentamiento armado, el autor sostuvo que la vía reformista adoptada por Allende y también su prudencia terminaron por desencadenar “el furor de las clases dominantes”.

Desde otro ángulo, Vicente Luis Botín llamaba la atención sobre el rol de los militares chilenos, antaño respetuosos de la Constitución y la ley, pero que ahora salían en defensa de los intereses de clase que el gobierno de la UP había puesto en jaque. Aun cuando el sistema político chileno daba muestras de elasticidad, indicaba Botín, los intereses económicos que se verían afectados constituyeron un factor clave para abrir la puerta a la intervención militar. Para Gregorio Peces-Barba, en tanto, era necesario cuestionar aquellos discursos que justificaban el golpe de Estado aduciendo que el gobierno de Allende, a través de diversos actos ilegítimos, era el responsable final de la intervención militar. Al mismo tiempo, se desmentía un énfasis que ya se había observado en cierto sector de la prensa, como *ABC*, en orden a que la acción uniformada constituyó una operación quirúrgica de emergencia. Más bien, sentenciaba Peces-Barba, el golpe era el último eslabón de una conspiración mayor que buscó desde muy temprano acabar con el gobierno de la UP.⁵²¹

La edición especial de esta publicación se cerró con una sección en que se preguntaba a numerosos personajes de la vida intelectual y política española sobre los recientes acontecimientos ocurridos en Chile. Las preguntas se referían fundamentalmente a las causas del golpe de Estado, su impacto a nivel regional y mundial y las lecciones que se podían sacar sobre las verdaderas posibilidades de una vía democrática al socialismo. En relación a las causas que originaron la caída de la UP, la mayor parte de los entre-

vistados coincidió en que se articularon factores políticos y económicos que tensionaron el sistema institucional hasta lograr su quiebre. En este sentido, el papel de la oposición, radicalizado y anticonstitucional según algunos, se complementaba con la férrea presión norteamericana, lo que unido a los graves problemas económicos terminaron por cercar al gobierno en poco tiempo. En relación a las consecuencias de este hecho para el resto de la región, existía cierta coincidencia en que el golpe de Estado en Chile reforzaba las posiciones de dominación de Estados Unidos debilitando al mismo tiempo los proyectos de cambio estructural que todavía sostenían ciertos actores. Por último, la pregunta en torno a las posibilidades de un socialismo democrático a futuro abrió una multiplicidad de lecturas y análisis que iban desde una reflexión en torno al significado de estos conceptos hasta aquellas perspectivas que veían, a priori, que la vía al socialismo estaba de momento clausurada. Coincidente con este último énfasis, algunos entrevistados recalcaron que los sucesos ocurridos en Chile reforzarían la idea de que solo a través de la lucha armada se alcanzaría el socialismo.⁵²²

En ediciones posteriores de *Cuadernos para el Diálogo*, la crisis vivida en Chile seguiría ocupando un espacio de relativa importancia. Los temas sobre lo que pasaba en el país sudamericano comenzaron, evidentemente, a tocar otras problemáticas como fue la violación de derechos humanos⁵²³, o las discusiones que se dieron entre los actores que no pertenecían a la izquierda pero sí consideraban necesario expresar un punto de vista al respecto.⁵²⁴ De este modo, la perspectiva de *Cuadernos Para el Diálogo* buscó establecer un análisis riguroso que fuera más allá de la contingencia inmediata, permitiendo exponer un abanico amplio de voces que a pesar de sus particularidades a veces tendían a coincidir en ciertas materias. Quizás la interpretación que resultaba más transversal dentro de la amplia gama de matices que recorrieron las páginas de esta revista estuvo articulada en torno a que el proyecto socialista de la UP, aquilatado como democrático y legal, debió hacer frente a presiones externas e internas de indudable fuerza y peligrosidad. Dentro de este marco, sobresalía una cuestión clave referida a las contradicciones que suponía el tránsito hacia el socialismo a través de un sistema democrático liberal que en algún punto específico debería abrirse para encauzar su propia transformación estructural. Tal escenario, que a

la larga no se materializó en su totalidad, constituyó un factor de fricción permanente sobre el cual, además, orbitaban conflictos económico-sociales de muy distinta naturaleza. Indagar en este tipo de tópicos y problemáticas, y las lecciones que de ellos se podía sacar, fue, como se ha visto, el objetivo central esta publicación.

Una mirada diametralmente opuesta se observaría en la revista *Fuerza Nueva*. En su edición del 22 de septiembre, el titular de portada («Chile: No fue un golpe; fue un alzamiento») adelantaba una parte importante de los énfasis con que sería abordada la crisis del país sudamericano. Se trataba de una mirada maniquea, que criticaba con dureza al depuesto régimen y sus principales dirigentes mientras alababa el accionar de los militares. Al hablar de alzamiento y no de golpe de Estado, *Fuerza Nueva* estaba subrayando que lo ocurrido en Chile correspondía a un levantamiento general del pueblo y de las FFAA en contra de un gobierno despótico que intentaba instaurar una dictadura comunista.⁵²⁵ Por supuesto que este tipo de mensajes se explicitaba de esa forma con el objetivo de acercar la realidad chilena a los lectores españoles de esta revista. En efecto, la idea de un alzamiento hacia recordar los hechos ocurridos en la península ibérica en julio de 1936, los cuales, bajo la óptica ideológica de esta publicación, fueron constitutivos de un alzamiento del bando nacional en contra del gobierno de Manuel Azaña. En esta misma línea se ubicaría otro énfasis explicitado por *Fuerza Nueva* y que consistía en denominar al proyecto popular liderado por Salvador Allende como Frente Popular en clara alusión también a la plataforma política que reunió a diversos sectores de la izquierda española. Mirado en su conjunto, el derrocamiento de la vía chilena al socialismo, según esta revista, era en buena medida una versión actualizada de la derrota que sufriera la Segunda República a finales de los treinta, y que bajo una noción ideológica global era entendida como una derrota del comunismo internacional.

En virtud de que la situación chilena seguiría orbitando en los medios internacionales más allá del golpe militar, *Fuerza Nueva* insistiría en diversos tópicos en los meses siguientes. Así por ejemplo, en su edición del 20 de octubre se dio amplia cobertura al denominado Plan Z, el cual fue tomado como un documento fidedigno por *Fuerza Nueva*, además de referirlo como una prueba indesmentible de los siniestros planes de la izquierda chilena

para eliminar a sus opositores.⁵²⁶ Por otra parte, a través de dos ediciones distintas esta publicación dedicó un lugar especial para referir las reflexiones del abogado chileno Pablo Rodríguez Grez, quien era el líder del Frente Nacionalista Patria y Libertad y que hasta antes del golpe de Estado se encontraba supuestamente asilado en Ecuador. El dirigente nacionalista abordó, tanto en una entrevista⁵²⁷ como en la reproducción de un discurso⁵²⁸ pronunciado en la sede madrileña de Fuerza Nueva, diversos tópicos sobre los sucesos ocurridos en Chile. En ambos casos, Rodríguez enfatizaría el perfil nacionalista de los militares que asumieron el control en el país sudamericano, al tiempo que interpretaba los últimos acontecimientos como elementos constitutivos de una crisis integral de la democracia liberal.

Bajo estas coordenadas, *Fuerza Nueva* no hacía más que sintetizar lo que había sido su pensamiento editorial respecto al caso chileno en el marco de la crisis de 1973. Desde este ángulo, el Gobierno de Salvador Allende representaba un caso inequívoco de expansión del comunismo mundial que lo insertaba, al mirar este proceso bajo una lente histórica de larga duración, dentro corrientes globales que buscaban acabar con la libertad e instaurar regímenes totalitarios bajo el signo del marxismo. La importancia fundamental de lo sucedido en el país andino radicaba, según este medio, en que la caída de la UP constituía una derrota del comunismo internacional. De allí que fuera tan importante para esta publicación establecer puntos de contacto y “acercar realidades” entre lo sucedido en América Latina, España y otras partes del mundo. Es decir, las particularidades y la “localidad” de este tipo de eventos estaban indisolublemente ligadas a trayectorias y dinámicas de más amplia configuración.

La perspectiva del semanario *Triunfo* se ubicó, en tanto, en la línea de los análisis que habían realizado *Cambio 16* y *Cuadernos para el Diálogo*, aunque evidenciando, como ha sostenido Sanz-Gavillon, un tipo de recepción que explicitaba los miedos y el pesimismo de la izquierda marxista antifranquista.⁵²⁹ A lo largo de esta edición, se fueron conectando distintas perspectivas de análisis para entender lo sucedido en el país sudamericano. Así, por ejemplo, Eduardo Haro ponía el acento en el tema del fascismo y el imperialismo norteamericano en tanto factores claves que precipitaron la derrota del proyecto socialista. Tal diagnóstico, según el autor, no estaba

circunscrito solo al caso chileno, sino que debía ser un elemento a tomar en cuenta para todos los países latinoamericanos. Dentro de esta edición, también se insertaron numerosas notas que contaban, desde un ángulo más cronológico, los sucesos vividos en las últimas semanas y meses en Chile, aunque también se incluyó una crónica que miraba la realidad de este territorio a partir del proceso de descubrimiento y conquista iniciado en el siglo XVI. Este tipo de trabajo tenía por objetivo dar cuenta de las contradicciones históricas de una sociedad subdesarrollada en la cual un programa de cambio estructural como el sostenido por la UP buscaba dejar atrás este tipo de carencias y limitaciones a través de una vía socialista y popular. Con todo, el trágico fin del gobierno de Allende clausuraba tanto una experiencia en particular –la chilena– como también un modelo posiblemente de alcance mundial que concitó la atención en distintos lugares del planeta. La viñeta del dibujante Chumy-Chuméz fue bastante gráfica a este respecto al graficar un solitario camino cuyo final no se distinguía muy bien y donde resaltaba un gran letrero que decía “Vía pacífica al socialismo (carretera cortada)”.⁵³⁰

En ediciones posteriores, al igual como había ocurrido con otras publicaciones, *Triunfo* comenzó a abordar hechos más particulares ocurridos en la recién instaurada dictadura militar. Así por ejemplo, se incluyeron numerosas crónicas sobre la muerte del poeta Pablo Neruda⁵³¹ ocurrida pocos días después del Golpe, y, en general, columnas y reportajes que ahondaban en el tema de la represión.⁵³² Inclusive se abordó en clave política el duelo de las selecciones de fútbol de Chile y la Unión Soviética en el marco de las clasificatorias para el Campeonato Mundial de 1974.⁵³³ El partido de vuelta, sin la presencia de la URSS en cancha, se jugó en Santiago en el Estadio Nacional, que hasta poco tiempo atrás había sido recinto de detención y tortura. Para este medio, la escenificación de dicho partido, con Chile marcando un gol sin ningún rival en la cancha, representaba simbólicamente una victoria sobre el marxismo internacional.

En este contexto, *Triunfo* visualizaba los hechos de violencia en torno al golpe Militar y sus semanas siguientes como la culminación de un proceso que se arrastraba desde hacía años atrás y en el que los sectores reaccionarios tuvieron un rol fundamental. Dicha actuación, en efecto, se había caracterizado por un propósito manifiesto de algunos grupos como los gre-

mios empresariales o movimientos al estilo de Patria y Libertad que buscaron sembrar el caos y el desorden a fin de desestabilizar al gobierno. Por ello, la violencia desplegada a partir del golpe de Estado no era una manifestación repentina ni espontánea, sino que encontraba sus raíces en dinámicas más profundas, algunas de las cuales comenzaron a asomarse ya desde septiembre de 1970.

Una última publicación española a referir es *Mundo Obrero*. Su mirada, además de solidarizar con lo que entendía era una tragedia del pueblo chileno, apuntó a denunciar el carácter reaccionario de las fuerzas sociales y políticas que de la mano de los militares habían derrocado al gobierno de la UP. Entre las diversas notas y comentarios publicados en su edición del 17 de septiembre cabe destacar principalmente dos. La primera de ellas fue el editorial que ya en sus primeros párrafos establecería una comparación –un tanto idealizada– entre el golpe de Estado en Chile y la España de 1936. Según la visión de este medio, en el país andino se combatía “como en las calles y campos” de la nación ibérica durante los años treinta. Sin duda que el objetivo era, además de homologar realidades para el público lector, insertar la realidad chilena y española dentro de un mismo marco histórico donde ambas experiencias debieron sufrir los embates del fascismo y del imperialismo. Además, el editorial denunciaba las prácticas represivas de los militares, enfatizando que frente a ella se alzaba una “severa y enérgica” condena mundial que obligaba asimismo a levantar una “ola de solidaridad” con la causa chilena.⁵³⁴

El segundo texto de importancia que incluyó esta edición de *Mundo Obrero*, fue una declaración pública del Partido Comunista de España. En ella se honraba la memoria del presidente Salvador Allende quien había defendido “con firmeza y valentía” la causa del socialismo chileno. Bajo esta perspectiva, los principales responsables del “putsch” militar que había derrocado al extinto mandatario eran, a juicio del PCE, la CIA, el imperialismo norteamericano y las empresas multinacionales. Por otra parte y al igual que el editorial señalado más arriba, esta declaración insistía que en el país sudamericano se libraba un combate entre la clase obrera frente a los “militares fascistas”, lo cual daba a entender de que la suerte del proyecto popular no estaba del todo decidida, por lo que se podría aventurar un escenario de confrontación de larga duración.⁵³⁵ Desde este ángulo, en fin, la violencia

era entendida como un instrumento represor al servicio de los intereses del imperialismo y la oligarquía nacional, el cual se expresaba a través de los militares que combatían a los sectores populares y de izquierda. Lo que para ciertos medios fue entendido como “focos de resistencia” o violencia extrema en contra de las autoridades militares para *Mundo Obrero* era la lucha heroica de un pueblo en contra del fascismo.

Resulta interesante exponer, en este contexto, algunos documentos de militantes del PCE elaborados en el periodo siguiente al golpe de Estado en Chile, y que nos muestran las percepciones y miradas de estos actores respecto al tema de la represión. A través de un informe fechado en enero de 1974, la camarada Mercedes Álvarez daría cuenta de la visita que realizó a Chile en ese periodo en el marco de un viaje organizado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM). El objetivo de esta institución era conocer de primera fuente la realidad social y política que se vivía en el país sudamericano tras el golpe de Estado de septiembre de 1973. Según Álvarez, la FDIM pudo reunirse con numerosos dirigentes de la derrocada UP, así como también con algunas autoridades de gobierno. A partir de estas reuniones, indica la militante comunista, se obtuvieron numerosos datos sobre las víctimas del terror de la Junta Militar, que solo en lo que respecta a personas “asesinadas, fusiladas y muertas” la cifra se elevaba a “80.000”. Asimismo, Álvarez informaba que existían alrededor de 18.000 detenidos en distintos lugares a lo largo del país, así como cientos de miles de despedidos. A lo anterior se sumaban también los problemas de ingresos y alzas en los productos de primera necesidad, conformando un cuadro particularmente complejo y trágico para la población chilena. En su parte final, el informe indicaba que la principal conclusión que podía extraerse de la visita realizada era que una de las formas concretas de ayuda que se podía prestar era a través de la denuncia pública de los crímenes de la Dictadura, haciendo “presión sobre gobiernos [y] organismos internacionales” para lograr que la Junta respetase los derechos humanos. Álvarez también destacaba que, en este contexto, las embajadas de los “países capitalistas” habían tenido una actitud “muy positiva” al conceder asilo a numerosos dirigentes de la UP.⁵³⁶

Este documento ponía sobre la mesa un conjunto de datos que ayudaron a descartar las visiones iniciales con que el PCE había mirado las alternativas

derivadas del golpe de Estado. En particular, la imagen respecto a una lucha heroica del pueblo chileno, que resistía los embates de la junta militar fascista, comenzaría quedar atrás, pues quedaba bastante claro que la política represiva de los uniformados impactó profundamente dentro de la población. Aunque el informe de Mercedes Álvarez entregaba una cifra bastante elevada de muertos que no era del todo correcta –80 mil–, ella debe entenderse dentro de un marco más amplio en el cual las informaciones que circulaban estaban mediatizadas por el impacto que había causado el derrocamiento del proyecto socialista chileno y la sistemática violación de los derechos humanos que acometían los militares. Bajo ese contexto, las cifras, aunque imprecisas, estaban dando cuenta de un indesmentible proceso de violencia represiva ejecutado por la Junta Militar, situación que fue denunciada en reiteradas ocasiones por numerosos organismos y actores internacionales incluyendo, por supuesto, al propio PCE.

Ahora bien, desde qué ángulos visualizó estos hechos y alternativas la prensa portuguesa. Como se pudo advertir en el caso de otras coyunturas, existieron ciertos matices a pesar de la opinión mayoritariamente crítica que existía en contra de la UP. El periódico lisboeta *Diário de Notícias* habló en su edición del 12 de septiembre de una “revolta militar” que había puesto término “ao regime de Salvador Allende”, entregando informaciones más bien generales sobre lo acontecido en el país sudamericano. Con todo, dentro de las informaciones que circulaban a través de sus páginas se enfatizó que la intervención de los militares ya era aguardada desde hace unos días, indicando además que la acción de los uniformados permitiría “a instauração no Chile de um Governo autoritário”. Tal situación, recalcaba este medio, seguía los moldes adoptados en la mayoría de los países sudamericanos.⁵³⁷ En este sentido, lejos de mirar el golpe de Estado como un quiebre en la trayectoria institucional y política de esta nación, *Diário de Notícias* instalaba este suceso dentro de una corriente de carácter regional caracterizada por la irrupción de los militares en la política contingente.

En su edición del día siguiente, este medio refería que algunos enfrentamientos verificados en la capital entre fuerzas militares y grupos de izquierda no pasaban de ser “combates esporádicos”.⁵³⁸ Ello marcaba una diferencia respecto a las informaciones que había transmitido el embajador de Castro e

Abreu en orden a que la izquierda disponía de abundante material de guerra o que se estaban diseñando planes a escala mundial para introducir sicarios en Chile, y desatar una ola de violencia y extremismo en contra de distintos objetivos. Con todo, los énfasis críticos respecto a lo que había significado la experiencia de la UP no dejaron de expresarse a través de este medio. En una columna titulada “Tragedia no Chile”, un autor anónimo comentaba, entre otros aspectos, que el desenlace de lo ocurrido era esperado, pues la situación política y económica habían llegado “o ponto máximo de degradação”. A juicio del columnista resultaba indispensable documentar y registrar hasta qué punto el “marxismo democrático” de Allende habían arrastrado a Chile “para o miseria e para a desorden”. No obstante esta mirada, el autor diferenciaba lo que había sido el proyecto socialista en sí de la figura del primer mandatario a quien calificaba como un revolucionario “de certo modo romântico, pacifista e não violento.”⁵³⁹

Desde las páginas de *O Século*, la información se concentró, en su edición del 12 de septiembre, fundamentalmente en la figura del presidente Allende. La noticia de portada sobre el golpe de Estado llevaba como titular principal el suicidio del primer mandatario en paralelo a los datos sobre la acción de los militares. En relación a estos, *O Século* destacaba que en los últimos meses habían comenzado a surgir movimientos disidentes en el seno de las FFAA, todo lo cual se vería incrementado cuando el general Carlos Prats renunció a la comandancia en jefe del Ejército. Aunque se especulaba respecto a la suerte que habría corrido el presidente –indicando que, según algunas fuentes, estaría vivo y en condiciones de solicitar asilo– este periódico destacaba que las versiones más insistentes señalaban que Allende se había suicidado. De hecho, algunas páginas más adelante, *O Século* refirió una nota en que se reproducía el testimonio del fotógrafo del diario *El Mercurio*, Juan Henrique Lira, quien habría confirmado la muerte del primer mandatario.⁵⁴⁰

En una edición posterior, este medio informó sobre algunos combates que se estaban desarrollando en la capital. A diferencia de lo que indicaba *Diário de Noticias*, desde *O Século* se hablaba, apoyándose en informaciones diplomáticas, de violentos combates entre las Fuerzas Armadas y grupos de extrema izquierda, los cuales habían dejado un saldo de casi mil personas muertas. Adicionalmente, se mencionaba la existencia de cientos de dete-

nidos, la mayoría de los cuales correspondían a partidarios y exdirigentes de la UP. Por otro lado, se destacaban, en esta misma edición, algunas de las medidas de control impuestas por las autoridades militares, quienes a través de un comunicado alertaron que después del horario de toque de queda unidades paramilitares asaltarían los bastiones izquierdistas y dispararían a cualquier persona que fuese vista con armas en la mano.⁵⁴¹

El día 14 de septiembre, *O Século* volvió a señalar algunas informaciones referidas a los enfrentamientos que se habían registrado en la capital chilena. Al respecto apuntaba un llamado que habían hecho las autoridades militares en orden a pedir dadores de sangre debido a que los heridos seguían aumentando producto de la lucha que se verificaba en las calles. En esta edición también se señalaría que desde el momento del golpe de Estado habían sido detenidas más de mil personas, seiscientas de las cuales fueron capturadas en la Universidad Técnica del Estado que se encontraba “na posse da partidarios de dr. Allende.” Por último, *O Século* también anotaba el desmentido que hicieron las autoridades castrenses en relación a que el general Carlos Prats estuviese al mando de un contingente de fuerzas militares que marchaba desde el sur hacia la capital a fin de confrontar a la junta de gobierno.⁵⁴²

Al analizar dichos énfasis, se puede advertir que este periódico fue más receptivo a las informaciones que emanaban desde la capital sudamericana sobre los hechos de violencia que se habían producido, y en particular respecto a aquella ejercida por las autoridades militares. En esta línea *O Século* destacó desde muy temprano dos hechos que causaron profundo impacto y que remitían al tema de la violencia; por una parte, la muerte de Allende y por otro el accionar uniformado. En el caso del primer mandatario, este medio destacaría la incertidumbre que significó para algunos actores no conocer con exactitud el destino de la autoridad tras la operación militar, apostando en todo caso por el suicidio como causa más probable de su muerte. Sobre el accionar de los militares, *O Século* contaría en detalle algunas de las operaciones materializada por éstos, las cuales implicaron indudablemente cuantiosos daños materiales y humanos. Este medio incluso aportaba cifras concretas de la cantidad de heridos y detenidos, lo que en buena medida hacía recaer la responsabilidad por las víctimas en manos

de los uniformados. Dentro de esta línea se insertaban, por cierto, las referencias a la importante cantidad de detenidos que comenzaban a aparecer en el país y que no podían sino atribuirse a la acción de la Junta Militar que controlaba el Estado.

El periódico portuense *Jornal de Noticias* adoptó un enfoque similar al de *O Século*, destacando el trágico final que tuvo la experiencia socialista chilena, y en particular el presidente Allende quien, según este medio, se suicidó “com um tiro na boca”. Sobre el extinto mandatario se exponía una crónica que daba cuenta de su trayectoria política, la cual fue sugestivamente titulada como “Honesto e íntegro desde a juventude”. Por otra parte, se informaba que a pesar de las disposiciones establecidas por la Junta Militar que había asumido el poder muchas personas ofrecían resistencia armada al Ejército, lo que podría derivar, según aventuraban algunos corresponsales extranjeros, en una guerra civil. A fin de contextualizar mejor las noticias que llegaban desde Chile, este medio incluyó pequeños recuadros donde se indicaba información geográfica, cultural o política del país sudamericano.⁵⁴³

Aunque se había mencionado la posibilidad de un enfrentamiento fratricida en Chile, a propósito de la reacción armada de ciertos individuos en contra de la dictadura, la edición del 13 de septiembre de *Jornal de Noticias* desechaba esa posibilidad. En efecto, el titular de dicha edición se había eco de algunas informaciones que ya hablaban de más de mil muertos producto del golpe de Estado, al tiempo que en su interior se comentaban en detalle las medidas y operaciones que estaban desplegando las autoridades castrenses a lo largo del territorio. Dentro de estas últimas destacaba el plazo de 48 horas que dictaminaron los militares para que aquellas personas que tuvieran armas las entregaran a la autoridad correspondiente, así como la prohibición de que las estaciones de radio difundieran noticias al extranjero.⁵⁴⁴ A casi dos días de materializado el golpe de Estado quedaba meridianamente claro que las nuevas autoridades ejercían un control férreo en casi todo el territorio nacional.

En medio de estas informaciones, el vespertino *Diário de Lisboa*, en su edición del 11 de septiembre, adelantó que la Armada de Chile había aislado el puerto de Valparaíso, al tiempo que una junta integrada por los comandantes en jefe de las FFAA solicitaba la dimisión del presidente Allende.⁵⁴⁵

Se trataba de una información preliminar que no revelaba todavía mayores detalles de lo que estaba sucediendo en dicho país. Ya en su edición del día siguiente este medio aportaría más datos al respecto, destacando en su portada la existencia de contradicciones en torno a la muerte del primer mandatario e indicando que la acción de los uniformados ponía fin “a experiência chilena de evolução pacífica para o socialismo.” Al mismo tiempo, se indicaba que los militares habían ordenado que se entregaran cerca de 40 dirigentes y personalidades ligadas a la UP, situación que de no producirse tendría duras consecuencias. Desde este ángulo, se comenzaba a visualizar claramente por parte de este medio que la violencia estaría enmarcada en torno a los actos represivos que comenzaron a adoptar las autoridades castrenses. En las páginas interiores de esta misma edición se detallaron, en tanto, las maniobras militares de la jornada anterior, haciendo hincapié en las distintas comunicaciones que sostuvo el presidente Allende con su pueblo a través de mensajes radiofónicos. Por último, en un pequeño recuadro se explicaba que la UP constituía la tercera experiencia de izquierda que llegaba a su fin en Chile, siendo las anteriores la efímera República Socialista de 1932 y los gobiernos frentepopulares iniciados en 1938.⁵⁴⁶

En su edición del 13 de septiembre, el vespertino lisboeta daría cuenta del efectivo control y liderazgo que ejercía la Junta Militar, la cual entre otras cosas había ya nombrado a los ministros que reemplazarían a los secretarios de Estado del derrocado gobierno. Al mismo tiempo, *Diário de Lisboa* destacaba que las patrullas militares continuaban recorriendo las calles de Santiago “com ordem para atirar a matar” contra quien opusiera resistencia. Este tipo de énfasis se vería reforzado en páginas interiores al destacar que los militares chilenos amenazaban con “fuzilamentos imediatos” en contra de aquellos sujetos que prestaban algún tipo de resistencia armada a las autoridades.⁵⁴⁷ En ediciones posteriores, se entregarían algunas cifras –a veces bastante elevadas– respecto a los muertos que habría dejado el golpe de Estado en Chile basándose exclusivamente en información proveniente desde otras cadenas informativas.⁵⁴⁸

Desde *Diário Popular*, en tanto, se repitió la mayoría de las informaciones que ya estaban circulando en otros medios de comunicación, relevando las exigencias de la Junta Militar para que Allende entregara el poder. Su edición del día 11 de septiembre expuso tanto los principales hechos ocurridos

en las primeras horas de ese día como las proclamas y mensajes de distintos actores.⁵⁴⁹ Al día siguiente, se detallaban algunos episodios de la jornada anterior, confirmando la muerte de Allende, aunque recalcando que todavía no se confirmaba el suicidio del primer mandatario. Al mismo tiempo, se daban a conocer los comunicados de la autoridad militar en orden a que cualquier tipo de resistencia sería “esmagada pelas Forças armadas.”⁵⁵⁰ En ediciones posteriores, *Diário Popular* reprodujo prácticamente las mismas notas e informaciones presentes en otros medios, como fueron la conformación del nuevo Gobierno o el desmentido que hiciese el general Carlos Prats respecto a estar comandando una unidad militar en el sur del país.⁵⁵¹

En el periódico *Época* se expuso un análisis bastante particular sobre el golpe de Estado, al tiempo que las informaciones referidas fueron complementadas con diversas columnas de opinión. La particularidad del énfasis de este medio radicó en que según sus antecedentes ante el ataque al palacio presidencial el primer mandatario “optou pela rendição”. En la nota se recalca incluso que había sido el propio presidente Allende quien cerca de las 18:00 hrs. había presentado su propuesta de renuncia a la Junta Militar, rendición que fue comunicada a la población como un “facto consumado”. Tal información no se ajustaba a la realidad ni a los testimonios de numerosos colaboradores del mandatario chileno, los cuales coincidieron en todo momento en que Allende había declarado expresamente que no renunciaría a su cargo.

En esta misma edición se incluyó una columna firmada por A.M. titulada *Chile. Da Subversão constitucional à clandestinidade revolucionária?* En dicho texto, el autor expresaba, en primer término, que las FFAA se habían visto obligadas a intervenir para detener la empresa revolucionaria dirigida por Allende. En segundo lugar, se enfatizaba en que la acción militar daba cuenta, gracias a los primeros datos que llegaban desde Chile, de una operación de conjunto que permitía descartar de momento la división de los uniformados. Por último, la columna advertía sobre los peligros que todavía acechaban al país, pues no se podía olvidar que la UP poseía “consideráveis grupos de choque e elementos preparados para actividades terroristas”, además de los altos niveles de excitación de las masas “intoxicadas pela propaganda esquerdista.”⁵⁵² Desde este ángulo, era evidente que el problema de la violencia política radicaba para este medio no en las acciones de los

militares sino en esa amenaza velada que todavía constituía la UP y las bases militantes que habían adherido a su proyecto político.

En su edición del día 13 de septiembre, *Época* recalcó que las tropas militares estaban haciendo frente a diversos focos de resistencia, situación que, en palabras de las autoridades chilenas recogidas por este medio, podía prolongarse por algunos días. En su página editorial, este medio expuso un texto titulado *Significativas Consternações* en el cual se criticaba con dureza el proyecto socialista de la UP y en particular la figura de Allende, a quien se calificaba como un líder que despreciaba los puntos de vista ajenos debido a que “su totalitarismo” no le permitía ni la más ligera abertura intelectual. Además de este editorial, se incluyó una columna firmada por M.M.M., titulada *O fim de Allende* y que seguía más o menos los mismos lineamientos críticos que el editorial principal, aunque haciendo hincapié en dos puntos esenciales. El primero de ellos destacó que las experiencias marxistas como la ocurrida en Chile, al basarse en una ideología de clases, necesitaba necesariamente del concurso de las armas para alcanzar sus objetivos. En vista de ello, hubiese sido sorprendente, indicaba el columnista, que la UP triunfara sin contar con el apoyo de un aparato armado. El segundo elemento trazaba algunas interrogantes sobre el futuro de la Junta Militar que había tomado el poder en Chile, indicando que no se sabía con certeza si los uniformados devolverían el poder al PDC o si aquella se institucionalizaría a la “brasileira.”⁵⁵³

En ediciones posteriores, los mismos columnistas antes citados volvieron a reseñar sus puntos de vistas en relación a la situación chilena. El 14 de septiembre, A.M., advertía en contra de la campaña internacional que ya estaba en marcha para reivindicar la figura del presidente Allende y que olvidaba, según su óptica, que la intervención militar se había producido como consecuencia “das catástrofes políticas e económicas” ocurridas bajo la UP. Bajo este ángulo, sentenciaba el columnista, solo una “incomensurável incongruência” podía caracterizar la intervención uniformada como un golpe contra las libertades e instituciones democráticas. Por su parte, en esta misma edición, M.M.M. sostenía que Chile comenzaba a delinear su futuro buscando quizás el ejemplo de algunos de los países vecinos tras haber vivido un largo periodo de “abstraccionismo” ideológico y de “mistificação democrática intri-

guista e inoperante”. Respecto a la figura de Allende, este columnista calificó al primer mandatario como un mediocre y un “desgraçado demagogo” que carecía de las cualidades suficientes para concretar sus planes y aguantar las responsabilidades de la función presidencial.⁵⁵⁴

Días más tarde, Época seguía reservando un espacio importante para exponer nuevas columnas de opinión. El día 16, el periodista Francisco de Paula Dutra Faria, redactó un texto titulado *A Lição do Chile* en la cual, junto con destacar la responsabilidad de los demócratacristianos por haber permitido la llegada de la UP al gobierno, recalca que los hechos del país sudamericano enseñaban que el marxismo quería el poder bajo la forma de una dictadura de partido único.⁵⁵⁵ Pocos días después, el escritor Joaquim de Montezuma de Carvalho escribiría una larga columna en la cual se refería a la situación chilena. En su texto, hacía una comparación entre la figura de Allende y el presidente José Manuel Balmaceda quien gobernó Chile a finales del siglo XIX, y que terminó su periodo en medio de una guerra civil suicidándose en la legación de Argentina. Para de Carvalho existían lógicas similitudes entre uno y otro caso a pesar de las evidentes diferencias ideológicas. Con todo, el escritor luso recalca un punto especial dentro de su columna, a saber; que no podía achacarse la responsabilidad del golpe de Estado y de la consecuente caída del gobierno a factores externos y más específicamente al supuesto papel que habría tenido la CIA. A su juicio, la agencia norteamericana no creaba estados internos de desesperación colectiva como tampoco maniobraba al interior de los gabinetes. Allende no había caído, sentenciaba de Carvalho, por una maniobra venida desde afuera, y digitada por Washington.⁵⁵⁶ Desde esta perspectiva, el tema de la injerencia extranjera en los asuntos internos de Chile, que era un tema comentado en la prensa internacional de esos días, no tenía la importancia que le atribuían otros actores, pues la caída de la UP se explicaba por una cadena de errores cometidos por las propias autoridades gubernamentales.

El enfoque mostrado por este periódico y en particular por sus columnistas, consideraba que lo ocurrido en el país sudamericano era el resultado de factores radicados en su mayoría en las deficiencias y limitaciones del programa allendista. Desde luego había una crítica de entrada a los én-

fasis ideológicos del proyecto socialista que fue caracterizado, sin ningún matiz, como un plan marxista que buscaba instaurar una dictadura totalitaria. Tal explicación respondía sin duda a nociones y discursos propios de una lucha política global donde occidente libraba una batalla en contra del comunismo internacional, siendo el caso específico de la UP un escenario más de este tipo de confrontaciones. A partir de este enfoque, las críticas no se harían esperar en contra de los dirigentes oficialistas chilenos, lo que se observó particularmente en el caso del propio Allende a quien se cuestionó sus capacidades políticas y morales para conducir el proceso político. La totalidad de estos análisis, que calzaban a la perfección con la mirada del embajador luso en Santiago de Chile, revelaba además que el problema de la violencia se encontraba situado en el terreno de las izquierdas y de los objetivos estratégicos que trasuntaba el proyecto de la UP. Por contrapartida, la acción de los militares no fue dimensionada como una operación violenta y represiva, pues se la entendió como una maniobra que ponía fin a un régimen opresor y destructivo y que abría una nueva etapa en la historia del país.

Desde un ángulo interpretativo distinto, el semanario *Expresso* divulgó numerosas columnas, reportajes y notas breves para abordar los acontecimientos ocurridos en Chile. Ya el 8 de septiembre, refería, a través de una breve nota, a la multitudinaria manifestación que se había congregado en las calles de Santiago para celebrar el tercer aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. Dicha coyuntura, señalaba este medio, daba cuenta del carácter festivo de la fecha, pero también de la “dura prova” que significaba para el pueblo chileno y para Allende mantener dentro de las vías legales el proyecto socialista “contra as classes burguesas simbolizadas por Eduardo Frei.”⁵⁵⁷ Desde este ángulo, *Expresso* no dudaba en atribuir al expresidente chileno un rol de importancia dentro de la estrategia opositora que buscaba, ya sin ambages, derrocar al gobierno. En este sentido, el semanario identificaba a Frei como una destacada figura dentro del tablero político que además representaba no a un partido en específico sino a la burguesía en su conjunto.

En su edición del 15 de septiembre, *Expresso* expondría numerosas referencias sobre el reciente golpe de Estado. Uno de los primeros énfasis en destacar fue aquel señalado por A. Martins Lopes en el sentido de que con la muerte de Allende y la imposición de las primeras medidas coercitivas

dispuestas por la Junta Militar comenzaba a reinar “uma nova ordem” en Chile. La información anterior fue complementada con la transcripción del primer bando efectuado por los militares en la mañana del 11 de septiembre y una cronología que detallaba lo vivido en torno al palacio presidencial de La Moneda. En la misma página donde se exponían estas informaciones, la periodista Cynthia Almeida Prado redactó dos notas sobre estos hechos. En la primera de ellas, trazaba un perfil político y humano del presidente Allende, enfatizando sus ideales y anhelos de justicia social como elementos constitutivos de una personalidad compleja y carismática. En la segunda nota, la autora daba cuenta de cómo las principales realizaciones del gobierno de la UP afectaron numerosos intereses, tanto nacionales como extranjeros, los cuales comenzaron a articularse en torno a una oposición que se desplegaba tanto en el Parlamento como en la calle. En ese marco, destaca Almeida Prado, las FFAA fueron abandonando progresivamente su neutralidad hasta caer en una espiral de politización que las llevó a actuar en contra del gobierno.⁵⁵⁸

Se lograba advertir con bastante claridad que *Expresso* había fijado una postura crítica hacia el golpe de Estado, relevando las características institucionales y democráticas del proyecto de la UP y en particular de su líder, Salvador Allende. La breve referencia que había hecho un periodista de este semanario en relación a que la acción de los militares marcaba el inicio de un nuevo orden en el país resultaba bastante relevante pues dicho énfasis no había sido casi advertido por el resto de la prensa portuguesa. De esta forma, *Expresso* circunscribía dentro de la misma coyuntura tanto el dramático fin de la experiencia socialista chilena como el inicio de una nueva etapa en el país a cargo de las FFAA.

En las ediciones correspondientes a la segunda quincena de septiembre, *Expresso* publicó dos trabajos de su enviado especial a Latinoamérica Augusto de Carvalho. En el número 38, correspondiente al 22 de septiembre, este periodista advirtió los contrastes con que fue recibido el golpe de Estado en Brasil y Argentina, dos países en los cuales había estado recientemente. En el primero de ellos no se observó ninguna manifestación de protesta ni condenas públicas hacia la junta militar de gobierno, señalando además que los grandes medios de la prensa escrita miraban con satisfacción lo ocurrido

en Chile. Distinto fue lo sucedido en el país trasandino, donde las referencias, en su mayoría críticas hacia los militares chilenos, eran constantes, tanto a nivel social como en los medios de prensa. De Carvalho comentaba que incluso se había realizado un funeral cívico de Salvador Allende al que acudieron miles de personas y que fue matizado por gritos y discursos que incitaban a la resistencia armada en contra de la Junta.⁵⁵⁹

En su edición del 29 de septiembre, *Expresso* publicó un segundo trabajo realizado por Augusto de Carvalho. Se trataba de un reportaje más amplio sobre la situación chilena el cual enfatizaba en los cambios radicales que estaban implementando los militares bajo una perspectiva general que buscaba despolitizar al país. Esto último se observaba, según el periodista, en numerosas situaciones, como la proscripción de los partidos políticos, la limpieza que se hacía en las calles de la propaganda política e incluso en la quema de libros. Un punto que de Carvalho inquirió en reiteradas ocasiones se refería a la cantidad de muertos que había dejado el golpe de Estado, y cuyas cifras variaban de acuerdo a los testimonios que pudo recabar. Evidentemente, los interlocutores del periodista portugués fueron en su totalidad personas que mostraban una mirada favorable hacia las autoridades castrenses, no pudiendo recabar algunas opiniones en actores contrarios al régimen o partidarios del derrocado gobierno. El reportaje dejaba traslucir que las FFAA controlaban con mano férrea el territorio nacional, así como la totalidad de las informaciones que se divulgaban en el país.⁵⁶⁰

Dentro de las fotografías que acompañaban el trabajo, la mayor parte de ellas exponía las acciones represivas cometidas por los militares, ya fuera respecto a centros de detención, la destrucción de locales partidarios después de los bombardeos y ataques armados o incluso de cuerpos que aparecían acribillados en la vía pública. Desde este punto de vista, el reportaje de Augusto de Carvalho, y la mirada general de *Expresso* sobre estos hechos, instalaba el tema de la violencia dentro del campo de las acciones militares realizadas a partir del día 11 de septiembre. Esto significaba que no era posible comparar los hechos ocurridos durante los años de la UP con un tipo de violencia que se desplegaba a una escala masiva a lo largo de todo el territorio y que en pocos días podía dejar miles de muertos y detenidos. Aunque no lo expresara con estas palabras, el reportaje y los énfasis que se observan

en este semanario daban a entender que lo sucedido en el país andino era una verdadera tragedia.

Otros actores del panorama social y político portugués también recalcaron su preocupación por lo sucedido en Chile. Desde el PCP se señalaba, a través de su periódico *Avante!*, que el “sangrento” golpe militar constituía un nuevo ejemplo de la determinación de la burguesía y el imperialismo para continuar la explotación e impedir la liberación de los trabajadores. Al mismo tiempo, se expresaban palabras de solidaridad para con el secretario general del PC de Chile, Luis Corvalán L pez, quien hab a sido recientemente detenido por los militares. Seg n *Avante!*, el dirigente chileno corr a serio riesgo de ser fusilado, por lo que llamaba a ser parte de una gran campa a internacional, “das mais diferentes for as pol ticas”, para defender la vida del l der comunista.⁵⁶¹ En el mes de diciembre, este medio volver a a insistir en la acciones de solidaridad que deb an llevarse a cabo a favor del pueblo chileno dadas las dram ticas circunstancias que se viv an en dicho pa s. El peri dico hac a un llamado, en este sentido, a que los trabajadores, estudiantes, mujeres e intelectuales mantuvieran en alto sus asambleas y reuniones y encontraran, al mismo tiempo, nuevas formas de solidarizar con el pueblo chileno.⁵⁶²

Por su parte, la publicaci n *Unidade Popular*,  rgano central del PCP (Marxista-Leninista), esboz  una cr tica abierta al tipo de estrategia empleada por la izquierda chilena para alcanzar el socialismo. Seg n esta colectividad, la malograda experiencia del pa s andino no sorprend a a los “marxistas-leninistas” pues ella no constitu a un caso in dito en la historia ya que exist an numerosos ejemplos de “revolu es pac ficas” –como Brasil o Bolivia– fracasadas. En dichos casos, indicaba este medio, las esperanzas e ilusiones de las clases trabajadoras hab an sido derrumbadas por violentos golpes de estado militares que reinstauraron el orden fascista desencadenando, adem s, una severa represi n que terminaría por desarticular y liquidar a las fuerzas populares. En virtud de ello, sentenciaba *Unidade Popular*, la “revolu o” chilena no triunf  ni pod a triunfar porque simplemente el pueblo “nunca chegou sequer a conquistar o poder”. Con todo, este medio aventuraba que la derrota pod a ser pasajera y que a trav s de ella los trabajadores chilenos pod an aprender, “  custa do seu pr prio sangue”, que no

sería con votos y elecciones como derrotarían al imperialismo y la reacción, sino solo por la fuerza de las armas.⁵⁶³

Algunas organizaciones más pequeñas confeccionaron numerosas cuartillas y volantes para denunciar lo sucedido en Chile y levantar distintas iniciativas de solidaridad con los trabajadores y perseguidos por la dictadura militar. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre, este tipo de material circulaba de forma muy restringida dentro de Portugal, observándose un cambio a partir de abril de 1974 luego de producida la caída del régimen salazarista. Una fecha significativa a este respecto fue cuando se cumplió el primer aniversario del derrocamiento de la UP, fecha en la cual salieron a la luz numerosas informaciones e iniciativas. El Movimento de Esquerda Socialista, por ejemplo, lanzó un documento de tres carillas en el que criticaba duramente a la dictadura de Pinochet –que visualizaba como un producto del imperialismo norteamericano– y convocaba a que diversos actores del panorama político nacional solidarizaran con la causa chilena ya fuese asistiendo a las marchas y encuentros que se organizarían como también apoyando a los comités de resistencia. De paso, se exigía que no se enviaran “um centavo, uma arma, um embaixador para a Junta Militar Chilena.”⁵⁶⁴

Por su parte el Partido Revolucionario de Portugal–BR, convocaba a través de un pequeño panfleto a un debate público sobre “Chile –Portugal” que se realizaría el día 16 de septiembre de 1974 en la sede del Club Atlético Alvalade. El temario del encuentro anotaba como puntos centrales de la discusión “o caso chileno, actual situação política portuguesa e as lições que desse confronto se podem extrair.”⁵⁶⁵ Como se puede ver, desde temprano la experiencia chilena fue tomada como un punto de referencia por distintos actores políticos quienes buscaban dialogar y comprender las lecciones que un caso de este tipo podía entregar para la realidad de diversos países. Y ello sería transversal tanto para las colectividades o agrupaciones que insistían en el camino institucional para llegar al socialismo, a partir de una alianza multipartidista, como para aquellos movimientos que veían en los años de la UP la constatación más palpable del fracaso de la vía electoral.

Algunas acciones de solidaridad también se observaron en los sindicatos de ciertas empresas y reparticiones públicas. La Comisión Ejecutiva de

los trabajadores de la Caixa Geral de Depósitos llamó a sus miembros para que el día 11 de septiembre de 1974 realizaran una paralización de todos los servicios por espacio de cinco minutos “como manifestação concreta de solidariedade com o povo de Chile.” En el documento se insistía en que la solidaridad de los trabajadores no tenía fronteras ni patrias, pues las manio-bras del capital tampoco las tenían. En este sentido, el comunicado señalaba que habían sido los americanos de la ITT y los agentes de la CIA quienes más hicieron en favor del sabotaje económico hacia la UP.⁵⁶⁶

Mirado en su conjunto, las reacciones portuguesas al golpe de Estado en Chile transitaron por diversas perspectivas. Un sector de la prensa escrita respaldó sin ambages la intervención de los militares señalando como justificación los problemas económicos y políticos que afectaban a la nación sudamericana, los cuales, desde esta perspectiva, eran responsabilidad exclusiva del manejo efectuado por Allende y la izquierda en general. Fue evidente, además, que, bajo esta óptica, el tema de la violencia quedaba instalado como un problema derivado de las operaciones y focos de resistencia armada que seguían practicando los grupos extremistas después del 11 de septiembre. En este sentido, la mayoría de estos medios no visualizó ni tampoco esbozó alguna referencia respecto al propio accionar castrense que había significado la caída de un gobierno, la destrucción de numerosos edificios y la puesta en práctica de una ola represiva en contra de la población civil partidaria de la UP.

Fue un sector muy acotado de la prensa lusa –además de los movimientos y agrupaciones vistas arriba– la que referiría estas problemáticas, exponiendo una mirada crítica al Golpe de Estado y también a la violencia que se había desatado en las horas y días siguientes. Sería a partir de este ángulo desde donde se explicitó la idea de que el golpe militar trasuntaba objetivos más estructurales, observándose que en dicha acción –y en el tenor de las declaraciones de algunas de las nuevas autoridades chilenas– estaba en marcha un proceso de refundación del Estado que instauraría un nuevo orden en el país.

Notas

- 343** Santiago Carrillo, *Memoorias... op. cit.*, pp. 615-616.
- 344** Enrique Tierno Galván, *Cabos sueltos*, Barcelona, Bruguera, 1981, pp. 463-469.
- 345** Informe del Ministerio del Interior sobre incidentes en el período preelectoral, citado en Manuel Salazar, *Chile... op. cit.*, p. 288.
- 346** ABC, Madrid, 9 de enero de 1973, p. 23.
- 347** ABC, Madrid, 12 de enero de 1973, p. 21.
- 348** Telegrama n° 518, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 11 de enero de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / 1ª.
- 349** *El Alcázar*, Madrid, 23 de enero de 1973, p. 11.
- 350** Telegrama n° 26, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 6 de febrero de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n° 4-5. Este mismo énfasis sobre el uso de la violencia revolucionaria como respuesta a las actitudes y amenazas de los sectores reaccionarios fue advertida por algunos medios escritos españoles como ABC que titularía a este respecto "Allende amenaza con abandonar la vía democrática". Véase, ABC, Madrid, 7 de febrero de 1973, p. 24. Semanas más tarde, este mismo medio dio cuenta de los numerosos hechos de violencia que se habían sucedido en Chile en el marco de la campaña parlamentaria, pero centrándose en un caso en particular dada sus implicancias. Aquel correspondió a la agresión sufrida por el candidato demócratacristiano Arturo Frei Bolívar en la ciudad de Concepción. El periódico monarquista se preguntaba si este tipo de incidentes constituía un hecho aislado, o bien, formaba parte de una "amenaza indirecta" en contra del expresidente Eduardo Frei Montalva, tío del candidato, y a su vez postulante al Senado y "muy probablemente candidato a la primera magistratura en la elección de 1976." ABC, Madrid, 20 de febrero de 1973, p. 27.
- 351** Telegrama n° 27, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 6 de febrero de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 352** Informe PEA n° 111, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 9 de febrero de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / 1ª.
- 353** Informe PEA n° 143, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 22 de febrero de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / 1ª.
- 354** *Diário de Noticias*, Lisboa, 19 de febrero de 1973, p. 16.
- 355** Telegrama n° 39, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 5 de marzo de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 356** Telegrama n° 41, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 7 de marzo de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 357** Telegrama n° 53, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 13 de abril de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 358** ABC, Madrid, 6 de marzo de 1973, p. 22.
- 359** ABC, Madrid, 16 de marzo de 1973, p. 32.
- 360** *El Alcázar*, Madrid, 5 de marzo de 1973, p. 10.
- 361** *Arriba*, Madrid, 6 de marzo de 1973, p. 18.
- 362** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 115, abril de 1973, pp. 186 y 210.
- 363** *Sábado Gráfico*, n° 823, 10 de marzo de 1973, pp. 14-15.
- 364** *Triunfo*, n° 545, 10 de marzo de 1973, p. 7.
- 365** *Fuerza Nueva*, n° 323, 17 de marzo de 1973, pp. 28-29.
- 366** *Mundo Obrero*, Madrid, 15 de marzo de 1973, p. 7.
- 367** *Avante!*, n° 452, abril de 1973, p. 5.
- 368** *Seara Nova*, n° 1530, abril de 1973, p. 41.
- 369** *Diário de Lisboa*, 5 de marzo de 1973, 13.
- 370** A finales del mes de marzo, el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, manifestó que si bien creía necesario reformar el sistema educacional no compartía en su totalidad los alcances del proyecto ENU por lo que pedía su postergación. Véase, *La Tercera*, Santiago, 29 de marzo de 1973, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días... op. cit.*, pp. 613-614.
- 371** Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986.
- 372** Telegrama n° 70, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 26 de abril de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.

- 373** *Diário de Notícias*, Lisboa, 28 de abril de 1973, p. 16.
- 374** *Época*, Lisboa, 28 de abril de 1973, p. 8.
- 375** Telegrama n° 5507, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 27 de abril de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / II^a.
- 376** *ABC*, Madrid, 27 de abril de 1973, p. 43 y 28 de abril de 1973, p. 5.
- 377** *ABC*, Madrid, 29 de abril de 1973, p. 15.
- 378** *ABC*, Madrid, 6 de mayo de 1973, p. 23.
- 379** *ABC*, Madrid, 8 de mayo de 1973, p. 28.
- 380** *La Vanguardia*, Barcelona, 28 de abril de 1973, p. 23.
- 381** *La Vanguardia*, Barcelona, 29 de abril de 1973, p. 23.
- 382** *La Vanguardia*, Barcelona, 6 de mayo de 1972, p. 16.
- 383** *Fuerza Nueva*, n° 332, 19 de mayo de 1973, p. 35.
- 384** *Arriba*, Madrid, 28 de abril de 1973, pp. 18 y 40.
- 385** *Arriba*, Madrid, 5 de mayo de 1973, p. 40.
- 386** *Arriba*, Madrid, 6 de mayo de 1973, p. 44.
- 387** Telegrama n° 71, "reservado", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 27 de abril de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 388** Telegrama n° 74, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 2 de mayo de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 389** *Diário de Notícias*, Lisboa, 29 de abril de 1973, p. 8.
- 390** *Diário Popular*, Lisboa, 28 de abril de 1973, p. 32.
- 391** *Diário Popular*, Lisboa, 5 de mayo de 1973, p. 19.
- 392** *Época*, Lisboa, 7 de mayo de 1973, p. 8.
- 393** *O Século*, Lisboa, 29 de abril de 1973, p. 6.
- 394** *O Século*, Lisboa, 6 de mayo de 1973, p. 7.
- 395** *Expresso*, n° 17, 28 de abril de 1973, p. 5.
- 396** Telegrama n° 5558, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 27 de abril de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / II^a.
- 397** Informe n° 289, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 2 de mayo de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / II^a.
- 398** Informe n° 306, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 10 de mayo de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / II^a.
- 399** Telegrama n° 93, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 24 de mayo de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 400** Telegrama n° 95, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 25 de mayo de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 401** Telegrama n° 7664, del embajador en Chile al ministro de Negócios Estrangeiros, Santiago, 8 de junio de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35194, carpeta n° 326.20 / IV^a.
- 402** Manuel Salazar, *Chile... op. cit.*, p. 324.
- 403** Telegrama n° 114, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 16 de junio de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 404** Telegrama n° 115, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 16 de junio de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 405** Telegrama n° 117, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 18 de junio de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 406** En Rancagua se habían producido al menos dos situaciones relevantes a este respecto. El día 25 de mayo se registraron violentos incidentes en el centro de esta urbe que acabaron con un trabajador muerto, en circunstancias poco claras, a manos de una patrulla militar. Por otra parte, el entonces ejecutivo de CODELCO, Jorge Arrate, indicaría que algunos oficiales del Ejército –entre ellos el coronel Cristián Ackernelch que estaba cargo de la respectiva zona de emergencia– apoyaban implícitamente la huelga de los mineros, desobedeciendo con ello su obligación de resguardar el orden público y subordinarse a las disposiciones de la autoridad civil. Véase, Jorge Arrate, *Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular (Memorias)*, Santiago, Lom, 2017., p. 390.
- 407** Telegrama n° 115, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 16 de junio de 1973. AGA, Leg. R- 18185, expediente n°. 4-5.
- 408** *El Mercurio*, Santiago, 30 de junio de 1973, reproducido en Arturo Fontaine y Miguel González (eds.), *Los mil días... op. cit.*, p. 715.

- 409 El general Prats viajaba a su oficina en horas de la tarde por una avenida de la capital cuando un grupo de automovilistas comenzó a insultarlo groseramente. El oficial recordó lo sucedido con el general Schneider en 1970 por lo que sacó su arma de servicio y exigió a uno de los vehículos que se detuviera. Su sorpresa fue mayúscula al percatarse que se trataba de una mujer, por lo que le pidió las excusas de rigor. Sin embargo, el resto de los automovilistas lo increpó acusándolo de haber intentado matar a una mujer dañando, de paso, su propio vehículo. Gracias a la acción de un taxista, el general logró escapar. Para el relato en primera persona de este hecho véase, Carlos Prats, *Memorias... op. cit.*, p. 416.
- 410 Telegrama n° 133, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 28 de junio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.
- 411 Telegrama n° 135, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 29 de junio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.
- 412 Telegrama n° 139, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 30 de junio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.
- 413 Telegrama n° 147, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 2 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.
- 414 *ABC*, Madrid, 30 de junio de 1973, pp. 25-28.
- 415 *El Alcázar*, Madrid, 30 de junio de 1973, p. 10.
- 416 *Arriba*, Madrid, 30 de junio de 1973, pp. 1 y 36.
- 417 *Arriba*, Madrid, 1 de julio de 1973, p. 13.
- 418 *Cambio 16*, n° 87, julio de 1973, pp. 29-31.
- 419 *Sábado Gráfico*, n° 843, 28 de julio de 1973, pp. 14-15.
- 420 *Fuerza Nueva*, n° 340, 14 de julio de 1973, pp. 13-15.
- 421 *Mundo Obrero*, Madrid, 1 de julio de 1973, p. 1.
- 422 Telegrama n° 8418, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 30 de junio de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35193, carpeta n° 326.20 / II^a.
- 423 Informe n° 394, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 9 de julio de 1973. ADMNE, caja S3. E38. P6 / 35194, carpeta n° 326.20 / IV^a.
- 424 *Diário de Noticias*, Lisboa, 30 de junio de 1973, p. 16.
- 425 *Diário de Noticias*, Lisboa, 3 de julio de 1973, p. 16.
- 426 *O Século*, Lisboa, 30 de junio de 1973, p. 1.
- 427 *Época*, Lisboa, 30 de junio de 1973, p. 8.
- 428 *Época*, Lisboa, 3 de julio de 1973, p. 8.
- 429 *Jornal de Noticias*, Porto, 29 de junio de 1973, p. 9.
- 430 *Diário Popular*, Lisboa, 29 de junio de 1973, pp. 1 y 17.
- 431 *Diário Popular*, Lisboa, 30 de junio de 1973, p. 28.
- 432 *Diário de Lisboa*, 29 de junio de 1973, p. 1.
- 433 *Diário de Lisboa*, 30 de junio de 1973, p. 1.
- 434 *Expresso*, n° 26, 30 de junio de 1973, p. 1.
- 435 El historiador Joaquín Ferrnandois indica que no obstante la derrota de los amotinados la "raíz" de dicho movimiento, que lo conectaba con la alta oficialidad partidaria del golpe de Estado, no fue tocada, pudiendo sobrevivir al interior de los cuarteles y prepararse para una nueva intentona. Joaquín Ferrnandois, *La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013, p. 665.
- 436 Telegrama n° 157, "reservado", del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 10 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5. El embajador Pérez Hernández no identifica en el documento a la personalidad demócratacristiana con la que se reunió en la noche del 10 de julio en el marco de una "cena diplomática". Las memorias del general Carlos Prats podrían dar un indicio de quién era dicho dirigente. El día martes 10 de julio el oficial anota en su diario: "21:30. El Embajador de Venezuela ofrece una comida en mi honor. Asisten los otros comandantes en jefe, el embajador de España, el ex ministro Krauss y el jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores." Véase, Carlos Prats, *Memorias... op. cit.*, p. 435. Considerando que tanto el embajador español como el general Prats están refiriendo posiblemente el mismo encuentro, el dirigente demócratacristiano sería Enrique Krauss Rusque, exministro de Economía del Gobierno de Eduardo Frei Montalva y por entonces diputado por la 21^a agrupación departamental.
- 437 Durante julio y agosto, miembros de Patria y Libertad y otros grupos de oposición, en connivencia con oficiales de las fuerzas armadas, especialmente de la marina, llevaron a cabo numerosos actos de sabotaje en contra de bienes públi-

cos, como gaseoductos y líneas férreas. Un detalle de la conformación y ejecución de estos planes en José Díaz Nieva, *Patria y Libertad... op. cit.*, pp. 279 y ss.

438 Telegrama n° 168, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 19 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

439 Telegrama n° 178, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 27 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

440 ABC, Madrid, 26 de julio de 1973, p. 22 y 27 de julio de 1973, p. 30.

441 *Sábado Grafico*, n° 846, 18 de agosto de 1973, p. 17.

442 *Fuerza Nueva*, n° 345, 18 de agosto de 1973, p. 12.

443 *O Século*, Lisboa, 26 de julio de 1973, p. 9.

444 *Diário Popular*, Lisboa, 26 de julio de 1973, p. 15.

445 El crimen y sus diversas alternativas están descritos en Max Marambio, *Las armas del ayer*, Barcelona, Random House Mondadori, 2008, p. 119 y José Díaz Nieva, *Patria y Libertad... op. cit.*, p. 290.

446 Telegrama n° 176, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 27 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

447 Telegrama n° 179, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 27 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

448 Telegrama n° 180, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 30 de julio de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

449 Años después, Roberto Thieme contaría en sus memorias que luego del crimen del edecán naval supo que los autores eran miembros de Patria y Libertad, aunque, aclara, habían sido expulsados por él mismo el año anterior al darse cuenta de que se trataba de elementos demasiado radicalizados. Véase, Roberto Thieme, *Memorias de un rebelde*, Santiago, Momentum, 2021, p. 121.

450 Telegrama n° 9802, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 27 de julio de 1973. ADMNE, carpeta n° 326.20 / IV^a, Caja S3. E38. P6 / 35194.

451 ABC, Madrid, 28 de julio de 1973, p. 17.

452 ABC, Madrid, 29 de julio de 1973, pp. 15-16.

453 *La Vanguardia*, Barcelona, 28 de julio de 1973, pp. 3-4.

454 *El Alcázar*, Madrid, 28 de julio de 1973, pp. 12-13.

455 *Arriba*, Madrid, 28 de julio de 1973, p. 16.

456 *Arriba*, Madrid, 29 de julio de 1973, p. 13.

457 *Sábado Gráfico*, n° 846, 18 de agosto de 1973, p. 17.

458 *Triunfo*, n° 567, 11 de agosto de 1973, p. 6.

459 *Diário de Noticias*, Lisboa, 28 de julio de 1973, p. 16.

460 *O Século*, Lisboa, 28 de julio de 1973, p. 8.

461 *Diário Popular*, Lisboa, 27 de julio de 1973, p. 15.

462 *Expresso*, n° 30, 28 de julio de 1973, pp. 1 y 17.

463 Telegrama n° 189, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 4

de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

464 Telegrama n° 199, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 14 de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5. Un énfasis similar se observó en el periódico ABC que daba cuenta de los numerosos atentados terroristas ocurridos en los últimos días en contra de diversos objetivos. Al igual que el embajador español, «Veritas» afirmaba que se desconocía la identidad de los autores de este tipo de hechos. Véase, ABC, Madrid, 15 de agosto de 1973, p. 18.

465 Telegrama n° 201, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 16 de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

466 Telegrama n° 11222, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 28 de agosto de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n° 326.20 / V^a. Los actos de terrorismo también fueron cubiertos por algunos medios de prensa portugueses. *O Século*, por ejemplo, informaba que una "vaga de violência" se arrastraba por todo el país, dejando daños importantes en instalaciones públicas y privadas. Adicionalmente informaba de atentados explosivos en ciudades como Valparaíso, Valdivia y La Serena. Véase, *O Século*, Lisboa, 24 de agosto de 1973, p. 6.

467 Telegrama n° 189, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 4 de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

468 Telegrama n° 205, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 21 de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

469 Telegrama n° 10548, del embajador en Chile al ministro de

Negócios Estrangeiros, Santiago, 9 de agosto de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n° 326.20 / V^a.

470 *Cambio* 16, n° 92, 20 de agosto de 1973, p. 9.

471 Este fue el énfasis que transmitió la nota firmada por «Veritas» y publicada por ABC, Madrid, 21 de agosto de 1973, p. 17. Desde el semanario *Fuerza Nueva* se sostuvo que la dimisión del general Ruiz Danyau era el reflejo de una “profunda crisis de conciencia en el Ejército”, al tiempo que volvía a insistir en los paralelismos entre la realidad chilena y la década de los treinta en España. Al respecto se indicó que al igual como España representó en su momento una lucha de la Europa libre en contra del comunismo, Chile representaría lo mismo, pero en relación a Hispanoamérica. Véase, *Fuerza Nueva*, n° 347, 1 de septiembre de 1973, pp. 33-35.

472 Por la tarde del 21 de agosto, la tranquilidad del domicilio del general Carlos Prats se vio interrumpida por una bulliciosa manifestación de mujeres, algunas de las cuales eran esposas de oficiales en servicio activo del Ejército, que exigían entregar una carta a la mujer de Prats. Luego de ello, la manifestación no se disolvió, aumentando en tamaño debido a la llegada de diversas personas. El grupo se transformó entonces en una multitud enardecida y violenta que intentó ingresar por la fuerza al domicilio del general enfrentándose con la policía a lo largo de las horas siguientes. Prats recuerda lo complejo de la situación y cómo en el interior de su hogar, al cual habían llegado numerosas personalidades, se escuchaban toda clase de groserías e insultos. Véase, Carlos Prats, *Memorias... op. cit.*, p. 475 y ss. Este tipo de hechos unido a las tensiones que vivía Prats al interior de su institución eran parte, sin duda, de una operación ma-

yor destinada a erosionar la autoridad del alto oficial logrando así su alejamiento del mando del Ejército.

473 Desde un ángulo distinto Veritas destacaba el papel de la mujer dentro en la lucha contra la UP, resaltando su defensa de los grandes principios “de la nacionalidad, de la justicia y del derecho.” Véase, ABC, Madrid, 25 de agosto de 1973, p. 14.

474 Telegrama n° 207, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 22 de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

475 ABC, Madrid, 22 de agosto de 1973, pp. 17-18.

476 *Arriba*, Madrid, 23 de agosto de 1973, p. 14.

477 Telegrama n° 213, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 27 de agosto de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

478 *Cambio* 16, n° 94, 3 de septiembre de 1973, p. 8.

479 *Sábado Gráfico*, n° 848, 1 de septiembre de 1973, p. 13.

480 *Cuadernos para el Diálogo*, n° 119, agosto de 1973, p. 444.

481 Telegrama n° 11222, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 28 de agosto de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n° 326.20 / V^a.

482 *Expresso*, n° 34, 25 de agosto de 1973, p. 5.

483 Aunque la UP tuvo una cuota de responsabilidad en el fracaso del diálogo, no es menos cierto la DC asumió una postura rígida e intransigente anteponiendo condiciones difíciles de cumplir para el gobierno a efecto de alcanzar un acuerdo. Este perfil ha sido descrito, en la ya

clásica obra de Arturo Valenzuela, como el de un partido que no cumplió con su rol de actor centrista, es decir pragmático y aliancista a objeto de descomprimir la crisis política que se vivía. Véase, Arturo Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile*, Santiago, Universidad Diego Portales, 2013.

484 Dentro del amplio catálogo de libros dedicados a dicha coyuntura hay dos obras que narran muy bien esta jornada: Joaquín Fermanois, *La revolución inconclusa... op. cit.*, en especial capítulo XXVIII y Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, *Golpe. 11 de septiembre de 1973*, Santiago, Uqbar, 2020. También puede ser útil, desde la perspectiva de un protagonista directo de los hechos, la clásica obra de Joan Garcés, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Santiago, BAT, 1990.

485 El rol de Allende en esa jornada, pero conectada a una trayectoria personal y política más amplia se encuentra en Mario Amorós, *Allende. La biografía*, Santiago, Ediciones B, 2013. Una perspectiva que se interroga sobre el carácter mítico de la figura de Allende, así como respecto a sus limitaciones y relaciones con la izquierda chilena, y su significado para las discusiones del presente está en Daniel Mansuy, Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular, Santiago, Taurus, 2023.

486 Telegrama n° 224, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 11 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

487 Telegrama n° 225, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 11 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n°. 4-5.

488 Telegrama n° 226, del embajador en Chile al ministro de

Asuntos Exteriores, Santiago, 12 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5.

489 Telegrama n.º 228 del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 12 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5. La Embajada de España acusaría recibo de la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno indicando que ella fue puesta en conocimiento del Gobierno español "en tiempo debido." Véase, Nota verbal n.º 96, 14 de septiembre de 1973. AMINREL, Fondo países. Embajada de Chile en España, Vol. 66.

490 Ambos documentos citados en, María José Henríquez: "Los mil días hispano-chilenos... *op. cit.*", pp. 455 y 460.

491 Telegrama n.º 12028, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 14 de septiembre de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n.º 326.20 / VI^a.

492 Telegrama n.º 12356, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 19 de septiembre de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n.º 326.20 / V^a.

493 Telegrama n.º 271, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 17 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5.

494 Telegrama n.º 337, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 27 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5.

495 Telegrama n.º 345, del embajador en Chile al ministro de Asuntos Exteriores, Santiago, 29 de septiembre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5. Cabe precisar que el telegrama no llevaba ningún sello en particular al despacharse desde la embajada hispana,

sin embargo, alguien anotó una inscripción manuscrita en el lado inferior izquierdo que decía "repartido como «secreto»".

496 María José Henríquez, "Los mil días hispano-chilenos... *op. cit.*

497 Telegrama n.º 180, del ministro de Asuntos Exteriores al embajador en Chile, Madrid, 8 de octubre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5.

498 Telegrama n.º 81, del ministro consejero en la Santa Sede al ministro de Asuntos Exteriores, Ciudad del Vaticano, 22 de octubre de 1973. AGA, Leg. R-18185, expediente n.º 4-5.

499 Informe n.º 502, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 20 de septiembre de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n.º 326.20 / VI^a.

500 Telegrama n.º 13088, del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 3 de octubre de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35194, carpeta n.º 326.20 / VII^a.

501 Harald Edelstam fue embajador de Suecia en Chile entre 1972 y 1973. Tras el golpe de Estado que derrocó a la UP, el diplomático sueco cumpliría un destacado rol en la protección de aquellos chilenos que eran perseguidos por la Dictadura. Gracias a sus gestiones, cientos de personas lograron asilo y protección, situación que le acarrearía numerosos conflictos con las autoridades castrenses. Para un análisis más detallado sobre el papel de Suecia y en particular del embajador Edelstam en este periodo, véase Fernando Camacho Padilla, "Los asilados de las Embajadas de Europa Occidental en Chile tras el golpe militar y sus consecuencias diplomáticas: El caso de Suecia", *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n.º 81, 2006, pp. 21-41.

502 Telegrama n.º 16006, "confidencial", del embajador en Chile al ministro de Negocios Estrangeiros, Santiago, 30 de noviembre de 1973. ADMNE, caja S3.E38.P6 / 35195, carpeta n.º 326.20 / X^a.

503 *ABC*, Madrid, 12 de septiembre de 1973, pp. 1-26.

504 *La Vanguardia*, Barcelona, 12 de septiembre de 1973, *passim*.

505 *La Vanguardia*, Barcelona, 13 de septiembre de 1973, *passim*.

506 *El Alcázar*, Madrid, 12 de septiembre de 1973, pp. 10 y 11.

507 *El Alcázar*, Madrid, 13 de septiembre de 1973, pp. 12 y 35.

508 *El Alcázar*, Madrid, 14 y 15 de septiembre de 1973, *passim*.

509 *El Alcázar*, Madrid, 15 de octubre de 1973, p. 9.

510 *Arriba*, Madrid, 12 de septiembre de 1973, p. 1.

511 *Arriba*, Madrid, 12 de septiembre de 1973, p. 36.

512 *Arriba*, Madrid, 14 de septiembre de 1973, p. 1.

513 *Arriba*, Madrid, 13 de septiembre de 1973, p. 2.

514 *Pueblo*, Madrid, 11 de septiembre de 1973, p. 18.

515 *Pueblo*, Madrid, 12 de septiembre de 1973, pp. 1 y 3.

516 *Pueblo*, Madrid, 13 de septiembre de 1973, p. 3.

517 *Sábado Gráfico*, n.º 851, 22 de septiembre de 1973, pp. 14-22.

518 *Cambio 16*, n.º 96, 17 de septiembre de 1973, pp. 5-9.

519 *Cambio 16*, n.º 97, 24 de septiembre de 1973, pp. 30-35

- 520** *Cambio* 16, n° 98, 1 de octubre de 1973, pp. 37-41.
- 521** El conjunto de estos editoriales y columnas de opinión en *Cuadernos para el Diálogo*, n° 121, octubre de 1973, pp. 5-29.
- 522** Para una consulta detallada de las respuestas de todos los entrevistados, Véase *Cuadernos para el Diálogo*, n° 121, octubre de 1973, pp. 30-50.
- 523** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 122, noviembre de 1973, pp. 18 y 43.
- 524** *Cuadernos para el Diálogo*, n° 123, diciembre de 1973, pp. 23 y 34.
- 525** *Fuerza Nueva*, n° 350, 22 de septiembre de 1973, p. 1.
- 526** *Fuerza Nueva*, n° 354, 20 de octubre de 1973, pp. 8-11.
- 527** *Fuerza Nueva*, n° 359, 24 de noviembre de 1973, pp. 8-10.
- 528** *Fuerza Nueva*, n° 360, 1 de diciembre de 1973, pp. 34-36.
- 529** Anne Sanz-Gavillon: "Chile como referente político y cultural... op. cit.", pp. 62-63.
- 530** *Triunfo*, n° 573, 22 de septiembre de 1973 (edición especial sobre Chile).
- 531** *Triunfo*, n° 574, 29 de septiembre de 1973, p. 12; N° 575, 6 de octubre de 1973 y N° 580, 10 de noviembre de 1973, pp. 22-27.
- 532** *Triunfo*, n° 578, 27 de octubre de 1973, pp. 26-31.
- 533** *Triunfo*, n° 585, 15 de diciembre de 1973, p. 22.
- 534** *Mundo Obrero*, Madrid, 17 de septiembre de 1973, p. 2.
- 535** *Mundo Obrero*, Madrid, 17 de septiembre de 1973, p. 1.
- 536** Informe de la camarada Mercedes Álvarez sobre viaje realizado a Chile entre el 9 y el 15 de enero de 1974. AHPCE, Sección Relaciones Internacionales. Microfilm Jacq. 601.
- 537** *Diário de Notícias*, Lisboa, 12 de septiembre de 1973, p. 1.
- 538** *Diário de Notícias*, Lisboa, 13 de septiembre de 1973, p. 1.
- 539** *Diário de Notícias*, Lisboa, 14 de septiembre de 1973, p. 1.
- 540** *O Século*, Lisboa, 12 de septiembre de 1973, pp. 1 y 9.
- 541** *O Século*, Lisboa, 13 de septiembre de 1973, pp. 1 y 6.
- 542** *O Século*, Lisboa, 14 de septiembre de 1973, pp. 6 y 9.
- 543** *Jornal de Notícias*, Porto, 12 de septiembre de 1973, p. 7.
- 544** *Jornal de Notícias*, Porto, 13 de septiembre de 1973, pp. 1 y 7.
- 545** *Diário de Lisboa*, 11 de septiembre de 1973, p. 1.
- 546** *Diário de Lisboa*, 12 de septiembre de 1973, pp. 1 y 12.
- 547** *Diário de Lisboa*, 13 de septiembre de 1973, pp. 1 y 13.
- 548** *Diário de Lisboa*, 14 de septiembre de 1973, p. 13.
- 549** *Diário Popular*, Lisboa, 11 de septiembre de 1973, p. 24.
- 550** *Diário Popular*, Lisboa, 12 de septiembre de 1973, pp. 1 y 24.
- 551** *Diário Popular*, Lisboa, 13 de septiembre de 1973, y edición del 15 de septiembre de 1973.
- 552** *Época*, Lisboa, 12 de septiembre de 1973, pp. 2 y 3.
- 553** *Época*, Lisboa, 13 de septiembre de 1973, pp. 3 y 8.
- 554** *Época*, Lisboa, 14 de septiembre de 1973, p. 3.
- 555** *Época*, Lisboa, 16 de septiembre de 1973, p. 3.
- 556** *Época*, Lisboa, 19 de septiembre de 1973, p. 3.
- 557** *Expresso*, n° 36, 8 de septiembre de 1973, p. 6.
- 558** *Expresso*, n° 37, 15 de septiembre de 1973, p. 7.
- 559** *Expresso*, n° 38, 22 de septiembre de 1973, p. 1.
- 560** *Expresso*, n° 39, 29 de septiembre de 1973, pp. 1, 6, 8 y 16.
- 561** *Avante!*, n° 458, octubre de 1973, p. 6
- 562** *Avante!*, n° 460, diciembre de 1973, p. 6.
- 563** *Unidade Popular*, n° 18, octubre de 1973, pp. 2-4.
- 564** Movimento de Esquerda Socialista "Jornada nacional de apoio à resistência do povo chileno" 11 al 15 de Setembro. Arquivo da História Social (AHS), PT-AHS-ICS-FP-EE-MES-25, [1974-09] (Produção).
- 565** PRP-BR "Debate público Chile-Portugal", 14 de septiembre de 1974. AHS, PT-AHS-ICS-CAHS-EE-PRP/BR-14.
- 566** Comissão Executiva dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CETCGD). Comunicado n° 44, 9 de septiembre de 1974. AHS, PT-AHS-ICS-RSP-MS-052, 1974-09-09 (Produção).

Conclusiones

Las miradas hispanoportuguesas sobre el gobierno de la Unidad Popular ponen sobre la mesa un abanico amplio de temas e interrogantes. Un primer aspecto que arrojó la revisión de la documentación oficial y de prensa en ambos países fue que el problema de la violencia no era entendido a partir de elementos estrictamente locales, sino más bien desde una perspectiva más amplia de connotaciones globales. En efecto, este fenómeno no era exclusivo de Chile, no obstante las particularidades revisadas, ya que constituía una problemática presente en varias naciones y regiones. En el caso de Europa, algunos países vivían de modo frenético las consecuencias de la lucha armada y el terrorismo llevado adelante por agrupaciones que desplegaron su accionar desde finales de los años sesenta en adelante. La respuesta frente a este tipo de dinámicas no se haría esperar de parte de los organismos de seguridad, situación que también se observó en el despliegue y operatividad de algunas agrupaciones de extrema derecha que ya venían circulando dentro del espacio público en ciertos territorios. En el tránsito de los años sesenta a la primera mitad de los setenta, esta dinámica de confrontación y violencia entre grupos de distinto signo ideológico y las fuerzas policiales y militares de algunos países fue una situación recurrente dentro de la escena política y social europea.

Con sus particularidades inherentes, España y Portugal no escapaban del todo a la dinámica que se vivía a nivel continental. Aunque en ambos países existían regímenes autoritarios que habían reprimido con dureza a sus opositores, igualmente existieron grupos y movimientos que confrontaron al Estado a partir de diversos énfasis, como fue el caso de ETA en España. A ellos se sumaban procesos de movilización social y política que incluían a numerosos actores como estudiantes universitarios, profesionales, clase trabajadora, entre otros, que demandaban mayores cuotas de libertad

y democracia. Un número significativo de estas exigencias se hacían en la calle al calor de marchas y manifestaciones que no pocas veces terminaban en enfrentamientos y disputas con la policía. En el caso de Portugal, se agregaba un hecho adicional que guardaba relación con el malestar generado a propósito de la guerra colonial que el país atlántico sostenía con sus colonias africanas y que causaba un rechazo cada vez más transversal en las filas uniformadas.

Desde diversos ángulos el tema de la violencia política estaba situado en un lugar preponderante de la discusión pública. Y desde una perspectiva todavía más global, esta problemática estaba fijada tanto en lo que concernía a un conflicto ideológico planetario entre dos superpotencias, como también respecto a conflictos más locales, pero de indudable impacto mundial como fue, por ejemplo, la Guerra de Vietnam (1955-1975). En este sentido, la violencia no constituía un fenómeno marginal dentro de los grandes procesos y debates mundiales ni tampoco era una dinámica exclusiva de los países subdesarrollados. Con mayor o menor intensidad, ella estaba presente en innumerables conflictos a lo largo y ancho del mundo.

Las miradas de España y Portugal sobre el fenómeno de la violencia política en el Chile de la UP trasuntaron en buena medida este carácter de globalidad del fenómeno en cuestión. Por de pronto, ambos países situaron la experiencia socialista chilena como parte de la lucha ideológica mundial existente, ya fuese en virtud de que la UP representara un caso inequívoco de expansión del comunismo internacional como porque su particularidad y especificidades estaban abriendo el camino hacia un nuevo modelo de transición al socialismo. Incluso desde un punto de vista regional, los países ibéricos conectaron un número creciente de observaciones, indagaciones, problemas y coyunturas ocurridas en el Chile de Allende a temáticas continentales, sobre todo en relación al Cono sur. Como afirma esta investigación, países como Paraguay, Bolivia, Brasil o Argentina mostraron su preocupación por la llegada de la UP al poder, advirtiendo que dicha situación podía desestabilizar a la región en su conjunto. Las miradas más críticas insinuaron, inclusive, que Chile podía constituirse en una base de operaciones del terrorismo sudamericano que permitiera coordinar a distintos grupos que actuaban en esta zona.

El tema de la violencia política constituía, así, una preocupación debatida y analizada en distintos niveles y espacios, ya fuesen estos de carácter mundial, continental o regional. En este sentido, la segunda hipótesis que plantea esta investigación se encuentra también validada en virtud de la documentación expuesta en este trabajo y que muestra la globalidad que tenía por entonces el problema de la violencia política. Además, las fuentes de ambos países revelan que el seguimiento que hicieron de los hechos de violencia ocurridos en Chile refería constantemente el protagonismo de la población civil en los mismos, ya fuese de forma organizada o espontánea.

Desde un ángulo más particular, los países ibéricos enfatizaron distintos diagnósticos sobre los hechos que ocurrían en Chile. En el caso de España, la relación entre el régimen franquista y la UP fue más compleja de lo que en apariencia podría pensarse. Aunque existían diferencias ideológicas palpables, una serie de cambios en los lineamientos internacionales del mundo occidental, como dentro de la propia política exterior hispana, explican que la experiencia chilena haya sido analizada con pragmatismo y cierta expectación. De hecho, España intentó llenar de algún modo el vacío que dejaba Estados Unidos en su relación con el país sudamericano, apostando así por incrementar los niveles de cooperación técnica y comercial. En este sentido, la mirada de sus representantes diplomáticos en la capital chilena no fue en ningún caso unidireccional ni homogénea para referir la experiencia socialista. La llegada al poder de Salvador Allende, lejos de constituir un hecho negativo *per se*, fue entendido como parte de un proceso político de mayor dinamismo y relevancia de aquellos programas y actores que buscaban desarrollar transformaciones estructurales. Con el paso de los meses y a medida que la situación política y económica empeoraba, los diagnósticos diplomáticos se mostraron un poco más críticos sobre la UP y la izquierda chilena en general, hasta desembocar en una mirada favorable al golpe de Estado del 11 de septiembre. Pero incluso en este contexto de apoyo tácito a la intervención uniformada, los informes diplomáticos revelaron no pocas acciones y preocupaciones de los representantes hispanos respecto a la política represiva que llevaba adelante la dictadura y que en ciertos casos alcanzó a algunos ciudadanos españoles.

La mirada de la prensa española fue igualmente heterogénea, abarcando un amplio arco ideológico e interpretativo para referir la experiencia socialista

chilena. Esta iba desde aquellas visiones monolíticas que no variaron un ápice su diagnóstico crítico sobre la UP, como fue el caso de *Fuerza Nueva*, hasta aquellas que lograban incorporar distintos elementos y matices al análisis que se hacía sobre este gobierno. Algunas publicaciones se caracterizaron, además, por hacer balances de conjunto sobre determinados sucesos, en especial con motivo del golpe de Estado, respecto del cual se buscaba entender sus antecedentes y proyecciones de mediano y largo plazo. Inclusive este hecho gatilló una reflexión todavía mayor sobre la viabilidad de un proyecto de naturaleza socialista dentro de los marcos de la institucionalidad liberal. También se observó, en varias publicaciones, un intento por acercar la realidad del país sudamericano al público lector peninsular a partir de ciertas categorías y conceptos que le resultaran inteligibles. Y ello no solo fue observable en aquellas miradas que veían en la experiencia de la UP una versión actualizada de la segunda república española, sino también en algunas publicaciones que intentaron mostrar al gobierno de Allende como un proceso democrático y pluralista que podía servir de ejemplo para la izquierda de ese país.

El caso de Portugal fue distinto. Lejos del pragmatismo y heterogeneidad de miradas que caracterizaron los diagnósticos españoles, en el país atlántico se observaron visiones más esquemáticas, cerradas y homogéneas respecto a la UP. Desde el ángulo diplomático, existió a lo largo de los tres años de la experiencia socialista una crítica abierta a lo que se consideraba como un proyecto aliado del comunismo internacional, el cual conduciría al país hacia una dictadura totalitaria. Además, el representante luso advirtió que el gobierno de Allende adhería a la causa independentista de los pueblos del Tercer Mundo, situación que podría abrir un punto de tensión entre ambos países en virtud de la guerra ultramarina que Portugal sostenía en esos momentos con sus colonias africanas. Bajo este contexto, los hechos de violencia política fueron entendidos por el embajador portugués como producto de los siniestros planes de una izquierda abanderada por la revolución marxista que deseaba imponer a sangre y fuego su programa totalitario. Al calor de este diagnóstico, el golpe de Estado fue recibido con beneplácito por este representante, toda vez que significaba –haciendo un análisis desde un ángulo claramente global– una derrota del comunismo a escala regional y mundial.

La visión de la prensa portuguesa, en tanto, mostraría cierta correspondencia con los análisis que hiciera la embajada, al referir en la mayoría de los casos miradas más bien críticas sobre la experiencia de la UP. No pocos análisis se centraron, desde un inicio, en las características generales del proyecto socialista de la UP al que tildaron de marxista, que era la misma forma en cómo se referían a Salvador Allende. Solo desde un sector más pequeño de la prensa nacional se desarrolló una mirada más compleja, e incluso favorable, al gobierno de la UP, siendo el semanario *Expresso* el principal representante de esta corriente. De hecho, esta publicación fue uno de los pocos medios que envió un corresponsal a territorio chileno luego de ocurrido el golpe de Estado del 11 de septiembre, lugar desde donde envió un extenso reportaje sobre las semanas posteriores a la caída del proyecto socialista. Mientras la mayor parte de la prensa lusa se detenía en las causas y errores de la izquierda chilena para entender su reciente fracaso, esta publicación advirtió que lo estaba en marcha era la imposición de un nuevo tipo de régimen caracterizado por la violencia y la despolitización de la sociedad. Con todo, este tipo de diagnósticos fue más bien marginal dentro de la escena política portuguesa, logrando emerger con mayor fuerza solo después de que se produjera el fin del salazarismo en abril de 1974.

Sobre su proyección en términos de indagación y análisis histórico, este libro podría significar un impulso para estudiar con mayor detención el papel de Portugal en relación a los países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, o incluso en épocas anteriores. A diferencia de lo sucedido con España, que en virtud de sus lazos históricos y culturales con esta región ha generado numerosos estudios y trabajos orientados hacia distintas materias, Portugal constituye todavía un caso poco indagado en relación con América Latina, salvo por supuesto en relación a Brasil. Quizás su carácter más bien periférico dentro de Europa haya incidido en que los historiadores no prestasen suficiente atención a este territorio, el cual, en realidad, analizó con bastante detención lo que sucedía en otras partes del mundo. Las excelentes bases documentales que se conservan en Portugal, en archivos muy variados y plenamente accesibles a los investigadores, constituyen, en este sentido, una invitación a pensar y concretar nuevas líneas de trabajo sobre este país y sus vínculos con otras regiones del planeta.

Bibliografía

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo General de la Administración de España, *Informes, oficios, telegramas y documentos Embajada de España en Chile y otras representaciones*, 1970-1973.

Archivo Histórico Partido Comunista de España, *Informes, cartas y otros documentos sobre Chile*, 1971-1973.

Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, *Oficios y documentos Embajada de Chile en España y otras representaciones*, 1971.

Arquivo da Defesa Nacional, Boletín Opinião e Soldado! *Coisas importantes que debes saber!*, 1971.

Arquivo da Historia Social, *Documentos Movimento de Esquerda Socialista, Partido Revolucionario de Portugal – BR e Comissão Executiva dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos*, 1974.

Arquivo Diplomático Ministerio Negócios Estrangeiros de Portugal, *Informes, telegramas y documentos Embajada de Portugal en Chile y otras representaciones*, 1969-1973.

Biblioteca Escuela Diplomática, *Documentos ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo*, 1971.

Fundación Francisco Franco, *Documentos embajador de España en Chile*, 1972.

Programa básico de Gobierno de la Unidad Popular, Santiago, 1969.

Senado de Chile, *Diario de Sesiones*, 1971.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Chile	España	Portugal
<i>El Mercurio</i>	<i>ABC</i>	<i>Avante!</i>
<i>El Siglo</i>	<i>Arriba</i>	<i>Diário de Lisboa</i>
<i>La Prensa</i>	<i>Cambio 16</i>	<i>Diário de Noticias</i>
<i>La Segunda</i>	<i>Cuadernos para el diálogo</i>	<i>Diário Popular</i>
<i>La Tercera</i>	<i>El Alcázar</i>	<i>Época</i>
<i>Tribuna</i>	<i>Fuerza Nueva</i>	<i>Expresso</i>
	<i>La Vanguardia</i>	<i>Jornal de Noticias</i>
	<i>Mundo Obrero</i>	<i>O Século</i>
	<i>Pueblo</i>	<i>Seara Nova</i>
	<i>Sábado Gráfico</i>	<i>Unidade Popular</i>
	<i>Triunfo</i>	

ARTÍCULOS, CAPÍTULOS DE LIBROS

Azcona, José Manuel y Matteo Re, “Las influencias exteriores: Del Che a los tupamaros”, en Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68: La deriva terrorista en Occidente*, Madrid, Sílex, 2019.

Camacho Padilla, Fernando, “Los asilados de las Embajadas de Europa Occidental en Chile tras el golpe militar y sus consecuencias diplomáticas: El caso de Suecia”, *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n° 81, 2006.

Carrillo, Marc, “El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España (1975-1978)”, *Historia Constitucional* (revista electrónica), n° 2, 2001.

Cruz, Rafael, “Pensar la violencia colectiva europea en perspectiva histórica”, en Javier Muñoz, J. Luis Ledesma, Javier Rodrigo (coords.), *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Madrid, Siete Mares, 2005.

Cuadernos Martín Soares, n° 1, 1974, Dossier: “Os acontecimentos trágicos do Chile: Lição para os Revolucionários de todo o Mundo Chile”.

Duarte, Lucas, “Expresiones del internacionalismo tercermundista en el contexto de los 60 globales: una mirada desde el

Cono Sur”, *Esboços*, v. 28, n° 48, mayo/agosto de 2021, pp. 427-446.

Feria Vázquez, Pedro, “Relaciones hispano-chilenas durante la Transición española (1975-1982): sociedad civil y mecanismos de solidaridad”, *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, n° 126, 2, pp. 271-299.

Ferreira, Ana Sofía, “Terrorismo en Portugal: Las Forças Populares 25 de abril (1980-1984)”, en Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68: La deriva terrorista en Occidente*, Madrid, Sílex, 2019.

Fernández Abara, Joaquín, “Allende, el allendismo y los partidos: El Frente de Acción Popular ante las elecciones presidenciales de 1958.” *Revista Izquierdas*, n° 23, 2015.

Gaudichaud, Franck, “A 40 años del golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re) pensar la Unidad Popular,” *Tiempo Histórico*, n° 6, 2013.

Hobsbawm, Eric, “Chile: año uno”, *New York Review of Books*, 23 de septiembre de 1971, compilado en Leslie Bethell (ed.), *¡Viva la Revolución! Eric Hobsbawm sobre América Latina*, Barcelona, Crítica, 2018.

Maestre, Juan, “Chile y Portugal: Divagaciones comparativas”, *Revista Litoral*, n° 53-58, 1975.

Marchant V. Pedro, “La Unidad Popular chilena y el comunismo español: análisis, solidaridad y lecciones políticas (1970-1973)”, *Historia Crítica*, n° 90, 2023.

Martín, Alberto y Eduardo Rey Tristán, “La dimensión transnacional de la izquierda armada”, *América Latina Hoy*, n° 80, 2018.

Morales Aguilera, Francisco Javier, “«No fue un golpe; fue un alzamiento». Análisis y perspectivas sobre la vía chilena al socialismo desde las páginas de la revista Fuerza Nueva”, *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, n° 24, 2020.

Muñoz, Javier y Sophie Baby, “El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1972)”, en Javier Muñoz, J. Luis Ledesma, Javier Rodrigo (coords.), *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Madrid, Siete Mares, 2005.

Palieraki, Eugenia, “¿Bajo el signo de Fidel? La revolución cubana y la nueva izquierda revolucionaria chilena en los años 1960”, en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (eds.), *Chile y la Guerra Fría Global*, Santiago, Ril Editores, 2014.

Perry, Mariana, “El poder de la solidaridad con Chile. La izquierda británica frente al golpe de Estado, 1973-1979”, *Secuencia*, n° 108, septiembre-diciembre 2020.

Ponce, José Ignacio, "Autonomía versus politización. Tensiones en la cultura política sindical entre la 'vieja democracia' y el inicio de la postdictadura chilena." *Revista Rosa*, Santiago, 26 de agosto de 2019. Disponible en <https://www.revistarosa.cl/2019/08/26/autonomia-versus-politizacion-tensiones-en-la-cultura-politica-sindical-entre-la-vieja-democracia-y-el-inicio-de-la-postdictadura-chilena/>.

Re, Matteo, "El Movimiento del 68, la izquierda, la derecha y la violencia en Italia", en Juan Avilés, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68: La deriva terrorista en Occidente*, Madrid, Sílex, 2019.

Riquelme, Alfredo, "Política de reformas e imaginación revolucionaria en el Chile constitucional (1933-1973)", en Marianne González y Eugenia Palieraki (comps.), *Revoluciones imaginadas. Itinerarios de la idea revolucionaria en América Latina contemporánea*, Santiago, Ril Editores, 2012.

Robertini, Camillo y Gilberto Aranda B., "'La lección chilena'. El golpe de Pinochet como tipo ideal para las ultraderechas italianas y españolas", *Segle XX*, n° 15, 2022.

Santoni, Alessandro, "Comunistas y socialistas italianos frente a la causa chilena: solidaridad y renovación (1973-1989)", *Izquierdas*, n° 19, agosto 2014.

Santoni, Alessandro, "El Partido Comunista Italiano, la lección de Chile y la lógica de los bloques", en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (eds.), *Chile y la Guerra Fría Global*, Santiago, Ril Editores, 2014.

Sanz-Gavillon, Anne, "Chile como referente político y cultural de la España antifranquista: procesos de identificación, ecos y paralelismos en la Revista Triunfo (1964-1980)", *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, n° 1, 2018.

Saz, Ismael, "La «guerra de los treinta años» del siglo XX (1914-1945)", en Jordi Casassas (coord.), *La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días*. Barcelona, Ariel, 2005.

Soto Carmona, Álvaro, "Violencia política y transiciones a la democracia. Chile y España", en Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (dir.), *Violencias y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del sur - América Latina*, Madrid, Casa de Velásquez, 2009.

Tíscar, María José, "El papel de España en la política africana de Marcello Caetano", *Espacio, Tiempo y Forma*, serie V, t. 19, 2007.

LIBROS

Amorós, Mario, *Allende. La biografía*, Santiago, Ediciones B, 2013.

Aranda, Gilberto y Misael Arturo López Z. (eds.), *Resonancias de un golpe: Chile 50 años*, Madrid, Catarata, 2023.

Arrate, Jorge y Eduardo Rojas, *Memoria de la izquierda chilena*, Santiago, Javier Vergara Editor, 2003.

Arrate, Jorge, *Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular (Memorias)*, Santiago, Lom, 2017.

Avilés, Juan, José Manuel Azcona y Matteo Re (eds.), *Después del 68: La deriva terrorista en Occidente*, Madrid, Sílex, 2019.

Aylwin Azócar, Patricio, *La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973*, Santiago, Debate, 2023.

Azcona, José Manuel (dir.), *Emigración y relaciones bilaterales España-Chile (1810-2015)*, Madrid, Dykinson, 2016.

Baby, Sophie, Olivier Compagnon, Eduardo González Calleja, *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del sur-América Latina*, Madrid, Casa de Velásquez, 2009.

Bitar, Sergio y Crisóstomo Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986.

Caetano, Marcello, *Escritos Políticos*, Madrid, Editora Nacional, 1970.

Carrillo, Santiago, *Memorias*, Barcelona, Planeta, 2007.

Casanova, Julián, *República y guerra civil*. Volumen 8 de la colección dirigida por Josep Fontana y Ramón Valladares, *Historia de España*, Madrid, Marcial Pons, 2007.

Casanova, Julián, *Una violencia indómita. El siglo XX europeo*, Barcelona, Crítica, 2020.

Cavallo, Ascanio y Margarita Serrano, *Golpe. 11 de septiembre de 1973*, Santiago, Uqbar, 2020.

Correa, Martín, Raúl Molina y Nancy Yáñez, *La reforma agraria y las tierras mapuches, Chile 1962-1975*, Santiago, Lom, 2005.

Correa, Sofía, et al., *Historia del siglo XX chileno. Balance para-dojal*, Santiago, Sudamericana, 2001.

Corvalán Marquéz, Luis, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Sudamericana, 2001.

Costa Pinto, Antonio, *A busca da democracia*. Volumen 5 de la colección dirigida por António Costa Pinto y Nuno Gonçalo

Monteiro, *História Contemporânea de Portugal, 1808-2010*, Lisboa, MAPFRE y Penguin Random House, 2015.

Díaz Nieva, José, *Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2015.

Dinges, John, *Los años del Cóndor. Operaciones internacionales de asesinato en el Cono Sur*, Santiago, Debate, 2021.

De Riquer, Borja, *La dictadura de Franco*. Volumen 9 de la colección dirigida por Josep Fontana y Ramón Valladares, *Historia de España*, Madrid, Marcial Pons, 2007.

Fernandois, Joaquín, *Chile y el mundo, 1970-1973: La política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional*, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1985.

Fernandois, Joaquín, *La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013.

Ferreira, Sónia, *Mulheres de Desaparecidos*, Lisboa, Ela por Ela, 2003.

Ferreira, José Medeiros, *A Revolução do 25 de abril. Ensaio Histórico*. Lisboa, Shantarin, 2023.

Fontaine, Arturo y Miguel González (eds.), *Los mil días de Allende*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1997.

Fuentes, Manuel, *Memorias secretas de Patria y Libertad y algunas confesiones sobre la Guerra Fría en Chile*, Santiago, Grijalbo, 1999.

Garcés, Joan, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Santiago, BAT, 1990.

Garcés, Mario, *Crisis social y motines populares en el 1900*, Santiago, Lom, 2003.

González Calleja, Eduardo, *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea, 1865-2008*. Madrid, Alianza, 2009.

Grez Toso, Sergio, *La "cuestión social en Chile". Ideas y debates precursores (1804-1902)*, Santiago, Centro de investigaciones Barros Arana, 1995.

Harmer, Tanya, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana*, Santiago, Universidad Diego Portales, 2013.

Herrero, Rubén, *La realidad inventada. Percepciones y proceso de toma de decisiones en Política Exterior*, Madrid, Plaza y Valdés, 2006.

Judt, Tony, *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*, Madrid, Taurus, 2006.

Magasich, Jorge, *Historia de la Unidad Popular*, Santiago, Lom, 2020.

Marambio, Max, *Las armas del ayer*, Barcelona, Random House Mondadori, 2008.

Mansuy, Daniel, *Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular*, Santiago, Taurus, 2023.

Matos e Lemos, Mario, *Jornais Diários Portugueses do Século XX. Um dicionário*, Coimbra, Ariadne Editora, 2006.

Mc Sherry, Patrice, *Los Estados depredadores: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, Santiago, Lom, 2009.

Morales Aguilera, Francisco Javier *Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973)*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2023.

Muñoz, Javier, *Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo*, Madrid, Marcial Pons, 2006.

Os mil dias da Revolução chilena. Lisboa: Avante!, 1979.

Payne, Stanley G., *El régimen de Franco 1936-1975*, Madrid, Alianza, 1987.

Pereira, Bernardo Futscher, *Orgulhosamente Sós. A diplomacia em guerra (1962-1974)*. Lisboa, D. Quixote, 2022.

Power, Margaret, *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973*, Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2008.

Prats, Carlos, *Memorias. Testimonio de un soldado*, Santiago, Pehuén, 1985.

Preston, Paul, *Juan Carlos. El rey de un pueblo*, Barcelona, Plaza & Janés, 2003.

Proença, María Cândida, *Uma história concisa de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, 2016.

Ramos, Rui (coord.), *História de Portugal*, Lisboa, A esfera dos livros, 2009.

Reis, Antonio do Carmo, *Nova historia de Portugal. Das origens, no extremo ocidente da Ibéria, á actualidade, na União Europeia*, Lisboa, Casa das Letras, 2005.

Rodriguez López, Jonatan, *Los GRAPO contra el Estado. 1968-1985*, León, Marciano Sonoro Ediciones, 2023.

Salazar, Manuel, *Chile 1970-1973*, Santiago, Sudamericana, 2003.

Schneider Arce, Víctor, *General Schneider. Un hombre de honor, un crimen impune*, Santiago, Ocho Libros, 2010.

Thieme, Roberto, *Memorias de un rebelde*, Santiago, Momentum, 2021.

Tierno Galván, Enrique, *Cabos sueltos*, Barcelona, Bruquera, 1981.

Tusell, Javier, *Dictadura franquista y democracia, 1939-2004*. Barcelona, Crítica, 2005.

Valenzuela, Arturo, *El quiebre de la democracia en Chile*, Santiago, Universidad Diego Portales, 2013.

Vinen, Richard, 1968. *El año en que el mundo pudo cambiar*, Barcelona, Crítica, 2018.

Winn, Peter, *Tejedores de la Revolución. Los trabajadores de Yaurur y la vía chilena al socialismo*, Santiago, Lom, 2004.

TESIS

Guerra, Felipe, "La Vanguardia Organizada del Pueblo y su escalamiento en la violencia política. Cultura política y militancia (1969-1971)." Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile, 2019 (Tesis de Magíster).

Henríquez, María José, "Los mil días hispano-chilenos, 1970-1973", Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, julio 2008 (Tesis Doctoral).

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Kornbluh, Peter, "Documentos desclasificados: Cómo Jorge Alessandri buscó apoyo clandestino de EE.UU. en 1970.", 12.12.2007, publicado en: <https://www.ciperchile.cl/2007/12/12/documentos-desclasificados-como-jorge-alessandri-busco-apoyo-clandestino-de-eeuu/>. Consulta: 17.07.2021.

Nota Biografica

FRANCISCO JAVIER MORALES AGUILERA

es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la violencia política en Chile y el Cono Sur, además de las relaciones entre la península ibérica y este espacio durante la segunda mitad del siglo XX. Actualmente se desempeña como investigador de la UAM bajo la modalidad Margarita Salas, realizando su estancia de trabajo en el grupo HistAmérica de la Universidade de Santiago de Compostela. Es autor del libro *Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973)*.

EDIÇÃO

Instituto Diplomático
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Largo do Rilvas | 1399-030 Lisboa | Portugal
Casa da América Latina
Avenida da Índia, 110 | 1300-300 Lisboa | Portugal

DESIGN

José Brandão
Susana Brito
[Atelier B2]

ISBN

978-989-8140-33-3

LISBOA, 2024